MANUEL ANTONIO GARRETON M.

RECONSTRUIR LA POLITICA

Transición y Consolidación Democrática en Chile



Scanned with CamScanner

RECONSTRUIR LA POLÍTICA:

Transición y Consolidación Democrática en Chile

Manuel Antonio Garretón

EDITORIAL ANDANTE
1987

Scanned with CamScanner

RECONSTRUIR LA POLITICA
TRANSICION Y CONSOLIDACION DEMOCRATICA EN CHILE

©Manuel Antonio Garretón

©EDITORIAL ANDANTE
Derechos Reservados
Inscripción Nº 67.736

Primera Edición: noviembre 1987
Proyectó Edición: Fernando Silva M.
Portada: Chantal de Rementeria
Diagramación, Diseño, Arte y Montaje
Cíceros — Bueras 180

EDITORIAL ANDANTE - CASILLA 4-A CORREO 22
Santiago - Chile

IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE

Scanned with CamScanner

"Tenían la vida entera impregnada de política como de un disolvente corrosivo que terminaría devorándolos: en el amor, en el arte, en el comercio, en la muerte misma, como hoy quedaba claro, era imposible eludir a la política aunque no se pudiera tomar parte en ella porque el régimen ejercía ese monopolio, y así, sin ejercitarla, las ideas y pasiones se desgastaban y empobrecían..."

(José Donoso, "La Desesperanza", 1986).

"Haber ignorado que ninguna sociedad, empezando por la propia, está libre de perpetrar o sufrir una iniquidad parecida al Holocausto. Haber olvidado que todos estamos sumidos en esta guerra, sin victoria posible, cuyos combatientes encarnan papeles que cambian muy de prisa, y en la que, al menor descuido, se es derrotado. Porque, curiosamente, esa guerra que no se puede ganar se puede, en cambio, perder. La grandeza trágica del destino humano está quizá en esta paradójica situación que no le deja al hombre otra escapatoria que la lucha contra la injusticia, no para acabar con ella sino para que ella no acabe con él".

(M. Vargas Llosa, "Las Lecciones de Yad Vashem", 1978).

Scanned with CamScanner

AGRADECIMIENTOS

Este libro ha sido escrito durante mi desempeño como Profesor-Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) de Santiago. Agradezco el apoyo de su personal directivo, académico y administrativo en estos años.

Las estadías como Profesor o Académico Visitante en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame, en el Center for Iberian and Latin American Studies y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California, San Diego, en los Estados Unidos, y en l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y el Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques de Paris, me permitieron elaborar o completar varios capítulos. Ello no habría sido posible sin el aporte de los académicos de esas instituciones. Quiero personalizar este reconocimiento en Ernest Bartell, Paul Drake y Alain Touraine. A Alain Touraine debo además su gran apoyo intelectual y personal.

La mayor parte de las ideas planteadas en este libro han sido presentadas en diversos seminarios y congresos que se reconocen en cada caso particular en el texto. Es evidente que debo mucho a todos los participantes en esos eventos, así como a discusiones con numerosos colegas. Quiero agradecer particularmente en este aspecto a Guillermo O'Donnell, Marcelo Cavarozzi y Jordi Borja.

La revisión y corrección de los manuscritos estuvo a cargo de Federico Joannon.

Scanned with CamScanner

La responsabilidad de este libro es exclusivamente mía y no compromete a las instituciones ni personas mencionadas.

No habría sido posible el trabajo de estos años sin la fuerza afectiva que me han dado mis hijos Antonio y Manuel. De ellos es este libro.

M.A.G.

Scanned with CamScanner

INTRODUCCION

Durante casi una década y media, la política en Chile ha sido avasallada. Y, como ella no podrá nunca ser eliminada de la sociedad, resurge desesperadamente. Pero, inevitablemente, de maneras desfiguradas y deterioradas.

Para quienes niegan la Política, ésta adquiere en la práctica formas distorsionadas. Unos, la convierten en el uso del poder irestricto con los principios y métodos de la guerra o de la visión militar. Otros, la sustituyen por el manejo tecno-burocrático de la vida de un país, apoyado por una concepción ciega de la ideología cientificista y de una visión ingenua y elitaria del progreso. Y muchos otros, ocultan la política en el permanente afán cotidiano de asegurar posiciones de poder con el temor, confesado o no, de que hay una realidad desconocida, que se rechaza, y que puede hacer cambiar la suerte individual y colectiva en el futuro. En suma, el sector del país que conciente o ciegamente se identifica con el poder actual y que afirma la eliminación de la política o su total despreocupación de ella, vive en formas pervertidas esta actividad.

Para quienes afirman la política como un elemento esencial a recuperar para la vida nacional, sin que pueda

Scanned with CamScanner

ejercitarse en un régimen que la niega y reprime, ella también toma expresiones tergiversadas. Quizás la más importante sea la totalización de la vida en la política, su identificación con la moral y religión, la ausencia de un espacio propio y específico para ella. Aquí la política lo es todo y está en todas partes y, por lo tanto, no está específicamente en ninguna parte. Ello se explica porque vivimos desde hace muchos años en situaciones límites permanentes, donde la política tiene que ver con la experiencia de la muerte y de la sobrevivencia; de ahí la crucialidad del tema de los derechos humanos como proyección del elemental derecho a la vida. "El hecho de que (su) furia por una causa totalmente privada, humana e individual..., hubiera derivado en una peligrosa trifulca política, que la furia de él, de todo el país, no tuviera otra salida que la salida de la violencia y de la protesta política, que el amor y la canción y la risa no poseyeran más que esa única traducción y que todo dolor personal debía proponer una lectura política por lo menos subyacente, fue algo que... tuvo que aceptar como se acepta el golpe definitivo de un vencedor: no existía la vida privada entonces, porque si no era más que eso, era una frivolidad" (J. Donoso, "La Desesperanza"). Y si no se acepta esto, sólo cabe "irse inmediatamente, ahora mismo..." El resultado es que la política pierde su carácter instrumental para ser una actividad solamente expresiva y emocional, donde la denuncia, el refugio entre los que viven y piensan igual, la búsqueda de una comunidad con la cual identificarse, pasan a ser los ejes predominantes. El reconocimiento del otro como interlocutor, la búsqueda de concertaciones y negociaciones y, por lo tanto, la construcción propiamente institucional, pasan a ser trampas o negaciones de la propia identidad.

Como respuesta a esta situación, hay otros sectores que sólo rescatan el componente instrumental y racional

de la política, su aspecto especializado y cupular y, entonces, identifican la política con la actividad organizacional de sus propios partidarios, o con el discurso del pasado, o con la creación de espacios de negociación y concertación que poco tienen que ver con el país profundo y con las realidades mismas del poder.

Así, el doble componente racional-instrumental y expresivo-simbólico de toda acción política se rompe.

Y, entre quienes buscan eliminar la política y quienes la rescatan, hay la gran masa de la sociedad que parece estrictamente indiferente a ella. Esta población, que enfrenta un simultáneo movimiento de modernización y marginalización, parace ver sus ámbitos de problemas, preocupaciones y proyecciones en la vida muy lejanos a la actividad y dinámica políticas. Incluso, en grandes sectores, como la juventud u otros, surgen sensibilidades colectivas y subculturas que parecen plantearse en términos de agresión o rechazo a la política. Y, sin embargo, las encuestas muestran que hay una profunda racionalidad política en la gente común y corriente, que se entiende su necesidad y su indispensabilidad, pero que lo que hay es una gran desconfianza en los actuales liderazgos. Del mismo modo las sensibilidades y subculturas aparentemente antipolíticas muestran más bien la crítica a una ausencia o a carencias, y no el rechazo o negación.

Así, la política existe en todas partes de una u otra manera. Pero no hay un sistema político legítimo y por eso la política aparece tergiversada o en descomposición.

Hay que reconstruir la política en Chile. Como habrá que reconstruir en el largo plazo la sociedad, la economía y la cultura. Eso significa reconstruir un sistema político, con actores, instituciones y cultura propios. Y

Scanned with CamScanner

ello no puede hacerse sin reconocer la especificidad y la autonomía de tal sistema y de los procesos políticos y sus conexiones con el resto de la sociedad. La política es indispensable e ineludible en la sociedad; pero no es toda la sociedad, sino sólo una dimensión específica fundamental que se relaciona con todas las otras dimensiones, sin absorberlas.

La reconstrucción de un sistema político, el rescate de la política, es una manera secularizada de plantear el tema tan central de la reconciliación, que ha sido puesto por la Iglesia. Es decir, se trata de crear el espacio común en que todos se reconocen como parte de él, para cooperar y luchar por el poder y la dirección generales de la sociedad sin eliminarse o destruirse mutuamente. En otras palabras, de crear el campo legítimo de las luchas, conflictos y consensos.

Tal como la práctica de la política en estos años, la reflexión sobre ella enfrenta enormes obstáculos y dificultades. No se trata aquí de insistir en las características de un régimen político dictatorial que entraban muy seriamente el trabajo intelectual. Ello es de sobra conocido. Vale la pena más bien indicar algunos problemas "internos" a este tipo de reflexión en nuestra tradición cultural.

Puede decirse, así, que el análisis político debe enfrentar en nuestro medio tres grandes riesgos. El primero es el politicismo, es decir, el aislamiento radical de los fenómenos políticos respecto del resto de los procesos sociales, sin incorporar éstos para iluminar aquéllos y dotando a la política de una total impermeabilidad. Una versión ilustrada de esta distorsión proviene de ciertas corrientes de la ciencia política donde la política se define como una serie de mecanismos que se explican total

Scanned with CamScanner

y exclusivamente por sí mismos. Muchas veces la política comparada cae en esta situación al saltarse los contextos socio-culturales e históricos en que los procesos políticos se dan necesariamente. También, cierta historiografía tiende a reducir la política de un país a una sucesión de hechos y personajes que ocupan un espacio desprendido de la sociedad. Una versión más difundida del politicismo en cuestión la encontramos en algunos análisis de tipo periodístico o en el comentario cotidiano sobre la política como la suma de actividades de los que se dedican a ella. El segundo riesgo, al contrario, es subsumir los fenómenos políticos en el análisis cultural, sociológico o económico, negándoles toda especifidad o racionalidad propias y viéndolos como simples expresiones o reflejos de esos otros procesos. El culturalismo, sociologismo o economicismo han dejado su huella en la reflexión política chilena, tanto en el medio académico como en el sentido común. Finalmente, existe el riesgo de confundir el análisis político con la toma de posición de alguno de los actores políticos o con las posturas ideológicas propias. Es el problema del ideologismo o del normativismo, que tiñe el trabajo intelectual y que, si bien está presente en toda disciplina de las Ciencias Sociales, es especialmente agudo en el caso del análisis de fenómenos políticos, donde se da muchas veces, la ambivalencia entre intelectual y actor político. En estos casos una cierta dosis de normativismo parece inevitable. Lo importante es tener conciencia de ello y asumirlo explícitamente.

Este libro es una reflexión sobre la política y un intento de contribución a su rescate y reconstrucción. Pero tal reflexión no se hace aquí desde una perspectiva teórica o de discusión conceptual, sino a través de la descripción, el análisis y la interpretación de procesos políticos concretos de la sociedad chilena.

Scanned with CamScanner

En Chile la política ha estado históricamente asociada al régimen democrático. Y por eso no se puede hablar de rescate o reconstrucción de la política sin hablarse de la democracia y del término del régimen político que la niega: la dictadura militar. Pero la reconstrucción de un sistema político es un proceso de más largo alcance y más complejo que un cambio de régimen, aunque lo supone. En efecto, un sistema político es la organización de la sociedad para resolver sus problemas de poder y dirección globales e incluye: el Estado y sus relaciones con la sociedad –entre las cuales el régimen es sólo el aspecto institucional mediador entre Estado y sociedad civil–, los actores sociales y políticos propiamente tales que se mueven en la esfera de la dirección general de la sociedad, la cultura, estilo y relaciones de estos actores, y todos los procesos que tienen que ver con el problema del poder a nivel global de una sociedad y que no se agotan en el régimen. Construir la democracia en el caso chileno es condición sine qua non de la reconstrucción de la política, pero sólo una parte de este último proceso que necesariamente toma décadas.

Los tres primeros capítulos de este libro se refieren explícitamente al tema de la democracia como régimen político. En el primero, de carácter más conceptual, se discute el significado de los términos democracia política y democratización global y la relación que hay entre ambos en la práctica y conciencia de los actores relevantes. Una vez clarificado el concepto democracia y las diversas dimensiones que tiene para sociedades como las nuestras, especificándola como un tipo particular de régimen político, se entra al análisis de los procesos de transición desde dictaduras o regímenes militares a regímenes democráticos, distinguiendo estos procesos del fenómeno de consolidación de la democracia política una vez que ella se ha inaugurado o establecido. Este pri-

Scanned with CamScanner

mer capítulo desarrolla un esquema analítico de los procesos de transición en términos de los componentes siempre presentes en ellos, y una hipótesis sobre las condiciones de consolidación democrática en los países que han vivido recientemente regímenes militares.

El segundo capítulo estudia en forma sinóptica lo que fue la democracia en Chile, las raíces de su derrumbe, la evolución del régimen militar que la sustituyó, y las perpectivas de una democracia futura a partir de los elementos anteriores, dejando para el capítulo siguiente el análisis de los problemas de la transición. Especial énfasis se pone en las condiciones y rasgos del sistema político en su conjunto que permitieron el régimen democrático y que coadyuvaron a su término. Se desarrolla un esquema de las relaciones entre Estado, sistema político partidario y sociedad civil, cuyas transformaciones a lo largo del período democrático y durante el régimen militar son consideradas para, luego, examinar sus proyecciones en una futura consolidación democrática.

Como hemos dicho, el tercer capítulo aborda la problemática específica de la transición desde el régimen militar a un régimen democrático en el caso chileno, aplicando los elementos desarrollados en el primer capítulo. Se examinan aquí los rasgos particulares del régimen militar y de la oposición a él que han retardado esta transición en relación a otros países del Cono Sur, discutiendo para ello la situación de cada uno de los componentes de estos procesos y su evolución desde 1983, época que marca la irrupción pública de la política en la vida chilena a través de los movimientos masivos de protesta y de la configuración de bloques políticos opositores. Finalmente, se analiza, a partir de la hipótesis general sobre el tipo de transición posible, los escenarios alternativos de esa transición.

Scanned with CamScanner

Los dos capítulos siguientes estudian ciertos procesos y actores políticos particulares. El capítulo cuarto analiza uno de los fenómenos más significativos ocurridos en los últimos años, cual es la movilización popular contra el régimen militar. Ello se hace desde la perspectiva de la problemática de transición democrática abordada en otro capítulo, lo que lleva a mostrar el impacto producido por estas movilizaciones en la recomposición de la sociedad civil, en el régimen militar mismo y en el espacio político, pero también la insuficiencia de ellas para provocar un proceso de transición. Para esto es necesario, más allá de la descripción de las movilizaciones, examinar las complejas relaciones entre movimientos sociales y sistema político partidario en el caso chileno, las transformaciones de estas relaciones bajo el régimen actual y los diversos significados que tienen para los actores sociales las expresiones colectivas como las protestas y movilizaciones. Todo lo anterior permite discutir algunas hipótesis sobre la integración de los sectores populares en los procesos de transición y consolidación democráticas.

El capítulo quinto se refiere a los partidos, principales actores políticos. Más que un análisis de los partidos individualmente considerados, se estudia el sistema de partidos chileno y su articulación con el resto de la sociedad. Es evidente que este sistema jugó un papel crucial en las relaciones entre Estado y sociedad civil y en la constitución de movimientos o actores sociales durante el período democrático. Pero también es cierto que el fin de éste tuvo que ver con la crisis de tal sistema. ¿Cuánto de ella es atribuible a factores universales que pesan hoy en todas las sociedades modernas y cuánto se explica por la naturaleza particular del sistema partidario chileno? A partir de la matriz de relación entre Estado, partidos y base social, se analiza la evolución del espectro partidario en las últimas décadas y, sobre todo, los cambios experimentados durante el régimen militar,

Scanned with CamScanner

tratándose de discernir cuáles aspectos positivos y negativos del sistema de partidos se han mantenido y cuáles se han modificado. Se constata que el sistema partidario no ha sido ni eliminado ni sustituido por otro, como eran los sueños del régimen militar, pero ha sufrido importantes modificaciones internas y se han desarticulado en parte sus relaciones con los actores sociales, redefiniéndose las relaciones entre política y sociedad. Finalmente, se señalan cuáles son las grandes líneas de reconstitución del sistema partidario que le permitan en el futuro ser factor de consolidación democrática, superando los puntos críticos del pasado.

El último capítulo, combina, más que los anteriores, el plano analítico y el normativo. Ello no puede ser de otra manera en la medida que el tema abordado es el significado de la perspectiva socialista en la reconstrucción de la política y en la democratización de la sociedad chilena. No se trata de un análisis de actores o partidos socialistas, ni de discutir programas o viabilidades del socialismo en Chile, sino que, una vez identificado en capítulos anteriores el espacio y los problemas de la Izquierda Socialista chilena, se intenta sistematizar los fundamentos y la proyección, de una concepción socialista renovada que retoma grandes hilos del pasado, pero realiza una significativa revisión y reformulación teórico ideológica y práctica. Se analizan las dimensiones de esta perspectiva en relación a lo que puede llamarse el modelo tradicional de la Izquierda, de la que tal renovación forma parte, a partir tanto del debate intelectual como de las experiencias de la Unidad Popular y la dictadura militar. Una parte importante del capítulo lo ocupa la fundamentación de la opcion socialista por un régimen de democracia política tal como ha sido definido a lo largo de este libro, por cuanto ello tiene indudables consecuencias teórico prácticas y afecta la definición misma

Scanned with CamScanner

de un proyecto socialista. Finalmente se analiza la inserción de una perspectiva como ésta en el espectro partidario chileno y su papel en la consolidación democrática de Chile.

Como podrá apreciarse, no hay en este libro un análisis, excepto anotaciones esquemáticas, del régimen militar actual, lo que hemos hecho en trabajos anteriores; ni tampoco de aspectos económicos o socio-culturales más amplios. Hemos querido permanecer en una perspectiva que enfoca específicamente la política, rescatando su significación y la reflexión sobre ella, y que aborda más particularmente aún la problemática de la transición y consolidación democráticas. No se nos escapa el carácter fragmentario de estos análisis e interpretaciones. Ellos deben verse sólo como una parcial contribución a un proceso más amplio de reflexión global y diversificada sobre el país y su destino, que apunta a su reconstrucción como sociedad viable y vivible.

Agosto 1987

Scanned with CamScanner

I

Democracia, transición y consolidación, un esquema general

Scanned with CamScanner

EN ESTE CAPITULO inicial intentaremos desarrollar un marco conceptual básico que nos sirva para el análisis posterior de la situación chilena, buscando más que nada perfilar ciertas proposiciones sobre el tema democrático en nuestro continente y sobre el significado de los procesos de transición, desde regímenes autoritarios o militares a regímenes democráticos, y de consolidación de estos últimos. Nuestro interés es aclarar y precisar una perspectiva de análisis más que argumentarla o fundamentarla teóricamente. De ahí el carácter estrictamente esquemático de las páginas que siguen.[1]

El tema democrático y su significación

La fuerza y la extensión con que se ha impuesto el tema de la democracia en América Latina en la última década muestran que no se trata de una simple moda pasajera. Tanto en el campo del debate intelectual como de la lucha política estamos en presencia de un cambio histórico cultural de muy profunda significación.[2]

Scanned with CamScanner

En efecto, las décadas del 50 y del 60 estuvieron marcadas por el tema del desarrollo y la modernización. Transición significaba en este contexto el paso de un tipo de sociedad tradicional o dual, semi moderna y semi tradicional, a una sociedad moderna, avanzada, desarrollada o industrial, como quisiera llamársele, y aun cuando la significación atribuida a estos términos y a estos procesos pudiera variar sensiblemente. A partir de los sesenta, se hace presente, combinadamente con el anterior o en su reemplazo, el tema de la revolución o del cambio estructural global, donde el concepto transición significaba paso del capitalismo al socialismo. Ambos temas van acompañados de sus propios diagnósticos, de sus conceptos y aparatos teóricos y ambos privilegian respectivamente sus actores sociales que encarnarán o dirigirán los respectivos procesos. En el primer caso serán los sectores "modernizantes" (llámense burguesía, tecnocracia o sectores medios); en el segundo serán los sectores populares o sus vanguardias políticas. En ambos casos estamos frente a proyectos globales de sociedad: en el primero, aunque no se explicite, la sociedad capitalista occidental tal como se conoce en el mundo desarrollado, y en el segundo, la sociedad socialista, (lo que se ilustró en el dilema "socialismo o fascismo"). En esta idea de proyecto global hay envueltos principios éticos y utopías, al mismo tiempo que visiones estratégicas y programáticas. Lo que nos parece altamente significativo es que en ambas problemáticas, la del desarrollo o modernización y la revolución o transición al socialismo, el tema del régimen político aparece subordinado a y como reflejo de las transformaciones globales de la sociedad.

El tema de la democracia política no puede dejar de reconocerse como heredero de las dos temáticas señaladas, como veremos más adelante; pero marca frente a ellas una ruptura significativa, una cierta mutación his-

Scanned with CamScanner

tórico cultural. Por un lado, se privilegia el problema del régimen político, esto es, de las mediaciones institucionales entre Estado y sociedad, lo que significa abandono de leyes estructurales que fijan una necesidad histórica de evolución de las sociedades, y privilegio de lo político, de la creatividad política, y de la capacidad de creación histórica colectiva. Por otro lado, el distanciamiento de proyectos globales de sociedad lleva a concebir la sociedad como la creación de un campo regulado de lucha entre diversos proyectos y donde no hay un actor privilegiado que encarne un proyecto sino un sistema de actores.

La **democracia política** o **democracia** simplemente, y así lo entenderemos a lo largo de este libro, es un tipo de régimen político y no un tipo de sociedad. Ello significa que sólo resuelve un problema que toda sociedad debe enfrentar, cual es las relaciones institucionales entre Estado y sociedad civil, el de las mediaciones entre ambos. Más específicamente, cómo se representa la sociedad, cómo ésta se gobierna y qué relaciones se establecen entre la gente y el Estado, es decir, la cuestión de la ciudadanía. La democracia es uno de los regímenes políticos históricamente conocidos y se caracteriza por resolver los problemas mencionados a través de ciertos rasgos específicos como son la vigencia del llamado Estado de Derecho con libertades públicas garantizadas, la división de poderes del Estado, los principios de soberanía popular, sufragio universal, elecciones competitivas, alternancia en el poder y pluralismo político.

Pero en la experiencia histórica latinoamericana, este tema de la democracia política presenta una mayor ambivalencia en la medida que está atravesado por el tema de la **democratización**, entendida ésta como la creciente incorporación a la vida social de la nación y la igualación de las oportunidades. Este concepto de democratización tiene dos sentidos. Uno referido a lo que se ha denomi-

Scanned with CamScanner

nado ' democratización fundamental ', es decir, integración a la vida colectiva a través de lo que puede llamarse la "ciudadanía social" (como diferente a la ciudadanía política), en términos de acceso a los beneficios del Estado (Estado de bienestar) y a la vida social moderna. El otro referido a la organización y participación en las decisiones que afectan a la vida colectiva, apuntando a la idea de la autodeterminación o autogobierno como metas máximas. Ambos sentidos del concepto democratización llevan envuelta la idea de cambio estructural o cambio social global.

Sin perjuicio de volver sobre esto más adelante, vale la pena introducir aquí la diferencia entre el concepto **democratización** y el de **transición política** o, simplemente, **transición.** En tanto el primero refiere a un proceso de cambio social global y apunta a la idea de una sociedad democrática, el segundo se refiere sólo a un cambio de régimen, al paso de un tipo de régimen a otro, sin que ello implique necesariamente cambio social global. En el caso particular que analizaremos en éste y otros capítulos, hablamos de transición desde dictaduras o regímenes militares a regímenes democráticos, quedando pendientes los problemas propios de una democratización. En otras palabras, aquí la transición apunta a la idea de democracia política o régimen democrático y no de sociedad democrática. Entre ambos procesos puede haber coincidencia o disociación en el tiempo, dependiendo de circunstancias históricas, pero su relación no es estructural ni causal sino histórica. Así, puede haber sociedades más o menos democráticas, es decir, con mayor o menor profundidad en sus procesos de democratización, y con regímenes políticos que pueden o no ser democráticos: un proceso de democratización social puede ser alcanzado por regímenes de tipo autoritario o regímenes democráticos pueden profundizar desigualdades sociales y afectar procesos de democratiza-

Scanned with CamScanner

ción. No hay coincidencia necesaria entre ambas dimensiones sino histórica, y lo que es válido para un contexto no lo es obligatoriamente para otros. La transición es, en la perspectiva que nos situamos aquí, un fenómeno de **democratización política**, aun cuando éste sea a su vez un concepto más amplio pues se refiere a la extensión, complementación o profundización del régimen político democrático que una transición puede no haber completado (la extensión del voto a los analfabetos, es un ejemplo típico de democratización política dentro de un régimen que ya es democrático).

Así, junto con afirmar la crucialidad del tema de la democracia política en América Latina en los últimos tiempos y destacar la prioridad que toma la dimensión política de la sociedad, hay que recordar va acompañado necesariamente en estos países por el tema de la democratización. El ideal de la democracia en este continente está atravesado, contaminado, desgarrado por la dimensión de la democratización y difícilmente podrá desprenderse de ella.

Si bien es cierto que la democracia es sólo un régimen político que no resuelve todos los problemas de la sociedad y se distancia de los proyectos totales sobre ésta, y si bien es cierto que no es una necesidad histórica ineludible, lo que hace a algunos afirmar que ella es normalmente una "segunda prioridad", hay siempre detrás suyo un principio ético que la funda y condiciones sociales que permiten su desarrollo y estabilidad.[3] Ambos, principios éticos fundante y condiciones sociales que la favorecen, varían de sociedad en sociedad y períodos históricos a otros, pero puede decirse que en los países de América Latina la democratización es a la vez el principio ético y la condición de desarrollo de la democracia política, aunque ambas dimensiones deben ser claramente distinguidas, como veremos. En estos países la democracia política se aleja del desencanto "post modernis-

Scanned with CamScanner

ta", se pregunta siempre por el problema del "sentido" y busca un "contenido" que va más allá de ella misma.

Esta contaminación del concepto democracia con el de democratización, de donde deriva la ambigüedad del primero para estos países, tiene diversas raíces históricas. Ya mencionamos la importancia, en la historia intelectual y política, de los temas del desarrollo o modernización y de la revolución o cambio estructural. Hemos dicho que el tema de la democracia no puede dejar en cierto modo de hacerse cargo de éstos. A ello debe agregarse el hecho que muchos países hicieron su experiencia de democratización fundamental bajo regímenes que difícilmente podrían ser calificados de democráticos, o que muchos y significativos actores sociales hicieron su emergencia como tales a través de procesos que implicaban más una experiencia de autodeterminación que un acceso a las instituciones típicas de la democracia representativa. En la memoria histórica de esos países o de esos actores sociales, se le llama democracia a esa experiencia de democratización o de constitución como sujetos colectivos. Por su parte, los países y actores sociales que hicieron su experiencia de democratización bajo regímenes de democracia política identifican ambas dimensiones.

Así, la estimación de la democracia como una conquista que no puede transarse por otros medios, la valoración secularizada del régimen político sin subordinarlo a otras dimensiones de la sociedad, es un lento, largo y complejo proceso de aprendizaje social. Y sólo en tiempos recientes se tiende a descubrir colectivamente la relación inversa a la ya anotada, y es que, para un conjunto significativo de países, en el futuro la democracia política será condición histórica necesaria para desarrollar y profundizar un proceso de democratización global, por cuanto otro tipo de régimen en esos países ha significado una reversión de tal proceso.

En esta revalorización de los problemas concernientes al régimen político y, más, precisamente en esta revalorización de la democracia como un objetivo no subordinado de la lucha histórica, ha sido decisiva, al menos para los países del llamado Cono Sur, la experiencia de los regímenes dictatoriales militares de las dos últimas décadas. Como respuesta a ellos se vivió también este doble proceso de contaminación y diferenciación de las problemáticas de la democracia y la democratización.

Sin entrar al análisis de estos regímenes militares, que hemos hecho en otros libros,[4] recordemos que los golpes militares que se inician con el de Brasil en 1964 y se continúan con el de Argentina en 1966, los de Chile y Uruguay en 1973 y el de Argentina en 1976, fueron, en grados diversos, generados por crisis políticas caracterizadas diferencialmente por fenómenos de activación y movilización populares que fueron enfrentados por los sectores dominantes de la sociedad y las Fuerzas Armadas como cuerpo institucional. Los primeros lograron arrastrar a los sectores medios en su percepción de una crisis terminal y de una amenaza definitiva a su existencia como actores sociales dominantes. Pero, junto a este aspecto de respuesta a una crisis, a este aspecto reactivo de los golpes militares, se daba la oportunidad para los sectores dominantes, ligados al actor militar que hace la ruptura, de resolver la larga crisis de hegemonía que había caracterizado a América Latina desde el término del "Estado oligárquico" y que se había arrastrado durante todo el período llamado "Estado de compromiso".[5]

Por un lado, los sectores proclives al cambio habían sido derrotados y la fuerza militar, cohesionada jerárquica e institucionalmente, disponía de todo el poder, pero no siempre tenía claro cuál era el contenido a darle al régimen militar que nacía del golpe. Por otro lado, había una percepción, a veces difusa o desigual entre las diversas fracciones de los sectores dominantes de que

Scanned with CamScanner

se había salido de una "crisis catastrófica", y que, por lo tanto, era el momento, la oportunidad histórica, para recomponer un capitalismo demasiado interferido por políticas redistributivas, por un rol creciente del Estado, por demandas democráticas, por irrupción y participación de masas en la vida política, aprovechando para ello la desactivación de las fuerzas sociales derrotadas por las fuerzas militares. Así, reaccionando contra la sociedad precedente y contra una crisis particular, estos regímenes militares eran también la oportunidad para "refundar" el capitalismo nacional, reinsertarlo en la economía mundial, y crear un nuevo orden social que se expresara también en un modelo político autoritario de largo plazo.

La experiencia de las dos últimas décadas muestra un doble fracaso de estos regímenes. En primer lugar, respecto a sus propios parámetros, a su propio proyecto, por diversas causas según los países, estos regímenes terminan en una situación en que son las mismas fuerzas que ellos quisieron derrotar y eliminar de la sociedad las que tienen la capacidad de reconstruir ésta. No hubo refundación capitalista, no hubo éxito de un nuevo modelo económico, y no fue tal la creación de un orden social y político que se correspondiera con ese orden económico como lo era la utopía. Y en segundo lugar, estos regímenes fracasaron también en la resolución de los problemas más apremiantes de la sociedad y, salvo excepciones que debieran ser discutidas con más detalle, estas sociedades retrocedieron enormemente en cuanto a su desarrollo económico, a las conquistas obtenidas por las masas y los sectores de trabajadores, incluso por las clases medias.

Pero este doble fracaso, esta incapacidad de crear un nuevo orden económico con una nueva estructura social y una nueva institucionalidad política y esta incapacidad de resolver los problemas más acuciantes de la sociedad

Scanned with CamScanner

y más bien agravarlos y agudizarlos, no significa que no haya habido transformación en la sociedad ni tampoco que ésta haya retrocedido en el tiempo, permaneciendo relativamente igual, pero más atrasada. Tampoco quiere decir que no hayan tenido una cierta capacidad estos regímenes de desarticular la sociedad precedente, y quizás éste sea el concepto clave. Lo que los regímenes militares lograron, no fue la anulación o la superación del orden económico-social y político precedente, sino su desarticulación. En ciertos casos se produjo una modernización parcial de la sociedad que permitió a un segmento de ella engancharse en el mundo capitalista contemporáneo en forma no totalmente periférica. En tales situaciones, los problemas propios de sociedades modernas van acompañados de la creciente marginalización de vastísimos sectores sociales. Es así como la democracia política venidera deberá enfrentar el desafío de la democratización de una modernización perversa y excluyente. En otros casos, las transformaciones sociales fueron en el sentido de una "jibarización" de la sociedad, caracterizada por la reducción del papel del Estado como agente social, por la emergencia de una especie de capitalismo salvaje que desarticuló viejas relaciones sociales sin crear nuevas en su reemplazo y donde los actores tienden a ser los mismo pero con mayor debilidad en su capacidad de presión y organización. En estas situaciones, el desafío que deberá enfrentar la democracia política es el de un proceso de reconstrucción nacional. En todos los casos, vuelven a encontrarse las problemáticas propias de la democracia política y de la democratización, siendo la primera la tarea fundamental de un proceso de transición y la segunda tarea que coincide con el fenómeno de consolidación democrática, como veremos más adelante.

Así, el concepto democracia está teñido por la experiencia antidictatorial y se opone a la doble dimensión

Scanned with CamScanner

de estos regímenes militares: represiva y de recomp
sición del orden capitalista. Ello significa que en las l
chas contra los regímenes militares, en los cambios qu
afectan a éstos y en la conciencia de los actores de op
sición, están presentes dos procesos distintos. El pr
mero se refiere a la transformación de la sociedad, l
creación de un nuevo orden social que apunta al té
mino de las explotaciones y opresiones, a la mayor igua
dad y participación sociales, esto es lo que hemos den
minado democratización global. El segundo se refiere
un proceso restringido de cambio de régimen político
de paso de una dictadura a un régimen democrático
tal como definimos éste anteriormente. En los pro
cesos actuales de término de dictaduras militares, am
bas dinámicas se disocian en el tiempo y estamos en pre
sencia de transiciones políticas, de cambios de régimen
que dejan pendiente el problema de la democratización
global, como tarea a ser resuelta en el interior de un ré
gimen democrático.

No obstante, no todas las luchas que se dan en los re
gímenes militares o dictaduras pueden ser aprehendidas
desde la perspectiva de una transición política o de cons
trucción de democracia política. Muchas de ellas se
incertan en procesos defensivos y de autoafirmación de
identidad, otras se ubican en la dimensión revoluciona-
ria, y otras apuntan a la democratización global.

La diversidad de las oposiciones se relaciona con esta
multidimensionalidad de las luchas o conflictos, en
cuanto diversos actores sociales o políticos privilegian
una u otra dimensión.

Dos consecuencias pueden extraerse de estas observa-
ciones. La primera es que el régimen que sucede a una
dictadura, es decir, el producto de un proceso de transi-
ción, no puede ser juzgado en términos de una meta im-
puesta desde fuera (como es el caso de ciertos juicios de
la política norteamericana respecto de los regímenes que

Scanned with CamScanner

reemplazan dictaduras en Centroamérica) y que hace abstracción del principio unificador de las luchas antidictatoriales. Estas pueden haberse hecho en nombre de la democracia política, pero tal principio unificador puede también ser otro como la independencia nacional o, simplemente, el término de una dinastía. La segunda es que una de las más importantes significaciones de la democracia política en las últimas décadas en determinados contextos es haber sido el principio unificador de luchas antidictatoriales muy heterogéneas, especialmente en los momentos de crisis de los regímenes militares. Ello implica que en la conciencia y práctica de los actores esta dimensión adquiera prioridad sobre las otras dimensiones de la lucha antidictatorial, a las que nos hemos referido. En tanto no sea así, los procesos de transición se empantanan o retardan.

En suma, la experiencia histórica de democratización, las problemáticas del desarrollo y la revolución en décadas pasadas y la experiencia de las recientes dictaduras militares, asocian el ideal democrático en estos países a tres fenómenos. Por un lado, a la creación de instituciones propiamente políticas, del Estado y del régimen (incluido los partidos), que resuelvan el problema del gobierno, la ciudadanía y la representación. En segundo lugar, a la recomposición de la sociedad civil, es decir, a la constitución de actores sociales autónomos del sistema político, lo que remite al problema de la participación. En tercer lugar, a la formulación de un nuevo modelo de desarrollo, diferente tanto del que caracterizó al "Estado de compromiso" como del de los regímenes militares, lo que apunta a la dimensión del cambio social estructural. Esta triple significación a la que se asocia la democracia está siempre presente y reclamada en variadas formas por los diversos actores. Pero el término de los regímenes militares y los procesos de transición implican necesariamente una neta prioridad y un claro

Scanned with CamScanner

predominio de la primera significación, esto es, lo referido a democracia política, que aparece como condición histórica de las otras dos, y a la que éstas deben subordinarse por un tiempo, lo que a su vez plantea enormes problemas futuros para la nueva democracia, La consolidación de ésta, por su parte, privilegia las dos dimensiones restantes.

Esto nos lleva a los temas de la transición y la consolidación.

La transición a la democracia y sus componentes.

A lo largo de este capítulo y de este libro entenderemos por transiciones políticas los procesos de cambio de régimen, y en particular, el paso de un régimen dictatorial militar a un régimen democrático.[6] Ello exige algunas consideraciones.

Como hemos indicado en otras ocasiones,[7] el concepto transición lleva envuelta una cierta ambigüedad, en la medida que si bien se sabe desde dónde se parte (un régimen militar o dictadura o régimen autoritario) no hay una necesidad histórica de su punto de llegada, sino que los resultados de las transiciones son inciertos y, por lo tanto, cuando ellas no se han desencadenado aún o están en proceso, imputarles un sentido o resultado final puede llevar a la total incomprensión de la real significación de los procesos en curso. En este sentido, el término de una dictadura o un régimen militar puede llevar a diversos regímenes como reemplazo y no sólo al democrático.

Por otro lado, cuando hablamos de democratización o redemocratización políticas, específicamente de transiciones desde dictaduras a regímenes democráticos, se plantea el problema operacional de cuándo ellas comienzan y

Scanned with CamScanner

cuándo ellas terminan, lo que empíricamente es difícil de precisar. En términos generales, parece conveniente tratar de escapar a la definiciones de plazos y mecanismos oficialmente establecidos para definir la transición, y entenderla como el proceso que va desde la crisis terminal del régimen militar hasta las primeras elecciones democráticas, aunque ello deje aspectos de la democratización política por completar.

En estrecha relación con lo anterior, hay que distinguir en las democratizaciones políticas, entre procesos de transición propiamente tales, que terminan cuando se inaugura la democracia, y la consolidación del nuevo régimen. Se trata de problemas y dinámicas distintas, que envuelven muchas veces actores diferentes y con relaciones de cooperación y conflicto entre uno y otro proceso. Si bien es cierto que en la conciencia de los actores y en sus comportamientos y cálculos durante la transición están presentes los problemas de consolidación democrática, las transiciones suponen para su desencadenamiento y desarrollo una cierta abstracción de los problemas de consolidación.

Finalmente, la problemática de la transición política, entendida como cambio de régimen, se diferencia nítidamente de la problemática de la revolución, entendida como proceso de "toma de poder" y como coincidencia entre la caída del "antiguo régimen" y la construcción de un nuevo orden social desde el poder conquistado. En sociedades complejas con ejércitos modernos cohesionados y fuertes y con clases medias amplias y diversificadas, la hipótesis revolucionaria disminuye significativamente su probabilidad.

Las transiciones pueden desencadenarse de diversas maneras. Ellas pueden originarse "desde arriba", ya sea por una apertura exitosa de un régimen que considera su tarea terminada, o por una crisis de descomposición interna; "desde abajo", por una acción de las oposiciones

Scanned with CamScanner

que, a su vez, puede ser insurreccional o puramente política; o por factores "intermedios" o "externos" al régimen y la oposición, los que pueden ser eventos como una guerra, una muerte, presión extranjera, o una instancia mediadora por encima de régimen y oposición. Lo más probable es que, aunque algún factor pese más que otro, las transiciones combinen de algún modo los tres factores, y de hecho así ha ocurrido en las transiciones históricas.

Una distinción que nos parece crucial al estudiar los procesos de transición es si el término de la dictadura o régimen militar se produce por colapso o derrota militar, pudiendo ambos deberse a factores nacionales o internacionales, o por alguna forma de administración de salida por parte de los titulares del poder. En el caso de colapso, derrota militar o derrocamiento no hay una decisión de los titulares del poder de retirarse sino que son expulsados o eliminados. Con Fuerzas Armadas como las que instauran los regímenes militares del Cono Sur, salvo casos de guerra con otros países, esta hipótesis parece de baja probabilidad. En el segundo caso, donde puede hablarse de derrota política del régimen, estamos frente a transiciones estrictamente políticas. En ellas, si los titulares del poder son las Fuerzas Armadas, hay una decisión institucional de retiro; en sentido estricto no hay derrocamiento. Esta decisión no es voluntaria, sino forzada por la sociedad o las oposiciones u otro tipo de presiones. Tal decisión institucional supone la percepción de un aislamiento respecto de la sociedad, la internalización de un fracaso (sea por guerra externa, crisis económica o ingobernabilidad) o la percepción de una amenaza a la integridad institucional si se continúa en el poder. Así, en este tipo de transiciones que tienden a ser predominantes en los regímenes militares recientes en América Latina, y que se apartan del modelo insurreccional clásico, no hay vacío institucional y la pro-

Scanned with CamScanner

blemática de la oposición es cómo provocar la decisión de retiro de las Fuerzas Armadas; para ello debe combinar los elementos de movilización y presión de instanciar mediadoras o arbitrales, a las que nos referiremos más adelante. Como se verá en los capítulos siguientes, el caso chileno presenta una dificultad particular, pues la oposición al régimen militar debe provocar un cambio en una decisión ya tomada por las Fuerzas Armadas, cual es el retirarse del poder del modo establecido en la Constitución Política de 1980, que no conduce a un régimen democrático.

En las transiciones de regímenes dictatoriales militares a regímenes democráticos, propias de los países del Cono Sur, hay dos dinámicas convergentes. La primera es la de crisis interna o descomposición del régimen, muchas veces ligada a la cuestión sucesoria o de institucionalización del mismo. La segunda es la reacción o movilización de la sociedad, sectores medios y populares especialmente, contra el régimen. Esta movilización masiva, conocida como un proceso de "resurrección de la sociedad civil",[8] es facilitada en estos contextos por la visión relativamente consensual de una posibilidad de reemplazo cual es la democracia y la ausencia en la sociedad de alternativas no democráticas que gocen de legítimidad.

Estas dos dinámicas convergentes pueden desdoblarse en cuatro procesos, uno relativo al régimen, otro a la oposición o a la sociedad, y los otros dos a la relación entre régimen y oposición, constituyendo los componentes básicos de este tipo de transiciones. Ellos son la descomposición interna del régimen o el aislamiento del núcleo gobernante respecto de sus apoyos internos y externos; la movilización social contra el régimen; la negociación entre titulares del poder y oposición; y las mediaciones institucionales y presiones de actores arbitrales. La combinación adecuada de estos cuatro compo-

Scanned with CamScanner

nentes de toda transición política, que examinaremos a continuación, es la tarea de las oposiciones.

Crisis interna y movilización popular

En primer lugar, estas transiciones implican un proceso de crisis o descomposición interna de la dictadura normalmente vinculada a la cuestión de su propia institucionalización o al problema de la sucesión en el poder que se caracteriza por el desligamiento o separación de sectores que la apoyaron y por el aislamiento del núcleo gobernante. Ya hemos indicado que en el caso de las Fuerzas Armadas esto implica un cálculo respecto a la preservación de su integridad institucional. Como veremos en otros capítulos, este problema se hace más complejo cuando se combina un régimen militar con una dictadura personal, como es el caso chileno.

Esta separación o distanciamiento y aislamiento, condiciones necesarias pero no suficientes de una transición se refieren, por un lado, a los sectores civiles que apoyaron al régimen militar; su distanciamiento está en directa relación con la superación de la conciencia traumática respecto de la crisis que dio origen al régimen militar, con la percepción de un espacio para sus intereses en el régimen que suceda a éste y con la articulación de la clase económica con la clase política. Por otro lado, se trata de la pérdida de los apoyos externos, más específicamente del apoyo norteamericano Sin perjuicio de volver sobre esto al hablar del cuarto componente de las transiciones, el apoyo norteamericano a las dictaduras, al margen de consideraciones geopolíticas de más largo alcance, tiende a revertirse cuando hay una visibilidad

Scanned with CamScanner

alta de crímenes cometidos por la dictadura que hacen difícil sostenerla internacionalmente y frente a su propia opinión pública, también cuando se percibe una situación de ingobernabilidad que amenaza con la división de las FF.AA. del país en cuestión, y cuando existe un liderazgo o institucionalidad alternativos legitimados.

En segundo lugar, el desencadenamiento y desarrollo de las transiciones políticas está atravesado por procesos de movilización social que, a su vez, afectan y están afectados por el fenómeno de descomposición interna del régimen a que nos hemos referido. En otras ocasiones hemos vinculado este fenómeno a lo que hemos denominado "transición invisible"[9].

Recordemos que uno de los rasgos esenciales de estos regímenes militares es su definición antimovilizadora. Habiéndose impuesto sobre una sociedad muy activada, estos regímenes buscan la desmovilización de ella en todos los frentes, incluso en el de apoyo civil a su propia gestión. Desmovilización y despolitización como objetivos llevan a que tanto los elementos represivos como los aspectos transformadores de estas dictaduras intenten no sólo desmandelar las formas tradicionales de movilización que la sociedad conoció, sino imposibilitar la constitución de nuevos actores y nuevas formas de movilización. Las movilizaciones sociales en estos regímenes estarán así, siempre en referencia al grado y tipo de represión, a la naturaleza de las transformaciones estructurales e institucionales y a la existencia de espacios de reconstitución de la acción colectiva.

Hay, así, un cierto paralelismo entre la evolución de estos regímenes y la de las movilizaciones en su contra.[10] En los primeros tiempos del régimen militar, caracterizados normalmente por el predominio irrestricto de la dimensión reactivo-represiva, las movilizaciones tienden a ser inexistentes o muy marginales y reducidas a expresiones testimoniales o defensivas de grupos direc-

Scanned with CamScanner

tamente afectados por la represión, muchas veces amparados por las Iglesias. En la fase más "activa" del régimen militar, donde éste intenta desplegar un proyecto de transformación económico-social fundante de una nueva hegemonía, hay un predominio de las resistencias y movilizaciones sociales de rasgos típicamente reivindicativos por parte de los sectores afectados por tales transformaciones. La globalización de estas resistencias sectoriales tiende a manifestarse principalmente en el plano cultural.

Es con la crisis del proyecto transformador del régimen, con el inicio de su descomposición y el aislamiento de su núcleo dirigente, que se produce la masificación de las movilizaciones. Si las primeras movilizaciones masivas tienen como ejes la pérdida del miedo, la expresión de descontentos, el reconocimiento de un sujeto colectivo amplio y plural, estos ejes son insuficientes para profundizar la crisis del régimen y avanzar en un proceso de transición. Tampoco bastan los elementos reivindicativos sectoriales o corporativos. Se hace necesaria aquí la demanda, estrictamente política, que apunta al término del régimen y a mecanismos y plazos de transición. Y en este proceso adquiere un papel crucial la rearticulación del liderazgo político con las múltiples y variadas expresiones de descontento y aspiraciones presentes en las movilizaciones sociales.

Si se consideran, entonces, los rasgos propios de estos regímenes militares y su evolución desde su instalación hasta el momento de su término es posible pensar la especificidad de las movilizaciones sociales que se dan en él, más allá de rasgos comunes a movilizaciones que se dan en cualquier tipo de régimen, en términos de dos ejes. Uno es la recomposición del sistema de actores colectivos eliminado, desarticulado o debilitado por las transformaciones estructurales e institucionales del régimen. El otro es el proceso de profundización de la crisis

Scanned with CamScanner

de la dictadura y el desencadenamiento o aceleración de la transición política. No siempre hay coincidencia entre estos dos ejes e incluso pueden en determinados momentos poseer dinámicas contradictorias.

Una adecuada consideración de las movilizaciones sociales bajo regímenes militares, remite a la diversidad de significados y funciones de ellas. En efecto, estos comportamientos colectivos que expresan alguna forma de oposición o resistencia a una dictadura, cumplen, tanto en términos de los actores involucrados como de los efectos que producen, papeles que no pueden ser subsumidos en una sola categoría. Así pueden distinguirse elementalmente cuatro tipos de movilizaciones, independientemente de las actividades que las componen. La primera es la movilización de tipo expresivo-simbólico, con fuerte contenido ético y emocional; que busca sobre todo la afirmación o defensa de una identidad y de una comunidad que se siente amenazada, que expresa rebeldía, y que no se orienta por la búsqueda de resultados que no sean la pura expresión de esa identidad, esa protesta o esa rebeldía. El segundo y tercer tipo de movilización son de carácter más instrumental y están orientados a la búsqueda de resultados específicos: el primero de ellos es la movilización instrumental organizativa, que busca como resultado de tal movilización el consolidar y reproducir la organización aumentando su legitimidad "interna" y "externa"; la otra forma de movilización instrumental es la clásica de tipo reivindicativo, que busca mejorar la condición de un actor particular en el plano social, económico o político. El marco institucional y la autonomía y fuerza orgánica de cada actor son determinados en este tipo de movilización. El cuarto tipo de movilización es el que podríamos denominar como propiamente político, y se guía por metas y métodos referidos al término y reemplazo del régimen militar.[11]

Scanned with CamScanner

Es evidente que toda movilización tiende a combinar algunas de estas dimensiones; pero lo importante es el peso que se le asigna a cada una de ellas. Por otro lado, la identificación de actores específicos con una de estas dimensiones puede tener efectos inhibidores de un proceso de transición, por lo que uno de los problemas básicos de una oposición movilizada es la combinación de estos tipos de movilización, evitando los comunitarismos o particularismos, los corporativismos o la excesiva politización que reducen la extensión de la apelación.

Finalmente, cabe referirse a los límites de las movilizaciones sociales en cuanto promotoras o productoras de procesos de transición. En efecto, ellas son uno de los componentes de tales procesos y no "el" componente. Las transiciones suponen, como hemos dicho, además de movilizaciones, descomposición del bloque gobernante, negociación entre régimen y oposición y mediación de instancias o actores por encima de régimen y oposición. Con estos procesos las movilizaciones tienen relaciones complejas y ambivalentes, pudiendo tener efectos mutuamente reforzantes o contradictorios. El significado político de las movilizaciones depende de su "efecto estatal" y éste es un elemento específico que no se reduce a la movilización misma. Bajo un régimen autoritario si una movilización no se inserta en una estrategia que calcula el "efecto estatal", éste queda enteramente en manos del poder dictatorial, el que puede "bunkerizarse" como efecto de tal movilización. Este "efecto estatal", o implicancia en las estructuras de poder del Estado, puede formar parte de una estrategia insurreccional-militar o de una propiamente política, en cuyo caso se trata de un proceso de negociación o concertación entre los titulares del poder y la oposición. En otras palabras una situación de ingobernabilidad provocada por una movilización social puede llevar tanto a un término del régimen, si hay articulación entre fuerza social y fuerza po-

Scanned with CamScanner

lítica, como a su mantención endurecida si no existe esa articulación.

Así, en transiciones políticas, la relación entre movilización popular y negociación política adquiere un carácter crucial y definitorio en toda estrategia opositora.

Negociación y mediaciones

En tercer lugar, en la medida en que no existe colapso o derrota militar, no hay proceso de transición que no tenga un componente de negociación o concertación entre los titulares del poder y la oposición o parte de ésta, aún cuando varíe según los diversos contextos históricos el tipo y contenido de esta negociación. Un aspecto que parece importante destacar aquí, como acabamos de señalar, es el de la relación indisoluble entre movilización y negociación, lo que exige una adecuación de los ritmos y dinámicas de ambas, de modo que no se provoquen efectos contradictorios entre sí.

Las dos cuestiones centrales en las negociaciones de transición son, por un lado, quiénes negocian y, por otro, sobre qué se negocia. Respecto de la primera, los negociadores reales son los titulares del poder, en los casos que analizamos las Fuerzas Armadas institucionalmente consideradas, de una parte, y las fuerzas significativas de la oposición, de la otra. Decimos "reales", por cuanto es posible que haya negociadores formales, que son representantes de otros, lo que suele ocurrir cuando hay veto militar a algún sector de oposición o éste se abstiene de negociar por razones éticas. Pero, en todo caso, mientras menor sea la distancia entre negociadores formales y reales más viable es un acuerdo de transición; lo que implica que, independientemente de quiénes se sientan a la mesa o negocian implícitamente, deben incorporarse las

Scanned with CamScanner

demandas e intereses de toda fuerza social o política significativa, esté o no presente.

Respecto de qué se negocia, los acuerdos de transición deben centrarse específicamente en eso: los términos de la transición. Eso significa el marco institucional de la democratización política, lo que implica calendario y mecanismos para las elecciones democráticas y para la futura constitucionalización del país, la reinserción de las Fuerzas Armadas en un sistema de subordinación al poder político y el grado de inclusividad del sistema político. La presión de los sectores dominantes va normalmente en el sentido de asegurar garantías respecto del modelo económico y de su posición, también dominante, en el sistema político futuro. Por su parte las oposiciones tienden a buscar en estos acuerdos la satisfacción de múltiples demandas y aspiraciones postergadas o contenidas bajo el régimen militar y el compromiso de transformaciones sociales profundas. Las Fuerzas Armadas, por su parte, se guían principalmente por un cálculo de preservación de sus intereses y privilegios institucionales, evitando sobre todo el ser sometidos a juicio por sus acciones represivas durante su ejercicio del poder. Mientras más se sobrecarguen estas negociaciones de elementos diferentes de los tres puntos cruciales señalados, más se empantanan y retardan las transiciones, más limitados en su autonomía quedan sectores opositores en general y populares en particular, que han debido negociar en posiciones subordinadas, y más irreales son estos acuerdos, que tenderán a ser abandonados en cuanto la transición se haya completado esgrimiendo para ello la nueva legitimidad democrática. Todo lo cual no hace sino confirmar nuestra distinción básica entre procesos de transición y consolidación.

Finalmente, en cuarto lugar, el enfrentamiento régimen-oposición, más alla de la intervención de eventos de tipo detonante, no tiene resolución en una transición

Scanned with CamScanner

política si no hay mediaciones institucionales a través de las cuales resolver el conflicto o actores que se ubiquen por encima y presionen hacia esa resolución, siendo lo más probable la mediación combinada de actores (el rey en España o un gobierno extranjero o la Iglesia, etc.) y de espacios institucionales (elecciones, plebiscitos, etc.). Puede concluirse que uno de los objetivos inmediatos de una oposición, es el de crear esos espacios de resolución del conflicto básico entre dictadura y democracia, recurriendo tanto a la mencionada movilización política como a los actores mediadores disponibles.

Vale la pena discutir algunos aspectos de la influencia externa en estas transiciones, siempre subordinada a dinámicas "internas" o nacionales.

Es evidente que la lucha de los países dependientes por su mayor autonomía le ha dado a los principios de no intervención en asuntos internos de otros estados y de autodeterminación un carácter de conquistas a defender irrestrictamente. Al igual que los principios propios de la democracia política, ellos no son transables ni siquiera en una situación en que su violación pudiera jugar a favor de otros valores e intereses importantes y legítimos.

Por otro lado, como se ha señalado realistamente, la dicotomía "intervencionismo no intervencionismo" puede parecer abstracta en las relaciones entre Estados-Naciones. En los hechos lo que importaría sería, en un determinado momento histórico condicionado por la "relación de fuerzas y el estado político y ético de la opinión de los actores involucrados", los ámbitos legítimos de influencias externas y los límites intolerables de ellas.[12] La verdad es que los países dependientes están siempre sometidos a influencias y presiones externas. El criterio principal para valorarlas es si ellas van en el sentido, a cada paso, de fortalecer la autonomía nacional y la capacidad de autodeterminación.

Scanned with CamScanner

En ese sentido, pareciera siempre conveniente ligar estas influencias a factores internos, por un lado, y, por otro, a acciones multilaterales que minimicen el peso intervencionista de Estados cuya relación de poder con el país en cuestión es demasiado asimétrica. La máxima que debería guiar tales influencias y presiones, inevitables en el mundo contemporáneo, es el grado de fortalecimiento de las fuerzas y actores internos en términos de la determinación autónoma de la voluntad nacional. Es eso lo que está presente en la hoy común aceptación de la influencia externa en lo que concierne al respeto de los derechos humanos básicos, independientemente del sistema político de cada país. También aparece como legítima una influencia que respete y apoye dinámicas internas que permitirán o fortalecerán regímenes sustentados en ese respeto a los derechos humanos y en la voluntad nacional expresada de acuerdo a los valores y mecanismos que cada país consensualmente defina, independientemente de su sello ideológico.

La experiencia histórica muestra que las influencias y presiones externas tienen muchas veces efectos ambiguos que no siempre son tomados en cuenta por sus promotores. En ese sentido, hay acciones simbólicas de castigo, censura y aislamiento a regímenes dictatoriales, necesarias e indispensables de tomar por una comunidad internacional en determinados momentos de la conciencia universal, que sin embargo rigidizan esos mismos regímenes y les permiten su mantención amparados a veces en esas mismas acciones que buscan un objetivo contrario. Ello tiende a producirse especialmente en casos de dictaduras personalizadas (el ejemplo del franquismo viene a la mente) y, sobre todo, cuando dichas acciones simbólicas son "compensadas" con formas de apoyo indirecto que indican un doble mensaje. Así, pareciera que la necesidad ética, política y psicológica de este tipo de acciones debiera tomar en consideración también dimen-

Scanned with CamScanner

siones instrumentales respecto de los resultados.

Ahora bien, hay que distinguir operacionalmente entre acciones de influencia y presión externa que tienden a denunciar y evitar violaciones de derechos humanos, de aquellas que quieren incidir en un cambio más profundo de situación de régimen, siempre dentro de los parámetros señalados en el párrafo precedente. En efecto, las acciones en favor de derechos humanos pueden resolver en forma muy importante situaciones gravísimas, y contribuir a la salvación concreta de personas, grupos y sectores sociales. Esto no quita que estas acciones son muchas veces aceptadas tácticamente por el régimen militar o dictadura en cuestión, ya sea para adaptarse a la nueva realidad creada y sobrevivir como régimen, ya sea incluso para "ganar tiempo" en espera de mejores condiciones para permitir retrotraer la situación al estado anterior a las acciones externas. En otras palabras, estas acciones de presión o influencia, no sólo necesarias e imprescindibles desde el punto de vista de la conciencia de la comunidad internacional involucrada sino también del mejoramiento real de la situación de vida y derechos humanos al interior del régimen militar o dictadura, no se ubican necesariamente en la línea del término de ese régimen, sino en la práctica pueden ubicarse en la línea de transformación y adaptación del mismo. Este es un dilema del cual es difícil, sino imposible, escapar. Ello obliga, por lo tanto, a pensar también la influencia externa, siempre en los parámetros indicados anteriormente, en términos específicos de cambio de régimen. Esto puede no ser siempre posible, dependiendo de la situación interna en la dictadura; la condición a nuestro juicio para ejercer una influencia de este segunto tipo es que ella se engarce en alguna dinámica interna, en algún escenario potencial o en desarrollo, querido por los actores internos.

Vale la pena señalar que en la medida que esta influen-

Scanned with CamScanner

cia externa busca un resultado puede a vecer tener que pagar un precio simbólico, cual es algún grado de reconocimiento del régimen que se busca cambiar, ya que su solo desconocimiento o rechazo puede no ser la mejor manera de tener ascendencia sobre él o eliminarlo. De nuevo hay aquí un complejo balance entre elementos simbólicos e instrumentales, entre denuncia o aislamiento y posibilidades de influir, que no puede resolverse en abstracto sino en términos de situaciones y climas históricos específicos. Los aislamientos y denuncias, para no producir efectos contrarios, deben ser acompañados de fórmulas o escenarios de cambios posibles, los que deben surgir de las órmulas o escenarios que se promueven por las furezas democráticas internas.

La consolidación democrática y sus factores

Las transiciones a la democracia no resuelven muchos y grandes problemas históricos de sus sociedades aunque fijan el marco y las condiciones en que estos problemas pueden ser resueltos.

Recordemos que se hereda de los regímenes militares una enorme crisis. El doble fracaso de éstos a que hemos aludido, el efecto de las transformaciones introducidas por ellos en la sociedad, así como la situación de crisis económica generalizada, hacen pensar que al término de estas dictaduras estos países de América Latina enfrentan una situación histórica semejante a la que afrontaron en la década del '30, después de la crisis mundial y del derrumbe (o del término) del "Estado oligárquico". También podría decirse que el desafío fundamental de reconstrucción de la nación asemeja a estas sociedades a aquellas europeas que se vieron asoladas por el fascismo

Scanned with CamScanner

y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, respecto de la primera semejanza, si bien es cierto que la tarea por delante ahora es la construcción de un sistema político consensual democrático, la reformulación de un modelo de desarrollo y de una forma de organización social y la elaboración de un modelo cultural, este proceso se realiza en un contexto muy diferente a la década del '30. No sólo se agregan los grandes desafíos de la sociedad contemporánea, como la búsqueda y reivindicación de la participación, el surgimiento de movimientos sociales que buscan emancipar sectores largamente dominados, la preservación del medio ambiente, la pérdida de inocencia respecto a la capacidad que tiene el modelo industrial de resolver los problemas de la sociedad, etc., sino que también se trata de construir una democracia política y un nuevo orden social, no con una participación restringida de masas, sino con una presencia de masas ya conquistada en la vida política. Respecto de la segunda analogía, la situación de estas sociedades difiere de aquellas asoladas por el fascismo, en el sentido que no han sido invadidas, afectadas por una guerra civil declarada, o destruidas materialmente. Ello tiene una contrapartida, cual es que el proceso de construcción democrática y de un nuevo orden social se hace sin la unidad nacional, que proviene de una catástrofe sufrida igualmente por todos y con una derrota clara y definitiva, materialmente imposible en las dictaduras latinoamericanas, sino sólo con una derrota parcial de los elementos que desencadenaron la ola autoritaria en estos países.

Pero, junto a estos elementos críticos y a otras desventajas comparativas respecto de sociedades que en otros contextos han realizado sus transiciones a la democracia en las últimas décadas,[13] los países que emergen de dictaduras militares en el Cono Sur tienen como elemento positivo fundamental la valorización y legiti-

Scanned with CamScanner

midad de la democracia política como un principio ético que no se subordina a tal o cual ventaja o éxito económico. Este aprendizaje de las elites intelectuales y políticas tiene también un gran efecto de masas. El drama vivido bajo las dictaduras le da a esta valoración un significado mucho mayor que el de una mera táctica o cálculo de corto plazo y la ubica como una auténtica mutación cultural, aún cuando no pueda predecirse el tiempo de su vigencia.

El tema de la consolidación democrática enfrenta una dificultad analítica importante. Por un lado, no es fácil determinar cuándo una democracia está consolidada, una vez que ella fue inaugurada, por cuanto no basta que haya desaparecido el riesgo inminente de un nuevo golpe,[14] sino que está presente, por otro lado, el problema de las condiciones de estabilidad de la democracia, donde no hay una ley general al respecto.

En efecto, las teorías sobre las condiciones en que reposa la estabilidad democrática muestran una enorme debilidad de las democracias cuando las hacen descansar en un solo factor válido para todas las situaciones. La gran variedad de realidades históricas muestra que no hay un elemento único que se aplique a todos estos casos y que, por el contrario, lo que puede afirmarse de uno es contradicho por algún otro caso histórico.

¿Cómo pensar entonces el problema de la consolidación democrática sobre todo en países que recién inician su experiencia post dictatorial? Sin intentar, por lo tanto, una teoría general al respecto, pareciera metodológicamente adecuado realizar el análisis para un conjunto específico de casos nacionales relativamente semejantes en cuanto al tipo de régimen autoritario vivido, desde una triple perspectiva. En primer lugar, cuáles fueron las condiciones que permitieron o impidieron en estos países en el pasado la existencia de regímenes democráticos estables. En segundo lugar, cuáles fueron las causas que

llevaron a la crisis de esos regímenes democráticos allí donde existieron. En tercer lugar, cuáles fueron las dinámicas de transformación social y política que se desarrollaron bajo el régimen militar y las que lo llevaron a su término.

Tomando en cuenta esta triple perspectiva, y limitándonos al plano puramente político, es posible ligar la consolidación y estabilidad democrática futura a tres factores, haciendo la expresa salvedad que no es necesaria en cada caso la presencia de todos y que puede bastar uno solo sin que se den los otros o que puede darse una combinación de dos o tres, es decir, ninguno parece indispensable por sí mismo. Estos factores son el modelo de desarrollo, la articulación entre Estado y sociedad civil y el sistema partidario. El primero se refiere al viejo tema de las condiciones estructurales o del modelo de desarrollo "compatible" con un régimen de democracia política. Las condiciones heredadas del autoritarismo, la inserción de estas economías en estado de crisis en el esquema internacional, no permiten predecir una gran performance económica como la condición que asegure la estabilidad democrática. Es posible, al contrario, que estas democracias deban subsistir en medio de crisis prolongadas, sin éxitos económicos y con muy precaria redistribución, lo que enfatizaría la importancia de los otros dos factores. En todo caso, más que de condiciones estructurales o de modelo de desarrollo exitoso, pareciera que la visibilidad de una progresiva equidad en la repartición de costos de la crisis es aquí el elemento clave. Y esto no en términos de un concepto economicista que actúa como variable "objetiva" e independiente, sino mediado por los otros dos factores, de corte más político.

El segundo factor al cual parecen estar ligadas la consolidación y estabilidad democráticas se refiere a una rearticulación entre Estado, sistema político y sociedad civil,

Scanned with CamScanner

que se diferencia tanto de la relacion preexistente al momento de la instauración de los régímenes militares como de la establecida durante la vigencia de éste. Así, más que a un determinado modelo de desarrollo económico, la democracia parece vinculada al pleno desarrollo y autonomía de los tres niveles, Estado, sistema político y sociedad civil, en términos de una capacidad propia de gestión del actor estatal, de una efectiva capacidad de representación del sistema partidario y de la constitución de actores sociales autónomos de los otros dos niveles, pero, por su misma fuerza y autonomía, capaces de ser representados por el sistema partidario ante el Estado. Esto último alude al fenómeno de participación, lo que implica espacios propios de ejercicio del poder, lo que significa transferencia de éste a niveles locales o institucionales intermedios. Se trataría, así, de la superación de la matriz populista que funde los tres niveles, de la matriz clasista que polariza el sistema político y de la matriz de imbricación entre el nivel político partidario y los actores sociales, todas las cuales se dieron en sociedades históricas.

El tercer factor, relacionado con el anterior, y que parece ser crucial cuando se abandonan los determinismos economicistas, es el de la estructuración del sistema político partidario. Hay aquí, al menos tres aspectos involucrados. En primer lugar, la inclusividad del espectro partidario de modo que ninguna opción político-ideológica con representación o "base" social quede o se sienta excluida de la competencia política, lo que tiene especial significación en el caso de la Derecha política y de la Izquierda "ortodoxa", según los países. En segundo lugar, el desarrollo al nivel de las elites dirigentes partidarias de una legitimidad democrática no subordinada a la performance o resultados particulares. En tercer lugar, la configuración de mayorías políticas, constituidas básicamente por aquellos sectores claves cuya confrontación

Scanned with CamScanner

en el pasado polarizó el sistema y permitió tanto su crisis como la autonomización del actor militar. Tal mayoría política, en general, debiera ser capaz de combinar los elementos de democracia política con los de democratización a los que nos referimos al inicio, y, a su vez, aparece como la única posibilidad de subordinar el actor militar al poder político.

Al preguntarnos por el problema de la consolidación de las democracias que emergen como respuesta a la ola de autoritarismo y regímenes militares que asoló a estas sociedades en las últimas décadas, nos estamos preguntando si estamos en una nueva fase del viejo ciclo autoritarismo-democracia, o si nos enfrentamos a una nueva etapa histórica del proceso de democratización en que cambia el estilo o matriz de la acción política, dejando atrás populismos y autoritarismos. En otras palabras, ¿estamos frente a cambios de regímenes solamente o frente a la gestación de un nuevo ciclo en la historia política del continente? Sólo el tiempo podrá contestar esta pregunta. Mientras tanto se cuenta a favor con esta mutación cultural en torno a la legitimidad democrática, que no sabemos cuánto durará.

En los capítulos siguientes intentaremos aplicar estos conceptos al caso chileno.

Scanned with CamScanner

NOTAS

1.- Versiones parciales, limitadas a algunos de los puntos aquí tocados, de este capítulo pueden encontrarse en diversos trabajos, entre ellos, "Seis proposiciones sobre democratización política en Chile" (Revista Convergencia, Nº 10, Santiago, Diciembre 1986); "La herencia de los autoritarismos" (en C. Huneeus, ed., "Para Vivir la Democracia", Ed. Andante, Santiago, 1987); "Limites y dilemas de la influencia externa" (en FLACSO, "Estados Unidos y Chile hacia 1987", Serie política Exterior y Relaciones Internacionales, Santiago, 1987).

2.- No se trata, así, de una reproducción de los antiguos debates sobre la inestabilidad democrática o política de América Latina. Ver sobre la evolución de estos temas Solari, Franco, Jutkowitz, "Teoría, acción social y desarrollo en América Latina" (Siglo XXI, México, 1976). Sobre los debates más recientes, entre otros, DESCO, "América Latina 1980: Democracia y Movimiento Popular" (DESCO, Lima, 1980); la colección de la Revista Crítica y Utopía, Buenos Aires; y "Escenarios Políticos y Sociales del Desarrollo Latinoamericano", G. Rama (Compilador), CEPAL/UBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1986.

3.- A. Touraine, "Actores sociales y sistemas políticos en América Latina" (PREALC, Santiago, 1987), así como capítulos inéditos del mismo autor.

4.- "El Proceso Político chileno" (FLACSO, Santiago, 1983); Dictaduras y Democratización" (FLACSO Santiago, 1984). Ver ahí la bibliografía correspondiente. Una visión general en D. Collier, ed. "The new authoritarianism in Latin America" (Princeton University Press, 1979).

5.- J. Graciarena y R. Franco, "Formaciones sociales y estructuras de poder en América Latina" (Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1981).

6.- Un análisis comprensivo y por casos del fenómeno de transiciones, en O'Donnell, Schmitter, Whitehead, eds. "Transitions from authoritarian rule" (Johns Hopkins University Press, 1986), especialmente el capítulo de Conclusiones de O'Donnell y Schmitter.

7.- "El Proceso Político Chileno", op.cit., cap. XI.

8.- O'Donnell y Schmitter "Tentative conclusions about uncertain democracies" (en O'Donnell, Schmitter y Whitehead, eds, op.cit.)

9.- Ver capítulo 4 y notas correspondientes.

10.- Sobre las fases de los regímenes militares, "Dictaduras y Democratización", op.cit.

Scanned with CamScanner

11.- Si bien no pueden identificarse estos tipos de movilizaciones como formas o actividades específicas y una misma actividad puede tener cualquiera de los cuatro significados señalados, pueden encontrarse ejemplos privilegiados para cada uno de estos tipos; como son las movilizaciones en torno al derecho a la vida, vía ayunos o huelgas de hambre, para el primer caso; las movilizaciones electorales en el seno de una organización como un Colegio Profesional, para el segundo caso; las tomas de terreno o la huelga salarial, para el tercer caso; y el movimiento por "elecciones directas" en Brasil como ejemplo típico de movilización política.

12.- G. O'Donnell, "América Latina, Estados Unidos y Democracia. Variaciones sobre un viejísimo tema" (Kellogg Institute, Notre Dame, Working Paper, 19, Mayo 1984).

13.- Ver el volumen sobre "Transitions from authorian rule" op.cit. y la Introducción de O'Donnell a los casos latinoamericanos en el mismo volumen.

14.- Una discusión preliminar del problema de la consolidación democrática en G. O'Donnell, "Notes for the study of democratic consolidation in contemporary Latin America" (mimeo, Diciembre, 1985).

Scanned with CamScanner

II

La democracia en Chile, desarrollo, crisis y perspectivas

RECONSTRUIR LA POLITICA

Scanned with CamScanner

Los regimenes militares del Cono Sur fracasaron en cuanto a la resolución de los problemas fundamentales de sus sociedades y también con respecto a su propio proyecto de resolver el largo problema de crisis de hegemonía que caracterizó a estas sociedades desde el término del Estado oligárquico.

Como hemos indicado, el tema de la democracia aparece como la gran respuesta histórica frente a ese fracaso y esa crisis. Al mismo tiempo, se le exige a esa democracia respuestas a todas las dimensiones de la crisis social, que ella no puede dar por cuanto, insistimos, la democracia sólo resuelve los problemas de un régimen político, aún cuando ella sea una condición para enfrentar los otros problemas.

En el caso chileno, la democracia política no sólo aparece como la respuesta alternativa generalizada a la dominación militar o dictatorial. También ella está enraizada en la memoria histórica debido que fue por décadas el régimen político consencual que todos los actores relevantes aceptaban y defendían en su discurso y legitimaban con su participación. Llama la atención, enton-

Scanned with CamScanner

ces, el retardo de la transición de la dictadura militar a la democracia en Chile, cuando se le compara con otros países que no tienen la misma memoria histórica.

La problemática de la recuperación o construcción democrática en Chile, si no se quiere caer en predicciones arbitrarias o en proyecciones de los propios deseos, debiera abordarse desde una triple perspectiva. Por un lado, qué condiciones o qué rasgos tipificaron la democracia chilena en este siglo. Por otro lado, cuáles fueron las causas de su derrumbe y, en tercer lugar, cuáles fueron las transformaciones sociopolíticas ocurridas bajo el régimen militar y el escenario posible de una transición. Intentaremos, en este capítulo, responder en términos gruesos y esquemáticos a estas tres cuestiones, para concluir con algunas observaciones sobre el problema de la consolidación democrática, dejando para el capítulo siguiente los aspectos específicos del proceso de transición. Nuestro enfoque será siempre socio-político y globalizante, sin entrar al análisis específico de actores o instituciones determinadas. [1]

Los rasgos generales del régimen democrático chileno

Un sistema político reconoce autonomía respecto de otros ámbitos de la sociedad, pero se vincula siempre a un modelo económico, a un modelo de organización social y a un modelo cultural. Ello es válido tanto para el componente estatal del sistema político como para el

componente **régimen**, el que se define como las mediaciones institucionales entre Estado y sociedad.

Cuando se analiza el régimen democrático chileno, reconociendo la autonomía de este nivel, no puede dejar de mencionarse la correlación entre el tipo de régimen y las otras esferas de la sociedad que hemos indicado. [2]

Así, cabe recordar que en Chile la existencia de un régimen democrático fue acompañada de un proceso de industrialización y modernización capitalista, llamado modelo de desarrollo "hacia adentro", en el que el Estado jugaba el papel de motor principal, y de un proceso de democratización global, que significaba una continua incorporación de nuevos sectores sociales a la vida económica, la participación política y los bienes sociales y culturales. Tanto la democracia política como la democratización general adolecieron, no obstante, de varias restricciones, como la marginación de los sectores campesinos y urbano-marginales hasta la década del sesenta, la exclusión política del Partido Comunista entre los años 1947 y 1958, la participación efectiva hasta la década del sesenta de no más de un tercio de la población en la vida político-electoral, y la posición claramente subordinada de los sectores populares urbanos organizados. No obstante, el sistema político ofrecía "visibilidad" para las expectativas de los diversos sectores sociales, con lo que se atenuaban las tendencias "anti-sistema".

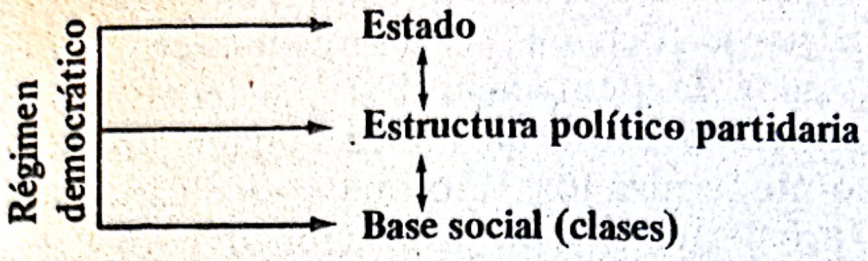
La importante presencia del Estado como referente principal de demandas y reivindicaciones sociales, sumada a la visibilidad social de satisfacción de expectativas, favoreció un tipo particular de articulación entre Estado y sociedad civil. Esta articulación se caracterizó por la relevancia del sistema partidario en cuanto ámbito

Scanned with CamScanner

principal de constitución de los actores sociales y mediador de las demandas de la base social organizada. Por un lado, el espectro partidario a nivel nacional se configuró completamente (Derecha, Centro e Izquierda) antes que se produjera la incorporación masiva a la vida político-social, lo que aseguró que los nuevos sectores incorporados tuvieran ya consolidados los diversos canales de participación. De esta manera, tal irrupción tuvo lugar sin rupturas institucionales importantes y se dotó al sistema partidario de gran estabilidad. Por otro lado, en la medida que el acceso al Estado dependía de la capacidad de presión social de cada sector, el tipo de organización que se privilegió fue uno en que se articulaban liderazgo político partidario y representación de una "base social". El movimiento estudiantil, el movimiento sindical y la organización poblacional y campesina en los años sesenta son ilustraciones de esta particular **imbricación** entre partidos y grupos sociales. Así, el grado de eficacia del sistema partidario para concertar y canalizar, para mediar y representar una base social ante el Estado, implicó necesariamente una alta politización y partidización de la sociedad y tuvo como contraparte la debilidad y dependencia de las organizaciones propias de la sociedad civil.

Esta articulación entre una base social y un sistema partidario, que favorece un tipo muy específico de integración social, constituye el meollo del sistema político chileno, lo que hemos denominado en otras partes la "columna vertebral" de la sociedad [3]. Ella determina el modo de constitución y configuración de los actores sociales y puede representarse en el siguiente gráfico:

Scanned with CamScanner



En una sociedad como ésta, caracterizada por una industrialización capitalista dependiente que revela cierta compatibilidad con un proceso desigual y conflictivo de democratización, en la que el Estado juega un papel central en su desarrollo, el sistema político aparece como la arena o el campo principal del conflicto social o la lucha de clases. Estas últimas, entonces, se manifiestan principalmente como fuerzas políticas, con una débil estructuración a nivel de la sociedad civil. El "Estado de compromiso" se caracterizó porque, pese al predominio del carácter capitalista, ninguna clase logró imponer claramente su hegemonía sobre las restantes. [4] El sistema logró integrar, aunque en forma asimétrica, intereses de las clases dominantes, de las clases medias y, subordinadamente, de la clase trabajadora organizada. La exclusión de otros sectores, como el campesinado hasta la década del sesenta, se explica porque aquel "compromiso" descansaba en la intangibilidad de las relaciones agrarias, en la permanencia de la matriz social de la hacienda o el sistema latifundiario; en otras palabras, en la ausencia de una reforma agraria modernizante. Ello, sumado a la propiedad extranjera de las riquezas básicas, es decir, a la ausencia de nacionalización del cobre, configuraron hasta los años sesenta lo que se ha denominado el "reformismo incompleto" [5] .

Scanned with CamScanner

Las clases dominantes se caracterizaron por una fusión de intereses industriales, financieros, comerciales y agrarios, no observándose distinciones tajantes en el plano ideológico político entre sectores modernos y tradicionales. Dada la permanencia del sistema latifundiario, estas clases no contaron nunca con un proyecto hegemónico modernizador, sino que se dedicaron a la defensa de privilegios y a la utilización del rol del Estado. Todos los intentos modernizadores dentro del marco capitalista provinieron del Centro político, expresivo de las capas medias, y nunca de los sectores capitalistas dominantes. La debilidad hegemónica de estos últimos quedó de manifiesto en la representación política de la Derecha, conformada por los troncos históricos Liberal y Conservador. Desde 1938 la Derecha gobernó el país sólo en el lapso 1958-1964, y debió resignarse la mayor parte del período a políticas defensivas en el Parlamento y a proyectar su influencia en sectores del Centro político.

Las llamadas clases medias estaban conformadas por sectores muy heterogéneos que tenían en común la referencia al Estado y al sistema educacional público. En el largo período que va desde los años treinta a los sesenta, ellos aparecen identificados con los procesos de expansión estatal y democratización general porque los consideran garantía de su reproducción y movilidad. De carácter progresista en los treinta, el hecho de constituir los principales beneficiarios del sistema los va convirtiendo poco a poco en elementos conservadores y defensores de un orden social que sienten amenazado por la creciente incorporación de los sectores populares. La representación política de estas capas medias era detentada por el Centro, principalmente el Partido Radical que tenía un carácter pragmático y pendular, lo que le daba al espectro político una gran flexibilidad para enfrentar crisis, y

Scanned with CamScanner

que desempeñó un papel decisivo hasta la década del sesenta.

Las clases populares urbanas, industriales y mineras estaban ambiguamente incorporadas al sistema político, en cuanto participaban de él pero en forma segmentada y subordinada, logrando sólo condiciones mínimas de subsistencia. Sus expresiones políticas eran, principalmente, el Partido Socialista, de carácter más popular que obrero, heterogéneo, con dificultades de unidad organizacional y gran riqueza y diversidad ideológica, y el Partido Comunista, de carácter fundamentalmente obrero, homogéneo en lo social e ideológico, vinculado al movimiento comunista internacional y de corte marxista ortodoxo. Ambas colectividades expresaban esta relación ambivalente con el sistema político: participaban en él, no eran una fuerza "anti-sistema", pero mantenían y desarrollaban un proyecto de cambio radical del orden socioeconómico.

La articulación entre Estado y sociedad, la elevada representatividad de los partidos y la inclusividad del espectro partidario, sumados a otros factores que no cabe analizar acá, favorecieron el fortalecimiento de una clase política relativamente extensa y diversificada desde el punto de vista ideológico, que aseguraba la concertación política y la dirección de las organizaciones sociales a nivel nacional. La relación entre "oferta" política y "demanda" social se hacía en términos que combinaban una alta politización e ideologización con un reivindicacionismo muy concreto y particularista, expresivo de los sectores organizados.

Por otra parte, el sistema institucional que se fue conformando obligaba a una permanente negociación y a la adopción de estrategias de cambio gradual que no rom-

Scanned with CamScanner

pieran el equilibrio de intereses imperante. Estos factores posibilitaron la existencia de fórmulas consensuales de resolución de conflictos a nivel institucional, evitando el recurso a elementos ajenos a este ámbito, como las instituciones castrenses. Respecto de ellas, los sectores civiles mostraron no sólo desconfianza, sino que fueron incapaces de elaborar una política coherente. Ello redundó a su vez en el "enclaustramiento" de las FF.AA., con débil penetración en ellas de las opciones civiles; en el desarrollo de una ideología profesionalizante y constitucionalista con alta cohesión interna y legitimidad jerárquica, y, finalmente, en una modernización y socialización ideológica ligada, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a la hegemonía norteamericana en América Latina.

Las transformaciones de los años sesenta

En la década del sesenta el sistema político descrito va a experimentar una serie de cambios, algunos de cuyos rasgos se exacerbarán en el período 1970 – 73. [6]

En la percepción de los actores principales, está llegando a su fin la compatibilidad entre el esquema capitalista de desarrollo y el proceso de democratización general. La incorporación masiva de nuevos sectores a la vida política entre 1958 y 1964 implica el paso a una democracia de masas, con la creciente legitimidad de ideas de cambio en el sistema social. La Derecha, al revés, aparece deslegitimada luego de su primer gobierno directo en varias décadas (Alessandri, 1958 – 1964) y en el Centro político ha surgido un nuevo actor partidario

Scanned with CamScanner

que cambia el papel desempeñado hasta entonces por el Partido Radical. Se trata de la Democracia Cristiana, que se define a sí misma en términos altamente ideologizados, con un proyecto de reformas profundas al capitalismo, distanciándose tanto de la Derecha, a la que califica de reaccionaria, como de la Izquierda, a la que considera clasista y portadora de un proyecto socialista sin originalidad frente al modelo ortodoxo. La incapacidad de presentar una alternativa propia y el temor que le provoca un eventual triunfo de la Izquierda en las elecciones presidenciales de 1964 lleva a la Derecha a apoyar al candidato de la DC, Eduardo Frei.

El proyecto democratacristiano buscaba completar la modernización en aquellos dos puntos cruciales que estaban pendientes: la transformación de las relaciones agrarias, liquidando el sistema latifundiario, y el rescate de las riquezas básicas, "chilenizando", como se llamó a este proceso de semi-nacionalización, las empresas de la gran minería del cobre. Este proyecto modernizante consultaba asimismo un salto adelante en la industrialización a través de un flujo importante de capital extranjero, al que debía asociarse una "burguesía moderna", y la expansión de los mercados internos y externos. Pero no se trataba de un proyecto puramente modernizante. Buscaba hacerse compatible con una extensión e intensificación de los procesos de democratización general, especialmente referidos a los sectores campesinos y marginales urbanos. En otras palabras, se pretendía terminar con las exclusiones que habían caracterizado hasta entonces al "Estado de compromiso" y completar las modernizaciones que éste había dejado sin realizar. Ello implicaba cambiar los interlocutores del "compromiso", sacrificando los intereses del sector latifundiario, para desarrollar los de una burguesía nacional moderna asociada al Estado y los de los sectores medios, incorporando los del campesinado y de sectores marginales ur-

Scanned with CamScanner

banos, y neutralizando a los sectores de la clase obrera organizada que se expresaban en la Izquierda.

Es evidente que la Democracia Cristiana va a introducir una cierta rigidización del espectro político partidario y contribuir a su polarización. Por un lado, está su estilo organizacional y su discurso político de fuerte contenido mesiánico y alternativista, que le impiden jugar el clásico papel pendular de un Centro político que establece alianzas a uno u otro lado del espectro para conseguir las mayorías necesarias que eviten la agudización de la crisis. En este sentido, el comportamiento de la DC en cuanto Centro político va a diferir sustancialmente del que había asumido anteriormente el Partido Radical: su gobierno unipartidario (1964-70) es una ilustración de esta tendencia alternativista. Por otro lado, el hecho de que uno de los pilares de su proyecto político fuera la reforma agraria significaba que por primera vez se amenazaba el nudo que había servido de base hasta entonces al "Estado de compromiso". Ello no podía hacerse sin provocar un distanciamiento del conjunto de la clase capitalista, para la cual aquella reforma involucraba la destrucción del principio de propiedad privada a manos de un Estado todopoderoso y arbitrario. La solidez de los lazos entre los diversos sectores de la clase capitalista favoreció la solidaridad reactiva contra el gobierno. Con la reforma agraria y la sindicalización campesina se derrumbaba todo un mundo económico, social, político y cultural. Esto provocó la reorganización de la Derecha, que se unificó en el Partido Nacional, elaborando un discurso y un programa más nacionalista, más autoritario y menos democrático e incorporando en su élite dirigente a núcleos que provenían de grupos nacionalistas en desmedro de la dirigencia liberal-conservadora.

Por último, el aislamiento de la DC se expresa también respecto de la izquierda, con la que no fue capaz de hacer los pactos necesarios para promover las transfor-

maciones buscadas y a la que no logró arrebatar sus banderas políticas, que era lo que había pretendido originalmente. Ello se debió a que la Izquierda radicalizó posiciones, denunciando el carácter capitalista y limitado de lo que denominaba "el reformismo DC". Al mismo tiempo, mantuvo su influencia en un proletariado urbano industrial no cooptado por el proyecto DC. La radicalización de la Izquierda se da en un clima ideológico muy proclive a tal proceso, debido a la influencia de la revolución cubana, al auge del reformismo, fomentado desde el gobierno norteamericano (Alianza para el Progreso), precisamente para neutralizar ese impacto, al discurso transformador de la DC y al empantanamiento de su programa hacia mediados del período del Presidente Frei.

Dos son los cambios principales que experimenta la Izquierda en la década del sesenta. Uno consiste en la incorporación de sectores radicalizados que provienen del Centro (Partido Radical, MAPU y, más adelante, Izquierda Cristiana), los cuales se suman a su representación tradicional (Partido Socialista y Partido Comunista). El otro lo constituye la unificación de todos sus componentes en la visión marxista-leninista clásica (aun cuando se acepta "la vía pacífica" para Chile) y en un proyecto de transición al socialismo como único medio de superar el subdesarrollo capitalista en el marco de una "democracia burguesa".

Así, para volver a nuestro esquema inicial, la "columna vertebral", es decir la articulación de las relaciones entre Estado y sociedad civil a través de la "imbricación" entre sistema partidario y organizaciones sociales, sufre varias transformaciones en la década del sesenta. Por un lado, se modifica y extiende la "base social" al incorporarse al campesinado y los sectores marginales urbanos y al configurarse una democracia de masas. Por otro, el Es-

Scanned with CamScanner

tado amplía significativamente su papel de agente del desarrollo, del cambio y de la redistribución social de los recursos. Finalmente, entre "base social" y Estado, el sistema partidario experimenta un proceso de tripolarización, con una Derecha reunificada y que vira hacia posiciones más autoritarias y no democráticas para preservar un capitalismo en crisis; un Centro político de carácter alternativista, incapaz de realizar alianzas y aislado tanto de la Derecha como de la Izquierda, y una Izquierda que, manteniendo su participación en el juego democrático, radicaliza ideológica y políticamente su proyecto de sustitución del capitalismo.

Vale la pena recalcar que en este período se quiebran dos elementos fundamentales que habían mantenido el sistema político durante décadas. Así, la alteración de la estructura social agraria radicaliza posiciones autoritarias en la Derecha, empujándola hacia la ruptura del sistema democrático. Por otro lado, se tiende a producir un distanciamiento entre los dos sectores (capas medias y clases populares) que habían hecho políticamente compatibles la democracia política y el proceso de democratización general. Tal distanciamiento se expresaba en el plano partidario en proyectos de transformación excluyentes desde el Centro y desde la Izquierda y en la pérdida de flexibilidad del sistema para manejar crisis en la medida que se desarrolla la "tripolarización" mencionada.

La agudización de la crisis

Al comenzar la década de los setenta, la sociedad chilena parece enfrentar una disyuntiva histórica. Debe

Scanned with CamScanner

optar entre la profundización capitalista —congelando o revirtiendo las tendencias democratizadoras y sus presiones sobre el Estado— o la profundización de los procesos de democratización, lo cual demandaba alterar los patrones de desarrollo capitalista. Esta disyuntiva se planteaba en el contexto de una crisis de legitimidad del modelo capitalista y de una relativa desarticulación del "Estado de compromiso", pese a la cual se mantenía inalterable la legitimidad del régimen democrático como espacio consensual de resolución de conflictos. En ese marco, el triunfo de la coalición de Izquierda, la Unidad Popular, en las elecciones presidenciales de 1970 constituyó el inicio de la segunda de las opciones señaladas.

El núcleo del programa de la Unidad Popular era la expropiación y estatización del sector monopólico de la economía, con el fin de reorientar el excedente hacia un modelo alternativo de desarrollo, completar la reforma agraria y nacionalizar las riquezas básicas, todo ello acompañado de un vasto programa redistributivo. De hecho, el proyecto podía ser calificado de "democratización no capitalista", en tanto la tradición teórico-ideológica de la Izquierda le asignaba el carácter de "transición al socialismo".

Desde el principio hubo sectores privados y públicos de EE.UU., de la clase capitalista y de la derecha política que, viendo afectados sus intereses, procuraron el derrocamiento de Allende, ya fuera por vías legales, ya por métodos insurreccionales. En un comienzo, tales intentos no concitaron el respaldo de los sectores medios, ni del Centro político ni de las FF.AA. La legitimidad del régimen democrático llevó a los dos primeros actores a buscar más bien la neutralización del programa de la UP y a obligar a ésta a moderar el ritmo y contenido de las transformaciones, con el objeto de capitalizar el desgaste de dicha coalición en el mediano plazo. Por su parte, las FF.AA. asumieron, en virtud de aquella misma legitimi-

Scanned with CamScanner

dad, su papel de "garantes" de la Constitución. La deslegitimación del régimen político era el punto crucial para que la estrategia de derrocamiento primara sobre la de neutralización, lo cual hacía indispensable generar en los sectores medios la percepción de una crisis catastrófica y de una amenaza a su propia existencia. La Derecha consagró todos sus esfuerzos a este objetivo, desplegando una gran variedad de tácticas.

En cuanto a la Unidad Popular, su discurso revolucionario, dirigido casi excluyentemente a la "clase trabajadora", y la estrategia de expropiaciones perfectamente legal pero que, al eludir su debate en el Parlamento, cuestionaba los tradicionales principios de negociación y gradualismo, terminaron por distanciarla de las capas medias. Estas últimas, junto con el Centro político, fueron subsumidas en la estrategia de derrocamiento. La radicalización ideológica, la polarización de todos los aspectos de la vida social y política, el uso de tácticas de boicot y terrorismo por parte de la Derecha, así como la mantención intransigente, por el lado de la UP, de su programa de transformaciones, fueron erosionando la legitimidad de los mecanismos consensuales de resolución de conflictos. Las FF.AA., que en octubre de 1972 se habían incorporado al espacio político apoyando al gobierno constitucional, encontraron en este clima las condiciones favorables para su intervención autónoma. Ello implicaba no sólo el derrocamiento de Allende, sino la destrucción de todo el sistema político desarrollado durante décadas. Los militares estaban movidos por un "consenso de término" y una autopercepción de su papel de "salvadores de la nación en crisis", pero carecían de un proyecto político claro. La brutalidad de la intervención, la activación de la ideología latente de la "seguridad nacional" y la cohesión jerárquica van a determinar el carácter del régimen castrense que se instalará tras el derrumbe de la democracia.

Scanned with CamScanner

En términos de los rasgos principales del sistema político que hemos descrito al inicio de este capítulo, el período 1970-73 significó, por un lado, un cierto desborde de la "base social" respecto de su canalización partidaria (gremios empresariales - Derecha; gremios de capas medias - Democracia Cristiana; organizaciones populares nuevas - Izquierda). Por otro lado, significó la separación definitiva entre sectores medios y sectores populares, lo cual se expresó en la incorporación del Centro político a la estrategia de derrocamiento propiciada por una Derecha que, a su vez, había abandonado toda pretención democrática y apostaba a la ruptura del sistema para salvar su posición de clase dominante. Finalmente, hubo en este período una considerable extensión del ámbito estatal, pero también una fragmentación de su unidad y la autonomización de sus componentes, especialmente las FF.AA.

En síntesis, un proceso de descomposición capitalista que no logró culminar en un sistema alternativo; la fragmentación del Estado; la pérdida de legitimidad de los mecanismos políticos de resolución de conflictos, y una aguda polarización caracterizada por una activa organización y movilización tanto de los sectores populares como de las capas medias y dominantes; configuran el marco para las tareas que asumirá el régimen militar. Estas no son otras que la recomposición y reorientación del sistema capitalista y la desarticulación de todos los mecanismos de organización social y política, los que serán sustituidos por un sistema estatal-militar de control y represión.

Scanned with CamScanner

El régimen militar

La comprensión del futuro democrático en Chile requiere, como hemos indicado, no sólo un análisis de lo que fue la democracia chilena y de las razones de su crisis, sino también del significado de la dominación autoritaria en los últimos trece años. Por ello, y sin perjuicio de volver en más detalle en los capítulos siguientes, resumiremos esquemáticamente la naturaleza y evolución del régimen militar que se inicia en septiembre de 1973 y que resolvió la crisis política a favor de los intereses del bloque capitalista, terminando no sólo con el sistema democrático y los procesos de democratización general, sino que intentando construir un nuevo orden social y político, basado en un esquema de desarrollo profundamente contradictorio con el que había prevalecido hasta entonces en el país.[7]

El poder militar instalado en el Estado se caracterizó desde un inicio por una creciente personalización en quien unificaba el liderazgo político con el liderazgo jerárquico institucional en las FF.AA., General Pinochet, y por la eliminación, a través de múltiples modalidades de represión, que se mantienen sin interrupciones durante la vigencia del régimen, de todas las formas de mediación y representación que se habían construido a lo largo del período democrático.

La primera fase del régimen militar (hasta 1976/77) está marcada por el predominio irrestricto de la dimensión represiva, la consolidación del poder personalizado en el General Pinochet y la constitución de un núcleo dirigente. Este se halla formado por el liderazgo personalizado y un equipo tecnocrático ("Chicago boys"), a cargo, junto con algunos núcleos intelectuales, de darle al régimen un contenido que los militares no estaban en condiciones de definir ante la falta de un proyecto político común que no fuera el "consenso de término"[8].

Scanned with CamScanner

En una segunda fase (1976/77-1981/82), el régimen militar despliega su proyecto de transformación social sin abandonar la dimensión represiva. Configura un intento de recomposición capitalista, cuya dirección no es aportada por la clase capitalista propiamente tal, debido a su tradicional debilidad hegemónica. Esta vez el proyecto de transformación capitalista proviene del mencionado sector tecnocrático y cuenta con todos los recursos coercitivos del Estado. Se trata de un modelo de desarrollo "hacia afuera", caracterizado por la apertura irrestricta al exterior, la reducción del papel del Estado y su reemplazo por los agentes privados de la economía, y la expansión de los mecanismos de mercado[9]. El aparente "éxito" inicial de este modelo económico, medido por sus propios parámetros, radicó en la enorme afluencia de capital extranjero, dedicado a la especulación y al consumo suntuario, sin ningún aporte a la inversión productiva. En el plano de la organización de la sociedad, este proyecto consagra el término del papel redistributivo del Estado, la extensión de la lógica mercantil a todas las esferas de la sociedad civil, y la atomización de la demanda social. Esta fase es la de las "modernizaciones", según la terminología oficial, y se expresa en las reformas de la organización territorial, de las relaciones laborales, de la salud y previsión social, de la educación y las organizaciones gremiales, etc. Pero la culminación de esta fase consiste en la institucionalización política, expresada en la nueva Constitución impuesta en el plebiscito de 1980. Ahí se consagran dos "modelos políticos": el primero es la extensión del régimen propiamente militar por nueve años con la posibilidad de prolongarlo por otros ocho años. Así, el régimen militar, que reproduce la situación de poder definida por el golpe de 1973, es el encargado de asegurar las condiciones para que en el futuro opere un segundo modelo político: el cual es considerado definitivo por la Constitución de 1980 y

Scanned with CamScanner

responde a las características propias de un régimen autoritario, aunque no militar: arena política de representación restringida, exclusiones sociopolíticas y poder tutelar o de veto de las FF.AA., entre otras. Volveremos sobre esto en otros capítulos.

A partir de 1981/1982 el régimen militar entra en una tercera fase, susceptible de ser denominada como de crisis recurrentes, desencadenadas en un comienzo por el colapso del modelo económico[10] . Esto deja sin base material al proyecto sociopolítico y al intento de crear un orden social que sustituyera la "columna vertebral" de la sociedad, a la que nos hemos referido. Descomposición del núcleo dirigente y aislamiento de Pinochet, fragmentación del bloque civil de apoyo, adopción de políticas de emergencia erráticas y contradictorias con el modelo imperante hasta entonces, recrudecimiento de la dimensión represiva, reactivación de la oposición: tales son los rasgos principales de esta fase. Fracasado en su proyecto de recomposición capitalista y de una nueva articulación entre Estado y sociedad civil, la racionalidad del régimen pasa a ser la estabilización de las transformaciones socioeconómicas operadas y la de asegurar su sobrevivencia política como régimen en términos de los plazos y mecanismos impuestos en la Constitución en vigencia. Cuenta para ello con la cohesión de las FF.AA., con el apoyo genérico de la clase capitalista, con la aceptación del marco institucional por parte de una Derecha en reorganización y reunificación, y con la voluntad irreductible de Pinochet de permanecer en el poder.

La crisis económica afectó de tal modo a los sectores medios, que comenzaron a distanciarse del régimen. Se abrió así una oportunidad para que los sectores populares y sus expresiones políticas, junto a estas capas medias, manifestaran masivamente su descontento frente al régimen en las Protestas Nacionales iniciadas a mediados

Scanned with CamScanner

de 1983, a las que nos referiremos en otro capítulo. Por primera vez en muchos años aparecían nuevamente ambos sectores en el mismo bando político. Ello forzó a Pinochet a intentar reconstituir su bloque fragmentado y encapsular o canalizar a la oposición. Ambos objetivos, que dieron origen a la llamada "apertura política", fracasan y, desde fines de 1984, el Gobierno combina "cierres" con mínimas "liberalizaciones", a través de la legislación de estados de excepción, buscando principalmente ganar tiempo hasta 1989. Para ello, a partir de 1987, implementa las llamadas "leyes políticas" que complementan la institucionalidad propuesta por la Constitución de 1980 y que aseguran el reemplazo del régimen militar por uno de tipo autoritario. En él, Pinochet intenta su mantención en el poder, sin que aún sobre este punto preciso haya una definición explícita de las Fuerzas Armadas. Examinaremos todo esto más en detalle al analizar el tema de la transición en el capítulo siguiente.

La Oposición a la dictadura

En la primera fase del régimen la oposición estuvo constituida casi exclusivamente por el sector derrotado con el golpe militar: la Izquierda. Contra ella se dirigió principalmente la represión. La tarea opositora consistió, entonces, sobre todo, en la defensa de la vida de las personas y la mantención del aparato organizacional. En esta fase empieza a constituirse un espacio sustitutivo al político, la Iglesia Católica, donde se organiza la defensa de los perseguidos. En este ámbito se irá recons-

Scanned with CamScanner

truyendo crecientemente el tejido organizacional sociopolítico. A su vez, la Iglesia se convertirá hasta 1983 en el principal actor frente al poder estatal militar.

Al comenzar la segunda fase, ya la Democracia Cristiana (DC) se ha alineado en la oposición. Los temas predominantes pasarán a ser el de la unidad opositora y el de la oposición social a las transformaciones sectoriales del régimen, especialmente en el campo laboral y sindical. En el plebiscito de 1980 actúa un cierto bloque opositor, aun cuando difieren las tácticas al respecto. Desde 1980 hasta mediados de 1983 tiene lugar un proceso de reconstitución orgánica en los partidos y una rearticulación precaria con las organizaciones sociales. En este período se hace presente también el tema del término del régimen militar o, para ser más específicos, el de su derrocamiento. El Partido Comunista se inclina por una línea más insurreccional. Las Protestas Nacionales, encabezadas inicialmente por las organizaciones sindicales, pero en las que de algún modo se hallan presentes los liderazgos políticos, obligan al gobierno a ensayar una "apertura" errática y reversible e implican la irrupción de la oposición política en el espacio público y la conformación de grandes bloques en su seno.[11] Este momento orgánico o partidario provoca una primera desvinculación con el "mundo social" de las protestas, que se había ido concentrando en los sectores jóvenes de las poblaciones urbanas marginales. Por otro lado, la percepción de una caída inminente del régimen dispensó a la oposición de la tarea de diseñar una fórmula consensual precisa de transición. Ella fue reemplazada por diseños implícitos (movilización social que lleve a las FF.AA. a deponer a Pinochet y negociar con los civiles, o movilización social que provoque el derrumbe militar y su sustitución por un gobierno provisional), por fórmulas que daban por resuelto el problema de la salida de Pinochet, o por una cierta mitologización de la "moviliza-

ción social", a la que se atribuyó el papel de panacea para todos los problemas y se le asignó un carácter de estrategia de derrocamiento que no podía tener. Lo cierto es que la movilización, convocada en pos de una meta máxima (término de la dictadura) para la que no se tenían los recursos, y carente de objetivos políticos intermedios, si bien transformó al régimen y abrió el espacio político a los actores de oposición, no pudo evitar el desgaste y el estrechamiento de su base de convocatoria. Como veremos en otro capítulo, la fuerza social de la oposición no logró transformarse en fuerza política equivalente.

En los años 1985 y 1986, la oposición política se vio desgarrada por tres problemas: en primer lugar, la oscilación entre una estrategia de derrocamiento y una de transición institucional, que no sólo la dividió entre bloques político-ideológicos sino que atravesó a todos sus actores políticos. En segundo lugar (pese a la ampliación relativa de alguno de los bloques), la persistencia en la exclusión de sectores fundamentales de la Izquierda respecto de cualquier acuerdo político de transición. Finalmente, las dificultades de reestablecer una relación adecuada entre la política y la "base social".

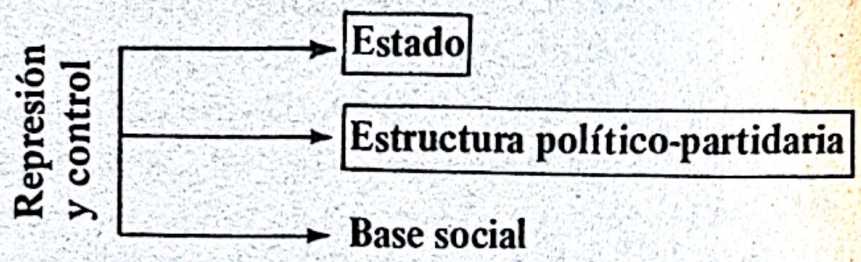
Las transformaciones operadas

Miradas ahora las cosas desde el esquema inicial de articulación entre Estado y sociedad civil, el proyecto del régimen militar de crear una nueva "columna vertebral" fracasó. Pero ello no quita que se hayan producido importantes transformaciones, la primera de las cuales es

Scanned with CamScanner

la ausencia de un canal procesador de demandas, al quebrarse la relación entre la estructura político-partidaria y el Estado. La segunda es el quiebre relativo y la recomposición precaria de las relaciones entre esa estructura política partidaria y la "base social".

Gráficamente, el esquema básico se modifica así:



El Estado atenuó significativamente su papel de agente del desarrollo y de la redistribución y, en cambio, fortaleció mucho su poder coercitivo y represivo[12].

En cuanto a la "base social", las transformaciones más importantes apuntaron en dos direcciones. En primer lugar, se produjo una reducción y atomización de los ámbitos estructurales donde se constituían los actores sociales (industria, aparato del Estado, estructura agraria, sistema educacional, etc.). El aumento significativo de la cesantía y de las posiciones ocupacionales independientes refuerzan este carácter atomizado de la sociedad.[13] Todo ello implicó un debilitamiento de los antiguos actores sociales, los cuales no son sustituidos por otros nuevos pese al surgimiento de nuevas formas de organización, como veremos en otro capítulo. En segundo lugar, este debilitamiento orgánico-estructural de la sociedad se vio reforzado por la represión contra partidos, organizaciones y dirigentes, lo que creó grandes dificultades en la relación entre la estructura político partidaria y la base social, agudizando así la crisis de representación.

Scanned with CamScanner

Respecto del sistemá partidario (a lo que nos referiremos específicamente en un capítulo posterior), éste no fue eliminado como se pretendía, ni sustituido por uno nuevo. Persistió el antiguo sistema partidario, con cambios en sólo algunos puntos del espectro. Así, la Derecha política, autodisuelta en 1973 para identificarse con el régimen militar, mantuvo hasta 1983 un alto grado de fragmentación. A partir de entonces tienden a surgir dos tendencias derechistas: una, más vinculada al proyecto político del régimen y que se ve a sí misma como su heredera; otra, que, si bien en forma ambigua, toma distancia frente al régimen y se orienta hacia el polo democrático. Queda abierta la interrogante organizacional de la Derecha para el futuro.[14] En el Centro político permanece la DC, con mayor capacidad relativa ahora para entablar alianzas aunque manteniendo su renuencia frente al Partido Comunista. También en el Centro hay tendencias socialdemócratas, las cuales, empero, no han logrado una definitiva cristalización organizacional. En la Izquierda tienden a consolidarse dos grandes tendencias: una socialista renovada, que permanece aún fragmentada, y otra de corte ortodoxo clásico, principalmente expresada por el Partido Comunista. La consolidación de un esquema de cuatro polos (Derecha democrática, Centro DC y socialdemócrata inclinado hacia la Izquierda, Izquierda Socialista unificada e Izquierda Comunista) puede constituir un elemento fundamental en el afianzamiento futuro de la democracia, tema al que nos referiremos en otras partes de este libro.

Aunque no cabe extraer una conclusión definitiva, pareciera que tanto las transformaciones suscitadas a nivel estructural, como la readecuación del liderazgo político a la nueva realidad de las organizaciones sociales, apuntan a un modelo de relación entre éstos no sustitutivo del que existió en 1973, pero al menos con mayor tendencia a la autonomía mutua. Sin embargo, las eviden-

Scanned with CamScanner

cias sobre este punto son contradictorias y varían para cada ámbito social.

Alternativa democrática y transición

La crisis del régimen militar y su fracaso en todos los planos vuelven a plantear el tema de su alternativa y los pasos para materializarla. Como hemos indicado, es evidente que esta alternativa no puede darse sólo en el nivel del régimen político, en la medida que la crisis que se heredará de la dictadura abarca todas las esferas de la sociedad, y a ésta en su conjunto. No bastará entonces con la democracia política para un proceso de reconstrucción nacional. Los desequilibrios y desigualdades plantean requerimientos de transformaciones estructurales y de democratización global, proceso que fuera interrumpido y revertido por la dictadura.

Sin embargo, ya hemos señalado en el primer capítulo de este libro que la presencia de las FF.AA., con sus características particulares de cohesión jerarquizada, solidaridad por la represión compartida, equipamiento moderno en el que se ha invertido enorme cantidad de recursos, y, por otro lado, la existencia de capas medias extendidas, hacen muy poco probable un escenario de derrota o derrumbe militar o de división de las FF.AA., que enfrente a sus fracciones entre sí. Eso implica que el momento de término de la dictadura se disocia del momento revolucionario del "gran cambio" social y que este cambio aparece como tarea para las mayorías que se constituyan al interior de una futura democracia políti-

Scanned with CamScanner

ca. La "recuperación democrática" surge como la meta que logra mayor consenso y urgencia.

Por otra parte, reiteramos que si no hay derrota o derrumbe militar, el término de la dictadura implica una decisión de las FF.AA. en orden a hacer entrega del poder. El problema general de la transición a la democracia política para la oposición es cómo provocar una decisión de retiro por parte de las FF.AA., para lo cual su fuerza social de movilización debe transformarse en fuerza política. Planteadas así las cosas, hay que insistir en que las condiciones y problemas de una transición, tal como algunos de sus actores sociales, no son los mismos que los de un proceso de consolidación democrática.

En el caso chileno, el problema se hace más complejo por cuanto existe ya una decisión de las FF.AA. respecto de los plazos y mecanismos, la cual actúa como el único elemento unificador del bloque en el poder, que se expresa en la Constitución impuesta en 1980. Y la "transición" a la que ésta apunta, no es propiamente a un régimen democrático. Como hemos dicho, constituye en rigor el paso de una dictadura militar a un régimen autoritario. Por lo tanto, el problema de la transición a la democracia no consiste, en el caso chileno, sólo en obligar a las FF.AA. a tomar la decisión de retirarse del poder, sino en presionarlas para que modifiquen una decisión ya tomada, lo que es más difícil. Se trata de una profunda crisis de legitimidad, donde no existen ni las instituciones mediadoras ni las arenas de resolución de conflictos, lo que hace que el enfrentamiento entre dictadura y oposición se resuelva a favor de la primera, por los recursos de poder que ésta maneja. El objetivo principal de la lucha de la oposición, entonces, radica en la creación de una arena o espacio donde pueda resolverse a su favor el conflicto de legitimidad. En otras palabras, la transición a la democracia en Chile pasa por el cambio del marco institucional impuesto por la Constitución

Scanned with CamScanner

dictada por el régimen bajo una apelación engañosa al principio de soberanía popular. Para avanzar en una transición, las fuerzas opositoras deben, en consecuencia, orientar su capacidad de movilización en torno a una fórmula unitaria que evite el problema del vacío institucional y abarque la más amplia gama de fuerzas políticas y sociales. Que esto no se haya producido puede deberse en parte a concepciones distintas en el seno de la oposición acerca del carácter de la transición. La consecuencia es que la definición institucional del régimen no se enfrenta a ninguna alternativa en ese mismo terreno, con lo que progresivamente se cumplen sus plazos haciendo improbable un cambio antes de 1989, fecha en que, de acuerdo a la institucionalidad impuesta, debe operar el mecanismo de redesignación de Pinochet o de solución del problema de la sucesión de éste. Volveremos sobre esto en otro capítulo.

Recapitulación

Podemos ahora intentar una recapitulación y formular esquemáticamente las proposiciones desarrolladas.

Nuestro punto de partida fue que las perspectivas de la democracia en Chile debían analizarse en relación a las condiciones y características que la hicieron históricamente posible, a las causas de su derrumbe, a las transformaciones ocurridas bajo el régimen militar y al escenario de transición. Podemos resumir así, pues, nuestros argumentos:

1.- Respecto de las condiciones y características de la

Scanned with CamScanner

democracia chilena hasta 1978, digamos que ella estuvo fundada en la compatibilización de, por un lado, una industrialización capitalista con fuerte peso estatal y, del otro, un proceso de "democratización sustantiva" incompleto, así como en la construcción de una "columna vertebral" o modo peculiar de constitución de actores sociales, caracterizado por la articulación entre sistema partidario y organizaciones sociales. Ello dio origen a una amplia clase política, capaz de representar y concertar, y que expresaba la hegemonía de los sectores medios, la presencia popular subordinada pero autónoma y la acción defensiva del bloque capitalista. Esta clase política fue capaz de someter al poder militar por la vía de su "enclaustramiento".

2.- En cuanto a la crisis de la democracia chilena [15], ella estuvo ligada a la creciente incapacidad tanto del sistema socioeconómico para seguir sustentando un proceso de democratización general, como de la clase política para construir un acuerdo que le diera base a las transformaciones necesarias para tal propósito. El resultado fue el distanciamiento y antagonismo de los sectores que unidos habían construido la democracia desde los años treinta, dándole un contenido progresista de transformaciones sociales: capas medias y clases populares y, a nivel político, Centro e Izquierda. Se permitió así la autonomización del actor militar y se crearon las condiciones para que éste, respaldado por un bloque capitalista que percibió el advenimiento de una crisis terminal, acabara con la democracia política y revirtiera el proceso de democratización global.

3.- El régimen castrense intentó la desarticulación del orden precedente y el establecimiento de una nueva organización social y política de tipo autoritario a través de un largo período de poder militar y transformación

Scanned with CamScanner

económica. Sin embargo, la persistencia de elementos del sistema político anterior, especialmente los partidos, y la emergencia de una arena sustitutiva del espacio político (la Iglesia Católica) dificultaron la utopía del régimen, la que se hizo trizas con el colapso del modelo económico en 1981-1982. Este fracaso dejó al régimen militar personalizado y sin otro proyecto que su propia sobrevivencia, en términos de la institucionalidad impuesta por la Constitución de 1980, al que adecúa todas sus opciones coyunturales. Lo anterior no excluye la existencia de una cierta desarticulación de las relaciones precedentes entre Estado y sociedad civil y un debilitamiento de los actores sociales históricos. En este campo, el problema clave es la relación entre el "mundo político" de la representación y concertación y el "mundo social" de la protesta y la movilización.

4.- La problemática de la transición hacia la democracia política en Chile no pareciera reproducir el modelo "clásico" (derrumbe militar, gobierno provisional, nuevo orden político social), es decir, el modelo revolucionario, donde coinciden término del régimen militar y creación de una nueva sociedad. Pareciera poco viable un derrumbe militar. En consecuencia, el problema puede expresarse en cómo forzar una decisión castrense que cambie la ya tomada de cumplir con los plazos y mecanismos de la Constitución del 80, que consagra un régimen militar hasta 1989 y uno autoritario-conservador para el futuro. Si éste es el problema, la tarea de la oposición es luchar por una arena o espacio que permita la resolución del conflicto de legitimidad que atraviesa a la sociedad y haga penetrar la crisis de la sociedad al interior de las FF.AA. Desde un punto de vista operacional, ello significa ligar una fórmula consensual de cambio a la movilización social, elementos que hasta ahora no han sido relacionados, por lo que la oposición se ha quedado sin estrategia.

Scanned with CamScanner

Cualquiera sea el escenario de la transición –que probablemente no diferirá en términos esenciales de otras transiciones contemporáneas, en especial del Cono Sur, cuyos rasgos generales hemos analizado en el primer capítulo de este libro–, las perspectivas de estabilidad democrática dependerán en parte de la superación de condiciones iniciales extremadamente difíciles. Por un lado, se hereda una grave crisis económica y global. De esta forma, la consolidación democrática coincide con la reconstrucción nacional, en un contexto en el que los márgenes de maniobra son muy escasos y donde se observa un agotamiento de los modelos de desarrollo conocidos hasta ahora. Por otro lado, la adhesión democrática generalizada puede ser muy precaria, en tanto se produce sobre todo como resultado del fracaso económico del régimen, en el caso de las capas medias, y de la aceptación cautelosa de masas poblacionales urbanas, desconfiadas de los mecanismos institucionales de negociación y concertación. Sin embargo, otros casos históricos similares muestran la existencia de una cierta legitimidad democrática inicial opuesta a toda reversión autoritaria y no subordinada a los éxitos económicos. Lo que hace pensar que el problema principal radica en la existencia de unas Fuerzas Armadas no derrotadas, sin adhesión valórica a la democracia, muy escindidas de la sociedad, pero que poseen un enorme poder de presión sobre el Estado. Ello hace difícil su necesaria subordinación al poder político, lo que, parece, no podrá asegurarse con la vuelta al modelo de "enclaustramiento", sino con una mayor penetración de la sociedad en las Fuerzas Armadas y una disminución del peso cuantitativo y cualitativo de éstas respecto del Estado y la sociedad.

Pero, más allá del tipo de transición y superadas las condiciones iniciales de una futura democracia política,

Scanned with CamScanner

puede pensarse en los procesos de consolidación desde la perspectiva de los factores que hicieron posible la estabilidad democrática en Chile y de los que llevaron a su crisis, tomando en cuenta los aspectos más generales sobre estos procesos considerados en páginas precedente y reconociendo que no hay determinismos que liguen la estabilidad democrática a un solo factor o requisito.

Así, puede plantearse la hipótesis que la consolidación democrática en Chile estará vinculada, además del aspecto ya mencionado de resolución del lugar y papel institucional de las Fuerzas Armadas y su subordinación al poder político, de otros tres factores que, en conjunto, tienden a fortalecer la sociedad de modo de hacer imposible las condiciones que puedan generar nuevas intervenciones militares. Por un lado, la visibilidad que tenga para los diversos actores sociopolíticos la perspectiva de democratización general, lo que implica la redefinición de un modelo de desarrollo compatible con una creciente democratización. Por otro lado, la creciente autonomía relativa de los actores sociales respecto del sistema partidario de modo que los fraccionamientos y polarizaciones políticos no se reproduzcan automáticamente en el conjunto social. Finalmente, la reconstrucción del sistema partidario con adhesiones democráticas en todos los puntos del espectro y de un sistema de coaliciones en el seno de ese sistema que asegure una mayoría sociopolítica que combine la adhesión democrática con un compromiso por cambios y reformas sociales por un largo período de tiempo.

El primer factor de consolidación se refiere al largo plazo y repone el tema de la democratización global y transformación estructural. Lo más probable es que en el corto plazo, una vez inaugurada la democracia política, haya una legitimidad democrática que no se subordina, pese a las presiones reivindicativas que estallan, al criterio de satisfacción de demandas socioeconómicas.

Scanned with CamScanner

Pero, en el largo plazo la vinculación entre democracia política y democratización vuelve a hacerse presente no sólo como demanda social sino también como oferta de los actores políticos, en términos, más que de construcción de una "nueva" sociedad, de superación constante de las desigualdades de la sociedad capitalista. Ello supone un marco institucional democrático flexible para el cambio social y la formulación de un modelo de desarrollo que facilite una democratización global y desempeñe en la constitución de sujetos sociales un papel análogo al que jugó en el pasado el proceso de industrialización e intervención estatal.

Se hace presente aquí el tema del Estado, planteado por las corrientes vinculadas al régimen militar en términos ideológicos y doctrinaristas, que oscurecen un problema que definirá una parte importante del futuro del país.

Por una parte es preciso reconocer que en América Latina y en Chile las circunstancias socio históricas fijan un papel al Estado que ningún doctrinarismo puede refutar. Así, los fenómenos de dependencia, de heterogeneidad estructural, de debilidad de actores y de clases sociales en su sentido clásico, le han dado al Estado en estos países un papel fundamental en la construcción e integración de la nación. A su vez, los grandes movimientos sociales en la sociedad civil se han constituido siempre en referencia al Estado y al sistema político y no existen en nuestro país sin esa referencia básica. No parece que un voluntarismo anti-histórico pueda de la noche a la mañana eliminar esta realidad ni parece que el futuro del país pueda apartarse radicalmente de ella. Por el contrario, la crisis nacional actual de identidad y de viabilidad y el colapso producido por los fenómenos de deuda externa, por nombrar un factor, refuerzan este papel del Estado como actor nacional ante los poderes económicos externos y como agente principal de recons-

Scanned with CamScanner

trucción de una sociedad atomizada y desarticulada hasta el extremo.

Por otro lado, es necesario reconocer algunas dimensiones críticas en relación a este papel histórico preponderante del Estado. En primer lugar, la debilidad de las organizaciones autónomas de la sociedad civil, demasiado dependientes del sistema político estatal, hizo que este Estado fuera perdiendo autonomía y unidad y se transformara en un campo "trasladado" de los conflictos sociales. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, ello llevó a que los procesos de polarización y fragmentación sociopolítica del país a finales de los 60 y a comienzos de los 70 se expresaran a nivel estatal en un proceso de segmentación de sus componentes y de descomposición generalizada. En tercer lugar, el régimen militar llevó al extremo una ideología antiestatal y de destrucción de la capacidad de acción social y de referencia cultural del Estado, transformándolo en un aparato casi exclusivamente de manipulación, control y represión. En cuarto lugar, y este es un fenómeno generalizado, junto a los procesos de exclusión y marginalización sociales que llevan a demandas por intervención "incorporativa" del Estado en el futuro, hay también demandas socioculturales por individuación, autoafirmación como sujetos, participación autónoma, reconocimiento de la diferenciación social, que a veces se expresan en una crítica a "la creciente intervención del Estado".

Una posición madura consiste en plantearse, a la vez, el conjunto de fenómenos señalados: los aspectos positivos y negativos del Estado. Y ello nos lleva necesariamente a reconocer que la crisis nacional actual tiene también, por global, un componente de crisis del Estado.

Si esto es así, habrá que afirmar que una de las grandes tareas de la reconstrucción nacional del futuro, una vez terminado el régimen militar, es la recreación de la

Scanned with CamScanner

capacidad de acción del Estado como agente de unidad y desarrollo, lo que obliga a la recomposición del aparato estatal y de sus organizaciones encargadas de las funciones militares, económicas, administrativas, de justicia y educacionales.

Se trata de fortalecer los atributos de acción e intervención estatal, en términos de modernización y tecnificación entre otros. Pero ello es inseparable de una segunda gran tarea que es la de construcción de instituciones democráticas que aseguren participación activa de la ciudadanía en el control del Estado, representación pluralista, traspaso de poderes a niveles públicos regionales y locales donde la participación es más directa y efectiva.

Este fortalecimiento de la capacidad de acción estatal y la ampliación y extensión de las instituciones democráticas, deben ir acompañados de una tercera gran tarea correlativa: reforzamiento de la autonomía de los actores y movimientos sociales respecto del sistema político estatal, es decir, robustecimiento de la sociedad civil.

El segundo factor de consolidación es la reconstrucción de una "columna vertebral", donde se redefina la relación entre partidos y movimiento social. Ello implica reconocer que no hubo durante el régimen militar refundación de la relación partidos políticos-movimiento social, sino desarticulación de la matriz constituyente de actores sociales, es decir, de la forma de articulación entre política y sociedad. Y, por lo tanto, no parece posible que pueda pensarse en una total reversión y liquidación del esquema prevaleciente en el período democrático, que ya hemos descrito.

Ese fue el sueño del régimen militar en su época triunfalista del boom y el llamado "modelo Chicago": la reducción radical del referente estatal, la irrelevancia de la estructura político partidaria y la articulación de la base social concebida como una suma de individuos ligados por los mecanismos de mercado. El fracaso del modelo

Scanned with CamScanner

económico y la persistencia de la estructura político partidaria, expresada esta última entre otras formas en las manifestaciones electorales y de otros tipos en la base y organizaciones sociales, terminaron con esta utopía.

Tampoco parece posible, como una segunda alternativa, la simple reedición del esquema Estado-Estructura político partidaria-Base social, presentado en este capítulo. Ello porque, por un lado, se han producido las transformaciones estructurales que hemos indicado, y por otro, hay nuevos elementos en la clase política que han desarrollado una crítica al pasado y a los defectos señalados en ese esquema de articulación. Y, finalmente, porque ya hay una memoria de autonomía y democracia participativa en organizaciones populares, que las hace reacias a la pura imbricación entre liderazgo político y liderazgo social. Una tercera posibilidad es la constitución de movimientos sociales absolutamente autónomos, actores que se relacionan directamente con el Estado al margen de los partidos políticos. Tampoco parece que esta hipótesis sea muy probable. Podría decirse que ya nó se realizó: la estructura político partidaria está presente y, prácticamente, no hay ningún movimiento popular que no haya tenido militantes partidarios en su promoción o desarrollo. Una cuarta posibilidad sería la variante contraria de la anterior. Se constituye también un movimiento popular autónomo, pero que es excluido y rechazado del acceso al Estado, transformándose en una amenaza permanente al régimen político que lo margina. Es el esquema de democracia restringida y excluyente con fuerte movilización y organización popular en permanente enfrentamiento y sin integración sociopolítica. También parece una hipótesis poco probable.

Lo que aparece más probable es una combinación de elementos del esquema de articulación propio del período democrático anterior con la experiencia organizativa y cultural de estos años; lo que implica pasar de una re-

Scanned with CamScanner

lación de **imbricación** entre liderazgo político y liderazgo social a una relación de **tensión** entre ambos, pugnando cada cual por su autonomía, sin resolución definitiva, y variando la situación para los diversos sectores populares. Los partidos siguen siendo canal de integración pero dejan de ser el único, porque la absorción de lo social por lo político no daría cuenta de la diversificación ocurrida en la sociedad ni de la compleja redefinición de lo político en diversos puntos del espectro ideológico partidario.

Esto supone la profundización de los niveles descentralizados y locales de participación. Ello permitiría diversos arreglos políticos sociales en cada esfera de la sociedad, no siendo puro reflejo del conflicto ideológico político central que se da a nivel del poder político estatal. La densificación de las relaciones de poder a niveles locales y funcionales descentralizados favorece la autonomía del actor o los actores populares respecto del sistema político partidario.

Pero, si es impensable en el caso chileno una total autonomía de la "base social" respecto de la estructura político partidaria, es decir, si no se trata de una relación entre dos actores independientes entre sí sino de una relación que se da de alguna manera en el seno del actor político, el tema que aparece crucial es el de la democratización de la política y de los partidos, a lo que volveremos en otro capítulo.

El tercer factor de consolidación remite directamente a la clase política o al nivel del sistema de partidos. Porque todo lo anterior implica, una vez superada la transición, que exige acuerdos o pactos políticos de otro tipo, la constitución de un cuadro político en que exista una Derecha de carácter democrático, un Centro proclive a las transformaciones sociales y, por lo tanto, de carácter progresista, y en la Izquierda, un sector socialista renovado (a lo que nos referiremos en el último capítulo de

Scanned with CamScanner

este libro), y uno de tipo comunista clásico. Dentro de dicho cuadro, la estabilidad democrática dependerá de la creación de una mayoría sociopolítica semejante a la que constituyeron los Frentes Populares en los años treinta, pero con una composición y un contenido adecuados a las nuevas condiciones históricas. Esta mayoría sociopolítica sólo puede ser constituida mediante el establecimiento de una nueva relación entre los sectores que históricamente hicieron posible la democracia política y una cierta democratización de la sociedad, y cuyo quiebre inició el derrumbe del régimen democrático, vale decir, las clases populares y los sectores medios. En el plano político, ello significa el Centro y la Izquierda, con coaliciones cambiantes en su interior. La posición de la Democracia Cristiana renuente a entender la necesaria presencia del Partido Comunista en este bloque, la fragmentación de la Izquierda Socialista y la ambigüedad del PC en cuanto al carácter revolucionario o no de la transición, son los factores que conspiran actualmente contra la constitución de esta mayoría sociopolítica. Además, parece claro que sin la existencia de un sólido vínculo entre democracia política y cambio social, la futura democracia será de nuevo derrotada por las fuerzas conservadoras, igual como sucedió en 1973.

Esta idea de una mayoría socio política o "bloque democrático transformador" o "bloque por los cambios" como se le ha llamado, y sobre la que volveremos en otras partes de este libro, no debe ser confundida con la idea del "arco democrático" ni con la "alianza o pacto de gobierno" ni con la "unidad de la Izquierda". La primera alude al conjunto de fuerzas y organizaciones políticas que participan en el juego democrático (Derecha, Centro e Izquierda, en sus diversas expresiones organizacionales) sin referencia a ningún acuerdo que no sea la adhesión al régimen democrático. La segunda, el pacto o alianza de gobierno, se refiere a un acuerdo en términos

Scanned with CamScanner

de un programa concreto y por un plazo determinado. En el interior del "bloque por los cambios" pueden caber diversas alianzas o pactos de gobierno que se sucedan alternativamente o que se modifiquen de un período a otro. La tercera idea, la "unidad de la Izquierda", que implica un pacto entre los componentes de uno de los sectores que constituyen el "bloque democrático transformador" (Izquierda Socialista e Izquierda Comunista), no agota ese "bloque por los cambios" y puede jugar un rol significativo en su desarrollo en la medida que impide que el Centro político excluya a la Izquierda más tradicional u ortodoxa, pero puede llegar a obstaculizarlo si se le concibe como una alternativa excluyente para realizar las transformaciones que el país requiere.

Más allá de los aspectos político partidarios, hay que entender la necesidad histórica de una mayoría que tenga también un horizonte cultural de largo plazo, que no elimina las diversidades culturales ni la heterogeneidad social de quienes la componen y que, por lo tanto, supone intereses parcialmente contradictorios que deben ser resueltos en la competencia democrática. Se trata de un consenso progresista y democrático sobre las grandes tareas y transformaciones que la sociedad chilena debe encarar en las próximas décadas para resolver sus problemas de modernización y democratización y sobre un modo de convivencia; dejando a la práctica política y a la competencia democrática en los diversos ámbitos la definición de quienes y cómo se dirijan estas tareas en un período determinado. Es evidente que, además de la voluntad política, hay mecanismos institucionales a nivel del régimen político y de otros ámbitos que pueden favorecer la conformación de este gran acuerdo histórico, facilitando la formación de mayorías y manteniendo la competencia legítima por liderazgos en el interior de esa mayoría socio-histórica y cultural que tiene la expresión política a que nos hemos referido.

Scanned with CamScanner

NOTAS

1.- Una primera versión parcial de este capítulo fue publicada con el título "Chile: en busca de la democracia perdida" por el Centro de Estudios del Desarrollo (CED), en Agosto de 1985, en inglés en J. Hartlyn y S. Morley (eds.) "Latin American Political Economy: Financial crisis and Political change" (Westview Press, 1986). He utilizado en la elaboración de este capítulo elementos de "Política y Sociedad en la integración y marginación del mundo popular" (en R. Urzúa y P. Dooner, eds.). "La opción preferencial por los pobres" (CISOC-Bellarmino, Santiago, 1987). He desarrollado estos temas en mis libros "El Proceso Político Chileno" (FLACSO, Santiago, 1983), "Dictaduras y democratización" (FLACSO, Santiago, 1984), "Escenarios e itinerarios para la transición" (Ediciones Documentas, 1985, Santiago). Este capítulo contó con la colaboración bibliográfica de Paulo Hidalgo.

2.- "El proceso Político..." op.cit. Ver ahí la bibliografía pertinente.

3.- "El proceso Político..." op. cit.

4.- T. Moulián, "Desarrollo político y Estado de compromiso: desajustes y crisis estatal en Chile" (Colección Estudios CIEPLAN, Nº 8, 1982, Santiago)

5.- T. Moulián, art. cit.

6.- Sobre el período 1964-1970, ver S. Molina, "El proceso de cambio en Chile. La experiencia 1965-1970" (Santiago, Ed. Universitaria 1972); L. de Riz, "Sociedad y política en Chile. De Portales a Pinochet" (UNAM, México, 1979). Sobre el período de la UP, véase M.A. Garretón y T. Moulian, "La Unidad Popular y el conflicto político en Chile" (Ed. Minga, Santiago, 1983); S. Bitar, "Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena" (Siglo XXI, México, 1979); y A. Valenzuela, "The breakdown of democratic regimes: Chile" (John Hopkins University Press, 1979).

7.- Sobre el régimen militar y su evolución, entre otros, los libros citados en la Nota 1 de este capítulo; FLACSO, "Chile: 1973-198?" (Santiago, FLACSO, 1983); P. Vergara, "Auge y caída del neoliberalismo en Chile" (FLACSO, Santiago, 1985); E. Tironi, "El liberalismo real" (Ediciones SUR, Santiago, 1986).

8.- G. O'Donnell, "Modernización y golpes militares" (Desarrollo Económico, Buenos Aires, Nº 47, 1972).

9.- A. Foxley, "Experimentos neo-liberales en América Latina" (Colección Estudios CIEPLAN, Nº 7, Santiago, 1982).

Scanned with CamScanner

10.- P. Vergara, "Auge y caída..." op. cit.

11.- Se han intentado diversas formas de agrupación de los partidos de oposición, no habiéndose llegado nunca a una Multipartidaria, sino privilegiando los elementos ideológicos. En 1983, se constituyeron la Alianza Democrática (Republicanos, Liberales, Social Democracia, Democracia Cristiana, Partido Radical, Unión Socialista Popular y Partido Socialista, sector Briones o Núñez), el Movimiento Democrático Popular (Partido Socialista, sector Almeyda, Partido Comunista, MIR y otros grupos menores), el Bloque Socialista, disueldo dos años después (Partido Socialista de la Alianza, Izquierda Cristiana, MAPU, MAPU Obrero-Campesino, Convergencia Socialista e independientes). Han habido intentos posteriores de buscar reagrupamientos a través de personalidades de diversas tendencias, como el PRODEN o la Intransigencia Democrática, de gravitación puntual o circunstancial. El intento más importante de reagrupamiento fue el Acuerdo Nacional, a mediados de 1985 y a instancias del Cardenal Fresno, donde se agregaron a los partidos de la Alianza la Izquierda Cristiana y dos partidos de Derecha, el Partido Nacional y la Unión Nacional. En 1986 este Acuerdo Nacional se amplió a varios grupos socialistas y al MAPU, pero se sustrajeron la Unión Nacional y la Izquierda Cristiana. Todos estos bloques se conocen con el nombre de "referentes". En la Derecha a principios de 1986, se constituyó el Partido Renovación Nacional que unifica a la Unión Democrática Independiente, al Frente del Trabajo y Unión Nacional. En la Izquierda, en 1987, el Partido Socialista que estaba en la Alianza Democrática se retiró de ella y el Movimiento Democrático Popular se disolvió, creándose la Izquierda Unida que, además del Partido Comunista, el Partido Socialista (sector Almeyda), MIR, incluye una fracción del Partido Radical, la Izquierda Cristiana, el MAPU y otros grupos socialistas menores. En los capítulos siguientes volveremos a referirnos a estos agrupamientos y sus comportamientos.

12.- Ver P. Vergara "Las transformaciones del Estado chileno bajo el régimen militar" (en FLACSO, "Chile 1973-198?", op.cit.)

13.- Ver. J. Martínez y E. Tironi "Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación 1970-1987" (Ediciones SUR, Santiago, 1985).

14.- Ya hemos indicado que en 1987 se constituyó el Partido Renovación Nacional que reproduce en su seno estas dos tendencias, y ello deja al Partido Nacional en una situación difícil para capitalizar la derecha democrática del futuro, a lo que aspira.

15.- Una síntesis del debate actual sobre las causas de la crisis de la democracia, en E. Tironi, "Clases sociales y acuerdo democrático" (Documento de Trabajo Nº 14, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago, 1984).

Scanned with CamScanner

III

Frustraciones y esperanzas de la transición retardada

RECONSTRUIR LA POLITICA

Scanned with CamScanner

EL ESTUDIO DE LA TRANSICION de un régimen militar o dictadura a un régimen democrático presenta dificultades analíticas y metodológicas que ya hemos insinuado en un capítulo anterior. Estas dificultades se acentúan cuando estamos frente a un caso de transición no resuelto aún, con diversos escenarios posibles para su materialización, o donde puede incluso discutirse si estamos "en medio" de un proceso de resultado incierto o si ese proceso aún no se ha desencadenado. Tal es la situación chilena, transición retardada en relación a los otros casos de regímenes militares del Cono Sur de América Latina.

Ya hemos indicado la necesidad de distinguir entre problemas propios de un régimen autoritario, problemas de transición hacia el régimen democrático y problemas propios de la consolidación democrática. Quizás una de las mayores dificultades en el caso chileno sea la aparente simultaneidad de estas tres dimensiones. Todos los actores políticos se mueven en estas dimensiones y la presencia contemporánea de todas ellas obstaculiza enormemente la claridad respecto de metas y estrategias que se refieren estrictamente al cambio de régimen. El núcleo central de éste, por su parte, ha teni-

do una sola meta, su sobrevivencia, que se identifica, al menos hasta 1989, con la mantención de Pinochet en el poder. Esto le da una enorme ventaja sobre la oposición. Si bien ninguna de estas tres dimensiones puede ser obviada, ellas deben ser tratadas separadamente, no confundiendo las estrategias para cada cual. En su manejo combinado pero diferenciado la clase político intelectual no parece haber estado a la altura de lo que el país requiere.

En este capítulo intentaremos especificar la problemática de la transición en Chile, ubicándola en el contexto de la evolución del régimen militar y la oposición, para luego discutir los escenarios posibles de esta transición.[1]

Régimen militar y tipo de transición

El golpe de Estado de 1973 que derrocó al Presidente constitucional Salvador Allende y terminó con el sistema democrático, impuso un régimen militar que se planteó dos tareas. Por un lado, la recomposición de un capitalismo en crisis y, por otro, la desarticulación de la sociedad política, pasando por la eliminación del "enemigo derrotado": la Unidad Popular y los sectores sociales que ella representaba.[2] Recordando lo que hemos indicado en el capítulo anterior, el período que va desde 1973 a 1976/77 se caracteriza por el predominio irrestricto de la dimensión represiva, que encuentra al frente como barrera de protección a la Iglesia Católica; por la progresiva personalización del poder de Pinochet y por

Scanned with CamScanner

la emergencia y consolidación de un equipo tecnocrático en la dirección estatal, junto a Pinochet, conocido como el "equipo Chicago", que le dará una orientación de contenido al régimen militar. Desde 1977 a 1981 se intensifica el proyecto transformador del régimen militar a través del modelo económico "a la Chicago"; de un vasto plan de reformas sociales destinadas a reducir el rol redistributivo del Estado, segmentar la base social e introducir en todas las esferas los mecanismos de mercado, eliminando la acción colectiva y política, y de un proceso de institucionalización política que culmina en una nueva Constitución, impuesta en 1980, que busca asegurar el paso de una dictadura militar a un régimen autoritario, con la designación del General Pinochet como Presidente hasta 1989 y la posibilidad de ser redesignado en un plebiscito unipersonal en ese año hasta 1997. A partir de 1981 el modelo transformador del régimen entra en crisis por el fracaso de su esquema económico. Ello significa fragmentación de su bloque civil de apoyo, agudización de la personalización del poder, mayor aislamiento político del gobierno militar, y un descontento de capas medias que potencia la movilización popular y la emergencia pública de los partidos políticos. Como lo veremos en el capítulo siguiente, en 1983 se inicia un ciclo de protestas masivas, frente a lo cual el régimen mantiene un alto nivel represivo, combina aperturas limitadas e informales con "cierres" políticos y, desde 1986, avanza en su propia institucionalización con miras a 1989. Hay en este último proceso una doble lógica, coincidente al menos hasta mediados de 1987, la del paso de un régimen militar a uno autoritario y la de identificar este paso con la mantención de Pinochet en el poder. Por su parte, la oposición política desde su aparición en el espacio público ha debido enfrentar los problemas de su fragmentación, de su vinculación con la sociedad y la ausencia de un diseño coherente y unitario alternativo al

Scanned with CamScanner

escenario propuesto por el gobierno militar. Luego de la declinación del ciclo de movilizaciones sociales, estos tres problemas se han agudizado, sobre todo si se toma en cuenta que el paso del tiempo favorece, al menos hasta 1989, el diseño del régimen o la doble lógica señalada más arriba.

La esquemática descripción anterior nos obliga a retomar la discusión en torno a la naturaleza de los procesos de transición, que hemos expuesto en el primer capítulo, para definir frente a qué problemática estamos. Ello por cuanto uno de los grandes problemas que ha tenido la oposición chilena ha sido su dificultad para llegar a esta definición y la confusión de espectativas al respecto.

Recordemos que estamos hablando de transiciones como procesos de cambio de régimen político, más específicamente, de paso de un régimen militar o dictadura a una democracia política, lo que deja pendiente el problema de la transformación social o de la democratización global para ser resuelto en el marco del régimen democrático. Recordemos también que estamos frente a procesos que se separan del modelo revolucionario o insurreccional clásico, en el que además de coincidir el colapso o derrocamiento del antiguo régimen con el desencadenamiento inmediato por parte de las fuerzas revolucionarias de cambio social global, los titulares de poder derrotados son eliminados o expulsados. En nuestro tipo de sociedades, con los rasgos propios de las Fuerzas Armadas y de las clases medias, este esquema es inviable. Por lo que las transiciones desde estos regímenes militares pasa, sin vacío institucional, por la decisión de las Fuerzas Armadas de retirarse del poder, la que debe ser forzada por la sociedad. Y aquí se presenta la problemática particular de la transición chilena, si aceptamos que ella cae dentro de este tipo de proceso político: el problema de la oposición no es cómo provocar una decisión

Scanned with CamScanner

institucional de las Fuerzas Armadas de retirarse, sino, dada la existencia de la Constitución de 1980, cómo provocar en ellas el cambio de una decisión ya tomada. La institucionalización de una salida que no conduce a la democracia política, pero que es vista como legítima por cuerpos armados jerarquizados, complica enormemente el desencadenamiento de una transición, y obliga a la oposición a presentar una propuesta institucional alternativa que dé cuenta de una propuesta castrense vigente, con el fin de modificarla.

Las dificultades de la transición retardada

Aunque toda transición es original o inédita, hay rasgos particulares que contribuyen a explicar su retardo o aceleración y a caracterizar su complejidad. En el caso chileno, transición retardada, como hemos dicho, en relación a las otras dictaduras militares de Sudamérica, existen rasgos que se derivan de las características del régimen, otros de la naturaleza de la oposición y otros del tipo de sociedad que ha ido emergiendo estos años, todos los cuales combinados permiten entender su complejidad particular.

En relación al tipo de régimen, destaca en el caso chileno la combinación de dictadura personalizada con régimen militar y donde la ligazón entre ambos no se produce a través de las tareas de gobierno, sino de la jerarquía militar institucional y del liderazgo político consagrado a través de la Constitución de 1980, que es internalizada por las FF.AA. como su identidad política: así, Pinochet para las Fuerzas Armadas tiene legitimidad jerárquico-institucional (es Comandante en

Scanned with CamScanner

Jefe del Ejército) y político-constitucional (según la Constitución del 80 es Jefe de Estado).

Este aspecto tiene varias consecuencias que dificultan una transición. En primer lugar, la voluntad personal de mantenerse en el poder adquiere un peso significativo que se combina con la flexibilidad de maniobra en situaciones de crisis. En segundo lugar, la subordinación de las FF.AA. a un poder político que es a la vez poder jerárquico-institucional dificulta el desarrollo de consensos políticos que se distancien de ese poder. En tercer lugar, en el tipo de dictadura personalizada hay mayores problemas para el desarrollo de sectores "aperturistas" o "blandos", propios de regímenes militares, que desde "adentro" ayudan a procesos de cambio del régimen. En las dictaduras personalizadas, el distanciamiento del régimen por parte de ciertos sectores que inicialmente lo apoyaron, lleva a éstos a ubicarse "fuera" de ese régimen y por ende a perder capacidad de maniobra: se está a "favor" o en contra del dictador, hay "bunker" y "oposición", con poca mediación entre ambos. En cuarto lugar, la combinación régimen militar-gobierno personalizado complica la estrategia de la oposición pues lo que sirve en la lucha contra una dictadura personal, a la que se trata de eliminar, no sirve necesariamente cuando se tiene al frente a Fuerzas Armadas, que no se pueden eliminar y con las cuales debe haber siempre una instancia de negociación. Y, lo que sirve para terminar con un régimen militar, no siempre es lo más adecuado para terminar con una dictadura personalizada. Finalmente, como hemos indicado, la combinación de ambos tipos de dictadura se logra institucionalizar antes de la crisis económica y de proyecto del régimen, materializándose en la Constitución de 1980. Ello genera un complicado problema de plazos y mecanismos que entraban el cambio de régimen, en la medida que tales plazos y mecanismos son vistos como legítimos por las Fuerzas Armadas. Di-

Scanned with CamScanner

cho de otra manera, la doble lógica, dictadura personal y régimen militar, al menos hasta 1989 está identificada con un mismo tipo de legitimidad en el seno de las Fuerzas Armadas.

Otras características del régimen que retardan un proceso de transición, como la lenta y desigual erosión de su bloque de apoyo civil, serán discutidas más adelante.

En relación a las oposiciones, el peso cultural, ideológico y orgánico heredado del período democrático genera una gran dificultad de convenir consensualmente metas políticas precisas. Los actores políticos combinan en su acción las dimensiones del pasado, presente y futuro, es decir, traumas, cálculos y expectativas que obstaculizan acuerdos tácticos y operacionales. La diferente experiencia y valoración de la crisis del período democrático y del golpe militar de 1973, es decir, la ausencia de un tipo de crisis que afecte a todos por igual es un elemento presente en este problema, sobre todo cuando se piensa en la lentitud con que ciertos sectores de derecha se han desgajado del régimen. A ello debe añadirse el desplazamiento permanente de estos actores en torno a los ejes democratización global (positiva o negativamente) y transición política, sin que se haya producido una clara concentración en este último.

Desde el momento en que accedió al espacio público después de las primeras Protestas Nacionales, en 1983, la oposición política pagó el precio del clima de la época, cual era la certidumbre de la caída inminente del régimen. La oposición, así, vislumbró una meta máxima, salida de Pinochet y término del régimen militar, pero la inminencia de ésta la hizo saltarse la etapa necesaria de formulación de una estrategia y de una propuesta de cambio que evitara el vacío institucional. En la ausencia de éstas, la oposición, sin abandonar la meta máxima, se absorbió en propuestas orgánicas que enfatizaban los problemas de identidad y exclusiones, es decir, en la

Scanned with CamScanner

configuración de bloques políticos de alta connotación ideológica donde lo que importaba era qué partidos se incluían o excluían, por encima de los contenidos precisos y de las fórmulas en torno al problema específico del cambio de régimen. La creación de la Alianza Democrática, el Bloque Socialista y el Movimiento Democrático Popular, todos en 1983, los intentos posteriores por la Intransigencia Democrática, la firma del Acuerdo Nacional y su ampliación al grupo firmante de las "Bases de sustentación" o "Grupo de los 13", la Izquierda Unida en 1987;[3] todos estos esfuerzos de agrupación más allá de la fragmentación partidaria, adolecieron de la incapacidad para precisar una estrategia de transición viable que enfrentara la propuesta institucional del régimen militar. No se trata de caer en el mito que la unidad de la oposición basta por sí sola para terminar con este tipo de régimen ni de imaginarse que en Chile es posible una unidad orgánica de una oposición con grados muy altos de densidad ideológica y de estructuración e identidad partidarias. Se trata solamente de reconocer que para un avance en un proceso de transición desde la oposición, es necesario un consenso mínimo entre todas las fuerzas significativas de ella respecto de dos puntos: el de la fórmula de transición que se oponga al proyecto institucionalizador del régimen, que vaya más allá de la demanda genérica de democracia, y el consenso sobre las operaciones necesarias para organizar la presión y movilizaciones, en torno a la fórmula unitaria de transición, que lleven finalmente a la negociación indispensable entre la oposición y un régimen renuente a ello. El plebiscito uruguayo, la campaña por elecciones directas en Brasil, la movilización electoral en Filipinas, la lucha por la reforma constitucional en Corea, son ejemplos de este tipo de acuerdo opositor en torno a una salida político-institucional precisa.

Los factores que han dificultado tal consenso de la

oposición son, por un lado, una cierta diferencia respecto de las potencialidades de la situación política chilena, en la que algunos ven a lo más una transición hacia un régimen democrático y otros, en cambio, perciben una dinámica de tipo insurreccional y revolucionaria. Por otro lado, el peso doctrinarista y los intereses políticos organizacionales que llevan a la Democracia Cristiana, en esto acompañada por sectores de Derecha, a rechazar todo acuerdo formal de transición con el Partido Comunista, pretextando la posición más insurreccional de éste. Sin embargo, cabe recordar que mucho antes que el PC hiciera un viraje en su línea más tradicional hacia nuevas formas de lucha, la DC mantenía una posición renuente a cualquier acuerdo con él. Esta exclusión refuerza una tendencia defensiva en el PC que lo lleva a reafirmar líneas más radicalizadas y que buscan desbordar y copar, a la vez, la movilización social, y que se han vinculado con movimientos armados, realimentando el pretexto excluyente de los sectores de Centro. Este problema repercute en la sensibilidad de otros sectores de Izquierda, que se marginan de acuerdos que dejen afuera al Partido Comunista.

La ausencia de una propuesta concertada de transición, que parcialmente ha tendido a solucionarse desde mediados de 1986 como ya veremos, llevó a una confianza irrestricta en que la movilización nacional entendida como extensión continua del movimiento de Protestas, sería por si sola capaz de desestabilizar al régimen y llevarlo o a un colapso o a la separación entre Pinochet y las FF.AA., lo que a su vez llevaría a éstas a negociar una salida con los civiles. Ni los esbozos de una estrategia propiamente política, como la intentada por la Alianza Democrática, ni de una de tipo insurreccional, como la insinuada por el Partido Comunista, lograron transformarse en estrategias coherentes y viables, con el resultado que la movilización terminara desgastándose, reduci-

Scanned with CamScanner

da a una base militante, y permitiendo al gobierno su aprovechamiento político en términos del "desorden y la inseguridad".

El fenómeno indicado nos conecta con la tercera particularidad de la problemática de la transición democrática en Chile que tiene que ver con rasgos de la sociedad en su conjunto, más allá de las características de régimen y oposición. Se puede hablar de una desarticulación de la relación tradicional entre estructura político partidaria y la organización y movimiento sociales. Después de las primeras Protestas Nacionales tendió a hacerse evidente una creciente distancia entre el "mundo político" y el "mundo social", esto es, entre un principio de acción instrumental e institucional, aunque precario, y por lo tanto cupular, y un principio mucho más expresivo–simbólico y radicalizado, desconfiado de las instituciones y las concertaciones. A su vez, ambos se distanciaron de una masa atomizada, anómica y atemorizada.

Esta distancia se hizo particularmente aguda en el mundo popular urbano de la juventud, cuya radicalización visceral, producto del avasallamiento sufrido en estos años, se tradujo en una cierta involución de tipo comunitarista y rebelde con difícil proyección en el espacio propiamente político.

Hay en esta desarticulación de la matriz de acción sociopolítica varios factores que contribuyen a explicarla.[4] Por un lado, transformaciones estructurales que fragmentaron la sociedad, debilitaron su capacidad orgánica y redujeron y empobrecieron los espacios de constitución de actores y movimientos sociales, aumentando la masa cesante o independiente. Por otro, cambios institucionales que dificultaron la organización social y reforzaron la atomización. A ello hay que agregar la represión sistemática ejercida contra organizaciones, dirigentes y base social. Finalmente, hay que considerar como factor coadyuvante la enorme dificultad del lide-

razgo político de adaptarse a las nuevas circunstancias, y a mantención de estilos y ofertas que no dan cuenta de ellas ni de las demandas de las nuevas generaciones en os sectores populares.

Todo lo anterior dificulta y oscurece más la acción política concertada de una oposición político social que no logra transformar el descontento social mayoritario en fuerza política efectiva y equivalente. En términos de un proceso de transición, esto tiene varias consecuencias. En primer lugar, el predominio de acciones simbólico-expresivas que refuerzan la identidad, proveen un sentido de pertenencia y desarrollan contenidos defensivos, por encima de acciones instrumentales que lleven a concertaciones orgánicas e institucionales y a logros acumulativos. En segundo lugar, una sociedad fragmentada hace difícil formas de movilización que expresen al conjunto de los sectores sociales y, más bien, lleva a tipos de movilización particularizadas en ciertos sectores específicos pero que afectan o distancian a otros. Esto es especialmente visible cuando se consideran sectores juveniles, sectores poblacionales, núcleos obreros organizados y capas medias, cuyas formas respectivas de movilización tienden a entrar en contradicción entre ellas. A su vez, las formas más globales que abarcarían a todos, precisamente por calar menos las especificidades, tienden a desgastarse. En tercer lugar, todo lo anterior hace difícil la articulación con los procesos políticos, máxime cuando, como hemos señalado, además del fenómeno represivo no se producen fórmulas de transición capaces de canalizar en torno a ellas la movilización social. Por último, la particular interpenetración de liderazgo social con liderazgo político-partidario en los niveles cupulares, pese a la distancia entre política y sociedad, reproduce la debilidad de los actores sociales y políticos en cuanto tales y dificulta su expresión autónoma.

Scanned with CamScanner

Los factores de bloqueo y su evolución

Si miramos la situación descrita desde el punto de vista de los factores o agentes desencadenantes de un proceso de transición, a los que nos referimos en un capítulo anterior, y cuya combinación determina diversos escenarios posibles, ellos aparecen bloqueados en el caso chileno, proyectando una continuidad del régimen militar al menos hasta el momento de definición de la cuestión sucesoria (alrededor de 1989, según el plazo establecido por la Constitución de 1980). Sólo en ese momento pareciera abrirse un punto de inflexión o una oportunidad para el cambio, como veremos más adelante.

El primer factor o agente es el régimen mismo. Ya sea por descomposición de la dictadura, ya por un propósito deliberado de ella, puede desencadenarse una transición "desde arriba". Ya hemos dicho que en nuestro caso no estamos frente a una transición de este tipo, en la medida que lo que existe es un proyecto de mantención de la dictadura militar y de conversión de ésta en un régimen autoritario-excluyente a partir de 1989, proyecto cristalizado en la Constitución de 1980, coincidiendo con la voluntad de Pinochet de mantenerse en el poder.

Todas las acciones que emanan del régimen se enmarcan en esta racionalidad. Así, cuando en agosto de 1983, después de las primeras Protestas, se inicia por parte del régimen lo que se llamó una "apertura", encabezada por el Ministro del Interior, Onofre Jarpa, ella no formó parte de un proceso general de liberalización y cambio como muchos pensaron, sino de este cálculo de sobrevivencia del régimen en que por primera vez se combinaban la visión militar represiva con una estrategia propiamente política.[5]

Recordemos que la llamada "apertura" se inicia en un momento de extrema debilidad del régimen militar y

Scanned with CamScanner

tuvo dos objetivos fundamentales. Por un lado, recomponer un bloque de apoyo social y político que se fragmentaba y tomaba distancias del régimen, y, por otro lado, crear un espacio público informal para encauzar o canalizar una oposición que mostraba su fuerza y capacidad de desborde, especialmente a través de las "protestas". Hacia fines de 1984 estos dos objetivos se mostraban relativamente fracasados.

En cuanto al bloque de apoyo del régimen, la derecha política no lograba la unidad anhelada, distinguiéndose claramente "dos derechas", una que aspiraba a ser continuadora o sucesora del régimen y por lo tanto a no perder su identificación con éste, y otra que tomaba distancias y autonomía para plantearse con un proyecto propio de transición y convertirse en interlocutor del espectro democrático. En el plano social, sólo en abril de 1984 se buscó aliviar el descontento empresarial, incorporando sus demandas a través de un nuevo ministerio económico, lográndose un aplazamiento temporal, pero sin resolver los problemas de fondo que en cualquier momento podía revitalizar el descontento y la crítica. Hacia fines de 1984 tanto Pinochet como Jarpa se lamentaban de esta fragmentación y pasividad de sus partidarios.

Por otro lado, en lo que dice relación con la creación de un espacio público informal, ello no bastó para neutralizar y encapsular a la oposición. Esta mostró una capacidad para mantener un grado relativamente alto de movilización política y no aceptó entrar en la "cancha marcada" de las leyes políticas (especialmente la de los partidos) que ofrecía el gobierno a regañadientes y que buscaban excluir a un amplio sector de la oposición. La presencia pública de una oposición que no dejaba de pedir el término del régimen militar y que se organizaba y proyectaba a lo largo del país denunciando todos los males del régimen, creaba un problema de estabilidad para éste.

Scanned with CamScanner

Así, fracasados los dos principales objetivos de la apertura, el gobierno decidió volver al terreno que más le conviene, el de la lógica militar, donde toda crítica y oposición se identifica con un enemigo de guerra al que no hay que reconocer sino eliminarlo. Es evidente que la política es lo que más erosiona este tipo de dictadura que se siente a sus anchas en el campo de la guerra. El objetivo de permanecer hasta 1989 en los términos de la Constitución impuesta, permanecía inamovible: sólo variaba la estrategia para lograrlo. En agosto de 1983 el gobierno proyectó una situación inmanejable hasta 1989 y procedió a la "apertura", contra su deseo. En noviembre de 1984 ocurrió lo mismo: con esa "apertura" proyectada en el tiempo no se llegaba al 89. Por eso, se le clausuró y se decretó el Estado de Sitio.

Así, la "apertura" no era parte de un proceso de transición a la democracia, sino una estrategia de mantención de una dictadura militar que a partir de 1989 se transformaría en un régimen autoritario. De ahí que fuera informal (no se sabían bien los límites y las reglas del juego y nada se institucionalizaba, como que no se promulgó ninguna de las "leyes políticas"), errática, reversible en cualquier momento y siempre acompañada de niveles muy altos y brutales de represión, los que se acentuaron con el Estado de Sitio. Este último aparecía como la estrategia de sobrevivencia más adecuada al aumentar la impunidad y el campo de la represión, suspender la política y hacer imperar la lógica de la guerra.

A mediados de 1985, forzado por los efectos de los asesinatos de dirigentes comunistas, perpetrados por los organismos de seguridad del régimen, y por la presión externa, especialmente en relación a préstamos de la banca mundial avalados por los Estados Unidos, el gobierno levantó el Estado de Sitio, reponiéndolo un año después, luego del atentado contra el General Pinochet, hasta fines de 1986. Pero en todas estas variaciones ya

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

no se intentó más una "apertura" como la de 1983, sino que se combinaron liberalizaciones parciales (aceptación restringida de expresiones políticas, reingreso progresivo pero limitado de exiliados, etc.) con altos niveles represivos y un manejo político "de administración" que tenían como meta el llegar en las mejores condiciones al plebiscito de 1989, consagrado en la Constitución del 80 para asegurar la continuidad del régimen. Por ello, se retardó hasta principios de 1987 la promulgación de leyes políticas, de modo de no institucionalizar ningún espacio para la oposición y, al hacerlo, dejar a ésta con el menor margen de maniobra posible.

Si hay bloqueo de una transición "por arriba", también lo ha habido "por abajo", es decir, incapacidad de la oposición de desencadenar tal transición. Corresponde al segundo factor a analizar. Ya hemos indicado que en todo el período siguiente a las Protestas la oposición careció de una estrategia política coherente y consensual que oponer al proyecto institucional del gobierno. La confianza en que la movilización social provocaría el derrumbe del gobierno y obligaría a las Fuerzas Armadas a negociar la salida de Pinochet; la visión de un derrocamiento por la vía de la desobediencia civil o la ingobernabilidad, sin alternativa institucional precisa; el diseño embrionario de fórmulas que corresponden más a modelos revolucionarios que a procesos de transición y que dan por supuesta una derrota militar o un derrumbe equivalente del régimen; el temor a caer en un "entrampamiento" de parte del régimen si se le hacía oposición en el interior de su institucionalidad o si se buscaba forzar a éste a una negociación a la que era renuente; el énfasis en las configuraciones de bloques políticos con mutuas exclusiones; todo esto dejó la meta máxima de término del régimen militar sin una estrategia adecuada para ello.

Sería errado pensar que no hay evolución ni proceso

de aprendizaje por parte de los actores de oposición respecto de estos problemas.

Así, a nivel de organizaciones de la sociedad civil, de capas medias y de ciertos sectores populares, hay un intento de superar la movilización puramente agitativa buscando el fortalecimiento de sus organizaciones representativas y la lucha propiamente reivindicativa, apuntando a la reivindicación crecientemente política. Ejemplos de ello son las elecciones y plebiscitos realizados en las Universidades por el movimiento estudiantil y en los Colegios Profesionales, donde las fuerzas de gobierno se hacen claramente minoritarias; o los esbozos, no siempre materializados, de concertación entre organizaciones empresariales y sindicales. Es evidente, sin embargo, que estos tipos de movilización no son proyectables a otros sectores sociales de mayor dificultad de canalización y representación.

En el plano estrictamente político, a mediados de 1985 se produce un fenómeno de gran significación, aún cuando más adelante su influencia tienda a diluirse y revertirse: el Cardenal Arzobispo de Santiago inició una gestión con diversos sectores políticos para avanzar en lo que la Iglesia llama la "reconciliación nacional", lo que dio origen a la firma de un documento por parte de los sectores convocados, que se conoció como el "Acuerdo Nacional".[6] Pareciera resolverse aquí algunos de los problemas que estaban bloqueando un proceso de transición. Por un lado, la Iglesia, más allá de su papel ya crucial de denuncia y defensa en materia de derechos humanos, aparecía jugando un rol político de institución mediadora, que la situación chilena carecía. Por otro lado, a un amplio sector opositor se agregaba por primera vez un significativo segmento de derecha política, hasta entonces muy vinculada al régimen, lo que aislaba al gobierno y permitía pensar en el surgimiento de una Derecha democrática o de una semi-oposición, pese a su am-

bigüedad respecto de los plazos establecidos por la Constitución del 80. Finalmente, y pese a que ello perdió perfil posteriormente, se consagraba en el Acuerdo, por primera vez por parte de la oposición, una fórmula institucional para resolver el conflicto básico con el régimen, cual era un plebiscito para cambiar la Constitución.

Pese a estos aspectos que implicaban un avance y un posible desbloqueo de la situación política, había dos limitaciones en el Acuerdo Nacional, que luego se harían patentes y lo llevarían a un empantanamiento. Una de ellas se refiere a la exclusión inicial del Partido Comunista y de sectores socialistas importantes, lo que reprodujo la fragmentación de las fuerzas opositoras, reforzó las tendencias más polarizantes en la Izquierda Comunista y dejó aislada y sin posibilidades de desarrollarse a parte de la Izquierda Socialista. Volveremos sobre esto, pero digamos, desde ya, que no hay ninguna razón ética o política que pueda esgrimirse como argumento válido para justificar estas exclusiones que empantanaban aún más un proceso de transición. El otro límite se refiere al contenido del Acuerdo. En cuanto "consenso de transición" solamente, se quedaba corto en lo referente a una propuesta de plazos y mecanismos de cambio de régimen, lo que hacía casi imposible una negociación precisa en torno a él. En cuanto "consenso de consolidación" no puede decirse que hubiera allí un proyecto y una coalición suficientemente claros que conciliaran estabilidad democrática con las transformaciones socioeconómicas que permitieran resolver en el futuro los problemas de vastos sectores populares.

Sin duda que el gobierno no podía sino negarse a cualquier negociación e insistir en lo establecido en la Constitución del 80. Las desaveniencias entre los propios firmantes del Acuerdo respecto de su alcance y del significado de varios de sus puntos, fueron imposibilitando una acción común y en los hechos dejó de funcionar como

Scanned with CamScanner

un conglomerado. En 1986 sectores del Centro y de Izquierda intentaron reorganizarlo a través de otro documento sobre las "bases de gobernabilidad" de un futuro régimen democrático[7]; pero de él se marginó un significativo sector de Derecha (Unión Nacional) que se veía más como Derecha sucesora del régimen militar que como opositora, aunque se incorporaron nuevas agrupaciones de Izquierda, manteniéndose las exclusiones ya mencionadas. Tampoco esta nueva agrupación de partidos, que se conoció como Grupo de los 13, tuvo una vida muy larga y eficaz. En todo caso, estos esfuerzos que buscaban superar la fragmentación partidaria tienen el mérito de dejar marcado un cierto consenso entre fuerzas muy disímiles para el funcionamiento de un régimen democrático.

Así, entre 1983 y 1985 el tema fundamental de la oposición fue la movilización social, la que se entendió normalmente en sus aspectos agitativos y no logró entroncarse en ninguna estrategia coherente que no fuera expresar el descontento y el rechazo al régimen. Careció, como hemos dicho múltiples veces, de una fórmula propuesta de transición o cambio que la unificara y canalizara. En 1985, la presencia de la Iglesia en la escena directamente política, la experiencia del Estado de Sitio, la firma del Acuerdo Nacional, favorecieron la puesta en primer plano del tema de la negociación, sin que ésta se apoyara en una propuesta de transición específica, es decir, sin claridad sobre qué negociar, por cuanto el Acuerdo era un marco general de principios y no un instrumento de interlocución o negociación. Por otro lado, esta temática se desvinculó totalmente de la movilización social, y los intentos ambiguos de negociación se hicieron con una sociedad indiferente y desmovilizada, que tampoco se plegaba a quienes persistían en una línea puramente agitativa que apuntaba a un colapso o derrocamiento insurreccional del régimen. En otras palabras, ni moviliza-

Scanned with CamScanner

ción ni negociación, que nunca hubo, se insertaron en una estrategia política y ambos elementos dieron origen a un debate ideológico y artificial que desconoció la absoluta indispensabilidad de ambas dimensiones. El rechazo del gobierno al Acuerdo Nacional, única respuesta posible desde su perspectiva de mantención en el poder, reavivó el mito que "no habrá negociación" y reafloraron los temas de movilización como el Paro Nacional, pero sin articularse en una estrategia consecuente de tipo político. En 1986, la Asamblea de la Civilidad, agrupación de organizaciones sociales de sectores populares y, principalmente, de capas medias, buscó resolver el problema de la fragmentación partidaria en una convocatoria que culminó con la paralización nacional de actividades en Julio, como veremos más adelante, pero que tampoco se entroncaba en un diseño de transición que afectara la estabilidad del régimen. Parecía, así, terminar un ciclo, lo que obligaba a la oposición a enfrentar desde entonces el escenario al que se encaminaba el régimen en 1989, sin caer en los mitos en que se había entrampado hasta entonces. Volveremos sobre esto.

El tercer factor de transición que aparece bloqueado en el caso chileno es el elemento "externo", que se ubica por encima del régimen y oposición. Como hemos indicado, puede ser una institución o un actor que media entre ambos, una arena política que resuelve el conflicto de poder vía plebiscito o elecciones, o un hecho como muerte o guerra que lleva al colapso del régimen o a una de las otras fórmulas mencionadas. En Chile no se han dado condiciones de un evento desencadenante, tampoco ha existido una institución mediadora y no se ha creado una arena política donde la mayoría pueda expresarse contra el régimen e inferirle una derrota política. De ahí, como veremos luego, la importancia de 1989, por cuanto, manipulada o no, se abre la oportunidad de una confrontación política de la que se ha carecido hasta ahora.

Scanned with CamScanner

Vale la pena reflexionar sobre dos posibles instancias mediadoras entre régimen y oposición en el caso chileno, dejando de lado por el momento el tema del espacio o arena de confrontación. Una es la Iglesia y la otra la presión internacional.

En cuanto a la Iglesia, su papel frente al régimen militar ha sido doble. Por un lado, al proclamar y promover la defensa activa de los derechos humanos y denunciar su violación por parte del régimen, se convirtió en el único actor que, por su legitimidad nacional, se enfrentaba al actor militar estatal. Por otro lado, jugó un papel de espacio político alternativo, donde se constituían las organizaciones sociales y políticas a las que el régimen negaba su espacio propio en la política o en la sociedad. Pero ello se hacía sin la intervención de la Iglesia como actor opositor propiamente tal, por su propia naturaleza, y sin que ella se viera llamada a ejercer un papel propiamente mediador. En 1983, el Arzobispo de Santiago invitó al régimen y parte de la oposición a "dialogar", en una gestión sin mayores resultados positivos. En 1985, como hemos indicado, se promovió por parte de la Iglesia el Acuerdo Nacional. En el primer caso, se jugaba un papel estrictamente neutral entre régimen y oposición, de "lugar de encuentro". En el segundo caso, la Iglesia aparecía más bien promoviendo un consenso opositor, lo que obviamente reducía sus posibilidades futuras de mediación y explica en parte el drástico rechazo del gobierno a discutir en torno a tal documento. En ambas situaciones, la Iglesia se inhibía de jugar un rol activo de "propuesta" hacia ambas partes, que las forzara a un acuerdo de transición. En otras palabras, no jugaba un papel necesario de "mediación sesgada" hacia la democratización, lo que se explica en parte por percepciones equivocadas de la situación, por contradicciones internas y también por falta de presión en ese sentido de parte de las fuerzas políticas, quizás demasiado confiadas en sus

Scanned with CamScanner

propias capacidades de promover un cambio de régimen. En todo caso, queda abierto este rol potencial de la Iglesia, como veremos más adelante.

Respecto de la presión internacional, ya hemos señalado que ella es normalmente insuficiente para promover un cambio de régimen o transición si no se dan condiciones internas en ese sentido. Pero, en términos específicos del caso chileno, es evidente que las relaciones con los EE.UU. y el papel que este país juega, subordinadas siempre a las dinámicas internas, ocupan un lugar relevante.

El problema que cabe plantearse aquí es el de si existe un real interés en las esferas del gobierno norteamericano por hacer avanzar la democracia en un país, respetando su autonomía, o si este interés queda estrictamente supeditado a los cálculos respecto de la "amenaza comunista" y es ésta lo que gatilla sus acciones y presiones para que un país se mueva hacia un régimen democrático. De hecho, en el caso chileno, excepto durante el gobierno de Carter, que se concentró necesaria y positivamente en la esfera de los derechos humanos y en la contención de la violencia del régimen, sin que hubiera aún dinámica interna propia de cambio o transición, se puede decir que ha habido desde el golpe militar de 1973 apoyo directo o indirecto al régimen por parte del gobierno de los EE.UU.[8] La "diplomacia silenciosa" establecida por la administración Reagan así fue vista por Pinochet y fue acompañada por el apoyo ostentoso del Embajador norteamericano en Chile. Sólo en los últimos años la posición del gobierno estadounidense ha sido un poco más ambigua y portadora de un doble mensaje de legitimación y crítica. Por un lado, se ha aceptado el marco constitucional del 80 como "principio de una transición democrática"; se han mantenido los programas militares del tipo UNITAS; se apoya irrestrictamente el modelo económico-social; se hacen a menudo de-

Scanned with CamScanner

claraciones sobre el régimen militar como salvador ante la amenaza marxista; se piensa que es un mal menor ante la alternativa comunista; se rechaza toda participación comunista futura, con lo que se refuerza la posición más "dura" en el régimen. Por otro lado, se apoya el "Acuerdo Nacional para una Transición a la Plena Democracia"; se insinúa la necesidad de un diálogo entre gobierno y oposición; se piden pasos formales o leyes, que garanticen el avance a la democracia como son el reconocimiento de la libertad de prensa y el derecho de organización política; se critica abiertamente la conducta del gobierno militar por su respaldo o encubrimiento de los actos terroristas de los organismos de seguridad; se condicionan ciertos préstamos al mejoramiento de la situación de derechos humanos y libertades públicas (como el levantamiento del Estado de Sitio en 1985), aunque tales medidas puedan ser rápidamente revertidas. Así, el gobierno de Reagan ha buscado el mejoramiento de ciertas condiciones parciales en el seno del régimen militar chileno, lo que, a su vez, le permite ligitimar la acción norteamericana en otras regiones. No es que no se haga uso de la presión o influencia, ya lo hemos indicado, sólo que no se ejerce en la dirección de una democratización rápida y efectiva. De ahí el carácter ambiguo y contradictorio de esta política, pero que refuerza la proyección de la situación existente hasta 1989 al menos.

Bloqueo de una transición "por arriba", de una transición "por abajo" y de una transición "por factores externos" definen y explican hasta 1987 el retardo de un proceso de democratización en Chile.

Scanned with CamScanner

La transición posible

El año 1986 fue anunciado por muchos sectores de oposición como el "año decisivo". Lo que se quería significar era el término del régimen militar y el inicio efectivo de un proceso de transición democrática. Hemos sugerido algunos de los supuestos y diagnósticos que estaban detrás de este planteamiento. La paradoja al finalizar 1986 es que, en un sentido completamente diverso al esperado y anunciado, efectivamente se trató de un año decisivo: se deshicieron los mitos respecto de la transición democrática y el cambio de régimen y se clarificó el tipo de transición posible en Chile, quedando por resolverse sólo sus plazos y mecanismos concretos.

Estas definiciones no son fáciles de reconocer por los actores políticos involucrados, e incluso hay resistencia a ello, debido a las concepciones y discursos prevalecientes y a las sensibilidades colectivas en juego. Sin duda que subsisten visiones y diseños encontrados y, sobre todo, ambiguedades y confusiones. Pero, se han ido estableciendo cuáles son las probabilidades mayores de cómo van a desenvolverse las cosas. Y en política, a partir de la gran visión de lo que se quiere, hay que transformar la hipótesis de la probabilidad real de lo que se desea en diseño y compromiso efectivo de acción. En este sentido, uno de los problemas de la oposición en cuanto al término del régimen militar reside en esta dificultad, que se explica por mitos e ideologías, de transformar la hipótesis de probabilidad de término de la dictadura en una propuesta estratégica que permita desarrollar y potenciar tal hipótesis.

De este modo, por un lado, se mostró que la apuesta a la continuidad total por parte del régimen, es decir, a la aplicación completa y permanente del diseño establecido en la Constitución del 80, si bien puede realizarse hasta 1989, lo que discutiremos más adelante, es alta-

Scanned with CamScanner

mente improbable con posterioridad a esa fecha. La capacidad movilizadora y organizacional de vastos sectores de chilenos y su demanda de participación efectiva, la presión internacional, la postura crítica y ética de la Iglesia, etc., hacen impensable una democracia "restringida" o "autoritaria". Con plebiscito o sin plebiscito en 1989, la institucionalidad prevista para el futuro en la Constitución del 80 va a ser sobrepasada, ya sea porque se le modifique previamente, ya sea porque su implementación se hace imposible por ilegitimidad generalizada o por las contradicciones desestabilizadoras que implicaría su cumplimiento en el futuro. En otras palabras, en 1986 se hizo patente, entonces, que si el régimen militar puede continuar hasta 1989, no podrá proyectarse más allá de esa fecha a menos que sobrepase su propia institucionalidad, siendo éste uno de los escenarios que examinaremos luego.

Por otro lado, se mostró también la inviabilidad de estrategias de transición de tipo militar o insurreccional que buscaban el colapso o derrota militar del régimen; pero también de aquellas que, aunque planteándose en un terreno político, apuntaban a la idea de derrocamiento por "ingobernabilidad", sin dar respuesta al problema del vacío institucional. La estrategia de ingobernabilidad sin alternativa institucional, en el fondo reproductora y sucedánea del concepto de derrota militar o de colapso, puede llevar a la bunkerización y mantención del régimen y no a su término. En este sentido, los procesos de movilización social si no se ligan a una propuesta de cambio institucional de tipo consensual en el amplio conjunto de la oposición, sin exclusiones que favorezcan otro tipo de estrategia, pueden ser muy importantes en la reconstitución de las organizaciones sociales, en la afirmación de identidades colectivas, e inclusive en provocar transformaciones internas en el régimen militar; pero son insuficientes para provocar su término e incluso pueden

Scanned with CamScanner

ser revertidos por la represión institucional y física.

Ello significa que la transición a la democracia en Chile, como todas las transiciones de este tipo, se hará a partir de la institucionalidad del régimen para transformarla. Más precisamente, ella girará inevitablemente en torno al cambio del marco institucional impuesto en 1980. Más precisamente aún, que ella se desencadenará en relación al plebiscito de 1989, establecido para reproducir el régimen o designar a Pinochet, o en relación a un cambio de las normas para permitir elecciones competitivas. Como en toda dictadura donde no hay derrota militar o colapso, su término se hace **desde** la institucionalidad que ella impuso y **contra** ella. No hay aquí transición a la democracia con continuidad institucional, pero tampoco la hay con vacío institucional. Discutiremos más adelante los escenarios posibles. Si esto es así, cabe, entonces, reformular el concepto de derrota política del régimen, en este caso de los titulares o detentadores del poder. No hay otra derrota política que el cambio del marco institucional de 1980: en esto consiste y a esto debe aspirar la oposición, lo que equivale estrictamente al desencadenamiento efectivo de un proceso de transición.

Así, la transición a la democracia en Chile será un proceso que en forma específica y original combinará ineludiblemente los componentes básicos, a lo que nos hemos referido en el primer capítulo, de todas aquellas transiciones en las que no hay colapso, derrocamiento o vacío institucional, pero tampoco es posible la continuidad institucional.

Una descomposición ambigua

El primero es el proceso de descomposición y erosión de los apoyos del régimen, que deja aislado al núcleo en el poder, en el caso chileno formado por Pinochet y las

Scanned with CamScanner

FF.AA. Este ha sido un proceso lento y desigual.

Por un lado, lo que podría denominarse la "clase capitalista", o el empresariado, permanece confinada en una conciencia corporativa y también traumática respecto del pasado democrático, limitándose a críticas parciales a la política económica del régimen militar pero nunca cuestionando la vigencia de éste en cuanto tal. En esto, la clase capitalista chilena confirma su enorme debilidad política y hegemónica y su incapacidad de plantear proyectos que no sean meramente adaptativos o defensivos de sus posiciones. Este sector, en su rearticulación después de la crisis del modelo económico a comienzos de los 80, mostró conformismo respecto del régimen y mantuvo su desconfianza en cuanto a un cambio político, sin inquietarle los temas de los derechos humanos y del futuro democrático de Chile. Pese a ello, y a constituir un apoyo tácito o explícito al régimen militar, la clase capitalista, por sus mismos rasgos corporativos y adaptativos, puede perfectamente adecuarse a un régimen democrático futuro y no conspirar contra su estabilidad. Lo que sí es claro es que no podrá contarse con ella como elemento desestabilizador del régimen militar o como motor de una transición.

Por otro lado, en cuanto a la Derecha política, la situación es más compleja. Como hemos insinuado, se ha creado una división entre quienes aspiran a ser herederos del régimen y quienes quieren formar parte integrante del campo democrático negociando ahí una posición de mayor poder frente a los sectores de oposición y asegurando la exclusión de los núcleos mayoritarios de la Izquierda. Esto es lo que se expresaba en la división y antagonismo entre la UDI (Unión Demócrata Independiente), el Frente del Trabajo y grupos nacionalistas, por un lado, y el Partido Nacional, la Derecha Republicana, el Partido Liberal, por el otro; ocupando la Unión Nacional una posición ambigua entre ambos ejes. En 1987, la reagru-

Scanned with CamScanner

pación de varios de estos sectores en el Partido Renovación Nacional, que intenta convertirse en el gran partido de Derecha, traslada esta división al interior del nuevo partido, dejando aislado al Partido Nacional en su intento de representar una derecha democrática.

El resultado de todo esto, desde la perspectiva que lo analizamos, es que, pese a la existencia de importantes sectores democráticos aún no se constituye una alternativa consistente de derecha democrática social y política, indispensable para este tipo de transiciones. Lo que no quita que haya habido importante erosión en el apoyo civil a Pinochet, que se expresa en plano más político a través de la demanda de sustitución del mecanismo de sucesión consagrada en la Constitución del 80 (el plebiscito) por elecciones competitivas, o en la sugerencia de un candidato distinto a Pinochet en el caso del plebiscito. En el plano social, todas las encuestas muestran que el régimen no es apoyado por más de un 15 a 20% de la población y que el prestigio de Pinochet es el más bajo de todos los gobernantes que ha tenido Chile.[9]

En este primer componente de una transición, cual es la descomposición del Régimen o la erosión de sus apoyos, es muy importante lo que ocurra con las FF.AA. y con la influencia externa, especialmente norteamericana. A esto último nos referiremos más adelante. Respecto de las FF.AA., a partir de la paralización nacional de actividades en julio de 1986, convocada por la Asamblea de la Civilidad, Pinochet intentó forzarlas hacia la decisión de apoyarlo en 1989 para su mantención en el poder. La respuesta indirecta, pues no podía ser de otra manera, fue clara: hasta 1989 Pinochet cuenta con el apoyo irrestricto de las FF.AA., pues hay un mandato constitucional; lo que ocurra en 1989 es un problema de opción política y las FF.AA. no han tomado aún

Scanned with CamScanner

la única decisión política a la que podrán acceder desde que se instauró el régimen militar personalizado. Tres consecuencias pueden extraerse de ello. En primer lugar, que no habrá una separación entre Pinochet y las FF.AA. antes de 1989, por cuanto esto significaría para éstas renunciar a la institucionalidad política que ellas mismas se han dado, corriendo el riesgo de dividirse entre ellas por cuestión de pocos meses. En otras palabras, sólo si Pinochet diera muestras de salirse de su propia Constitución para asegurar su mantención en el poder (hipótesis del auto golpe), las FF.AA. podrían separarse de él. En segundo lugar, y aquí se destruye otro de los mitos de la oposición, si se piensa en alguna negociación antes del 89, ella tendría que ser necesariamente con Pinochet incluido, y así no cabe hacerse ilusión de que pueda ser con las FF.AA. contra Pinochet. En tercer lugar, que hay un espacio de incertidumbre política en las FF.AA. respecto del 89. Lo ilustra el hecho que después del atentado contra Pinochet, en septiembre 1986, sólo se le concedió el Estado de Sitio que reclamaba desde varios meses antes, y no una promesa de apoyo para después del 89, pero sobre todo, las variadas declaraciones de los Comandantes en Jefe, excluido el Ejercito, en el sentido que no hay decisión sobre un candidato para el plebiscito, que éste podría ser civil, o que podría sustituirse el plebiscito por elecciones dentro del marco de la Constitución del 80. Sólo el Ejército ha adherido, a través de algunos generales, en forma irrestricta a la doble lógica de continuidad del régimen y continuidad de Pinochet. Si se profundiza la ruptura de esta doble lógica en las otras ramas de las Fuerzas Armadas, el intento de imponérsela por parte de Pinochet puede tener costos altísimos, y puede generar una situación para ser aprovechada por la oposición para desencadenar una transición. Así, el plazo puesto por la dictadura, si bien juega a su favor hasta un cierto momento, se le

Scanned with CamScanner

vuelve en contra al cumplirse.

La movilización social necesaria

Hemos señalado ya que un segundo componente de los procesos de término de dictaduras y de transición democrática es la movilización y presión de la sociedad, de la oposición social y política. No existe este tipo de transición sin amplia y fuerte movilización social, y la historia así lo muestra. Pero ella está indisolublemente ligada a los otros componentes y tampoco se trata de cualquier tipo de movilización social.

Para que las movilizaciones sociales sean efectivas, en cuanto desencadenantes o refuerzos de un proceso de término de régimen militar y de transición democrática, deben cumplir una serie de requisitos en cuanto a convocatoria y amplitud, pero, sobre todo, deben estar insertas en un diseño o propuesta de cómo se quiere que sea la transición, es decir, formar parte de una estrategia política que se articula con los otros componentes de la transición y, especialmente si no hay hipótesis de derrocamiento, con la "negociación de salida". En este sentido la movilización y presión social en Chile han sido, si bien significativas e importantes tanto para la expresión de una voluntad masiva opositora y de cambio, como para reorganizar la sociedad y los movimientos sociales, y, sobre todo, para obtener conquistas, espacios y hasta ciertas transformaciones del régimen; han sido absolutamente insuficientes desde una perspectiva de termino del régimen y de transición democrática. Tanto el largo ciclo de las Protestas que, pese a haber despertado y reorganizado la sociedad, terminó desgastado, como las movilizaciones de 1986, acusaron el mismo efecto: no se inser-

Scanned with CamScanner

taron en un diseño y propuesta de cambio y transición coherente y unitario de las fuerzas políticas que las dirigían. Cuando ello sucede, la bunkerización del Régimen, su recomposición y endurecimiento, así como la reversión del proceso movilizador, son inevitables. Es evidente que la constitución de la Asamblea de la Civilidad en 1986 fue un paso fundamental en el intento de cohesionar el "activo político social" contra el Régimen, y de extender la convocatoria de la movilización hacia sectores medios y populares organizados. Pero también es claro que se trató de resolver a través de ella un problema no resuelto a nivel de las organizaciones políticas, afectadas por diseños políticos no bien definidos y por exclusiones y vetos. El reflejo de los problemas político partidarios en la Asamblea le impidió a ésta la autonomía necesaria, a la vez que, por su propia naturaleza de federación de organizaciones sociales, no podía definir un diseño o estrategia política del que carecía la oposición partidaria en su conjunto. Ello sin olvidar la durísima represión desatada en su contra, que afectó a todos sus dirigentes. El paro o paralización de actividades convocado por la Asamblea de la Civilidad, y que fue el punto más alto de la movilización en 1986, presenta los mismos problemas. Sin duda que desde el punto de vista de su convocatoria, disciplina, organización, expresión masiva de rechazo al régimen, fue un éxito. Pero también es cierto que, trágicamente, su mayor impacto político descansó en la violenta represión desatada. Es decir, el paro fue necesario y significativo, pero no quedó claro en qué diseño de transición se insertaba, ¿se trataba de repetir en otro nivel el ciclo de las protestas?; ¿o se pensaba que una serie sucesiva de paros crearían mecánicamente una situación de desplome del régimen?; ¿en términos de qué propuesta precisa se movilizaría permanentemente a la gente?

Carente la movilización social de propuestas políticas

Scanned with CamScanner

unitarias de transición, que no fueran meras expresiones genéricas de descontento y de deseos de cambio, adquiere diversas formas, en la medida que manifiesta distintas sensibilidades, intereses y percepciones de lo posible, que tienden a enfrentarse y aparecen como contradictorias entre sí; las movilizaciones reinvindicativas tienden a separarse de las más políticas porque no ven en éstas la utilidad para satisfacer demandas; las más políticas tienden a reducirse a los núcleos activados y a hacerse cada vez más simbólicas; las movilizaciones más "heroicas", ligadas a manifestaciones agitativas como las luchas callejeras o a formas más violentas como las barricadas, no sólo recomponen la capacidad represiva del régimen, sino que aislan progresivamente a los sectores radicalizados que las promueven. El caso extremo de la movilización de tipo armado o militar, que nada tiene que ver con una estrategia política aunque se le haga ver como parte de "todas las formas de lucha", obtiene un resultado aún peor: termina por provocar las peores formas de represión y el cierre institucional de los espacios políticos por parte del régimen, lo que a su vez lleva al total reflujo e inmovilismo de la oposición. Tal fue el resultado después del descubrimiento de arsenales de armas y del atentado contra Pinochet, en Agosto y Septiembre de 1986 respectivamente, en los que estaba comprometido el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que provocaron un nuevo Estado de Sitio.

Dicho en otras palabras, todo proceso de movilización social que no esté guiado por un diseño y una propuesta política únicos del conjunto de la oposición sin exclusiones, podrá cohesionar grupos, obtener logros y avances, pero será estéril desde el punto de vista de provocar el término del régimen militar y una transición democrática y, lo más probable, terminará desgastado, disminuido en su poder de convocatoria y a merced de la re-

Scanned with CamScanner

presión física e institucional del régimen.

Ello significa que, lejos de dar por cancelada la movilización social, hay que reformularla profundamente para ubicarla en su papel de uno de los componentes fundamentales de un proceso de transición. En este sentido, la movilización por "elecciones libres" o por la inscripción en los registros electorales, impulsadas por sectores mayoritarios de la oposición desde fines de 1986, apuntan esta reformulación y a metas estrictamente políticas que tienen que ver con el cómo se desencadena la transición o termina el régimen militar, pese a las insuficiencias a que nos referiremos más adelante. Por otro lado, más allá de la movilización estrictamente política que hemos analizado, cabe también insistir en que las movilizaciones reivindicativas centradas en conquistas sectoriales y que resuelven intereses y problemas cotidianos, han sido extremadamente débiles, excepto en el movimiento estudiantil, donde pese al desgaste agitativo ha obtenido resultados importantes (como el cambio de algunas autoridades). Y, es muy difícil, excepto circunstancias y momentos precisos, que pueda mantenerse una movilización política sostenida si en la sociedad no se dan luchas reivindicativas ligadas al mejoramiento de condiciones de vida. Sin embargo, quizás el gran error de la convocatoria de la Asamblea de la Civilidad, y más específicamente de la movilización en torno a "la Demanda de Chile",[10] es haber confundido ambos tipos de movilizaciones, política y reivindicativa, subordinando una a otra. Movilización expresiva, movilización reivindicativa y movilización política son todas ellas indispensables pero diferentes una de otra. Es un error pensar que se resuelve el problema de la movilización reivindicativa con la mera agregación de demandas sectoriales, por cuanto grandes sectores no se movilizan por las demandas de otros. Tampoco esta agregación resuelve el problema de la demanda política

Scanned with CamScanner

por cuanto ésta exige metas propiamente políticas, que no se confunden con reivindicaciones sectoriales por sumadas o globalizadas que estén. Finalmente, tampoco la movilización política se resuelve con una meta general sin un diseño de cómo obtenerla.

La negociación que no existe

Pero no basta un puro proceso de descomposición interna del régimen ni tampoco la presión y movilización sociales para terminar con un régimen militar, máxime cuando se trata de Fuerzas Armadas relativamente cohesionadas en torno a una determinada institucionalidad que prevée plazos y mecanismos para su retiro del poder político directo. Si no hay derrota militar o colapso del régimen militar, entonces, no hay transición democrática sin negociación entre los titulares del poder y la oposición política. Que esta negociación sea mediada por un tercer actor o no, es otro asunto. Y, entonces, vale la pena despejar algunos problemas que han estado presentes en la conciencia y comportamiento de los actores políticos en la situación chilena.

En primer lugar, cabe recordar que la negociación de transición de que hablamos es entre los titulares del poder y el conjunto de la oposición. Esto significa, reconociendo que el principal obstáculo a ello es la renuencia obstinada de Pinochet, que si hay negociación de transición antes de 1989 ésta tendrá que ser entre Pinochet y las Fuerzas Armadas, por un lado, y la representación de toda la oposición sin exclusiones (otra cosa es quiénes "hablen" directamente), por el otro. Ya hemos señalado que es una ilusión pensar en una negociación con las Fuerzas Armadas sin o contra Pinochet antes del 89,

Scanned with CamScanner

como es también una utopía pensar que la negociación va a poder dejar afuera de un acuerdo a sectores que tienen una muy fuerte capacidad movilizadora para forzar una negociación, como lo son importantes grupos socialistas y el Partido Comunista. Ahora bien, si por razones éticas y políticas bien fundadas, no se quiere negociar con Pinochet (la paradoja a este respecto es que una de las negociaciones más significativas con el gobierno por parte de la oposición la hizo un sector considerado más "duro" e "inaceptable", precisamente el PC, con ocasión del canje de su Secretario General por el disidente Bukovski) o si se piensa, también con motivos fundados, que Pinochet no negociará en ningún caso, entonces, hay que aceptar que no habrá transición hasta 1989. Porque no hay salida que sea sin negociación impuesta, o forzada, pero negociación al fin.

En segundo lugar, si se quiere forzar una situación de negociación hay que clarificar en torno a qué se negocia, y hay que volver a repetir que en el caso chileno la única negociación posible es en torno a cómo se modifica el marco institucional impuesto por el régimen, es decir, cómo se modifica la Constitución para permitir elecciones democráticas en plazos determinados y cómo podrá elaborarse un marco constitucional democrático. Llama la atención que, como hemos dicho, hasta 1986 la oposición como conjunto no haya propuesto unitariamente al país y al régimen un itinerario con plazos y mecanismos alternativos al propuesto por éste. Es obvio que el concepto negociación queda sin contenido y la movilización social sin metas. Así, en 1987 la oposición tuvo que enfrentarse a las propuestas institucionales del régimen, como las leyes de registros electorales y de partidos políticos, sin una visión estratégica, coherente y consensual al respecto, variando las respuestas de partido en partido, lo que dificultó una movilización general. Como debía ocurrir,

Scanned with CamScanner

poco a poco se fue produciendo un consenso puntual respecto de la inscripción en los registros electorales, con pocas excepciones; no así en la ley de partidos.[11] Pero fue un consenso tardío, sin un diseño global claro que permitiera a la oposición tomar la iniciativa. En cambio, se insiste a menudo en temas del futuro que dicen relación con los modelos económicos y sociales, que sólo empantanan un acuerdo, el que debiera excluir todo contenido que no sea el cómo se resuelve el problema de quién y cómo gobierna la sociedad. Las transiciones se bloquean o se alargan cuando cada cual quiere, en su actual posición de poder, imponer pactos futuros que no se refieren sólo a cuándo y cómo termina el régimen militar y a qué forma de gobierno (no qué gobierno concreto) lo reemplazará. Todos los otros problemas, que son básicos para el país, corresponden a la fase de consolidación una vez obtenido el régimen democrático. La ventaja comparativa actual de la Derecha la lleva a incluir estos temas como manera de garantizar sus intereses a futuro. Por otro lado, la excesiva ideologización de la oposición la hace también enredarse en temas que no pueden ser resueltos ahora o fuera de un marco democrático. Es evidente que cuando hablamos de régimen democrático incluimos la vigencia de los derechos humanos y un sistema institucional que los garantice. En este sentido, hay un punto que debe formar parte de una negociación de transición, cual es el tema de la justicia respecto a las violaciones ocurridas bajo el régimen militar. La actitud a este respecto del Poder Judicial chileno muestra que no habrá justicia en esta materia durante el régimen militar y que, por lo tanto, esto deberá ser aclarado, al menos en principio, durante la transición, aunque resuelto bajo el régimen democrático. Las transiciones no resuelven este punto pero lo dejan clarificado para el régimen futuro.

Es evidente que la ausencia de una propuesta institu-

Scanned with CamScanner

cional alternativa al itinerario y mecanismos de la Constitución es el gran déficit de la oposición. Quizás ese sea el único reproche justo a una clase política cuya oposición a una dictadura ha sido un largo y costoso aprendizaje, dada la falta de experiencia histórica a este respecto. En vez de un planteamiento claro y coherente de transición, con una alternativa precisa al diseño propuesto por la Constitución de aquí al 89 y con un modo de resolver la contradicción entre estos diseños, a los que se adscriban y sumen todos los sectores que concuerden, independientemente de sus ideologías, llama la atención la importancia concedida por la oposición a la cuestión orgánica, a los bloques políticos o los "referentes", paradójicamente desconocidos o sin importancia para gran parte de la población. Así, se parte constituyendo un bloque partidario que excluye a otros grupos, y que se transforma más en un espacio de discusión y de negociación para entrar, salir, reducir o ampliarse que en un canalizador de una alternativa política nacional. En este sentido, podrá argumentarse a favor o en contra de la Alianza Democrática, el MDP, el Acuerdo Nacional, el Grupo de los 13 (pacto "Bases de Sustentación"), o la Izquierda Unida, y señalar como un avance el que tal o cual "referente" se amplíe o logre algún acuerdo en torno a un documento genérico; pero todo ello mantiene el sello de las mutuas exclusiones, de las pequeñas ventajas de espacios o tribunas, de la disputa por liderazgos y protagonismos que no pueden tener hoy la validación de la representación. Sin duda que hay que reconocer en esto un proceso de aprendizaje; pero es necesario también señalar el déficit.

Quizás los dos nudos ciegos de la oposición están intimamente relacionados. Por un lado, la ausencia de una estrategia política unitaria y coherente y de una propuesta alternativa al diseño institucional del régimen, y su remplazo por consignas o estrategias parciales que se convier-

Scanned with CamScanner

ten en las grandes panaceas (movilización, ingobernabilidad, paralización, elecciones libres, etc.). Por otro lado, la exclusión de vastos sectores de Izquierda, lo que, junto con restar capacidad movilizadora indispensable para cualquier negociación con el régimen militar, refuerza en algunos de esos sectores, especialmente el PC, las tendencias insurreccionales y aislacionistas. Es bueno insistir en que si se tiene claridad que en un futuro régimen democrático no se podrá prescindir de la presencia de la izquierda marxista, no tiene ningún sentido excluirla de los acuerdos para un proceso de transición: la experiencia histórica muestra que no hay veto militar posible a la inclusión de la izquierda marxista y del PC si hay acuerdo de la clase política en su inclusión. Por lo tanto, la responsabilidad de las exclusiones recae en ésta. Y es evidente que esto afecta no sólo la capacidad movilizadora y la legitimidad de la oposición en vastas capas populares, sino también la capacidad de propuesta al país de una alternativa de transición, por cuanto toda fórmula o propuesta elaborada por uno de los bloques o referentes, obliga inmediatamente al otro a tomar distancias y a hacer su propia propuesta para preservar su identidad política. Es decir, o hay propuesta unitaria de transición alternativa a la del régimen elaborada y promovida por toda la oposición, incluido el PC, con la cual encarar la movilización y la negociación, o hay una oposición sin alternativa dedicada a la mera adaptación a las coyunturas que le presenta el régimen.

Sin duda que en la conciencia de algunos actores y en el pretexto de varios otros, el tema de la exclusión de la izquierda marxista-leninista y del PC está vinculado al problema de la violencia, de la estrategia insurreccional o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el MIR. De nuevo es necesario distinguir. En este caso, entre la violencia que surge como respuesta desesperada, sobre todo en sectores jóvenes avasallados por el régimen, la que debe ser

Scanned with CamScanner

canalizada hacia formas diversas de participación y expresión constructiva, y no simplemente condenada sin comprender sus raíces; y la violencia que forma parte de una estrategia de vía armada o insurreccional. Esta última le ha creado enormes problemas a la oposición y provocó su reflujo y la consolidación parcial del régimen durante 1986, pero no puede ser tratada militarmente, porque esto significaría aceptar la liquidación física de sus militantes. Tratarla políticamente significa un tipo de negociación semejante al utilizado con la guerrilla en otros contextos y ello debería estar incluido en un acuerdo de pacificación propio de un proceso de transición. Pero, para la oposición, un tratamiento político de la violencia lleva a evitar toda exclusión de grupos políticos y de sensibilidades que puedan estar cercanas a estos movimientos, es decir, implica aislar la violencia y los grupos armados, incorporando los sectores políticos marginados hasta ahora de los acuerdos opositores, de modo de estimular dentro de ellos a los núcleos más políticos y democráticos y dejando sin margen de maniobra a los más proclives a formas armadas. Ello es particularmente importante en el caso del Partido Comunista.

En síntesis, el país necesita una fórmula institucional alternativa, un itinerario a la democracia distinto a lo establecido en la Constitución del 80 y una propuesta sobre cómo resolver esta contradicción.[12] Ella no puede ser excluyente de ningún sector de oposición, y debe permitir encauzar la movilización y ser el eje de una posible negociación. Que esta fórmula sea elaborada por el conjunto de la oposición o, si ello no es posible, por algún actor por encima del régimen y de la oposición, como la Iglesia, dependerá de la claridad y generosidad de los diversos actores políticos. La paradoja de todo esto es que, con alta probabilidad, será la institucionalidad del régimen, rechazada por la oposición, la que proveerá la oportunidad e, incluso, forzará a ésta a definirse sin es-

capatoria posible en torno a una propuesta institucional de salida. Esa es la importancia de la coyuntura de 1989 y, más específicamente, del plebiscito consagrado por la Constitución del 80. Frente a ello, la oposición estará obligada o a presentar una alternativa viable de cambio constitucional, o a organizarse para derrotar al candidato oficial, o a boycotear el plebiscito; pero en este último caso deberá presentar alguna otra alternativa de término del régimen militar. Mientras más tarde ocurra una definición consensual al respecto, más iniciativa se permite al proyecto de continuidad del régimen, más la oposición dispersa sus fuerzas y menos tiempo tiene de prepararse para enfrentar la situación en las mejores condiciones.

En este sentido, debe reconocerse que dos iniciativas que circulan en sectores de oposición desde mediados de 1986, pero que se han materializado en 1987, apuntan en la dirección adecuada para este tipo de transiciones, aún cuando puedan considerarse insuficientes y aún cuando, al ser promovidas originalmente por un bloque o sector particular, la aceptación de los otros ha sido tardía, con reservas y, en algunos casos, simplemente las han rechazado. Se trata de la campaña por "elecciones libres", y del llamado a inscribirse en los registros electorales, de acuerdo a la ley dictada por el gobierno y prevista por la Constitución. La idea de "elecciones libres" tiene el mérito de mostrar claramente de qué tipo de transición se habla y de expresar la aspiración de término de la dictadura en un proceso que es a la vez medio para la transición y elemento definitorio de la democracia. A su vez, la inscripción en registros electorales reconoce el carácter institucional de esta transición y permite una movilización popular propiamente política y deja preparada a la oposición para cualquier confrontación político-institucional con el régimen, sea ésta de tipo plebiscitaria o elecciones competitivas.

Scanned with CamScanner

Sin embargo, la campaña por "elecciones libres" aparece hasta mediados de 1987 más como la expresión de una aspiración que como un camino con pasos precisos a recorrer. Es decir, no está vinculada a la propuesta de cómo llegar a ellas, de un escenario institucional alternativo al de Pinochet; no propone, por lo tanto, salvo en lo que respecta a la campaña por la inscripción en los registros electorales, un campo de acción, negociación y movilización. La propuesta, por ejemplo, de un cambio constitucional, ha sido esbozada por algunos sectores de la oposición, pero no ha sido elaborada como la fórmula en torno a la cual toda la oposición realice conjuntamente acciones de movilización y presión. En estas condiciones, la inscripción en los registros electorales aparece más vinculada en la práctica a la eventualidad de un voto contra Pinochet en el plebiscito unipersonal de 1989 que a la obtención de elecciones libres; pero ello tampoco es formulado explícitamente.

Así, estas iniciativas de campañas, que han ido haciéndose claramente mayoritarias en la oposición y que han dejado a los sectores más radicalizados sin propuestas, que no sean la repetición del ciclo de Protestas, deben ser completadas con un marco estratégico que defina para la oposición el escenario e itinerario de transición deseado y que se oponga al que plantea el régimen militar. Ello es una condición indispensable, donde importa menos cuál sea en concreto la propuesta de transición por parte de la oposición, que el hecho fundamental que ella sea hecha por su conjunto sin exclusiones; es decir, no podrá basarse sino en un mínimo común denominador. Y por ello, las discusiones en torno a candidatos o programas, para elecciones que aún no existen, sólo enredan y entraban un consenso porque estimulan competencias y vetos mutuos sobre realidades puramente hipotéticas. Del mismo modo, la discusión sobre el uso de la institucionalidad del régimen no puede

Scanned with CamScanner

girar, como en el caso de la ley de partidos políticos, alrededor del problema de la legitimación o no del régimen: lo que importa es que la decisión de la oposición sobre si participa o no en esa legalidad, cualquiera sea esa decisión, se tome por toda ella sin exclusiones.

Mediaciones y presiones

El cuarto componente de todo proceso de transición es la intervención, en grados diversos, de actores que se ubican por encima del régimen y oposición y que presionan hacia el establecimiento de un régimen democrático. Ello es especialmente importante en situaciones de bunkerización del régimen militar, transiciones bloqueadas o la polarización sin fórmulas institucionales de resolución del conflicto entre régimen y oposición.

Hemos dicho que, en el caso chileno, dos elementos se ubican en este plano. Por un lado, la influencia y presión externas, especialmente la de los Estados Unidos. Por otro lado, la Iglesia.

Respecto de la influencia o presión norteamericana, más allá de la discusión sobre su legitimidad, el hecho fundamental de 1986 es el viraje de la administración Reagan, no exento de ambigüedades y de apoyo entusiasta al modelo económico-social del régimen, respecto de un cambio político en Chile. Se trata de presionar al régimen militar chileno para preparar gradualmente, en materia de derechos humanos y de espacios y mecanismos político-institucionales, un tipo de democracia "restringida" con exclusión de la izquierda marxista,

Scanned with CamScanner

desde 1989 y no antes. Esta democracia "restringida" no difiere fundamentalmente del régimen político previsto por la Constitución del 80, pero con elecciones abiertas que permitan evitar la mantención de Pinochet en el poder. En todo caso, el que para la política norteamericana se separen la lógica del régimen de la lógica de la dictadura personal, independientemente de si esa política aspira o no a que se establezca una democracia verdadera, desestabiliza los proyectos de mera continuidad y juega a favor de las posibilidades de transición efectiva.

Más allá del papel que la presión internacional y los EE.UU. pueden jugar en términos de la defensa y promoción de derechos humanos, y siempre dentro del marco de no intervención y respeto al principio de autodeterminación, hay tres campos en que pueden facilitar las dinámicas internas consensuales de transición en Chile. Por un lado, el apoyo decidido, en las instancias multilaterales y en las relaciones bilaterales con Chile, a las fórmulas o propuestas de transición que provengan de la oposición. Por otro lado, evitar tanto la vinculación del proceso de cambio de régimen con el conflicto de bloques mundiales, como la distinción entre "oposición democrática" y "oposición no democrática", que busca aislar a sectores de Izquierda, especialmente al Partido Comunista, y reproduce la fragmentación opositora. Finalmente, el reforzamiento de las instituciones de tipo mediador, como las Iglesias, y el aislamiento internacional de las instituciones represivas o de las que mantienen el statu-quo autoritario.

Respecto de la Iglesia Católica, ya hemos indicado el papel que jugó en la resistencia a la represión y su denuncia y en la reconstitución de organizaciones sociales y políticas, así como en la articulación de un parcial consenso opositor. Más allá de esto, dado el déficit indicado de una propuesta unitaria de la oposición, en la ausencia

Scanned with CamScanner

también de un proyecto de transición "desde arriba", es dable pensar que la Iglesia tiene una responsabilidad especial que la pudiera llevar a plantear una fórmula de transición y forzar a los actores políticos a pronunciarse frente a ella. Este papel de mediación, al cual ha sido renuente hasta ahora, puede presentarse con mayor probabilidad frente a la coyuntura del 89, ya sea poniendo condiciones para un plebiscito honesto e indicando las consecuencias si no se cumplen, ya sea proponiendo una alternativa a él.

Los escenarios en juego

De lo dicho hasta aquí se desprende que nuestra hipótesis de probabilidad es que, por un lado, no habrá cambio de régimen hasta lo que hemos denominado "coyuntura del 89", definida por los plazos establecidos en la Constitución de 1980; por otro lado, que la institucionalidad consagrada en esta Constitución será totalmente superada o transformada, progresiva o radicalmente, ya sea para desencadenar un proceso de transición, ya sea por un intento de "autogolpe" a través del cual Pinochet buscará recrear la situación de 1973; finalmente, que en torno al plebiscito de 1989, cualquiera sea su resultado,o de un cambio constitucional respecto de él, se desencadena una transición a la democracia.

Es evidente que con el respaldo irrestricto de las FF.AA. hasta 1989, Pinochet intentará cumplir con el itinerario previsto, adecuando los mecanismos institucionales establecidos en las llamadas "Leyes políticas" a las di-

Scanned with CamScanner

versas coyunturas y tratando de asegurar las condiciones que le permitan su redesignación en 1989, para lo cual desde mediados de 1986 ha iniciado una real campaña usando todos los recursos del Estado. Para Pinochet, el problema hasta 1989 es una suma de cortos plazos donde se trata de ganar tiempo para acercarse a esa fecha. Su ideal es crear una situación que le permita recurrir al estado de sitio permanente o su equivalente, esto es, evitar la movilización de la sociedad de modo de dejar el juego político opositor reducido al fenómeno llamado de "cúpulas políticas". El problema para Pinochet es lo que ocurra en 1989, tanto porque se abre la oportunidad de bifurcación o separación de la lógica del régimen militar y la lógica de la dictadura personal, lo que en el caso chileno es definitivamente desestabilizador del régimen mismo; como porque el método institucional elegido para mantenerse en el poder, el plebiscito unipersonal, mostrará ese año sus contradicciones. Como hemos indicado, por primera vez las Fuerzas Armadas tendrán que tomar, para designar un candidato, una decisión política relativamente autónoma, lo que profundizará divisiones latentes.

Aparece como obvio que, en condiciones normales de un número alto de electores, propaganda libre, control riguroso del proceso electoral, sus escrutinios y resultados, vigencia de libertades públicas, Pinochet o cualquier candidato propuesto por la Junta de Gobierno no cuenta con más del 20% del apoyo, según todas las encuestas serias, y por lo tanto será derrotado. En este caso, el escenario más probable es un conjunto inmediato de negociaciones y movilizaciones que harán imposible mantener el itinerario y los mecanismos previstos por la Constitución. La posibilidad de un candidato de consenso entre régimen y oposición sólo tendría una viabilidad si previamente fuera acordado que su tarea al ser elegido es asegurar el cam-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

bio rápido de la Constitución y llamar a elecciones democráticas, lo que no tiene respaldo en el gobierno ni en las Fuerzas Armadas, por lo que su probabilidad es muy baja.

Si no se dieran cualquiera de las condiciones de un plebiscito honesto, el "triunfo" eventual de Pinochet, como el de Marcos en Filipinas, no sería reconocido ni nacional ni internacionalmente y se crearía un problema de legitimidad, en las Fuerzas Armadas y en el país, que llevaría ya sea a aquellas a separarse de Pinochet creando un escenario semejante al mencionado en el caso que Pinochet sea derrotado en el plebiscito, ya sea a Pinochet a intentar una salida extra institucional, creando un escenario como el que veremos más adelante y de salida incierta.

En el caso altamente improbable que Pinochet triunfara en el plebiscito honestamente y, con igual escasa probabilidad, ello fuera reconocido nacional e internacionalmente, la propia institucionalidad consagrada por la Constitución del 80 genera espacios políticos que si no son aceptados por la oposición crean un problema de legitimidad que obligan a reformarla, y que, si son aceptados, hacen imposible la tarea de Pinochet como gobernante, lo que llevaría a una salida extra institucional o al cambio del marco constitucional.

En todos los casos indicados, la continuidad del régimen y de Pinochet después de 1989, según su propio proyecto de institucionalización, es de muy escasa probabilidad, y un escenario de transición, con formas y mecanismos difíciles de prever, aparece como inevitable. Estos cálculos pueden llevar a que desde el régimen, o producto de las presiones opositoras e internacionales o de la Iglesia, se quiera evitar el plebiscito y se intente un cambio constitucional para realizar elecciones competitivas con resguardos para el régimen. En este caso, nuevamente estamos frente a procesos de negociación, movili-

zación y presiones que desencadenan una transición o que llevan a Pinochet a la hipótesis del "autogolpe". Lo mismo ocurre si se adelantan los plazos previstos para 1989: se remite la situación a alguno de los escenarios descritos.

Pareciera, así, que la mantención de Pinochet después de 1989 y la continuidad de un régimen militar, ya no el proyecto de la Constitución del 80, están ligadas a la capacidad de sobrepasar su propia institucionalidad, es decir, a un cierto tipo de "autogolpe" que retome el principio de legitimidad esgrimido en 1973, pero en condiciones nacionales e internacionales totalmente distintas. Ello implicaría la involucración política de las FF.AA y, por lo tanto, la definitiva politización de sus nombramientos internos y promociones, de modo de garantizar una lealtad total a Pinochet. El riesgo de división de las FF.AA. y la necesidad de preservar su integridad institucional las podrían llevar a separarse definitivamente de aquél. En todo caso, esta situación podría acercarnos a un escenario distinto tanto de la continuidad institucional del régimen como de un proceso de transición democrática: una inestabilidad general caracterizada por la inviabilidad de cualquier proyecto político, donde un ejército "pretorianizado" por Pinochet desata una represión violenta y permanente; por otro lado, una lucha armada contra él; una situación de empate catastrófico, de resultado final incierto, en que el país se desintegra y se hace ingobernable. Las características organizacionales de las FF.AA., la situación internacional, la relativa solidez de las fuerzas políticas y la presencia de instituciones de efectiva autoridad moral, hacen que este escenario sea globalmente improbable. Pero no puede dejar de reconocerse que es posible que elementos parciales de él se desarrollen, como lo prueban incluso algunos fenómenos ocurridos en 1986 y 1987, entre los que se cuentan algunas declaraciones de generales de Ejérci-

Scanned with CamScanner

to, del propio Pinochet, y el clima que se busca crear con los crímenes cometidos por los organismos de seguridad del régimen.

En síntesis, la hipótesis de mayor probabilidad es que en torno a la "coyuntura del 89" se desencadenará un proceso de transición a un régimen democrático. Pero a ello no es ajeno lo que ocurra en la oposición. La mera continuidad de lo hecho hasta ahora podría aumentar la probabilidad de la hipótesis de continuidad del régimen y de Pinochet. Para asegurar el término del régimen militar y una transición a la democracia, la oposición debe enfrentar en conjunto y sin exclusiones, desde los sectores de derecha democrática hasta el Partido Comunista, los cuatro componentes de una transición que hemos analizado. Ello significa, principalmente, la definición prioritaria del escenario de confrontación político-institucional con el régimen, ya sea el cambio constitucional o el plebiscito, para derrotar a Pinochet, y de las condiciones que se exigen en cada caso. En torno a estas definiciones debiera organizarse la movilización social y la presión y mediación de instituciones y actores, que faciliten la negociación con los titulares del poder. Si esta definición no viene del conjunto completo de la oposición, ella tendrá que hacerse tardíamente como respuesta al escenario impuesto por el régimen. Esto, a menos que ella provenga de una institución como la Iglesia.

Scanned with CamScanner

Conectándose al Chile profundo

La discusión de los problemas de la transición política y de los escenarios posibles y probables parece estar desconectada de la vida y problemas de la gran masa de chilenos y desarrollarse a sus espaldas. Y quizás esto explique la extraña y generalizada sensación que "nadie se mueve por nada", que nada es posible y que toda iniciativa se empantana y termina banalizada o sofocada. Pareciera que la voluntad política se estrella contra ciertas "recalcitrancias" de la sociedad y ello no se explica sólo por el carácter de la dictadura. ¿Cómo reconectar los procesos políticos al país profundo?

No se trata, y ya hemos argumentado al respecto, de recargar un proceso de transición con temas y problemas que no podrán ser resueltos sino en un nuevo régimen político de tipo democrático. De lo que se trata es de entender que de la realidad estructural y cultural del país emana una cierta sensibilidad nacional, aunque sin duda en un país segmentado como Chile cristaliza de distinta manera en los diversos sectores sociales. De ella los procesos políticos deben dar cuenta de alguna manera. Y lo que llama la atención, precisamente, es el desconocimiento que la política, tanto la del gobierno como la de oposición, tiene de este Chile "profundo" y, por esta razón, se estrella contra él.

No es posible sino indicar algunos rasgos del Chile profundo que una sensibilidad política de transición debiera incorporar sin perder la especificidad de este proceso que es un cambio de régimen político solamente.

En primer lugar, se insiste mucho en los cambios fundamentales que el país ha experimentado estos años, lo que es cierto; pero no se insiste lo suficiente en aquello en que el país no ha cambiado. Y, en ese sentido, hay una cultura de dignidad personal, una valorización de la acción colectiva y política, una adhesión a lo que puede hacer un

Scanned with CamScanner

Estado como representante de la nación, una comprensión de la solidaridad, un reconocimiento de la diversidad, un rechazo a las desigualdades e injusticias, que no han sido alteradas. En otras palabras, el sustrato cultural democrático no ha sido eliminado y persiste generalizadamente en la población.

Pero ello no se expresa "heroicamente". No se trata de una euforia pasajera. El rechazo masivo a la dictadura, cercano a las cuatro quintas partes, no significa que la gente esté dispuesta a movilizarse todo el día contra ella ni a hacerse matar en la lucha. Lo que todas las encuestas muestran es que, junto a los núcleos radicalizados minoritarios, está el gran país que quiere la democracia, rechaza al régimen, cree en la política y en los partidos, pero se muestra escéptico, desconfiado y confundido respecto del conjunto de la clase política, incluida por supuesto la del sector gobernante, y aspira abrumadoramente a una negociación entre régimen y oposición para poner término a la actual situación, rechazando el enfrentamiento y el inmovilismo. Quizás el riesgo del cinismo, de que "las cosas van a seguir igual", provenga precisamente de esta distancia entre una valorización profunda de la política y la democracia y la frustración respecto del liderazgo y acción política actuales.

En segundo lugar, la transformación estructural y cultural del país ha ido en un doble sentido, contradictorio y complementario, que no puede dejar de considerarse cuando se quiere pensar en propuestas políticas que apelen al Chile profundo y no se reduzcan a los núcleos activados, sobre todo de Santiago. Por un lado, estamos en presencia de un capitalismo relativamente recompuesto y rearticulado que ha introducido modernidades y tipos de relación y organización en la sociedad de los que no podrá prescindirse. Hay una parte del país que pertenece a esa realidad, pero también esa parte penetra difusa y complejamente la parte no incluida. Porque, por otro

Scanned with CamScanner

lado, estamos en presencia de un vasto proceso de marginalización, exclusión y atomización: el país que no se reconoce en el anterior. Pensar que Chile es sólo un capitalismo modernizante es falso. Pensar que Chile es sólo el mundo de la marginalidad es falso. Chile es ambas cosas, donde la modernidad adquiere un carácter de modo de vida para algunos y de gran frustración para los demás. Y quizás no haya un sector social que exprese en sí mismo mejor esto que la gran masa de jóvenes que están a la vez avasallados por un régimen, sin cauces de expresión socio-política, pero que han ido construyendo con formas culturales nuevas una identidad contradictoria de rechazo radical del contexto pero de inserción parcial a través de algún consumo cultural y de la preocupación por sus carreras y futuros personales. Una curiosa mezcla de anarquismo solidario y de politización despolitizada. También se expresa este desgarro cultural en una mezcla del rechazo a la violencia, con la presencia de una violencia simbólica que tiende a ser confundida con violencia política. Esta última no logra legitimidad excepto como reacción a la represión político-institucional o cuando la primera no encuentra canales constructivos de expresión y transformación.

Una propuesta de transición y las concertaciones, negociaciones y movilizaciones de que hemos hablado, deben hacerse a partir de este Chile profundo que no es el pequeño espacio de la acción política actual, de cualquier signo que ella sea.

Scanned with CamScanner

NOTAS

1.- Algunos de los temas e ideas de este capítulo han sido retomadas de diferentes trabajos del autor. Principalmente, "Balance y perspectivas de la transición a la democracia en Chile" (Revista Análisis, Santiago, 20 al 26 Enero 1987), "Seis proposiciones sobre redemocratización en Chile" (Revista Convergencia, Santiago, Nº 10, Diciembre 1986. Ponencia presentada al 2º Congreso Chileno de Sociología, Agosto 1986), "La transición a la democracia en Chile" (Revista Mensaje, Enero-Febrero 1986), "Límites y dilemas de la influencia externa" (En FLACSO, "Estados Unidos y Chile hacia 1987", Santiago, 1987), "La transición bloquedada" (Mensaje, Enero-Febrero, 1985).

2.- No haremos en este capítulo un análisis del régimen militar propiamente tal, el que puede encontrarse en mi libro "El Proceso Político Chileno" ya citado. Para otra bibliografía al respecto, ver Nota 7 del capítulo segundo.

3.- Ver nota 11, capítulo segundo, sobre estos bloques políticos.

4.- Todos estos factores están tratados en otros capítulos con más detalles.

5.- Sobre la "apertura", ver C. Huneeus. "La política de apertura y sus implicancias para la inauguración de la democracia en Chile", Revista de Ciencia Política, Vol. VII, Santiago, 1985)

6.- El documento, de Agosto 1985, se denominaba "Acuerdo Nacional para la transición a la democracia plena" y fue publicado, entre otros, por el diario "Las Ultimas Noticias" del 27 de Agosto de 1985. Ver los partidos firmantes en Nota 11, capítulo 2.

7.- El documento se denomina "Bases de sustentación de un futuro régimen democrático", del 8 de Septiembre de 1986.

8.- Ver FLACSO, "Estados Unidos y Chile hacia 1987" (Santiago, 1987) y H. Muñoz y C. Portales, "Amistad esquiva: Las relaciones exteriores Estados Unidos-Chile" (Editorial Pehuén, Santiago, 1987).

9.- Ver Nota 19, capítulo cuarto.

10.- Ver Nota 9, capítulo cuarto.

11.- Respecto de la inscripción como partidos políticos de acuerdo a la Ley promulgada por el gobierno en 1987, los partidos de Derecha y de Centro han acordado hacerla, no así los partidos de Izquierda que la rechazan. Ver capítulo quinto.

12.- Recordemos que la Constitución prevee un primer período presidencial de Pinochet desde 1980 hasta 1989, donde la Junta de Gobierno

Scanned with CamScanner

juega el papel de poder legislativo, y no hay una arena política de representación, ni la actividad política está oficialmente permitida. A este período se le denomina gubernamentalmente de "transición". En 1989 la Junta debe proponer un nombre para el período presidencial que va hasta 1997, el que deberá ser plebiscitado. Si es aceptado el candidato en el plebiscito, pasa a ejercer el cargo de Presidente por un período de ocho años. Si es rechazado, Pinochet permanece en el cargo por un año más y se llama al cabo de ese año a elecciones competitivas y desde ese momento rige la Constitución definitiva. Esta dispone un fuerte poder presidencial, un rol muy débil del Parlamento, un sistema de exclusiones de los partidos de Izquierda y un poder de veto de las Fuerzas Armadas. Uno de los rasgos de este sistema constitucional es que su modificación es prácticamente imposible. Un análisis de la Constitución en G. Arriagada "La Constitución, conduce a la democracia?" (Revista HOY, Nº 358, 1984, Santiago).

Scanned with CamScanner

IV

Las movilizaciones populares en el régimen militar y las complejidades de la transición invisible

Scanned with CamScanner

HEMOS INDICADO en el primer capítulo que uno de los componentes de todo proceso de transición son las movilizaciones sociales y populares contra el régimen militar. En este capítulo intentaremos analizar lo que ha sido este componente en el caso chileno.[1]

Después de diez años de régimen militar, en los que se habían dado movilizaciones sectoriales importantes, se produce en mayo de 1983 una gran movilización de masas que se repitió en los meses siguientes. Estas movilizaciones, llamadas Protestas Nacionales, implicaron la irrupción en el espacio público de la oposición social y política, obligando al gobierno a agregar a su lógica militar y represiva una lógica de tipo política. Desde entonces, el tema de las protestas y movilizaciones populares bajo el régimen militar chileno cobró especial relevancia, insertándose en tres tipos de debates.

En primer lugar, en el debate político estratégico de la oposición chilena al régimen militar. Desde la irrupción de ésta al espacio público en 1983, la "movilización social" ha sido el tema central de todos los debates y el punto de convergencia y divergencia principal. Los

Scanned with CamScanner

diversos sectores de oposición la invocan como un elemento imprescindible, aunque le otorguen significados y finalidades diferentes. En algunos momentos se la consideró en sí misma la "estrategia para poner fin al régimen militar". Mientras el gobierno militar y la Derecha han buscado identificar las movilizaciones sociales con el tema de la violencia y el vandalismo, la oposición política, sorprendida un tanto con los éxitos de sus primeras protestas, vio en ellas la gran posibilidad de desgastar definitivamente al régimen. Los partidos que constituyeron la Alianza Democrática con el tiempo vieron en la movilización social el instrumento para forzar una negociación con las FF.AA., tomando cierta distancia con sus formas de expresión más radicalizadas. Los sectores de oposición más propiamente de Izquierda vieron en la movilización una fórmula de desestabilización que podía llevar al derrocamiento del régimen. Más adelante, en el debate autocrítico de la oposición el tema vuelve a ser tocado y hay quienes le atribuyen a tal estrategia y su fracaso la mantención del régimen de Pinochet, mientras otros persisten en considerarla el único camino.

Este primer tipo de debate se entronca con un segundo, de corte más académico, que se refiere al papel que juegan las movilizaciones sociales en los procesos de transición desde regímenes militares o autoritarios a regímenes democráticos. ¿Son ellas un componente indispensable de un proceso de transición? ¿Juegan sus diversas formas un papel decisivo en la erosión o la recomposición del régimen militar? ¿Cómo se articulan con los procesos también indispensables de concertación y negociación entre régimen y oposición? ¿Hay momentos o tipos de movilización más adecuados a una transición? [2]

La tercera vertiente desde la cual se pueden analizar las movilizaciones sociales populares nos remite al debate

sobre los nuevos movimientos sociales y la constitución de sujetos histórico-políticos que se produce por la transformación profunda, aunque diferente en su naturaleza, que se da tanto en los países centrales como en los periféricos. ¿Constituyen estas movilizaciones sociales algo más que expresiones masivas de descontento con un régimen? ¿Son portadoras de los gérmenes de nuevos movimientos sociales, lo que implica una redefinición no sólo de los actores centrales sino de la relación entre política y sociedad? ¿Comprenden sólo a un presente inmediato o nos hablan de actores y formas democráticas del futuro? [3]

Un análisis de las movilizaciones y protestas populares en el caso del régimen militar chileno debe ubicarse en esta triple perspectiva.

Hace algunos años, antes de desencadenarse las protestas populares, denominaba "transición invisible" a este fenómeno de redemocratización de la sociedad en términos de recomposición y reorganización de sujetos y actores sociales, distinguiéndola de la transición política a la democracia que se mide en términos de mecanismos y plazos del régimen político. [4]

Quedaba ahí planteado el problema de la relación entre ambos procesos. Es evidente que entre 1983 y 1986 hubo una movilización social y popular como no se dio en regímenes militares de otros países. Y también es cierto que la dictadura militar aún se mantiene y parece cumplir con sus propios plazos y mecanismos de institucionalización. Cabe, entonces, plantearse esta paradoja y preguntarse por la naturaleza de estas movilizaciones y, por lo tanto, por las potencialidades y límites de esta "transición invisible".

Recordemos brevemente lo indicado en el primer capítulo sobre la significación de las movilizaciones sociales en el contexto de los procesos de transición política, tal como los hemos definido a lo largo de este libro. En

Scanned with CamScanner

primer lugar, el carácter particular que adquieren tales movilizaciones dado el rasgo esencialmente desmovilizador y despolitizador de los regímenes militares en los que se desarrollan. Si bien pueden encontrarse movilizaciones de tipo semejante bajo diferentes regímenes, lo que aparece como característico de las protestas y movilizaciones bajo dictaduras es, por un lado, un contexto institucional que las prohíbe, impide o dificulta; por otro lado, el que ellas explícita o implícitamente apuntan al término del régimen. Estos dos rasgos, a su vez, le dan a las protestas y movilizaciones bajo dictaduras un alto componente de "heroicidad" y carga emotiva y también de politización. En segundo lugar, hay una correlación entre el tipo de movilización y la fase por la que atraviesa el régimen. En tercer lugar, estas movilizaciones se mueven en dos ejes principales de significación: reconstitución del sistema de actores sociales y lucha por el término del régimen. En cuarto lugar, nos hemos referido a diferentes funciones y tipos de movilización, distinguiendo las expresivo-simbólicas de las instrumentales, reivindicativas u organizativas, y de las políticas. Finalmente, hemos indicado que las movilizaciones sociales son uno de los componentes de los procesos de transición y que su éxito en este plano preciso depende de su adecuada combinación con los otros componentes de tales procesos, a saber, la descomposición del régimen, la negociación o concertación entre régimen y oposición. Todos estos elementos serán aplicados, en lo que sigue, al examen de las movilizaciones sociales bajo el régimen militar chileno, con lo que obviamente nos ubicamos menos en una perspectiva que busca comprender el sentido imputado por los actores que se movilizan y al sujeto mismo, que en una que busca comprender la relación entre movilización y transición política en un caso histórico dado: ello quizás empobrece, pero al mismo tiempo precisa el análisis.

Scanned with CamScanner

Cabe también recordar lo expresado hasta ahora respecto del tipo de integración de los sectores populares a la vida nacional a través de lo que denominamos la "columna vertebral". Esta forma particular de integración de los sectores populares: en forma gradual, institucionalizada y conflictiva, sin adquirir los rasgos de revuelta o manipulación caudillista de otros contextos, fue, como hemos dicho, dependiente en muy alto grado del sistema político partidiario. Fuerzas sociales débiles, pero políticamente fuertes: debilidad de movimientos sociales autónomos, capacidad de representación política alta y articulación estrecha entre liderazgo social y liderazgo político partidario. Todo ello, a su vez, implica un tipo de organización social débil a nivel de base y fuerte a nivel intermedio o nacional (la fortaleza del movimiento sindical se encontraba en las Federaciones y en la CUT, pese a que legalmente descansaba en el sindicato de base que era débil; el movimiento estudiantil era débil a nivel de Centros de Alumnos y fuerte a nivel de Federación; las federaciones campesinas eran fuertes en relación a la debilidad del sindicalismo de fundo o de base: fuertes eran las organizaciones desde la Promoción Popular, débil cada Junta de Vecino, etc.).

Uno de los problemas de este esquema de integración con debilidad de la organización de base y dependencia de lo social respecto de lo político, es que aquel sector social no vinculado directamente a la estructura político partidaria queda marginado. La ventaja, a la inversa, es que aquel sector que logre organizarse y tener alguna sintonía político partidaria, logra al menos algún grado de satisfacción o respuesta a las reinvindicaciones de sus representados, aunque sea en forma subordinada.

El carácter subordinado de la integración popular, la politización de las luchas reivindicativas, la presencia de partidos de Centro y de Izquierda, especialmente, que aceptaban el régimen político y jugaban en él, pero

Scanned with CamScanner

presionaban por cambios sociales, le dieron a esta integración una nota particular: la importancia asignada a la organización social y su vinculación político partidaria y el valor dado a la lucha reivindicativa. Todo ello favoreció un tipo de movilización que, legal o para legal, tenía siempre al Estado como referente de la acción colectiva. En la década del sesenta, con el proceso de modernización capitalista y de democratización, que incorporaba a los sectores campesino y marginal urbano hasta entonces excluidos, y con el desarrollo de contradicciones en él, se produce una masificación de las movilizaciones en formas de huelgas ilegales y tomas de terreno, a veces violentamente reprimidas. Entre 1970 y1973 las movilizaciones de masas se dieron en un contexto de creciente desinstitucionalización y polarización del conflicto político.

Podemos, ahora, entrar al análisis de las movilizaciones sociales bajo el régimen militar, distinguiendo las realizadas hasta 1983, del ciclo de Protestas Nacionales y las movilizaciones sectoriales, para luego intentar una interpretación general.

Las expresiones colectivas 1973-1983

Hasta 1983 sólo puede hablarse de movilizaciones sectoriales y parciales. Ellas corresponden a: acciones de defensa, protesta y solidaridad en relación a las violaciones de derechos humanos como asesinatos, detenciones, torturas, desapariciones (actos masivos, ayunos, huelga de hambre, etc.); organización de actividades de subsistencia en medios poblacionales (Ollas Comunes,

Scanned with CamScanner

Bolsas de Cesantes, etc.); actividades reivindicativas también en medios poblacionales (tomas reducidas de terreno, demandas al poder municipal); reivindicaciones laborales (alteraciones del proceso productivo, viandazos, huelgas parciales), las que a partir de 1978 serán al mismo tiempo activadas y acotadas con la dictación de las leyes laborales por parte del Gobierno, lo que implicará un limitado renacimiento del sindicalismo de base, en tanto se constituyen a nivel nacional organizaciones de coordinación sindical más volcadas hacia lo político; manifestaciones de alcance político en determinadas fechas, que tuvieron un auge principalmente en el período del plebiscito de 1980, pese a las restricciones (concentraciones relámpago, difusión de panfletos, pequeñas marchas, etc.: movilizaciones culturales, especialmente en medios estudiantiles universitarios, en los que también se dan concentraciones relámpago y movilizaciones reivindicativas que alcanzan la forma de paralizaciones parciales; etc.[5]

Sin entrar en un análisis pormenorizado de las movilizaciones durante este decenio (1973-1983) y reconociendo la heterogeneidad tanto de ámbitos como de períodos, es posible indicar las siguientes características generales.

En primer lugar, ellas se dan en un marco altamente represivo y de muy escasa permisividad, lo que explica su carácter aislado, errático y de duración breve. En segundo lugar, salvo escasas excepciones en el ámbito reivindicativo, estas movilizaciones no parecen dirigirse a un interlocutor del que se espera la satisfacción de una demanda, sino que se orientan más bien por principios de tipo expresivo y autorreferentes. En los casos reivindicativos, la ninguna respuesta gubernamental positiva y la represión dejan entregadas estas movilizaciones a su propia descomposición interna. En tercer lugar, una buena parte de estas movilizaciones se vinculan a la pro-

Scanned with CamScanner

tección institucional de la Iglesia, donde tiende a reconstituirse un sistema de organizaciones sociales que poco a poco cobra autonomía. En cuarto lugar, y pese a la imposibilidad de trascender a niveles de expresión más globales y coordinados, lo que será propio del ciclo de las Protestas que examinaremos más adelante, la recurrencia de estas diversas movilizaciones apunta a dos fenómenos importantes. Por un lado, el régimen militar no logró eliminar las expresiones colectivas ni los gérmenes de organización en que éstas se basaban. Por otro lado, en todas estas movilizaciones está presente una franja de militantes de partidos y de organizaciones de derechos humanos o de iglesias, que se mueven con relativa autonomía respecto de sus aparatos, con lo que se define un nuevo modo de relación de lo social con lo político, y que se constituyen en los animadores de tales movilizaciones. Se trata de militantes de partidos de Izquierda y también democratacristianos, pero también de sectores independientes, animadores y educadores populares, trabajadores sociales, etc. La presencia de este "activo político-social" en los diversos ámbitos —mezcla de clase política intermedia y animadores o dirigentes sociales— es lo que asegura cierta continuidad de una precaria organización sometida a la marginalidad y lo que va a permitir su emergencia en el momento de la crisis del proyecto transformador del régimen militar en 1983.

El ciclo de Protestas y Paros

En mayo de 1983 se produce la primera manifestación masiva denominada Protesta Nacional y con ello

el tema de la movilización social ocupará un lugar central tanto en la relación régimen-oposición como en los debates y acciones de la oposición misma. La principal organización sindical, por su tamaño y posición estratégica, la Confederación de Trabajadores del Cobre, días antes del 11 de mayo, a raíz de discusiones con otras agrupaciones sindicales, cambió un llamado a Paro Nacional por un llamado a protestar masivamente, difundiendo esta convocatoria a través de instructivos. [6]

Durante ese día hubo paros parciales, ausentismos, trabajo lento, manifestaciones en los centros laborales; asambleas, manifestaciones y tomas en las universidades; bocinazos y concentraciones relámpagos en el centro de la ciudad y en arterias importantes; ruidos de cacerolas, cortes de luz en la tarde en barrios de sectores medios y pobladores, donde también se dieron barricadas; ausentismo en las escuelas y abstención de compras en el comercio. El gobierno que, en un comienzo quiso desconocer esta manifestación, desató una represión que costó dos muertos, 50 heridos y 300 detenidos.

De algún modo, la rutina reseñada de la Primera Protesta se repetirá en las próximas, con las salvedades que anotaremos, pero en ellas irán adquiriendo mayor importancia las acciones operativas del tipo barricadas y apagones de luz. La represión se irá endureciendo con la presencia de grandes contingentes militares en la ciudad y sobre todo en las poblaciones (en la cuarta Protesta, Pinochet anuncia la presencia de 18 mil militares en la calle) y con la detención de convocantes y manifestantes, lo que incluía en muchos casos la relegación. A partir de la tercera protesta, este tipo de manifestación, que dura entre uno y dos días, se irá extendiendo a provincias. Entre mayo de 1983 y octubre de 1984 habrá once Protestas, casi mensualmente (con excepción de las vacaciones de verano), con grados de éxito diversos, en las que se introducirán otras formas de movilización

Scanned with CamScanner

(jornadas por la Vida, concentraciones políticas en teatros y espacios abiertos, etc.). La Protesta de Octubre de 1984 se convirtió en un primer esbozo de Paro General y provocó la decisión del Gobierno de proclamar el Estado de Sitio, lo que prácticamente terminó con esta fase del Ciclo de Protestas. Levantado el Estado de Sitio a mediados de 1985, hubo nuevos llamados a Protestas, pero de menor envergadura y normalmente convocados por sectores particulares de la oposición. A fines de 1985 se realizó una gran concentración masiva convocada por uno de los bloques políticos (la Alianza Democrática) que se habían empezado a constituir en agosto de 1983 y que ya hemos descrito. En abril de 1986 se realizó una jornada que intentaba reimpulsar el movimiento de Protesta y en julio de ese año, una nueva agrupación de dirigentes sociales con representación política, denominada Asamblea de la Civilidad, convocó a un Paro Nacional de dos días con un alto grado de éxito organizativo, pero cuyo impacto político se debió fundamentalmente al efecto nacional e internacional de la represión militar que llegó al extremo de quemar a dos jóvenes, muriendo uno de ellos. La detención de los dirigentes, la discusión interna de la oposición sobre la validez de este tipo de movilización social para terminar con el régimen, unidos posteriormente al descubrimiento en el norte del país, en el mes de agosto, de arsenales de armamentos imputados a grupos insurreccionales (Frente Patriótico Manuel Rodríguez, relacionado pero independiente del Partido Comunista), así como el atentado contra el General Pinochet, en septiembre del mismo año, reivindicado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, llevaron a un reflujo y decaimiento quizás definitivo del movimiento de Protestas. Ello se refuerza con la nueva declaración de Estado de Sitio en septiembre de 1986, hasta enero de 1987.

Sin entrar en una descripción detallada de las caracte-

Scanned with CamScanner

rísticas de cada Protesta, ni de su evolución ni de los debates y actores involucrados, vale la pena hacer algunas observaciones sobre este ciclo de movilizaciones desde la perspectiva que hemos planteado.

En primer lugar, hay al menos tres elementos que contribuyen a explicar el éxito de la Primera Protesta. Por un lado, la crisis del modelo económico "a la Chicago" que era la base del proyecto transformador del régimen, fue erosionando el apoyo de sectores medios. Esto creó un espacio de permisividad que hizo posible que la protesta de los sectores sociales opositores organizados no terminara en masacre. Parece fundamental, entonces, esta confluencia de los dos sectores, clases medias y clases populares, que en las últimas décadas habían sufrido un creciente desencuentro y confrontación. Esta confluencia se expresa, en parte, y éste es el segundo elemento, en la naturaleza del organismo convocador, que junto con simbolizar a la clase trabajadora es de todos los núcleos de esa clase el que mejor irradia una cierta seguridad para los sectores medios y las características personales de su dirigente máximo así lo confirmaban. Que sea la organización sindical más clave y poderosa, donde hay diversos sectores políticos de oposición representados, la que convoque, es una garantía de amplitud y seguridad que facilita la pérdida del miedo a la represión. [7] Un tercer elemento a considerar, es que el cambio de Paro a Protesta facilitó la masividad por cuanto cada sector buscó la forma más adecuada de participar, sintiéndose sujeto creativo al introducir su propia expresión de descontento y rechazo al régimen.

Estos tres elementos irán variando en las sucesivas Protestas. La represión contra la Confederación de Trabajadores del Cobre llevó a buscar un organismo convocador aún más amplio como fue el Comando Nacional de Trabajadores, que llamó a la segunda protesta, luego del fracaso de un paro llamado por la Confederación del

Scanned with CamScanner

Cobre como rechazo a la detención de su dirigente máximo [8]. Sin embargo, el impacto político que las primeras protestas tuvieron, llevaron a que el liderazgo político partidario asumiera el relevo de la convocatoria en las Protestas siguientes. El llamado a la tercera Protesta fue hecho por los firmantes del Manifiesto Democrático, que luego formarán la Alianza Democrática. Este relevo mutuo se repitió una y otra vez entre el liderazgo de organizaciones sociales y políticas; pero lo cierto es que las movilizaciones lograron un mayor nivel de masividad sólo cuando convocaba el conjunto del espectro político de oposición, y se reducía en su amplitud y su impacto cuando sólo un sector de ese espectro era quien convocaba. Las crecientes divergencias estratégicas de la oposición, especialmente como hemos indicado al inicio, en relación al sentido que debían tener las movilizaciones sociales, convertidas para todos ellos en el elemento crucial para terminar con el régimen, fueron restando capacidad de convocatoria. En 1986 se buscó una forma de obviar las exclusiones políticas y la creciente distancia entre la Democracia Cristiana y el Partido Comunista, constituyéndose un organismo de dirigentes de organizaciones sociales que incluía a todas las tendencias políticas: la Asamblea de la Civilidad.[9] Esta convocó al Paro de julio, alcanzando un alto nivel de masividad, pero era evidente en ella el predominio de organizaciones de capas medias y el escaso peso participativo del mundo obrero, el sector que menos participó en el Paro.

En lo que respecta a la masividad que caracterizó a las primeras protestas, la violenta represión ejercida por el gobierno, que aumentó significativamente el número de muertos y detenidos, los anuncios gubernamentales de concesiones económicas a algunos de los gremios de capas medias, las expectativas de negociación política entre régimen y oposición que provocaron un fuerte

debate interno en ésta, la radicalización de los sectores juveniles y poblacionales, fueron de algún modo alejando a los sectores medios de las movilizaciones. Si se toma en cuenta que aunque la convocatoria sindical fue clave en el éxito de las Protestas éste era el sector de mayor dificultad de movilización, puede entenderse por qué el "núcleo fuerte" de las movilizaciones pasaron a ser, por un lado, la franja del "activo militante político social" a que nos hemos referido, y por el otro, los sectores estudiantiles y, sobre todo, el mundo joven de las poblaciones que se debatía entre la anomia y la radicalización creciente, con gran desconfianza del mundo de las instituciones y concertaciones. [10] Todo ello no quiere decir que, dependiendo de quienes convocaban y del dramatismo de tal o cual situación, no se lograra convocar para alguna manifestación a sectores medios y populares amplios; pero ello fue haciéndose más y más esporádico.

La bifurcación de la masa que protesta entre quienes se retiran o buscan resolver problemas reivindicativos y sectores populares que buscan sobre todo la dimensión expresiva, va a converger con la radicalización política de algunos sectores de oposición que se inclinan a posiciones de corte insurreccional y militarizada (Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Milicias Rodriguistas, cercanas a las Juventudes Comunistas, además del MIR y otros grupos menores), y explica también la transformación de las formas de protesta y movilización. En el mundo poblacional joven y, marginalmente, en el mundo estudiantil, las barricadas, la preparación para el enfrentamiento con la cada vez más violenta represión policial y militar, las medidas operativas, a veces mezcladas con acciones propiamente delictuales, aunque marginales, van a tomar el lugar central. Hay, en el mundo poblacional joven, por otra parte, la presencia de sectores de inspiración cristiana, orientados por la "no violen-

cia activa", también radicalizados. Los días de Protesta son mirados así como momentos heroicos, de enfrentamiento y liberación.

En segundo lugar, cabe referirse al impacto político de estas movilizaciones. Es un hecho, como se ha señalado, que las Protestas cambiaron al país: se amplió enormemente el campo de acción colectiva, pese a la represión y a las medidas institucionales como el Estado de Sitio; el miedo acumulado en un decenio fue erosionándose; apareció en la escena una sociedad civil que redefinía su relación con el Estado.

Este vuelco implicó la introducción de la política en dos niveles.

En lo que concierne al régimen, éste se vio obligado a combinar la política con la lógica militar que había sido hasta entonces su único estilo de acción, y a reconocer un actor de oposición. Entre la tercera y cuarta Protesta, Julio-Agosto 1983, se constituye la Alianza Democrática que, junto al Comando Nacional de Trabajadores, llama a la Cuarta Protesta, a la que convocan también las organizaciones de Izquierda. Después de ella, y habiéndose producido un cambio de Gabinete con el nombramiento de un Ministro del Interior civil y antiguo político de Derecha (Jarpa), se inicia el período llamado de "apertura" y que buscaba, desde la perspectiva del gobierno, recomponer su frente civil de apoyo y canalizar a la oposición dentro de los cauces institucionales del régimen. Ambos objetivos fracasados, en noviembre de 1984 (un año después) se clausura la apertura con la declaración del Estado de Sitio. La forma inicial que adquirió esta "apertura", fuera de concesiones como la autorización de ingreso de un cierto número de exiliados, fue la de un "diálogo" entre el Ministro Jarpa y algunos sectores de oposición de la Alianza Democrática. En ese momento la oposición accede al espacio público, pero se produce una fragmentación en ella respec-

to del diálogo con el Gobierno y un distanciamiento respecto de los sectores sociales más movilizados. Así, los cambios en la política económica destinados por parte del gobierno a cooptar sectores medios, la combinación de medidas de apertura con cierres y represión, los intentos de reorganizar su frente civil de apoyo, son expresión de esta introducción de la lógica política en el régimen, junto a la lógica típicamente militar.

Respecto de la oposición, el movimiento de Protestas significó la irrupción de ella en el espacio público a través de la conformación de bloques ideológico-políticos a los que nos hemos referido (Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular, Bloque Socialista). Si bien ello permitió la constitución de referentes o interlocutores políticos que tomaron el relevo de la dirigencia social y buscaban representar la sociedad movilizada, se planteó aquí un problema. En efecto, la ausencia de actores sociales autónomos fuertes dejó entregada la suerte política de las movilizaciones al debate y concertación de actores políticos enfrentados a sus propios problemas de constitución. Las movilizaciones pasaron así a ser un tema del debate ideológico estratégico en torno al término del régimen militar donde, bajo el mito común de que ella llevaría a la ingobernabilidad y ésta a la caída del régimen militar, se escondían diversas opciones y expectativas respecto de una posible transición. En los sectores vinculados a la Alianza Democrática predominaba la idea, ya de sólo un cambio de régimen, ya de uno que permitiera más adelante transformaciones sociales (en ambos casos régimen democrático). En el caso del Movimiento Democrático Popular, afirmando un régimen democrático alternativo, el énfasis se ponía en un derrocamiento cercano al modelo revolucionario y que permitiera la instauración de una "democracia avanzada". Todo esto se reflejó en la ausencia por parte de los actores políticos de una propuesta institucional

Scanned with CamScanner

consensual de transición que forzara más adelante una negociación con el poder militar y que, sobre todo, le otorgara a la movilización una canalización en términos de metas y objetivos acumulativos. Sin ello, la sola convocatoria a metas máximas y generales como "Democracia Ahora", podía dar cuenta de un estado de ánimo, superar los temores y aislamientos, pero difícilmente podía transformar en un plazo más largo una fuerza social en fuerza política. Las movilizaciones no formaron parte de un diseño estratégico coherente, pese al papel esencial que se les asignaba para terminar con el régimen militar, ni en las versiones insurreccionales ni en las versiones más políticas. La idea genérica de "ingobernabilidad" como productora necesaria de un cambio de régimen, y la obsesión del "Paro Nacional" como instrumento de derrocamiento sin insertarlo en una visión de los mecanismos institucionales de cambio, son ilustración de ello.

Así, las grandes movilizaciones que se desarrollaron desde 1983 cambiaron la faz de la sociedad, permitieron superar los miedos y traumas, desmintieron el intento militar de hacer desaparecer los actores colectivos, reintrodujeron el espacio político en la sociedad, obligaron a concesiones del régimen en algunos campos, pero no fueron suficientes para originar actores sociales autónomos de relativa fuerza ni lograron cumplir las expectativas que se le asignaron de desencadenar un proceso de transición.

Las movilizaciones sectoriales y sus límites

Vale la pena completar el panorama de las movilizaciones globales reseñado hasta aquí, con algunas notas

sobre la particularidad de ciertos sectores involucrados.

Al analizar el mundo popular llama inmediatamente la atención la bifurcación que se produce entre la clase obrera propiamente tal y los vastos sectores poblacionales. [11] Ya hemos indicado la importancia que tuvo la convocatoria sindical y, al mismo tiempo, la debilidad de la participación obrera. Y es que el sindicalismo ha visto en estos años reducido enormemente su poder e influencia. Las profundas transformaciones estructurales, con la reducción del espacio industrial especialmente en las áreas donde el sindicalismo era tradicionalmente fuerte, las muy altas tasas de cesantía, las limitaciones institucionales a la acción reivindicativa, si bien no eliminan el poder simbólico del movimiento obrero le restan capacidad de acción efectiva, lo que se aprecia en tasas bajas de sindicalización. Todo ello lleva a una diferenciación entre un sindicalismo de base de corte más corporativo y uno que se expresa en los niveles cupulares donde las opciones político partidarias se hacen presentes dificultando no sólo la acción colectiva unitaria, sino también la relación con ese sindicalismo de base. [12]

Si el mundo poblacional aparece como el refugio privilegiado de las movilizaciones, hay sin embargo que introducir algunas observaciones. En primer lugar, la relativa monopolización de estas movilizaciones por parte de los sectores juveniles, probablemente los más avasallados por el régimen militar. Esto le da a las movilizaciones un doble sesgo: un carácter fundamentalmente expresivo, desprovisto de contenido instrumental o reivindicativo preciso, donde lo que importa es la afirmación como sujeto de una identidad negada por la cotidianeidad impuesta, y una tendencia hacia formas de movilización que privilegian el enfrentamiento con el mundo oficial simbolizado en el aparato represivo: barricadas, apedreamientos, pequeñas destrucciones de símbolos públicos. Todo ello contribuye a un aislamien-

Scanned with CamScanner

to de estos sectores incluso en las poblaciones mismas, lo que refuerza su carácter comunitario, no societal. En segundo lugar, pese a la movilización mostrada por sectores poblacionales y a la existencia de múltiples organizaciones de subsistencia, solidaridad, culturales, etc., hay una enorme dificultad en el paso a la acción política como sujeto colectivo autónomo. Ello se debe tanto a que la movilización reivindicativa no aparece como visiblemente útil, dada la magnitud de los problemas que se viven, y que cuando es puntual, al ser resuelta (terrenos, por ejemplo), deja de ser causa de movilización, y también a que la heterogeneidad impide una organización unitaria coordinadora, lo que reproduce los problemas de relación entre cúpulas partidarias delegadas en el medio poblacional. Es aquí donde se presentan los límites de este "activo político social" al que nos hemos referido, capaz de movilizar conyunturalmente pero no de asegurar una organización permanente y amplia en las bases poblacionales. [13]

En las llamadas capas medias pueden distinguirse al menos tres sectores. Primero, aquel constituido por gremios de pequeños y medianos empresarios (comercio, transporte, etc.), que, cuando brinda su apoyo a las movilizaciones amplía enormemente su impacto, pero que tiende a un comportamiento dirigido fundamentalmente por una orientación coporativo-reivindicativa, es decir que "instrumentaliza" las movilizaciones en términos de sus propias demandas y las abandona cuando puede negociar tales demandas con el régimen. [14] En segundo lugar, están los gremios profesionales que han ido tomando un papel activo en el último tiempo, como se expresa en la constitución de la Asamblea de la Civilidad. Fuera de manifestaciones por la vía de declaraciones o concentraciones muchas veces puntuales y referidas a respuestas contra abusos legislativos o de hecho por parte del gobierno, la forma pri-

vilegiada de movilización ha sido en los últimos años la que puede denominarse "instrumental organizativa": la movilización electoral en sus propias organizaciones. Sobre todo desde 1983 se han producido elecciones, no sólo en el medio sindical, sino en las Universidades y en los Colegios Profesionales, prácticamente todas ellas con connotaciones político-partidarias y donde hay un abrumador triunfo de los sectores de oposición. Por ejemplo, ya en 1985, 22 de las 24 Federaciones de Estudiantes tenían directivas de oposición elegidas democráticamente y la casi totalidad de los Colegios Profesionales adscritos a la Federación de Colegios Profesionales estaban en la misma situación. [15]

Ello ha significado un cierto fortalecimiento organizacional, una expresión pública de rechazo a las posiciones que representan al régimen militar y una creciente politización de estos sectores donde se da un complejo juego entre autonomía y vinculación partidaria. Obviamente esta forma exitosa de movilización si bien cohesiona a un sector social, no logra trascender fácilmente a otros.

También la movilización electoral ha sido crucial en un tercer sector: el de los estudiantes universitarios. Quizás se trate del mundo que más parece acercarse a la idea de un movimiento social. [16] En los últimos años han logrado consolidarse Federaciones de Estudiantes en todas las Universidades del país a través de elecciones que favorecen abrumadoramente a la oposición. Al mismo tiempo, en las movilizaciones globales, los estudiantes han sido fundamentales en la presencia en las calles y en la paralización de actividades. Por último, la movilización estudiantil se ha dirigido al ámbito universitario mismo, ya sea en términos de demandas estrictamente corporativas (por ejemplo, en relación a los aranceles), ya sea en términos de cambios más radicales (fin del sistema de Rectores Delegados). Hay dos aspectos, sin embargo, que debili-

tan la acción estudiantil, más allá de los elementos estructurales e institucionales que han implicado un cambio profundo en la condición del estudiante universitario. Por un lado, los límites de la acción puramente agitativa, cocebida en términos de "ingobernabilidad", para ampliar la convocatoria a la masa estudiantil acuciada por sus problemas específicos y a los sectores académicos, lo que permitiría traducir la movilización en efectivos cambios en la situación universitaria. Sin ello, el desgaste y aislamiento de los grupos dirigentes es evidente. Por otro lado, la politización partidaria de la capa dirigente, que hace al movimiento estudiantil muy vulnerable a lo que ocurre en el nivel partidario nacional, aún cuando puedan haber excepciones al respecto.[17]

Cabría referirse brevemente a las movilizaciones de mujeres. Este ha sido un sector especialmente activo en las organizaciones populares y en los momentos de movilización global (aunque paradojalmente las encuestas lo muestran como persistentemente conservador en términos de sus visiones y opiniones). Lo que aparece como significativo en todo este período es el surgimiento de una demanda específicamente femenina, que no se reduce a la lucha política contra el régimen, expresada en un número importante de grupos y círculos de mujeres que se hacen presentes en las movilizaciones globales. Asimismo, la movilización propiamente política ha tenido caracteres originales en tanto ha superado mejor que las estructuras partidarias las tendencias a las divisiones por razones orgánicas o estratégicas. [18] Quedan en pie las interrogantes sobre la eventual marginalización de la demanda femenina o su absorción por las metas políticas globales y sobre la capacidad de resistencia a las presiones centrífugas de las estructuras partidarias.

Finalmente, para completar este panorama, al examinar el impacto que las diversas formas de movilización tienen en la opinión pública, las diversas encuestas mues-

tran la amplia legitimidad de formas de movilización como la huelga, las peticiones a las autoridades, las marchas, los "caceroleos", es decir, de aquéllas que se consideran pacíficas, y formas de presión encaminadas a la negociación. En cambio, las tomas, los cortes de tránsito, los rayados de muralla, las bombas y apagones de luz tienden a ser mayoritariamente rechazadas, es decir, aquéllas que aparecen como alterando un orden sin dirigirse a una solución concertada. Al mismo tiempo, las encuestas de opinión pública muestran una abrumadora mayoría que se pronuncia contra el régimen militar y quisiera su término, pero, a la vez, quiere salidas negociadas. Finalmente, en lo que nos parece relevante para nuestro análisis, existe una aceptación generalizada de la importancia de los partidos políticos, acompañada de una profunda crítica y desencanto de las actuales organizaciones y liderazgos políticos. [19]

Límite y potencialidad de las movilizaciones

El régimen militar fracasó en su proyecto de eliminar la acción y los actores colectivos y sus expresiones políticas, pero sí logró un cierto grado de desarticulación. Ello significa la reemergencia de una sociedad civil que erosiona al régimen y gana espacios de organización y expresión: la transición invisible. No hay en esta reemergencia nuevos actores sociales autónomos, con una relativa excepción en el caso de las mujeres y en menor grado del sector de jóvenes pobladores, sino la presencia de los actores clásicos, más debilitada, y la incorporación de elementos propios de la experiencia dictatorial como son los núcleos de animadores culturales y de de-

Scanned with CamScanner

rechos humanos, los grupos culturales y religiosos, las organizaciones de subsistencia, etc.

Hubo movilizaciones sociales populares: pero no bastaron para terminar con el régimen. La transición invisible fue incompleta y no se transformó en transición formal.

Pueden insinuarse tres líneas de interpretación sobre lo dicho hasta aquí.

En primer lugar, está el sentido de las transformaciones estructurales institucionales del régimen militar. Como ya hemos indicado y se ha señalado en múltiples estudios, ellas se orientaron hacia la reducción, debilitamiento, empobrecimiento y atomización de los espacios de constitución de actores y movimientos sociales, y no se crearon, a la brasileña, espacios de constitución de actores sociales inéditos. Ilustrando este fenómeno, un estudio muestra la disminución del porcentaje de asalariados en la población activa de 53% en 1971 a 45% en 1980 y a 38% en 1982; el porcentaje de "excluidos" en la población activa (desocupados, servicios de empleo mínimo del Estado, empleo doméstico y trabajadores marginales) en los mismos años habría pasado de 14% a 25% y a 36%, respectivamente; el porcentaje de jóvenes "incluidos" habría pasado, en los mismos años, de 80% a 61% y a 49%, respectivamente, y el de mujeres incluidas de 68% a 60% y a 50%. Todo ello permite afirmar la existencia de rasgos de "inorganicidad", "exclusión" e "impermeabilidad" en la estructura social chilena en este tiempo.[20] Lo que también puede caracterizarse en términos de la disminución o debilitamiento de las bases clasistas de la movilización social. Esto tiene varias consecuencias para las movilizaciones populares. Así, cada sector le asigna a ella diversos sentidos dadas las motivaciones muy disímiles en una sociedad altamente fragmentada. A su vez, esto lleva a formas de movilización diferentes y conflic-

Scanned with CamScanner

tivas entre sí, lo que obliga a un tipo de meta genérica que supere la fragmentación, pero que tiende a desgastarse o a reducirse a núcleos militantes al no obtenerse avances visibles en torno a ella ("democracia ahora", por ejemplo). Finalmente, en un contexto altamente represivo, de pérdidas de identidades sociales y de "inorganicidad social", se favorece un tipo de movilización altamente expresiva y emocional y se plantean enormes dificultades para las movilizaciones de tipo reivindicativo e instrumentales. No puede olvidarse, como hemos indicado en otra parte, que la movilización reivindicativa, dominante en la historia chilena de este siglo, se hizo en un marco que combinaba industrialización, ampliación del papel integrador del Estado y régimen democrático, con fuerte presencia del sistema de partidos. Es claro que, en este aspecto, el sector tradicionalmente más importante es el más afectado, el sindicalismo.

En segundo lugar, volviendo a un tema ya tocado, hay un cambio significativo en la "columna vertebral" de la sociedad chilena, esto es, en el modo de articulación entre partidos y organización social. La desaparición del régimen democrático, que ligaba los tres componentes de la "columna vertebral" (Estado, Estructura político partidaria y Base social) cambia el contexto de la relación en términos radicales. Esta vinculación entre los componentes es reemplazada por el sistema de control y coerción. El Estado disminuye su rol redistributivo y receptor de demanda social y aumenta enormemente su capacidad coercitiva. Se corta el vínculo entre Estado y el nivel político partidario y también, al menos en el inicio, entre este último y la base social debido al fenómeno represivo. Esto deja lo político partidario "colgando" en términos de nuestro esquema (ver el gráfico en el capítulo 2) y congelado. Desde muy temprano surge una arena de "reemplazo" donde empieza a reactivarse complicadamente la relación par-

Scanned with CamScanner

tido-base social, que es la Iglesia, la que a su vez aparece como el único actor social frente al actor estatal militar. Finalmente, tanto los fenómenos represivos, como las transformaciones institucionales y estructurales introducidas por el régimen militar han significado un proceso mayor de marginalización, atomización e inorganicidad de la base social, como indicábamos más arriba.

Más allá de esta transformación general, y donde hay que introducir el impacto de nuevas intervenciones estatales en la base social como son los programas especiales de empleo y de extrema pobreza así como las redes oficiales establecidas respecto de las organizaciones de mujeres populares, hay dos dimensiones que interesa destacar y a las que hemos en parte aludido.

Por un lado, se da una paradoja y es que, en la medida que se suprime lo político partidista, las energías se refugian en aquel nivel menos visible a la represión. Si, por otro lado, surge un "paraguas" democrático como es el espacio provisto por la Iglesia, el nivel de organización de base empieza a adquirir cierta potencialidad y autonomía, con lo que se invierte la relación anterior donde los niveles intermedio y cupular eran los fuertes y significativos. La paradoja estriba en que, precisamente en las peores condiciones, parecen darse elementos que apuntarían a la construcción de actores populares autónomos que si bien inicialmente reproducen en una nueva arena la vinculación político partidista, poco a poco pueden adquirir dinámicas propias. La proliferación de organizaciones de base de muy diverso tipo (de subsistencia, defensa, sociabilidad, juveniles, culturales, desarrollo, etc.), es una prueba de ello. Pero ella se da paralelamente a un proceso de alta atomización y desencuentro con los niveles más globales de acción, negociación, concertación y presión, predominando los aspectos defensivos de una organización frente a un mundo que se rechaza y que la rechaza.

Scanned with CamScanner

Por otro lado, la relación tradicional de "imbricación" entre liderazgo político y organización social no es reemplazada por una nueva matriz, pero tampoco permanece incólume. Esto implica, por una parte, la relativa continuidad de una clase política capaz de representar y concertar, pero distante de la sensibilidad de masas. En una clase política como ésta predominan los problemas ideológicos y organizacionales, lo que dificulta la transformación de la acción social en fuerza y propuestas políticas. En el interior de la estructura político partidaria, entonces, la redefinición y aceptación de la autonomía del actor social es lenta y ambivalente. Todo ello explicaría el desencuentro entre clase política y el mundo popular marginalizado crecientemente, con prácticas y sociabilidades significativas pero que no necesariamente se "representan" en los actores políticos o institucionales clásicos ni tampoco logran convertirse en actores nuevos autónomos. Estaríamos pasando de un modelo de "imbricación", primero, a uno de "desarticulación" luego, para emerger, posteriormente, uno de "tensión" entre liderazgo político y mundo social popular. Por otra parte, se produce, como hemos indicado, una cierta autonomización de una franja político social de militantes de base, que actúa como motor de las movilizaciones. Se trata de una cierta segregación de la base militante (que no debe confundirse con la "base social"), respecto de los núcleos dirigentes, que se vincula a un sector más amplio de animadores sociales, militantes de derechos humanos, educadores populares, etc., lo que se denomina el "activo político social". Este sector sufre procesos de radicalización contradictoria y busca asumir la reivindicación de un movimiento popular autónomo; pero su proceso de radicalización ideológica no se corresponde con lo que ocurre al nivel de la "base social" de las organizaciones, donde coexisten una radicalidad más visceral que ideológica con la adopción de racionalida-

Scanned with CamScanner

des más instrumentales que permitan la sobrevivencia. Es este sector militante el que tiende a impulsar a la politización de las organizaciones de base y a reivindicar opciones maximales en el momento en que se plantea el tema de la transición. Es la otra cara del desencuentro entre política y sociedad, producto de la desarticulación y compleja y lenta recomposición de la "columna vertebral".

En tercer lugar, en relación al proceso mismo de transición política de un régimen militar a uno democrático, las movilizaciones nos muestran que, en el caso chileno, la ausencia de diseño político de cambio, consensual y coherente, por parte de la oposición política, el predominio ideológico y expresivo y, por lo tanto, de sello fragmentado y no unitario, y la debilidad de la dimensión político-instrumental, marcan los límites de la movilización concebida como "la" estrategia política. Ella es un componente indispensable en una estrategia de cambio, pero combinada con otros procesos políticos que definen una transición.

Vale la pena recordar aquí que parece haber, como señalamos en el primer capítulo, fuertes tensiones, si no contradicciones, entre un proceso de democratización como respuesta a una demanda por creciente igualdad, organización, participación y afirmación de sujetos colectivos y un proceso específico de transición entre dos regímenes que sólo resuelve el problema del gobierno del país y apunta a llegar a las primeras elecciones libres. Bajo los regímenes militares o dictaduras se dan mezcladas muy distintos tipos de lucha, algunas de las cuales apuntan al fenómeno de democratización y transformación global de la sociedad y otras responden a la demanda por democracia política específicamente, teniendo las primeras componentes ideológicos, emocionales, organizativos, simbólicos que no necesariamente se enmarcan en las "rigideces" de una dinámica que sólo

Scanned with CamScanner

atañe al régimen político. En una dictadura todas estas luchas se dan confundidas, aunque todas imaginen la caída de la dictadura y la democracia como las únicas metas perseguidas. Y lo que las transiciones de dictadura a democracia muestran es que ellas sólo se dan si el tema del régimen político asume prioridad en la conciencia y práctica de los actores por encima de todos los otros temas. Y en una sociedad en crisis, segmentada, fragmentada por enormes injusticias y desigualdades, el problema de la clase política es entender esta prioridad "seca" del tema del cambio de régimen, como condición sine qua non de cualquier otra transformación de la sociedad, y movilizar la gente en términos de esa meta. El drama de esto es que en algunas sociedades esto lleva a marginalizar o excluir de las transiciones a los sectores que representan el eje democratización, o de transformación global, los que, paradójicamente, son los que con sus movilizaciones y protestas provocaron la erosión, crisis o desmembramiento de la dictadura. No hay transición sin presión y movilización que desafíe o genere crisis en el régimen dictatorial; pero a su vez, no hay posibilidad de transición si no se subordina la demanda por transformación que expresa esa movilización a la demanda estrictamente política. Si esto no se entiende como un problema de demandas contradictorias que deben ser resueltas políticamente y si además se les identifica con actores, entonces, se tiende a excluir de la transición a los sectores que expresan esa demanda por transformación global. Y ese ha sido el caso chileno donde se tiende a excluir de la transición a gran parte del mundo popular. (Por ejemplo, el Acuerdo Nacional, con todos sus méritos, excluye vastos sectores de Izquierda y los aísla; la Asamblea de la Civilidad, con todo su valor, prioriza el mundo de los organizados e integrados por sobre los marginales y sin organización). Porque en los procesos de transición algunos de los actores políticos

Scanned with CamScanner

principales se han constituido desgajándose del régimen militar y su presencia necesaria se hace muchas veces a costa de la marginalización de los sectores que precisamente más sufrieron la dictadura y contribuyeron a su crisis.

En un proceso de transición de régimen militar a democracia en que no hay colapso o derrocamiento del régimen ni vacío institucional, el problema de la integración de los sectores populares reside en convertir una demanda por condiciones de vida y por transformación social en una demanda específica por democracia política. Ello puede hacerse a través del sofocamiento de las luchas sectoriales y sus formas de movilización, lo que implica aumentar la dependencia y subordinación de los actores populares, sociales y políticos, o simplemente excluirlos. Ello implicaría larestricción del alcance democrático de una transición. Pero también puede hacerse a través de la incorporación de la sensibilidad popular y sus formas de expresión a una meta político institucional que permite a la vez negociación con los titulares del poder, concertación con los sectores moderados, pero también movilización popular masiva. El mejor ejemplo de ello es la movilización en torno a la fórmula institucional alternativa "elecciones directas" en Brasil que logró sumar todas las formas de organización y expresión popular que se habían desarrollado durante el régimen militar. Llama la atención las enormes dificultades de la oposición chilena de plantear consensualmente un diseño parecido de transición, con lo que las dimensiones políticas de ésta aparecen desvinculadas o a espaldas del mundo popular.

En síntesis, podemos terminar este capítulo con una conclusión: Las movilizaciones sociales por sí mismas reconstruyen la sociedad civil parcialmente y transfor-

Scanned with CamScanner

man los regímenes militares; pero no logran su término. Sin momento político, no hay fin de la dictadura y transición democrática.

Scanned with CamScanner

NOTAS

1.- Una primera versión parcial de este capítulo fue preparado para el volumen, en prensa, editado por Susan Eckstein "Protest and resistance movements in Latin America". Hemos usado también material contenido en "Política y sociedad en la marginación e integración del mundo popular..." op.cit. Este capítulo contó con la colaboración bibliográfica de Federico Joannon.

Una completa descripción de los procesos de movilización descritos en este capítulo, aunque limitada a las Protestas entre 1983-1984, en G. De la Maza y M. Garcés, "La explotación de las mayorías. Protesta Nacional 1983-1984" (ECO, Santiago, 1985).

2.- Ver G.O'Donnell y Ph. Schmitter, "Political life after authoritarian rule: tentative conclusions about uncertain transitions", en O'Donnell, Schmitter, Whitehead, eds., "Transitions from authoritarian rule. Prospects for democracy" (Johns Hopkins University Press, 1986).

3.- Ver sobre esta perspectiva de los nuevos movimientos sociales, en un plano más teórico y referido en parte a las sociedades desarrolladas, A. Touraine, "La voix et le regard" (Paris, Seuil, 1978), "Les Mouvements Sociaux: objet particulier ou probleme central de l'analyse sociologique" (Revue Fraçaise de Sociologie, XXV, 1984), "Movements sociaux d'aujourd'hui. Acteurs et analystes" (Ed. Economie et Humanisme, Les Editions Ouvrieres, Paris, 1982). También K. Eder "A new social movement?" (TELOS, Nº 52, Summer 1982); J. Cohen, "Between crisis management and social movements. The place of institutional reforms" (TELOS, Nº 52, Summer 1982); T. Evers, "La faz oculta de los nuevos movimientos sociales" (Revista Punto Crítico, Año VII, Nº 25, Bs. Aires 1985).

Para el caso brasilero, M. Grossi, "El cuestionamiento de la política partidaria en Brasil" (mimeo, 1985), P. Singer y V. Caldeira Brant, "O povo em movimento" (Editora Vozes, Petropolis, 1980).

Para el caso chileno, el volumen editado por CLACSO-ILET "Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile" (Santiago, 1986, especialmente, la Introducción de G. Campero); M.A. Garretón", "Dictaduras y Democratización" (FLACSO, Santiago, 1984, cap. 3).

4.- "El proceso político chileno", op.cit. cap. XI.

5.- Ver un panorama general de movilizaciones de jóvenes, pobladores, movimiento sindical, campesinos y mapuches en CLACSO-ILET "Los movimientos sociales..." op.cit. Sobre los movimientos de jóvenes, I. Agurto, M. Canales, G. de la Maza, eds. "Juventud chilena: razones y

Scanned with CamScanner

percepción generalizada de ello en los diversos sectores sociales. Por otro lado, la capacidad articuladora de esta organización tanto respecto de las dos corrientes del sindicalismo chileno (una de orientación más política ligado a la industria y minería tradicionales, protegidas por el Estado y en manos privadas, y la otra, más gremialista ligada a las grandes empresas estratégicas del Estado o controladas por el capital extranjero) como respecto de las organizaciones gremiales de las clases medias.

8.- El Comando Nacional de Trabajadores fue formado por varios conglomerados sindicales, además de la Confederación de Trabajadores del Cobre: la Coordinadora Nacional Sindical, con base en industria, minería, construcción, organizaciones sindicales campesinas, sectores del profesorado, en la que se encuentran sectores progresistas democratacristianos con sectores tradicionales y renovados de la izquierda; la Central Democrática de Trabajadores, (CDT), cuyos antecedentes son el Grupo de los Diez y la Unión Democrática de Trabajadores, de carácter centrista, sobre todo democratacristiano, con base en las empresas del Estado, electrometalurgia, organizaciones campesinas y empleados fiscales; el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), menor que las otras dos organizaciones, con base en los trabajadores del transporte y gráficos; la Confederación de Empleados Particulares, centrista, retirada de la CDT, que representa a los empleados particulares de bajos ingresos. Con posterioridad, se incorporan la Federación del Petróleo y la Confederación Bancaria . El Comando llamó a un paro indefinido que fracasó, lo que irá disminuyendo el peso del sector sindical en las movilizaciones.

9.- La Asamblea de la Civilidad agrupa al Comando Nacional de Trabajadores, a representantes de organizaciones de pobladores, a los estudiantes universitarios, a las organizaciones de profesionales, transportistas, a organizaciones de mujeres, de Derechos Humanos, al Grupo de Estudios Constitucionales, etc. Su carácter "cupular" es innegable, pero también lo es su capacidad de convocatoria. La hegemonía en la representación de su dirección la tiene claramente la Democracia Cristiana y, en términos de organizaciones sociales, la Federación de Colegios Profesionales. En todo caso, participan en ella, de modo desigual, todos los sectores políticos de oposición. La Asamblea publicó un documento resumen de todas las reivindicaciones sectoriales, llamado la "Demanda de Chile".

10.- Ver E. Valenzuela, "La rebelión de los jóvenes" (SUR, Santiago, 1985); Agurto, Canales, De la Maza, "Juventud chilena..." op.cit, capítulo 2.

11.- Datos estructurales con las transformaciones en los sectores obreros y "marginales" en J. Martínez y E. Tironi, "Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación 1970-1980" (Ediciones Sur, Santiago, 1985). Sobre la relación sindicatos-pobladores, R. Baño, "Lo social y lo político", FLACSO, 1985 cap. 2).

12.- En 1981, el número de afiliados sindicales había disminuido en 53,7% respecto de 1972. Después de la crisis económica, hubo una nueva disminución, llevando el porcentaje de afiliados a un 8.7% de la fuerza

Scanned with CamScanner

de trabajo y a 10,2% de los ocupados en 1983 (datos en J. Ruiz Tagle, "El sindicalismo chileno...", op.cit. 18-20). Ver Nota 8 sobre los diversos conglomerados sindicales y sus orientaciones. Uno de los debates más importantes al respecto es en torno a la creación de una central sindical unitaria o la mantención de centrales ideológicas (la Central Democrática de Trabajadores, de orientación democratacristiana, aboga por la mantención de centrales ideológicas, en tanto la Coordinadora Nacional Sindical, con sectores demócratacristianos progresistas y la Izquierda, plantea la recreación de una central única). Este debate está también afectado por las afiliaciones internacionales de las diversas organizaciones sindicales. Ver Campero y Valenzuela, "El Movimiento...", op.cit.; G. Campero, "El sindicalismo internacional y la redemocratización de Chile."(Santiago, CED, 1984); J. Ruiz Tagle, "El sindicalismo...", op.cit.

13.- V. Espinoza, "Los pobladores en la política", (En CLACSO-ILET, "Los movimientos sociales...", op.cit., págs. 31-51); R. Baño, "Lo social...", op.cit., caps. 3 y 4; Philip Oxhorn, "Democracia y participación popular: organizaciones poblacionales en la futura democracia chilena" (FLACSO, Santiago, Contribuciones Nº 44, Diciembre 1986). Un ejemplo de los problemas de relación entre partidos y movimiento de pobladores y de las fragmentaciones políticas existentes que se trasladan al medio poblacional fue el Congreso Unitario de Pobladores en 1986, llamado por varias agrupaciones y que no logró articularse con las organizaciones de base. En el medio poblacional funcionan en el último tiempo cuatro "referentes organizacionales", uno más cercano a la Democracia Cristiana, otro a la Izquierda Cristiana, otro al Partido Comunista y otro al MIR. Los tres últimos, de izquierda, han intentado una agrupación común, que se ha enfrentado a disputas de representatividad y control político. Es interesante señalar que en este medio se da la mayor radicalización de la base militante respecto de sus directivas oficiales y respecto también de la base social con que trabájan. Ver Ph. Oxhorn, "Democracia y participación...", op.cit., cap. I.

14.- El caso de los transportistas es el más elocuente. Sobre estos sectores, ver G. Campero, "Los gremios empresariales" (ILET, Santiago 1984).

15.- M.A. Garretón, "Estado de Sitio y elecciones en la sociedad" (Revista Mensaje, Nº 340, julio 1985).

16.- Ver sobre el movimiento estudiantil, Ana Tironi, "Esquema histórico del movimiento estudiantil chileno 1906-1973" (En M.A. Garretón y J. Martínez, "Biblioteca el movimiento estudiantil", Ediciones SUR, Santiago, 1985, Tomo IV, 2a. parte) para una visión histórica. Sobre el movimiento estudiantil bajo el régimen militar, J. Auth, "Pour une intervention sociologique sur la lutte etudiante au Chili" (Memoire DEA, EHESS-CADIS, Paris 1985); E. Valenzuela, "Estudiantes y democracia" (Santiago, mimeo, 1986); Esteban Valenzuela y E. Silva, "Movimiento estudiantil: un actor social relevante" (Mensaje, Santiago, Diciembre, 1985); M.A. Garretón, "Las elecciones estudiantiles universitarias" (Mensaje, Diciembre, 1986); Agurto, Canales, De la

Scanned with CamScanner

subversiones" (ECO-FOLICO-SEPADE, Santiago, 1985). Sobre los movimiientos de pobladores y las tomas de terreno E. Morales y S. Rojas, "Relocalización socio-especial de la pobreza. Política estatal y presión popular, 1979-1985" (FACSCO, Documento de Trabajo Nº 280, 1986); A. Rodríguez (Coord.), "Campamentos Raúl Silva y Monseñor Fresno" (Sur, 1984); A. Rodríguez, "Por una ciudad democrática" (Sur, 1983); V. Espinoza, "Tipos de acción poblacional y movimiento popular urbano en Chile" (Sur, Mayo 1983). Sobre las acciones del movimiento sindical, G. Campero y J.A. Valenzuela, "El movimiento sindical en el régimen militar chileno" (ILET, 1984); M. Barrera, "La demanda democrática de los trabajadores" (CES, Santiago, 1986); J. Ruiz-Tagle, "El sindicalismo chileno después del Plan Laboral" (PET, Santiago, 1985). Sobre las acciones de las organizaciones económicas populares, puede consultarse los diversos estudios del Programa de Economía del Trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano (PET), entre otros, C. Hardy,"Hambre+dignidad = Ollas Comunes" (PET, 1986). Sobre acciones culturales, ver cap. IV de "Juventud chilena..." op.cit.; P. Gutiérrez "Agrupaciones Culturales. Una reflexión sobre las relaciones entre política y cultura" (CENECA, 1983). Sobre las luchas anti-represivas y el movimiento de Derechos Humanos, ver H. Fruhling "Disciplinando la sociedad; Estado y sociedad civil en Chile 1973-1981", (Santiago, FLACSO, 1982). Sobre las movilizaciones en torno a los detenidos-desaparecidos, H. Vidal, "Dar la vida por la vida. La Agrupación Chilena de Familiares de Detenidos-Desaparecidos" (University of Misessotta, 1982). Las luchas contra la tortura, en H. Vidal, "El movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Derechos Humanos y la producción de símbolos nacionales bajo el fascismo chileno" (Institute fot the Studies of Ideology and Literature, University of Minessotta, 1986).

6.- De la Maza y Garcés, op.cit., explican así el cambio de Paro a Protesta: "El antecedente inmediato de la Primera Protesta es el de un movimiento sindical que se politiza, que salta los canales impuestos por el régimen. La CTC (Confederación de Trabajadores del Cobre), asume la conducción del movimiento sindical y convoca a un Paro con objetivos políticos explícitos... De hecho, sólo algunas zonas de la CTC apoyaban el Paro, mientras la importante zonal de Chuquicamata (y también Andina) tenían una postura contraria. Por otro lado, otras expresiones sindicales, controladas por la Democracia Cristiana, tampoco apoyaban el llamado a paro. Por último, era visible el riesgo represivo que el paro involucraba, represión avalada por el marco legal vigente en que el sindicalismo se desenvolvía... La convocatoria deriva en "expresión pública del descontento..." ("La explosión de las Mayorías...", op.cit. pág. 27)

7.- J. Martínez, (en "Miedo al Estado, miedo a la sociedad. Sobre las protestas opositoras en Chile y el problema del miedo", Proposiciones, 12, 1986) explica la importancia que tiene el que la Primera Protesta haya sido convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre. Por un lado, está la ubicación estratégica de la minería del cobre y la

Scanned with CamScanner

Maza, eds. "Juventud chilena...", op.cit., cap. 3.

17.- En las elecciones estudiantiles de 1986, se evidenció esta dependencia del movimiento estudiantil respecto del sistema partidario al expresarse las diversas opciones electorales en listas que respondían casi exactamente a la conformación de los bloques políticos nacionales, creándose una división entre los sectores de oposición que no existió al realizarse en 1984 ó 1985, según las Universidades, las primeras elecciones democráticas de Federaciones, en las que la alineación fue oposición vs. gobierno. Ver "Las elecciones estudiantiles universitarias", art.cit.

18.- Ejemplo de esto es el Movimiento Mujeres por la Vida, en el que participan mujeres de todos los partidos y de otros movimientos de mujeres. En Diciembre de 1983 realizó el acto más unitario que se conoce de oposición masiva al régimen y su planteamiento permanente es la unidad de toda la oposición. Sobre éste y otros movimientos de mujeres, M.A. Meza, compiladora, "La otra mitad de Chile" (Ed. CESOC, Instituto para el nuevo Chile, Santiago, 1986); N. Molina, "movimiento de mujeres en Chile (1983-1986). Desafíos y problemas en la constitución de una nueva identidad femenina" (Santiago, Mimeo, Mayo, 1986; incluye una cronología de actos y movilizaciones de mujeres en el período estudiado).

19.- Ver FLACSO, "Encuesta sobre la realidad socio-política chilena: resultados preliminares" (Documento de Trabajo Nº 81, Mayo, 1986); FLACSO-CED, "Opinión pública y cultura política" (Santiago, 1987); C. Huneeus "Los chilenos y la política" (CERC-ICHEH, Santiago, 1987).

20.- Martínez y Tironi, op.cit.

Scanned with CamScanner

V

Crisis y resurrección de los partidos políticos

Scanned with CamScanner

UNA PARTE FUNDAMENTAL de la reconstrucción política de Chile tiene que ver con los actores propiamente políticos. Y entre ellos, los partidos ocupan un lugar principal. No se trata de creer que la política la hacen sólo los partidos. Es una constante que atraviesa todas estas páginas evitar esa confusión. Pero también debe reconocerse que la política y la sociedad chilena no pueden entenderse si no hay referencia a este tema, por más críticamente que se le trate. Ni se puede reducir la sociedad a los partidos ni un análisis de ella puede hacerse prescindiendo de éstos. En este capítulo abordaremos este tema desde la perspectiva del sistema de partidos en Chile y su vinculación con la sociedad, sin entrar en detalles sobre los partidos individualmente considerados, dada la perspectiva general de este libro.[1] En primer lugar haremos algunas reflexiones sobre la ubicación de los partidos en la sociedad a un nivel más abstracto. Luego discutiremos los rasgos del sistema partidario en el período democrático. Enseguida veremos qué ha ocurrido con este sistema durante el régimen militar. Finalmente esbozaremos algunos elementos que deben ser tomados en cuenta en una futura democracia respecto de este tema.

Scanned with CamScanner

Tanto en este capítulo como en el siguiente combinaremos permanentemente el plano analítico con el plano mas normativo, sin entrar en opciones concretas o coyunturales.

Partidos y sociedad

Toda sociedad tiene un "momento" partidario en su constitución y desarrollo, es decir, un momento de organización de la acción colectiva en la lucha por determinar la marcha del conjunto de la sociedad, y donde tal acción tiende a estructurarse en torno a las diversas direcciones que quieren darse a esa marcha. Los partidos políticos representan ese "momento" de toda sociedad, buscando articular la universalidad y generalidad de las grandes decisiones sobre el destino de la sociedad con la particularidad de las orientaciones, intereses, valores, ideas de los diversos sectores sociales que la componen. Los partidos representan una forma determinada de relación entre la política y la sociedad, entre el mundo de la voluntad general y el de las relaciones sociales entre individuos y grupos. Como tales relaciones y las orientaciones que las rigen son siempre particulares, ningún partido podrá aspirar a representar la universalidad del pueblo o la nación aunque siempre tendrá a éstos como referente, sin lo cual se reduciría a una representación corporativa de un sector o una clase social. El partido "representa" sectores sociales, culturales, ideológicos, homogeniza perspectivas y aspiraciones, pero también convoca, interpela, promueve. En su relación con la política y el Estado, el partido aparece como mediador, como canalizador de demandas sociales; pero ésta no es

Scanned with CamScanner

una función neutra en la que el partido asuma un papel de puro reflejo: el partido también genera su propia oferta, se convierte en referente y organizador. El partido es un "constituyente" y un "constituido" a la vez. Las fronteras entre partido y sociedad son difusas, de lo contrario tenemos un partido de profesionales, de cuadros, alienado del resto de la sociedad, convertido en subcultura. Pero, son también nítidas, de lo contrario tenemos una masa manipulada que se confunde con el partido o una sociedad informe que se debate entre puras particularidades.

En otro plano, hay que apartarse de las ilusiones globalizantes y totalizantes y reconocer que siempre habrá una tensión irreductible entre un principio, un proyecto, y los medios para llevarlos a cabo. Lo que es válido para otros ámbitos humanos, como la relación entre cristianismo e Iglesia, amor y matrimonio, revolución y movimiento revolucionario, etc., es también válido aquí: es decir, lo que es un medio o un instrumento para algo, puede ser también su obstáculo. No habrá nunca identidad entre un proyecto y los instrumentos con los cuales el proyecto se quiere realizar. La gran tentación de un militante es la búsqueda totalizante, la confusión del proyecto o principio con el instrumento, la reificación del primero en el segundo, en el partido.

Lo dicho se refuerza cuando se considera la complejidad de la sociedad contemporánea. El mundo en que vivimos es demasiado denso y complejo como para que pueda ser representado en su conjunto a través de un instrumento particular y específico como son los partidos políticos. Ya se trate de uno, dos o muchos partidos o de un caudillo, el momento partidario de la sociedad es insustituible e ineludible. Pero, la sociedad no se reduce nunca a ese puro momento: hay otros momentos que no podrán nunca identificarse a uno o todos los partidos. Los mejores ejemplos históricos se encuentran en ciertos mo-

Scanned with CamScanner

vimientos sociales como el obrero, el de estudiantes, el de mujeres: nunca podrán reducirse al sistema partidario y nunca sumados todos esos movimientos podrán representar a toda la sociedad sin la existencia de partidos. En este mundo complejo, los partidos son un instrumento, momento, o forma de representación; pero un proyecto de sociedad es algo demasiado complicado para que pueda ser encarnado sólo en un partido. Siendo sólo una instancia de la sociedad, los partidos no son, como unos u otros han pretendido, ni su "síntesis", concepto de connotación totalitaria, ni su "vanguardia", concepto que niega la dimensión representativa de los partidos.

Finalmente, digamos que la noción de "sistema de partidos" tiene la virtud, a diferencia de la "teoría del partido", de reconocer el momento partidario como necesariamente diverso y aceptar que no existe "el" partido, sino "los" partidos. Un sistema de partidos implica la noción de pluralidad y de extensión en todo el espectro ideológico político de la sociedad. Su función es respetar y representar la diversidad al mismo tiempo que permitir su reducción parcial a grandes categorías que aseguran la eficacia en las decisiones sobre la marcha general de la sociedad. Por lo tanto, el juicio que debe hacerse sobre el sistema de partidos en cada sociedad corresponde a este triple papel de representación, convocación o dirección, y concertación: ¿están todos los sectores y toda la variedad cultural, social e ideológica, es decir, la diversidad de demandas y aspiraciones representadas en el conjunto de los partidos? ¿Se logran formular las propuestas a la sociedad y asegurar tanto el conocimiento social de ellas como la eficacia de su implementación? ¿Se logra establecer un sistema adecuado de competencia y cooperación interpartidaria, que permita la selección de las respuestas adecuadas a la voluntad de la gente y que asegure una resolución institucional de los conflictos?

Scanned with CamScanner

Los partidos en la democracia chilena.

El sistema partidario que se desarrolló hasta 1973 debe ser puesto en el contexto de un régimen político democrático restringido hasta 1958 y de participación masiva desde entonces, y del proceso, ya mencionado en los otros capítulos, de creciente incorporación de diversos sectores sociales a la vida económica, social, cultural y política, que se hace en forma segmentada, gradual, conflictiva y sujeta a la capacidad de organización y presión sobre el Estado. Hemos indicado también que este último se convierte en el referente casi único de la acción colectiva y que, en este contexto, el sistema de partidos en Chile se convierte a su vez en el instrumento principal de acceso al Estado y en el canal obligado para que una categoría o sector se convierta en actor nacional. Las organizaciones sociales (sindicatos, federaciones de estudiantes, movimiento campesino o poblacional) son normalmente una articulación de liderazgo político y representación de una base social. De aquí se derivan algunos rasgos que caracterizan al sistema de partidos en este período en Chile y que poseen aristas positivas y negativas.

En primer lugar, la **estabilidad** del sistema de partidos es un elemento claramente positivo en la medida que ofrece a los nuevos sectores que se incorporan a la vida social y política referentes claros en lo ideológico, pautas de acción relativamente formalizadas, liderazgos y estructuras perdurables. Asimismo, se permite un sistema continuo de reproducción de la clase política y las relaciones interpartidarias poseen un código consensual.

La estabilidad del sistema de partidos, con pocos quiebres hasta 1973, se explica en parte por otro rasgo, cual es el carácter nacional del espectro partidario en el sentido de proyección territorial (sin la existencia de "partidos regionales") y también en términos de su **inclusividad.** En otras palabras, el espectro partidario abarca toda la

Scanned with CamScanner

gama ideológica (Derecha, Centro, Izquierda) y a veces con más de una opción organizacional en cada tramo del espectro. Como este sistema logra constituirse como tal antes del proceso de incorporación masiva de la población a la vida política, cuando ésta se produce encuentra ya canales constituidos para su expresión y representación.

Un sistema de partidos estable y completo ideológicamente, que se constituye en el elemento principal de acceso al Estado y la vida política, posee también el importante valor de ser **representativo** de los diversos sectores culturales y sociales del país. En ese sentido es un sistema capaz de realizar consensos y concertaciones que cuenten con respaldo social, lo que le da al sistema político en su conjunto una gran capacidad de regular los conflictos y de reproducirse. En parte la estabilidad de la democracia política se debió en Chile a estos rasgos del sistema de partidos.

Estable, diversificado ideológicamente y políticamente inclusivo, representativo de la sociedad expresando y canalizando sus conflictos y consensos, este sistema partidario tenía también algunos rasgos críticos.

Por un lado, y ello es un rasgo de la sociedad chilena en su conjunto, no existían otros canales institucionales y organizacionales, excepto en el mundo de la derecha, suficientemente autónomos del sistema partidario y que expresaran intereses corporativos, demandas sociales, ideas o aspiraciones colectivas y sectoriales.

La sociedad civil era así débil en relación a la sociedad política, las organizaciones frágiles en la base social. Hay entonces, una relativa **partidización** de la vida social pública, en el sentido de una gran debilidad de otras expresiones organizativas a nivel local o nacional y una cierta dependencia del recurso partidario. Este fenómeno se expresa en la relación de adhesión-rechazo por parte de vastos sectores hacia el sistema de partidos. Se

Scanned with CamScanner

le reconoce a éste su validez y representatividad, puesto que se participa en la competencia electoral y se busca cierta protección clientelística, pero se critica y denuncia el "sectarismo" y la "politiquería": hay, así, un atractivo del "independentismo", pero enormes dificultades para darle un espacio en la política.

Por otro lado, la solidez y extensión de una clase política que asegura la capacidad de concertación y representación, tiene como contraparte su tendencia a la autonomización. Ello se expresa en dos rasgos del sistema de partidos. Uno de ellos es la constitución por parte de los partidos de verdaderas subculturas diferenciadas unas de otras, donde el tipo de adhesión o militancia es casi religiosa, con códigos internalizados que abarcan toda la vida del militante, donde el partido es todo para el individuo y donde la "razón de Estado" es la "razón de partido". Siendo la militancia una especie de modo de vida, la política pierde su carácter secular y hay una tendencia a la instrumentalización del resto de las esferas de la vida social. Este rasgo, positivo desde el punto de vista de la homogeneización de la extrema diversidad social, se constituye en un elemento obstaculizante de las relaciones entre partidos, que se transforman en relaciones entre cosmos diferentes, y entre los partidos con el resto de la sociedad, porque el militante y el partido en su conjunto tienden a identificar a la sociedad con sus propios valores, intereses y dinámicas. El otro rasgo, en parte relacionado al anterior, es el inmenso peso ideológico-doctrinario de los partidos, donde la unidad partidaria se encuentra no en una determinada visión programática sino en concepciones y proyectos globales sobre el ser humano y la sociedad. Se trata así de especies de Iglesias en que los militantes se definen por una determinada fe. Este rasgo se expresa en la tendencia a definir proyectos completos de tipo excluyente, lo que fortalece una visión mesiánica del partido, con una es-

Scanned with CamScanner

casa comprensión de los medios concretos para realizarlos. Los ejemplos de la "revolución en libertad" y la "vía chilena al socialismo" ilustran sobre la envergadura de unos objetivos postulados ideológicamente y de unos medios o instrumentos demasiado pobres para tan altos fines. Asimismo, la definición de los procesos históricos a los que había que responder se hacía a partir de grandes elaboraciones ideológicas, perdiendo de vista muchas veces sus significados reales.

Todo lo anterior es de algún modo la contraparte negativa de ese rasgo de estabilidad que habíamos mencionado. Porque la estabilidad significa también cierta rigidez y dificultad de adaptarse a nuevas circunstancias.

Esta rigidez se expresó también en un tercer rasgo crítico, cual es la dificultad de establecer alianzas estables y, por lo tanto, dado el componente altamente ideológico de los partidos, la tendencia a la polarización del sistema partidario. Así, cada partido enfatizaba los elementos conflictivos e intransables de su proyecto y cada proyecto aparecía como totalmente excluyente de otros y por lo tanto sólo realizable por el propio partido. Hay en este ideologismo y tendencia a la polarización dos aspectos. Uno se refiere al elemento institucional, donde si bien el sistema obligaba al gradualismo y la negociación, no se proveían mecanismos que facilitaran los acuerdos y alianzas para formar mayorías relativamente estables. El otro aspecto tiene relación con este fenómeno del partido como una subcultura, como portador mesiánico de un proyecto global de sociedad, donde a veces importaba más la diferenciación de su identidad que la cooperación en programas y políticas comunes.

Finalmente, señalemos que otra deficiencia del sistema de partidos era la ausencia de una institucionalización legal del mismo, que le diera a los partidos un determinado status y fijara normas generales respecto de

Scanned with CamScanner

sus atribuciones y responsabilidades públicas y algunos principios básicos que aseguraran su democracia interna. Al carecer de este rango institucional, los partidos aparecen como algo propio de iniciados, pierden transparencia ante los ciudadanos y no hay forma de garantizar los derechos de los militantes y la democracia interna, corriéndose los tradicionales riesgos del caudillismo, el fraccionalismo, el asambleísmo, el burocratísmo y la oligarquización, fenómenos todos estos que afectaron de distinta forma a los diferentes partidos chilenos.

Hasta la década del sesenta el funcionamiento del esquema partidario chileno se basó en una Derecha de doble representación partidaria, liberales y conservadores; un Centro pragmático y pendular entre Derecha e Izquierda, el Partido Radical; y una Izquierda con doble representación partidaria también, socialistas y comunistas. La existencia de otros partidos o las divisiones de los indicados no alteraban sustancialmente un panorama donde el tipo de Centro político dotaba al esquema de gran flexibilidad.[2]

Las modificaciones a este esquema que se esbozan después del ibañismo van a cristalizar en la década del sesenta en un nuevo esquema de funcionamiento del sistema partidario, caracterizado por la unificación de la Derecha tradicional en un partido con posiciones proclives al autoritarismo, el Partido Nacional, el reemplazo en el Centro del Partido Radical por el Partido Demócrata Cristiano, de corte ideológico y alternativista, y la unificación política (no orgánica) de la Izquierda en una matriz de corte marxista-leninista y en un programa socialista, agregándose a los Partidos Socialista y Comunista los grupos escindidos del Centro político. A esto debe añadirse el surgimiento de una Izquierda "extra sistema", representada principalmente por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Esto es lo que inadecuadamente se ha llamado el esque-

Scanned with CamScanner

ma de "tres tercios" y que corresponde llamar esquema tripolar, que se caracteriza por el alto "ideologismo" y rigidez del sistema partidario.[3]

La crisis de 1973 aparece como una exacerbación de los rasgos negativos del sistema de partidos ya señalados, aunque no pueda atribuirse a este sistema la causa del colapso democrático. Por un lado, en todos los puntos del espectro partidario se produjo una relativa incapacidad de canalizar la irrupción en la escena política de sectores sociales antes marginados o confinados a su dimensión puramente corporativa. Así, por ejemplo, como señalamos en otro capítulo, en la Derecha los gremios empresariales desbordaron la derecha política tradicional, en el Centro fueron los gremios profesionales los que desbordaron la conducción política de la Democracia Cristiana, y en la Izquierda ciertos núcleos laborales y poblacionales sobrepasaron la conducción tradicional de sus partidos. Sin embargo, sería falso ver este desborde e incapacidad de conducción como un puro efecto de un movimiento de masas sobre unos partidos inocentes que sólo buscaban canalizarlas. La paradoja estriba en que desde los partidos mismos se alimentó este desborde o, dicho de otro modo, ningún partido apostó al sistema por encima de sus posiciones, sino que sacrificó aquél por el triunfo de éstas, identificando este triunfo con la mantención del sistema político mismo. Es más, en algunos casos se apostó explícitamente a la ruptura del sistema político como fue el caso del conjunto de la Derecha, o se consideró indiferente su mantención como en el caso de la extrema izquierda, o se fue absolutamente ciego en la incapacidad de defenderlo, apoyando tácitamente su destrucción como en el caso de la Democracia Cristiana. Se reforzó, así, uno de los rasgos negativos del sistema de partidos cual era su tendencia a la polarización. En la Derecha, surgió un sector clara y decididamente antisistema como

Scanned with CamScanner

fue Patria y Libertad, y en la Derecha tradicional misma se fortalecieron las posiciones antidemocráticas jugando todo al derrocamiento de Allende y a la deslegitimación de todos los mecanismos arbitrales de la sociedad política, incluido el sistema electoral. Una de las expresiones de este abandono del sistema democrático fue la autodisolución de la Derecha (el Partido Nacional) después del golpe militar de septiembre de 1973. El Centro político, por su parte, puso por encima de todo la preservación de sus intereses organizacionales de largo plazo buscando neutralizar el proyecto de la Unidad Popular y convertirse en "la" alternativa, sin reparar en el carácter popular del gobierno y en la naturaleza de una oposición frontal que buscaba el derrocamiento y a la cual tuvo finalmente que sumarse. Respecto de la Izquierda, ella buscó cumplir su proyecto socialista sin realizar las alianzas políticas que le dieran la mayoría necesaria para cumplir ese proyecto dentro de los marcos democráticos. Al interior de la Izquierda, las diferencias internas respecto de su proyecto político fueron remediadas con la exacerbación del principio de la "razón de partido": lo que se llamó el "cuoteo".

Así la tendencia a la tripolarización que había cristalizado en la década del 60 alcanzó niveles extremos en el período 70-73: una Derecha que se propone terminar con el régimen democrático, un Centro que pierde su capacidad de realizar alianzas que flexibilicen el espectro político y que se presenta como alternativa excluyente (a diferencia del centro ocupado por el Partido Radical en las décadas anteriores), y una Izquierda que cuestiona los principios de negociación y gradualismo pues pone como objetivo único el cumplimiento integral de su programa sin alianzas que lo viabilicen. En suma, la política como confrontación total, donde la arena legitimada de solución de conflictos pierde su capacidad de regularlos porque los actores políticos no concentran sus

Scanned with CamScanner

esfuerzos en preservarla sino en sus propias metas.

Vale la pena indicar aquí que el vacío institucional favoreció esta polarización y desborde de los conflictos, al no proveer mecanismos que forzaran a realizar acuerdos mayoritarios (segunda vuelta electoral, por ejemplo), que permitieran expresarse a las mayorías en los momentos claves (compatibilización de elecciones presidenciales con las parlamentarias, por ejemplo) o que resolvieran los conflictos interpartidarios (declaración de incompetencia del Tribunal Constitucional que deja sin resolver el principal conflicto institucional del período como fue el proyecto sobre el "Area de Propiedad Social", por ejemplo).

Finalmente, en este período se hace presente también el fenómeno de partidización polarizante del conjunto de la sociedad, al no haber ninguna institución (excepto, en parte, la Iglesia) que mantenga una cierta neutralidad frente al conflicto político.

Los partidos políticos bajo el régimen militar.

El análisis del sistema de partidos políticos bajo el régimen militar debe hacerse desde dos perspectivas [4] Por un lado, la evolución del modelo o proyecto político de éste y, por otro, la evolución real de los partidos y sus relaciones con el resto de la sociedad.

Si recordamos lo anotado en otros capítulos respecto de la evolución del régimen militar, en una primera fase,

luego del golpe de Estado de Septiembre de 1973, este modelo político se caracteriza por dos rasgos principales. Por una parte, la eliminación del sistema democrático precedente, con lo que ello implica de supresión de sus instituciones y de persecución de sus organizaciones y sus miembros a través de todos los métodos represivos como asesinatos, detenciones, desapariciones, relegaciones, exilio, ejecuciones sumarias, etc. El aparato represivo y de control militar ocupa el hueco del sistema político anterior. Por otra parte, la creciente personalización del liderazgo político y militar en Pinochet, subordinando a la Junta de Gobierno a un papel secundario, y subordinando también las diversas ramas de las FF.AA. al Ejército.

Hay un segundo momento, en que se busca fundar un nuevo modelo político para el país, que se adecúe a la visión global de sociedad del núcleo dirigente en el Estado (Pinochet, equipo económico de Chicago y "gremialistas") y a las transformaciones de la sociedad impulsadas por este núcleo. Se trata de institucionalizar un **régimen militar** con gobierno personalizado por largo plazo y proponer para el futuro un **régimen autoritario** de arena política restringida, exclusión de sectores proclives al cambio y poder tutelar de las FF.AA. Este momento tiene su culminación en la imposición de una Constitución en 1980 a través de un plebiscito manejado por el Gobierno. Esta Constitución, en su articulado transitorio, consagra un régimen militar de larga duración, y, en su articulado definitivo, establece el sistema autoritario mencionado, que a veces se le llama oficialmente "democracia protegida".

En los dos momentos señalados hay elementos comunes: mantención de un alto nivel represivo a organizaciones y personas, intento de desarticular el sistema partidario existente hasta 1973 y, en términos más generales, eliminar los mecanismos de representación y de la

Scanned with CamScanner

política como mediación entre la sociedad y el Estado. La utopía es una sociedad en que la política ha sido eliminada por irrelevante y reemplazada por una sociedad atomizada que resuelve los problemas de los individuos a través de los mecanismos del mercado, y en que el Estado, reducido pero fuerte y autoritario, es el guardián del orden establecido y no el referente de la acción colectiva. Es decir, se trata de un modelo político que sustituya al que existió en Chile hasta 1973 y que ya hemos descrito. Pero ello supone un largo período de régimen militar que cree las condiciones de su viabilidad.

En 1983 este modelo político acusa el impacto del derrumbe del modelo económico que le servía de base material y queda convertido en un puro proyecto de sobrevivencia del régimen militar en los términos establecidos en la Constitución del 80. Este impacto, expresado en el movimiento masivo de descontento a través de las Protestas Nacionales, forzó al Gobierno a crear un espacio político público informal donde irrumpió la oposición política a través de grandes bloques de partidos, a lo que nos hemos referido varias veces. En la incapacidad de encapsular a la oposición política a través de lo que se llamó la "apertura" y fracasada la utopía de eliminar la política, el gobierno militar, combinando mínimas liberalizaciones con altos niveles represivos, busca fundar un sistema político restringido y excluyente a través de la implementación de la Constitución del 80 y de su complemento institucional que son las llamadas "leyes políticas", que incluyen una ley de partidos.

Ya hemos indicado que la Constitución del 80 no es democrática ni por su forma de aprobación ni por su contenido, por cuanto establece, como lo hemos dicho, un régimen militar que prepara las condiciones para la entronización de un régimen autoritario, con exclusiones y poder tutelar de las FF.AA. El cuestionamiento que una parte significativa de la sociedad hace de esta

Scanned with CamScanner

Constitución, muestra su ilegitimidad pese a que logre imponerse y a que cualquier proyecto de transición debe dar cuenta de su existencia, como fue señalado en capítulos anteriores. Más allá de esta consideración general pueden hacerse otras observaciones más específicas.

La Constitución consagra una institucionalidad política transitoria que no es sino la reproducción del sistema dictatorial implantado en 1973, sin ningún tipo de garantías para los derechos ciudadanos[5], y para el futuro establece una relación en la que prima el carácter autoritario y vertical (primacía del Ejecutivo, intangibilidad de algunas instituciones públicas, debilitamiento del legislativo, papel de las FF.AA.), la exclusión política (proscripción de las ideas de cambio social), la atomización de la organización social (incompatibilidades entre la organización social y la acción política), y la rigidez del marco constitucional mismo (casi imposibilidad de reforma a la Constitución).

Sin perjuicio de lo anterior, y en relación a los partidos políticos, cabe señalar como elemento positivo que deberá ser recuperado en una futura Constitución democrática, la idea de consagrar a nivel constitucional y de ley orgánica a los partidos políticos. Ya hemos señalado que en el período democrático hubo aquí una carencia importante. Elevar la existencia de los partidos a nivel constitucional, fijar normas generales de funcionamiento y principios que deban regir sus estatutos, así como consagrar el principio de la democracia interna, son todos elementos necesarios de cuya ausencia adoleció la institucionalidad democrática. Pero todos estos elementos y principios se desvirtuan en la institucionalidad propuesta en la Constitución del 80, por cuanto, en primer lugar, se consagra el principio de exclusión de partidos que profesen ideas definidas vagamente, pero que son imputadas a sectores de izquierda[6]; en segundo lugar, se pretende enfrentar el fenómeno de partidización de la

Scanned with CamScanner

sociedad a que hemos aludido, con la total segmentación de las esferas de acción colectiva (gremial, sindical, cuerpos intermedios) y de la acción política, haciendo caso omiso de una relación histórica y cultural e imponiendo artificialmente normas que impidan una combinación más fluída. [7] Los partidos aparecen entonces, y pese a su consagración institucional, disminuídos en su capacidad de articular política y sociedad.

Lo anterior se refuerza con la ley de partidos, promulgada en marzo de 1987. Independientemente del debate táctico sobre la conveniencia o inconveniencia de usar esa ley para impulsar el proceso de transición a la democracia, es evidente que el contenido de ella tiende a generar un sistema de partidos excluyente, elitista en su dirección, sometido a controles no democráticos y limitado fuertemente en su posibilidad de acción y representación. A ello debe añadirse que la constitución de partidos queda fuertemente entrabada y que ya existe una interdicción constitucional para un amplio sector de Izquierda (el fallo del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular). Volveremos sobre los efectos de esta ley más adelante.

Si miramos ahora las cosas desde la perspectiva de la evolución real del sistema de partidos bajo el régimen militar, en el predominio de su fase reactiva (1973-76/77) las características principales del sistema partidario fueron, por un lado, la eliminación del sistema político e ilegalización de los partidos con represión muy violenta a los partidos de Izquierda y su paso a la clandestinidad; la autodisolución de la Derecha política (Partido Nacional) y plena identificación de su elite dirigente con el nuevo régimen; y el proceso de distanciamiento progresivo de la Democracia Cristiana respecto de un régimen cuyo advenimiento aprobó, aunque con importantes excepciones, tácita o explícitamente. Por otro

Scanned with CamScanner

lado, las actividades partidarias quedaron reducidas a tareas de sobrevivencia y rearticulación mínima de los aparatos organizacionales siendo predominante su atomización y silenciamiento. En tercer lugar,está el surgimiento de un espacio sustitutivo de la política provisto por la Iglesia, vinculado inicialmente a la defensa de derechos humanos básicos pero que progresivamente adquiere un rol único y crucial en la reconstitución de organizaciones sociales y como instancia de encuentro de la dirigencia política. Este hecho quizás sea el más significativo dándole a la iglesia, como hemos señalado, el carácter de actor único frente al actor estatal-militar. Finalmente, hay una acción insurreccional minoritaria y de escasa significación del MIR, con progresivo desmantelamiento de sus estructuras y liquidación de cuadros y dirigentes por la represión desatada contra ellos.

En la fase siguiente, que hemos denominado "transformadora" o "fundacional" desde la perspectiva del régimen, los rasgos principales del sistema partidario y sus relaciones con la sociedad parecieran ser, en primer lugar, la consolidación de la Democracia Cristiana como partido de oposición, con predominio de su tendencia alternativista a subordinar a los otros partidos a su liderazgo y el surgimiento consiguiente en la oposición partidaria de los temas de los "frentes amplios", "oposición unida", que se enfrentan a resistencias tanto de la DC como del Partido Socialista. La tendencia a la fragmentación de éste se agudiza en una división principal en 1979, lo que, a su vez, activa procesos de renovación y autocrítica tanto en sectores "históricos" del Partido, como en grupos partidarios que se escindieron en otra época de la DC (MAPU, MAPU Obrero Campesino, Izquierda Cristiana), como en núcleos independientes que se definen por un socialismo renovado. En segundo lugar, la conquista de espacios tanto en los medios intelectuales como en sectores la-

Scanned with CamScanner

borales, estudiantiles, poblacionales, donde se dan actividades de disidencia y oposición y en que los partidos actúan a través de militantes que adquieren creciente autonomía respecto de sus organizaciones, como hemos indicado en otro capítulo. Ello se acompaña de la creación de organizaciones sociales de tipo cupular, por ejemplo, a nivel sindical, donde la dependencia partidaria es mucho mayor y donde las concertaciones adquieren carácter netamente político, reproduciendo los conflictos de este nivel. Finalmente, hay una ampliación del espacio de la Iglesia más allá del tema específico de los "derechos humanos" estableciendo conexiones directas con las organizaciones sociales, las que al no pasar en este caso por el canal partidario aumentan su autonomía.

A partir del plebiscito de 1980, que marcó de algún modo la culminación de la fase anterior,[8] se producen cuatro fenómenos significativos. En primer lugar, la variación en la línea del Partido Comunista que enfatiza los aspectos insurreccionales en su estrategia y orienta su acción especialmente al campo poblacional. Por otro lado, la redefinición del liderazgo partidario en la DC, más proclive a un entendimiento con la Izquierda, aunque con exclusión de acuerdo global con el PC. En tercer lugar, el reforzamiento de las tendencias renovadoras en el campo del socialismo teniendo como contraparte los impulsos de reunificación de los sectores orgánicamente más históricos del Partido Socialista. Finalmente, la presencia de espacios, organizaciones, instancias y actividades de oposición marcadas en general por un doble movimiento de partidización en la cúpula y autonomización en los niveles de base e intermedios.

En 1982 el derrumbe del modelo económico en que el régimen militar basaba todo su proyecto político empujó a éste a una fase de crisis sucesivas, si bien no capaces de engendrar una crisis terminal. Desde nuestra perspectiva el fenómeno principal de esta fase fue la irrup-

Scanned with CamScanner

ción masiva de un movimiento de protesta en que se expresaba el descontento popular y de clases medias, y que hemos analizado en el capítulo anterior. La primera Protesta de mayo de 1983 tuvo su origen en las grandes organizaciones sindicales mucho más que en el liderazgo político partidario. Sin embargo, el efecto de estas primeras protestas fue que el régimen inició un proceso de "apertura política" errática, informal, reversible y acompañada de altos niveles represivos, destinado a recomponer su bloque de apoyo y a encapsular y canalizar a la oposición. Esta emergió al espacio público a través de la constitución de grandes bloques ideológicos, a los que nos hemos referido (Alianza Democrática, Movimiento Democrático Popular y Bloque Socialista, luego disuelto). Ello llevó al distanciamiento de los núcleos partidarios militantes respecto de las bases sociales de las primeras protestas, las que se fueron reduciendo a estudiantes y, sobre todo, a sectores pobladores jóvenes. Estos últimos constituyen el sector social más activo, pero al mismo tiempo el de mayores dificultades para canalizar y representar. La ausencia de una estrategia de término del régimen por parte de la oposición llevó a mantener en los hechos una actividad de desestabilización sin el necesario respaldo de fuerza política y sin fórmulas de transicción a negociar con un poder militar que, por otro lado, se negaba a cualquier paso en este sentido. Ya hemos indicado que este bloqueo llevó al cierre de la "apertura" a fines de 1984 y a la declaración del Estado de Sitio hasta mediados de 1985, el que se reimplantará entre Septiembre de 1986 y Enero de 1987. A partir de esta última fecha el régimen intentará poner en pie, como hemos dicho, las leyes políticas que aseguren el cumplimiento de lo establecido en la Constitución del 80 oficializando un sistema político y de partidos de naturaleza restringida y excluyente.

En la oposición el problema gira en torno a superar el

Scanned with CamScanner

fraccionamiento producido por la existencia de los bloques partidarios. Surgen diversas iniciativas al respecto, en torno a la idea de "oposición única", pero ninguna de ellas prospera al enfatizar el aspecto "orgánico" o las cuestiones ideológico-doctrinarias. Sin duda que la más importante de estas iniciativas fue la promovida por el Cardenal Arzobispo de Santiago, F. Fresno, lo que es revelador de las dificultades de concertación de la clase política. Así, en Agosto de 1985 se firmó entre varias colectividades, algunas de las cuales eran muy afines al régimen militar, el "Acuerdo Nacional para la Transición a la Democracia Plena". Si bien era éste el acuerdo más amplio entre sectores civiles bajo el régimen militar, la ausencia de un consenso en los plazos y mecanismos de término del régimen militar y la exclusión de los sectores de Izquierda representados en el Movimiento Democrático Popular (sobre todo, comunistas y un sector socialista) y otros grupos. Algunas de estas carencias intentaron superarse el año 1986 con la firma de otro documento, al que se sumaron nuevos grupos, pero, a su vez, se restaron algunos de los firmantes originales del Acuerdo, manteniéndose la exclusión de comunistas y de un significativo sector socialista. Por otra parte, la Alianza Democrática sufre algunas separaciones y el Movimiento Democrático Popular es desafiado en su continuidad por las iniciativas que plantean la unidad del conjunto de la Izquierda. En síntesis, priman los problemas de preservación de identidades y de liderazgos y los cálculos tácticos de alianzas y exclusiones por encima de una estrategia de transición coherente y consensual.

Las llamadas "leyes políticas" implantadas por el gobierno de Pinochet, especialmente la ley de partidos políticos a la que nos hemos referido, reavivaron un debate en la oposición que tampoco encontraba, hasta mediados de 1987, respuesta coherente. Se trataba de decidir si se optaba por la marginación o la integración a

Scanned with CamScanner

través de la inscripción. Nuevamente primaron las tendencias centrífugas en el sentido de no acordar estrategias comunes y reemplazarlas por un estéril debate sobre el problema de la legitimación o deslegitimación de la dictadura. El resultado puede ser la consagración de dos sistemas de partidos, uno oficial y otro ilegal, lo que no sería problemático si se hace coincidir el oficial con los partidarios del régimen y el ilegal con la oposición , pero lo más probable es que en ésta, como en otras materias, la oposición actúe dividida.

En lo que se refiere al espectro partidario propiamente tal, en esta última fase analizada se han producido algunas variaciones, más allá de las mencionadas respecto de los bloques políticos. En el campo de la Derecha, luego de la fragmentación de la primera década de régimen militar, tendieron a perfilarse dos sectores, como hemos indicado en otro capítulo, uno que se asumía como heredero político del régimen militar y otro que aspiraba a jugar el rol de una Derecha democrática en un proceso de transición acotado institucionalmente. Ello con variadas expresiones orgánicas en cada uno de estos sectores. Ante la inminencia de las leyes políticas del gobierno, en particular la de partidos, se produce a principios de 1987 una reunificación de varios grupos de Derecha que conforman el Partido Renovación Nacional, en el que tienden a confluir las diversas tendencias que se identifican como herederas del régimen, pero con dos elementos distintivos: la ausencia de los sectores nacionalistas más duros vinculados a Pinochet, y su capacidad de convocatoria respecto de importantes sectores que se definen a sí mismos como derecha democrática y que tienden a quedar marginalizados si no se incorporan al nuevo partido. En otras palabras, más allá de las adhesiones al régimen militar, que todos comparten en su origen, la unificación de la Derecha se hace en torno a la voluntad de ocupar el hueco político clásico de la Dere-

Scanned with CamScanner

cha chilena, sin integrarse a ningún tipo de alianza con el Centro, aprovechando las ventajas de la institucionalidad heredada del régimen militar. En el Centro, la Democracia Cristiana sigue siendo el partido más importante, un poco más inclinada a posiciones de Centro-Izquierda y a acuerdos con sectores de izquierda, pero manteniendo una postura excluyente de acuerdos de transición o consolidación democráticas con el Partido Comunista, lo que rigidiza el esquema opositor y estimula las tendencias más insurreccionales en este último partido. Las tendencias social demócratas de origen laico (provenientes en general del tronco del Partido Radical), mantienen, por su parte, diversas expresiones orgánicas y sufren algunas escisiones hacia la Izquierda. En el campo de esta última, subsiste la fragmentación de los socialistas, pese a importantes reunificaciones parciales, provocada tanto por problemas de preservación de identidades orgánicas y de competencias de liderazgos como por concepciones diferentes respecto de la renovación o continuidad del modelo ideológico-político tradicional de la Izquierda y el Socialismo en particular. A ello nos referiremos en otro capítulo. Por su parte, el Partido Comunista, que al igual que la Democracia Cristiana no ha tenido escisiones o fragmentaciones significativas, ha experimentado una cierta dualización entre el predominio de sectores radicalizados proclive a posiciones insurreccionales o militarizadas (expresados, principal pero no únicamente, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y en las Milicias Rodriguistas) que se dan a niveles de juventud y sectores poblacionales, y la persistencia de una línea más política, tradicional y gradualista presente en sectores sindicales, profesionales y más clásicamente políticos. Luego del hallazgo de arsenales de armas en Agosto de 1986, imputados al PC, y del atentado frustrado a Pinochet, reivindicado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Septiembre de ese

Scanned with CamScanner

año, pareciera darse un cierto equilibrio entre ambas posiciones, lo que acrecienta la ambigüedad del partido frente a las diversas coyunturas políticas y los otros actores y partidos.[9]

Podemos ahora evaluar qué ha ocurrido con el sistema de partidos bajo el régimen militar y cuáles son sus aspectos críticos.

En primer lugar, cabe indicar que la utopía de la dictadura de Pinochet de construir una nueva forma estable de articulación entre Estado y sociedad civil, que fundara también un nuevo sistema de partidos de espectro limitado, parece fracasada. El gobierno militar logró desarticular el modelo político precedente y en parte el sistema de partidos, pero no lo reemplazó por ninguno nuevo y mantuvo siempre vigente una relación represiva del Estado hacia la sociedad. Con ello, no resolvió ningún problema: no logró crear un sistema consensual de canalización de demandas y de participación social; provocó una enorme crisis de representación y de legitimidad en la sociedad sin mecanismos de resolución; exacerbó algunas tendencias negativas del sistema anterior al impedir que se expresaran liderazgos y estilos renovados. Hubo así un fracaso no sólo del proyecto del régimen, sino también de su intento por eliminar de raíz el sistema antiguo. Este persiste larvadamente a través de un sistema partidario relativamente desarticulado pero vigente y no sustituido. La nueva institucionalidad propuesta en las leyes políticas del régimen podrá consagrar la existencia de un sistema legal y otro no legal o, incluso, incorporar a todo el espectro partidario, pero habrá fracasado en su capacidad fundacional de crear o consagrar un nuevo sistema de partidos. Así, los procesos de activación partidaria han mostrado la perdurabilidad de los partidos y su capacidad de convertirse en actores e interlocutores ahí donde se genera espacio público. En casi todas las organizaciones sociales (gremiales, estu-

Scanned with CamScanner

diantiles, sindicales) como en casi todas las grandes concertaciones, priman los liderazgos y posiciones partidarias. Sin embargo, ello va aparejado, aunque en grados diferentes, de fenómenos que relativizan esta influencia partidaria y plantean interrogantes para las relaciones partido-actores sociales en el futuro. Por un lado, esta influencia se da en nivel cupular y en los medios más politizados, al precio de una cierta no sólo indiferencia sino incluso rechazo en niveles intermedios y de base donde la crítica a los partidos adquiere a veces caracteres virulentos. El problema planteado es si los partidos son capaces de ir más allá, en su convocatoria, de los círculos en los que ya están implantados. Por otro lado, se produce un cambio difícil de precisar en el modo cómo se ejerce esa infuencia y liderazgo partidario en las organizaciones sociales, por cuanto el tipo de militancia oscila entre su lealtad hacia las organizaciones y su lealtad hacia la "orden de partido". (Ello es especialmente visible en grandes sectores del movimiento estudiantil). Por lo que el problema de la autonomía de las organizaciones tiende a ser puesto como el problema crucial. La política de estas organizaciones la hacen más las personas militantes que sus mismos partidos y en muchas de ellas la mera legitimidad partidaria ha sido erosionada a favor de una legitimidad que se conquista en la organización. Sin embargo, es evidente que en los momentos de mayor "apertura política" aumentan las tendencias a la partidización. Finalmente, está el fenómeno de fragmentación del espectro partidario, que no siempre corresponde a fraccionamientos sociopolíticos de raíces significativas en el mundo social, cultural o específicamente político, sino que corresponde más bien a rasgos críticos de la clase política. Esta fragmentación, especialmente importante en el campo de la Derecha, aunque con tendencias a su superación en el año 1987, y en el campo socialista, se resuelve sólo aparentemente

Scanned with CamScanner

con la configuración de grandes bloques ideológicos a los que hemos hecho mención, por cuanto éstos rigidizan los procesos de transición, por un lado, y cristalizan la fragmentación partidaria, por otro.

En segundo lugar, respecto de los rasgos críticos que caracterizaron el sistema partidario y sus relaciones con la sociedad en la época democrática, su superación es extremadamente difícil en un contexto represivo, sin espacio público ni contactos institucionalizados con la sociedad. En tales condiciones es evidente que la renovación en la clase política se hace sumamente difícil y los nuevos liderazgos posibles no cuentan con las instancias para manifestarse. Asimismo, el modo como fue realizada la "apertura" en 1983, impidió que cristalizaran los procesos de renovación que se habían dado en el interior de los partidos.

Sin embargo, los elementos de reconstitución y renovación del sistema partidario están latentes, en la medida que no se logró eliminarlo ni sustituirlo del todo. Algunos defectos pueden haberse profundizado por razones externas a los partidos y otros están en proceso de superación.

Así, respecto de la tendencia a la partidización de la sociedad, a la que nos hemos referido, la situación de dictadura y la misma reflexión autocrítica de los partidos ha llevado a que se desarrolle una mayor autonomía de las organizaciones sociales, relativizando, como hemos indicado, sólo en parte el modelo de imbricación entre organización política y organización social. Hay una positiva mayor tensión entre ambas. Pero, y las situaciones de movilización así lo muestran, aún subsiste una desvinculación entre la militancia orgánica de los partidos y el resto de la gente, con lo que muchas veces el juicio que se hace sobre el estado de conciencia y movilización de la sociedad en general es una simple proyección de lo que ocurre en la clase política. Aún no se

Scanned with CamScanner

logra en ésta una conciencia generalizada del partido como promotor de organizaciones sociales que luego adquieren plena autonomía.

En cuanto al maximalismo ideológico, es cierto que se ha producido una evolución hacia partidos más programáticos y, en algunos sectores, se ha ido perdiendo el carácter religioso de la militancia. Pero aún subsiste una gran dificultad para secularizar la política. La definición de los procesos políticos sigue siendo idologizada y las grandes metas o proyectos no van acompañados de una definición e implementación adecuada de los medios. Es preciso señalar, sin embargo, en los sectores tradicionalmente más proclives al ideologismo una tendencia a un mayor realismo y a formulaciones menos codificadas en un lenguaje ideologizado y abierto sólo "a los iniciados". Paradojalmente, sectores más pragmáticos en el sistema político anterior son ahora los más ideologizados.

En cuanto a la tendencia polarizante del sitema partidista, existe una cierta derecha que se define como soporte o sucesora del régimen militar, lo que lleva a pensar en la persistencia de un sector autoritario, con indudables efectos polarizantes. El centro político, expresado en la Democracia Cristiana, parace haber suavizado su natural alternativismo como lo prueba su voluntad de establecer alianzas, lo que se ilustra con la creación de la Alianza Democrática en 1983. Sin embargo, el modo de elaboración de su "Proyecto Alternativo", la creación de una Central Sindical de corte ideológico y, sobre todo, su renuncia a un entendimiento con el Partido Comunista y a aceptar a éste como interlocutor importante en el proceso de democratización, ilustran la persistencia de rasgos polarizantes. Respecto de la Izquierda, se mantiene el retardo en la constitución orgánica de la Izquierda Socialista como un gran partido que supere la fragmentación existente, debido a la persistencia de estilos

Scanned with CamScanner

que buscan antes que nada perpetuar la identidad de grupos. Esta ausencia es también un elemento reproductor de la polarización. Por otro lado, el entendimiento de ciertos socialistas con el centro muestra una tendencia en el campo socialista a la superación del rígido esquema tripolar existente hasta 1973 y la voluntad de flexibilizar el esquema de relaciones interpartidarias, aun a costa de viejas alianzas. Por su parte, el tradicionalismo de cierta Izquierda expresada por el Partido Comunista, que busca reconstituir el esquema de tres polos, y el cambio en la línea clásica del PC hacia rasgos más insurreccionales, son otros elementos que dificultan la superación del rasgo polarizante del sistema partidista. Vale la pena indicar que las tendencias de "revivir" la unidad orgánica de la Izquierda tienen efectos contradictorios sobre esta dinámica polarizante. Por un lado, rompen el aislamiento del Partido Comunista y obliga a la Democracia Cristiana a incluirlo en cualquier acuerdo con sectores de izquierda. Por otro lado, llevan a la izquierda a verse a sí misma como una alternativa excluyente, como en la década del sesenta, estimulando la tendencia aislacionista del Centro.

La reconstrucción del sistema partidario.

En síntesis, hay a la vez persistencia y crisis del sistema de partidos, lo que obliga a cambios de relativa profundidad en él. Su persistencia muestra la legitimidad de que goza la existencia de partidos en la opinión pública. Como las encuestas muestran, la mayoría de la pobla-

Scanned with CamScanner

ción sabe que no hay democracia posible sin partidos políticos y que la función de éstos es la agregación de intereses y la competencia por la representación y el poder políticos. Y, sin embargo, los estudios muestran también una muy fuerte crítica a los actuales partidos y una muy escasa valoración de su actuación bajo el régimen militar. [10] No se trata sólo de la crítica genérica que se expresa en casi todos los contextos a la distancia de los partidos respecto de la sociedad, sino que de una crítica al actual sistema partidario chileno, en términos de su fragmentación, su instrumentación de las organizaciones sociales, su incapacidad para enfrentar coherente y unitariamente al régimen militar.

Así, la perdurabilidad y legitimidad del sistema partidario chileno va acompañada de una doble crisis. Una es la que experimentan todos los sistemas partidarios en las sociedades contemporáneas y que proviene del hecho que, con el aumento de la complejidad y la masificación, los partidos han dejado de ser los únicos y, a veces, los más adecuados mecanismos de expresión del debate y la opinión pública y de representación de intereses. Ello es particularmente apreciable respecto de la juventud. En sociedades diversificadas, con multiplicación de grupos de interés y presión, con la omnipresencia de medios de comunicación de masas y de nuevas instancias de formación de opinión pública, con la proliferación de ámbitos de concertación distintos al parlamentario, con la complexificación del Estado, con la tecnocratización y burocratización de la vida social, pero al mismo tiempo con la expansión del campo de la subjetividad individual, etc., es evidente que lo público y lo político tienden a ser radicalmente redefinidos, lo que redefine también la posición y el papel de los partidos políticos, con lo que las formas tradicionales o clásicas de acción y representación entran en crisis. A ello se agrega la crisis particular del sistemas partidario chileno con su compo-

Scanned with CamScanner

nente de arrastre de otra época y su componente proveniente de la experiencia del régimen militar.

Todo ello nos lleva a hablar de reconstrucción del sistema partidario y no de refundación, porque tal sistema existe. Esta tarea, de muy largo plazo, puede ser enfocada, como lo hemos hecho a lo largo de este libro, desde dos perspectivas conplementarias, la de transición y la de consolidación democráticas.

Si analizamos la problemática del sistema de partidos desde la perspectiva de una transición democrática, recordemos que la experiencia de las dictaduras militares de los últimos tiempos muestra que la lógica política y su progresiva presencia en el espacio público, constituyen la principal erosión del régimen autoritario y la principal amenaza para la sobrevivencia de éste. Por el contrario, la lógica militar y el cierre de espacios políticos es el mejor escenario para la mantención de una dictadura o régimen militar. Pero crear espacios políticos exige el desarrollo de actores capaces de moverse en él, concertarse, expresar demandas sociales y resistir en conjunto a la pauta autoritaria. Reconstituir un sistema de partidos es así una necesidad para el término del régimen militar y para un proceso de transición en que haya interlocutores que puedan resolver la profunda crisis de representación que afecta a la sociedad chilena y asegurar la altenativa post-autoritaria.

Vale la pena repetir que esta reconstitución del sistema partidario existe de algún modo y que el problema principal es la falta de un espacio público en que ella se exprese y de un sistema político donde su acción sea efectiva. Para que una reconstitución del sistema partidario sea real, debe cumplir con el requisito de ser completa, es decir sin ausencia o exclusión de ningún sector ideológico político. Ello dice relación tanto con la necesidad de contar en ese sistema con los partidos marxistas-leninistas, entre ellos el Partido Comunista,

Scanned with CamScanner

como con la necesidad que se completen expresiones orgánicas en los dos puntos del espectro que hemos señalado: la Derecha política, que aparece aún fragmentada orgánicamente y vacilante ideológicamente en una adhesión democrática irrestricta, y la Izquierda Socialista, que aparece también fragmentada orgánicamente.

Pero la sola reconstitución de un sistema partidario, cualquiera sea su grado de precariedad, y su presencia en el espacio público no bastan para desencadenar y asegurar un proceso de transición democrática. La experiencia de la "apertura política" entre los años 83 y 84 muestra hasta qué punto la existencia de partidos y agrupaciones más amplias fue incapaz de provocar una seria crisis de desestabilización del régimen.

Hay aquí dos aspectos que nos parecen ligados. Por un lado, como hemos dicho, la oposición en su conjunto irrumpió en el espacio público sin una propuesta de transición concreta con la que enfrentar a un régimen debilitado, con la cual negociar y en torno a la que debía convocarse y concertarse una fuerte movilización social, que carecía de metas específicas. Es probable que la percepción de inminencia de término del régimen así como la existencia de espectativas y diseños diferentes y hasta contradictorios respecto de ese término y su alternativa futura (algunos de los cuales se acercaban más al diseño clásico de revoluciones sociales que al de meras transiciones entre dos regímenes sin vacío institucional), hayan impedido la proposición de una fórmula unitaria y consensual de transición. Es también probable que el problema tan mentado de la "unidad" de la oposición deba ser redefinido en estos términos. Dado el peso ideológico de las organizaciones partidarias y el mutuo sectarismo (en especial el de la DC hacia el PC) parece difícil en el caso chileno pensar en una "Multipartidaria" que no sea referida exclusivamente a la lucha por espacio público y libertades mínimas y a la propues-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ta de una fórmula única de transición. Esta última debe tener como requisitos que en su formulación no se excluya ningún sector significativo de la oposición, que sea negociable y que genere una arena de resolución del conflicto de legitimidad entre régimen y oposición. Esta arena, o una institución mediadora, han sido un elemento clave de todas las transiciones ocurridas en el último tiempo.

El segundo aspecto en la reconstitución de un sistema partidario en una perspectiva de transición dice relación con la necesidad de reestablecer los lazos entre el sistema partidario y los diversos sectores sociales que éstos pueden representar, superando la situación de una sociedad atomizada donde no se sabe a ciencia cierta quién representa a quién. La crisis de representación tiene que ver no sólo con la distancia entre una clase política amplia y masas dispersas, sino también con las transformaciones estructurales de la sociedad ocurridas estos años y que han ido en el sentido de aumento de la "inorganicidad" de la sociedad. Quizás donde mejor se muestra esta distancia pero también la ausencia de soluciones de reemplazo es en los procesos de movilización social (protestas, paros, etc.) que, carentes de metas específicas e intermedias y de canales de participación que no sean la mera agitación, terminan reducidos a una base militante crecientemente radicalizada y separada de lo que a veces despectivamente se llama la "base social", como hemos indicado en otro capítulo.

Si miramos ahora las cosas desde la perspectiva de la consolidación de un régimen democrático futuro, en lo que se refiere a la reconstrucción de un sistema partidario a partir de su realidad actual, ella deberá abarcar tanto aspectos institucionales como transformaciones en la cultura política, lo que es muy difícil en el corto plazo.

Hay que repetir aquí que el desafío que se le abre a la sociedad chilena, al término del régimen militar, es se-

mejante al que enfrentó en los años 30, después de la erosión del sistema oligárquico y de la crisis económica mundial que tanto afectó a Chile. En efecto, se trata de reconstruir un sistema democrático a la vez que definir colectivamente un nuevo modelo de desarrollo interno y de inserción internacional. Ello en condiciones de partida extremadamente desventajosas, tanto en cuanto a las condiciones materiales como en cuanto al grado de fragmentación social y desarticulación política. Pero para enfrentar este desafío, a diferencia de los años 30, no se partirá de una democracia restringida en su participación a un tercio de la población, con exclusiones estructurales de vastos sectores sociales, que la hacía más "manejable". Partimos ahora de una situación en que la presencia activa de masas en la política ya se produjo en los 60 y hay que contar con ella necesariamente.

En este contexto, entre los rasgos básicos que debiera tener una consolidación democrática hay que considerar la **inclusividad** del sistema político, lo que a su vez tiene dos planos. Por un lado, el de la presencia en el sistema político de toda la diversidad cultural e ideológica del país, lo que implica un espectro partidario completo, sin ningún tipo de exclusión doctrinaria o ideológica. Por otro lado, se trata de responder a la demanda por participación contenida durante tantos años.

Respecto del primer plano, hemos dicho que la inclusividad del sistema político es condición de su estabilidad. Si un sector social o una corriente cultural se siente excluida o no ve posibilidades de realizar sus intereses o aspiraciones a través del régimen democrático, se transformará en una fuerza antisistema y procurará permanentemente su desestabilización. De algún modo, tiene que existir una proporción entre la fuerza social de un sector y su representación política. Es precisamente la inclusividad del sistema la que quita espacio al surgimiento de fuerzas que atenten contra él. Ninguna exclusión de

Scanned with CamScanner

ideologías "a priori" se justifica. La única sanción que cabe es a quienes atentan a través de sus actos contra los principios del sistema político que hayan sido consensualmente aprobados. Esta no es una discusión que se plantee en términos abstractos hoy, sino que está referida al debate de los últimos años en Chile, estimulado por la pretensión de la Constitución del 80 y de algunos sectores de derecha, de excluir del sistema político a las corrientes de Izquierda que se definen como marxistas. No sólo hay una cuestión de principios en esto: ninguna discriminación contra sectores sociales o corrientes culturales e ideológicas que lleve a su exclusión es compatible con un régimen democrático. Hay también un argumento histórico: la democracia en Chile no habría sido posible, ni lo será en el futuro, sin la participación de la Izquierda y de las corrientes marxistas y de los sectores sociales que representan. Es la presencia activa de estas fuerzas políticas, como la de los otros componentes del espectro partidario, lo que aseguró el régimen democrático chileno por décadas. Aspiraban a cambiar la sociedad a través del sistema político consagrado consensualmente, es decir, dentro del marco constitucional, y si querían cambiar éste debía ser con sus propias reglas. La Izquierda chilena durante todo el período democrático participó en y, así, legitimó el régimen político, sin abandonar un proyecto de transformación radical para compatibilizar la democracia política con la democratización del conjunto de la sociedad. Si bien su discurso a veces enfatizó y denunció el carácter "formal" de la democracia y algunos sectores en un momento muy breve pensaron en alternativas insurreccionales, la práctica política de la Izquierda fue intachablemente democrática. Fue, por lo tanto, una oposición "dentro" del sistema político, aunque se planteara un cambio profundo de la sociedad. Y si bien es cierto que hay una responsabilidad compartida en el colapso de la democracia, quienes rompieron el sis-

Scanned with CamScanner

tema y la desestabilización se encuentran en la Derecha política y no en la Izquierda. Fueron sectores de derecha los que, negando el carácter democrático que ésta había tenido al participar en el sistema político, en la década del 60 se inclinaron hacia posiciones autoritarias y desde 1970 buscaron destruir la legitimidad del régimen democrático y terminar con él.

En referencia al plano de la participación, parece estrictamente necesario la multiplicación y la diversificación de canales efectivos, donde los elementos de democracia al nivel del poder local o sectorial son indispensables. Así, no puede pensarse en que toda la participación social o política se haga a través de un canal partidario único. Aumentar y diversificar los canales o instancias de participación es no sólo una exigencia democrática propiamente tal, sino que tiene un efecto importante en la cultura política, en el fortalecimiento de la sociedad civil y en la superación de la unidimensionalidad de la política. Con ello aludimos a que, como hemos señalado en el régimen democrático anterior toda acción colectiva y sus correspondientes conflictos en diversos ámbitos de la sociedad eran expresión del conflicto político partidario global de la sociedad. Es perfectamente posible, y parece altamente positivo, que a nivel territorial (comunas, por ejemplo) o funcional (Universidades, sindicatos, por ejemplo) las coaliciones o mayorías que se formen no respondan siempre a una directa expresión de los partidos políticos y sus alianzas, sino que respondan a condiciones y necesidades propias de cada ámbito. Pero ello supone que haya en estos ámbitos transferencia de poder estatal, es decir, poder real de decisiones relevantes. La multidimensionalidad y diversidad de la participación masiva no se logra automáticamente por disposiciones mecánicas que desliguen la acción partidaria de la acción colectiva en los ámbitos territoriales o funcionales, como trata de imponerlo la Constitución de

Scanned with CamScanner

1980, sino que supone una voluntad política de los partidos para fortalecer siempre los aspectos autónomos de la sociedad civil. Ello apunta a un cambio necesario en la cultura política de las elites partidarias. Por un tiempo largo quizás la promoción de organizaciones sociales será tarea, no exclusiva, de la clase política, la que deberá ser capaz de aceptar luego la independización y autonomía de esas organizaciones. Eliminar la tendencia al "copamiento" o "control" de las organizaciones sociales es un requisito para obtener una extensión e intensificación de la participación social.

El tema de la **inclusividad** del sistema partidario, en los planos mencionados, guarda relación con otro rasgo a considerar en la reconstrucción o reconstitución de éste en un futuro régimen democrático. Es el de la **representatividad** del sistema de partidos en relación a la sociedad. Recordemos a este respecto lo ya señalado en el sentido que entre partidos y sociedad siempre habrá una tensión irreductible. Nunca un sistema de partidos podrá expresar completamente la diversidad de la sociedad ni un partido individual identificarse totalmente con la clase, sector o movimiento que dice representar. Ello porque, como hemos dicho, el "momento" partidario de la sociedad no se confunde ni se identifica con ella, aunque sea insustituible.

Dicho esto, hay ciertos rasgos de un sistema de partidos que pueden ofrecer una representación más adecuada de la diversidad de la sociedad chilena. Por un lado, más allá de los requisitos de inclusividad, hay también aspectos de democracia interna de los partidos que favorecerían la expresión de corrientes diversas en su interior, un mayor énfasis en el carácter programático que en la identidad dogmática de una doctrina, una mayor heterogeneidad en la composición sociocultural de los partidos, una menor distancia entre el partido y sus militantes y el resto de la sociedad. Es importante entender este

Scanned with CamScanner

punto no como la identidad entre los movimientos y organizaciones sociales con el o los partidos, lo que parece uno de los grandes defectos del sistema partidista vigente hasta 1973, sino como la necesidad de atenuar el aspecto secta de iniciados o fanáticos en el que han caído muchas veces los militantes partidarios: se trata de diluir límites entre la subcultura partidaria y la subcultura de la de aquellos sectores a los que el partido busca representar. Retomaremos este tema más adelante.

Por otro lado, para que los partidos puedan "representar" la diversidad social es necesario que ésta se exprese y desarrolle a través de organizaciones y movimientos sociales autónomos, no sumidos a la lógica partidaria y donde el partido sea sólo un referente en la instancia o momento propiamente partidario. Esto puede ilustrarse con el ejemplo ya mencionado del movimiento de mujeres y también del sindicalismo: nunca ambos podrán identificarse con un partido a menos que desaparezcan como movimiento. De aquí que pensemos que si no hay diversificación de la sociedad civil, los partidos serán siempre su sustituto y la diversidad quedará ahogada en la síntesis partidaria. Entre los sectores o movimientos sociales y los partidos deberá haber una tensión que exprese la solidez de ambos: de esta tensión surge una adecuada representación. Ahí donde no hay organización o movimiento social autónomos, el partido "inventa" su representación.

Lo anterior se relaciona también con otros dos puntos, en parte mencionados. El primero es que una adecuada representación de la diversidad a nivel local y regional, y a nivel de instancias funcionales o gremiales, debiera considerar un traspaso a estos niveles e instancias de ciertas atribuciones y recursos que tienden a concentrarse en la cúpula estatal o en organismos centralizados del país. Durante largo tiempo la cultura política chilena ha tendido al centralismo y a cierto menosprecio de los

Scanned with CamScanner

poderes locales o de la base de las organizaciones sociales, que es donde mayormente se expresa la diversidad sociocultural de un país que presenta un alto grado de fragmentación. Ello implicaría reconocer que las divergencias y convergencias en estos niveles territoriales o funcionales no tienen por qué reproducir mecánica y verticalmente las organizaciones políticas, los fraccionamientos ideológicos y alianzas que se dan al nivel más alto de la sociedad global. La aceptación de esta idea, que implicaría un cambio en nuestra cultura política tradicional, llevaría a expresar mucho mejor la diversidad social y a expandir el campo de la participación individual y colectiva. El segundo punto tiene relación con el espacio que se abra a la participación política de quienes no se identifican con ningún partido. La colaboración en los diversos organismos e instancias relacionados con los partidos políticos no debiera quedar restringida a los militantes o miembros de un partido, sino que debiera abrirse a sectores independientes rompiendo la identificación de militancia con participación política.

La inclusividad del sistema poll tico, la extensión y diversificación de los canales de participación política y el fortalecimiento del principio de representatividad, deberían ir acompañados de una **democratización** interna de las organizaciones sociales y políticas. En efecto, hay una tendencia natural a la reproducción de dirigentes y al conformismo y apatía de la gran masa de participantes. El fraccionalismo, el caudillismo, las oligarquías y también el asambleísmo son los sustitutos de la democracia interna de las organizaciones. Es posible instalar diversos mecanismos para favorecerla, como son, por ejemplo, las elecciones primarias en el caso de los partidos, la publicidad de sus actividades, la rotatividad periódica de los dirigentes evitando la permanente reelección, la obligatoriedad de sistemas de información, las cuotas obligatorias mínimas de representación feme-

Scanned with CamScanner

nina para asegurar una tendencia a la igualdad de participación entre mujeres y hombres en todos los planos de la esfera pública, mecanismos de consulta a los miembros y clientelas de las organizaciones, etc.

Otro rasgo significativo a considerar en la reconstitución del sistema partidario en un proceso de consolidación democrática es el del adecuado equilibrio entre los principios de **unidad nacional y competencia interpartidaria.**

Al hablar de unidad nacional, en términos políticos, hay que pensar que se trata de un problema histórico a resolver y rechazar de plano el discurso ideológico militar que la concibe como un principio abstracto que tiene su depositario en las FF.AA. Ninguna instancia o actor puede reclamar para sí el papel de depositario o garante único de la unidad nacional y menos un segmento particular del Estado, como son las FF.AA.

Si uno examina el problema de la unidad nacional en Chile, más allá de todos los fraccionamientos de una sociedad con enormes desigualdades sociales, deberá aceptar que ella decansó, en parte importante, en dos instituciones del Estado, como son el sistema educacional y el sistema político. Lo que unía a los chilenos era la legitimidad del Estado y los procesos de integración eran principalmente la educación a lo largo de todo el país y la progresiva participación política. Ello explica que cuando se intentó por parte de la dictadura militar mermar el carácter "nacional" de la educación, al debilitar el rol estatal, y cuando se suprimió el sistema político, la unidad nacional perdió referentes, la división y fragmentación sociales aumentaron y el poder armado sustituyó el espacio político, dando la ilusión de una aparente "unidad" conseguida a base de la represión y el control,

En ese sentido, el sistema político, y en particular el sistema partidista, al aceptar la diversidad social y cultural y no excluir ningún sector, fue un elemento clave en

Scanned with CamScanner

la construcción de la unidad nacional chilena.

La ausencia de un sistema político y de partidos que represente la diversidad, implicaría o que la unidad nacional se realiza a través de una "esencia" que envuelve a todos los individuos atomizados; o que hay un actor social que encarna esa esencia y entonces subordina al conjunto de otros actores e instituciones a su designio, o que la sociedad se concibe en forma "pretoriana", donde las diversas fuerzas sociales se enfrentan directamente y triunfan los más fuertes. La unidad nacional no se logra ni por imposición, ni por símbolos o esencias metasociales y ella es inseparable de un proceso de integración y representación de la diversidad, sin anularla. Por ello un sistema legitimado de competencia interpartidaria que exprese lo mejor posible la fragmentación de la sociedad, fortalece la unidad nacional.

La historicidad de la unidad nacional implica reconocer que los fraccionamientos que desgarran a una sociedad no son siempre los mismos y que se desplazan de un campo a otro, como consecuencia de las luchas que ayudan a resolver alguno de ellos, sin que eso signifique la "unidad" ideal. Hay siempre en cada momento de la sociedad un fraccionamiento principal y es en torno a su superación que se define el problema histórico de la unidad nacional.

Hoy día el problema de la unidad nacional en Chile poco tiene que ver con la competencia partidista, sino que por el contrario, es la ausencia de un sistema consensual que regule la competencia y el conflicto, lo que mantiene y agudiza divisiones profundas. La crisis de la unidad nacional hoy es doble y tan aguda que a veces no pareciera que el país como conjunto fuera una sociedad viable, sino que se destruye a pedazos. Por un lado, está la división socioeconómica y cultural, con la consiguiente separación de dos mundos, el de los incluidos y el de los excluidos. Por otro lado, está la división

Scanned with CamScanner

política entre la dictadura y los que se oponen a ella. La ausencia de una arena política, de un espacio en que ambos conflictos se expresen y busquen al menos soluciones parciales, agrava día a día esta doble división de la sociedad. La crisis de la unidad nacional se expresa como crisis de proyecto de sociedad, como crisis de legitimidad y como crisis de representación. Es evidente, así, que la competencia interpartidista legitimada consensualmente sería un paso indispensable y positivo en la construcción de la unidad nacional.

Con todo, al pensar en el futuro democrático no puede desconocerse que hay ciertos aspectos de la competencia política que pueden exacerbar las divisiones en la sociedad hasta deslegitimar el sistema que regula esa competencia. Hay una responsabilidad política de los partidos y de todos los que se mueven en este escenario. En efecto, una cultura política puede enfatizar exclusivamente los aspectos conflictivos y competitivos del sistema partidista y minimizar los aspectos cooperativos, tendiendo a la polarización. En Chile eso ocurrió a partir de la década del 60. En este sentido el lenguaje y discurso de la clase política juegan un rol fundamental que contradice o refuerza la práctica indispensable de la negociación. Un discurso puede contribuir a deslegitimar el sistema aún cuando se participe en él, si reduce al interlocutor al carácter de enemigo y no de adversario con el que hay normas y valores compartidos, aunque más no sea la pertenencia a la misma comunidad nacional. Las resistencias tanto a reconocer esos valores comunes, a aceptar que el país se hace con los "buenos y con los malos" y que todos tienen un lugar en él, a aceptar la transición, como las tendencias a excluir a sectores sociales o a reducir el problema de la sociedad a enfrentamientos de clases que se niegan absolutamente unas a otras, son todos elementos que contribuyen a la erosión del principio de unidad nacional mínima. Hay también un discurso polí-

Scanned with CamScanner

tico que no asume la nación como un proceso de desarrollo histórico, que va sugiriendo las utopías para esa sociedad concreta, sino que postula una utopía que se deriva de una idea abstracta de sociedad o de una ley de la historia válida en todas las sociedades. También hay prácticas políticas que pueden debilitar la unidad de una sociedad, como por ejemplo, la reducción de todos los conflictos de los diversos ámbitos de la sociedad al mismo que se da en la esfera política, sin buscar formas de cooperación y conflicto según el ámbito que se trate. El fortalecimiento de una conciencia nacional, en ningún caso "nacionalista", que permita el compromiso con el sistema político, por encima de las diversidades necesarias y sin negar la voluntad de cambio social, aparece también como un requisito.

Es evidente que hay mecanismos institucionales que favorecen la conformación de mayorías y obligan a la concertación y al acuerdo (por ejemplo, la segunda vuelta electoral). Pero esto supone también un cambio en una cultura política que enfatizaba la identidad ideológica y la globalidad excluyente, y por lo tanto, los valores principalmente conflictivos, por una en que se favorezcan los aspectos programáticos y los valores cooperativos. Ello tiene consecuencias en el tipo de partidos y sus formas organizativas.

Así, hemos dicho que hay un "momento partidario" de la sociedad que no puede eludirse bajo ningún pretexto. Pero también en las sociedades modernas hay un "momento tecnocrático" que tampoco puede suprimirse. Hay que pensar en formas organizativas de los partidos que aseguren la combinación de estos dos momentos. En este sentido las estructuras partidarias tradicionales, la célula y la asamblea, no parecen adecuadas para resolver este problema. La democratización interna de los partidos debe considerar la elevación sustancial de los niveles de racionalidad colectiva, a través de escuelas

Scanned with CamScanner

de formación abiertas y a través de un proceso democrático de elaboración de sus programas. Pasar de partidos puramente ideológicos, donde la formación partidaria se reduce a la transmisión de la "verdad" teórico doctrinaria convertida en dogma, a partidos más programáticos, implica una nueva forma de organización y educación política. En la elaboración del programa del partido y en sus modificaciones es perfectamente posible respetar el "momento democrático" de información, discusión y decisión y también el "momento tecnocrático" de elaboración y afinamiento de detalles. La constitución de instancias de discusión y aprobación en diversos niveles compatibiliza ambos momentos. Por otro lado, la existencia de instituciones de reflexión y debate al margen de los procesos convencionales de decisión partidaria, así como de aquellas que promueven la discusión interpartidaria, son de vital importancia para la racionalización del debate político.

Por último, un rasgo que nos parece fundamental considerar respecto del sistema de partidos en un proceso de consolidación democrática se refiere a la relación entre **democracia política y cambio social**, lo que tiene efectos en la configuración del espectro partidario.

No debe olvidarse que la posibilidad de una democracia estable está ligada a la capacidad que tenga este régimen político de canalizar las demandas por cambio social, que muy probablemente tenderán a radicalizarse luego de la crisis nacional generalizada que enfrentamos como herencia del régimen militar. Tanto esta realidad, como los antecedentes históricos del sistema político chileno en la mayor parte de este siglo, como la tendencia ideologizante de la clase política chilena, hacen poco viable en el mediano plazo una "democracia conservadora" y plantean más bien la necesidad de lo que podría denominarse una democracia de carácter progresista. En efecto, si el sistema institucional no aparece ante los

Scanned with CamScanner

actores sociopolíticos como capaz de expresar y canalizar adecuadamente las demandas de transformación y cambios sociales, perderá legitimidad y será desbordado por aquellos o presionado hasta límites de inestabilidad. Lo que estamos afirmando es que la democracia política exige en Chile un proceso progresivo de democratización económica y social.

Hay aquí, de nuevo, un aspecto institucional, cual es evitar la rigidez de los mecanismos que permiten transformaciones en las diversas esferas de la sociedad, manteniendo sí la intangibilidad de las normas fundamentales que rigen el sistema, cuales son el régimen político democrático y el respeto a los derechos humanos. El entrabamiento institucional de los procesos de cambio ha sido siempre en Chile un elemento desestabilizador (recordemos las consecuencias de la demora de la ley de reforma agraria y de las dificultades de construir un Area de Propiedad Social por los cauces institucionales establecidos). Pero también hay un aspecto más allá del nivel institucional y que se refiere al soporte político que una democracia que favorece el cambio social debe tener. Las fuerzas desinstitucionalizadoras que desata en su contra un proceso de cambio social son tan grandes que sólo puede responderse a ellas en un régimen democrático con una mayoría político social importante. En otro capítulo hemos señalado que las bases sociales de esa mayoría potencial son las clases medias y los sectores populares y que sus expresiones políticas son el Centro y la Izquierda en su conjunto. Dicho de otro modo, la estabilidad de una futura democracia en Chile dependerá de su capacidad de impulsar y encauzar el cambio social y la transformación estructural y esto dependerá de la posibilidad de un acuerdo histórico de largo aliento entre el Centro y la Izquierda. Es lo que hemos llamado bloque democrático-transformador, que no debe entenderse como una alianza de gobierno, sino

Scanned with CamScanner

que en su interior pueden darse diversas coaliciones gobernantes según las circunstancias históricas. Se trata aquí nuevamente de un cambio en la cultura política, que permita comprender a los actores de Centro y de Izquierda que no pueden realizar proyectos de cambio aislados, como ocurrió en la década del 60 y comienzos de los 70, sin grave riesgo para la estabilidad democrática.

Lo anterior lleva también a pensar en un cambio necesario en el espectro político partidario para romper la rigidez y polarización que lo caracterizó hasta el 73. Como hemos indicado, en la década del 60 y hasta el golpe militar, asistimos a un esquema tripolar (Derecha con tendencia autoritaria, Centro excluyente e incapaz de alianzas e Izquierda con dos partidos principales pero unificada en la matriz marxista-leninista) que impidió, en un marco muy ideologizado, la necesaria flexibilidad de alianzas y donde la tendencia de cambio social fue asumida unilateralmente por el Centro o la Izquierda sin alcanzar la mayoría sociopolítica de respaldo que se requería. Un requisito de una futura democracia es la superación de este esquema y su reemplazo por un esquema de cuatro polos: una Derecha democrática, sin la cual no hay democracia política, que adhiera sin ambigüedades a la democracia como régimen y que exprese socialmente a las clases empresariales y las que giran en torno a ellas; un Centro político (Democracia Cristiana y partidos de corte social demócrata), que sea capaz de alianzas principalmente a la Izquierda y donde se vean reflejados grandes sectores de capas medias, lo que dadas las vertientes cristianas y laicas pudiera resultar en más de un partido de Centro; una Izquierda Socialista que exprese la renovación de este pensamiento en los últimos diez años y que supere su actual fragmentación, y una Izquierda de corte clásico marxista-leninista que expresa una tradición bastante enraizada en ciertos núcleos obre-

Scanned with CamScanner

ros. El problema de la unidad entre estas dos vertientes autónomas, deja de ser el eje básico de su acción para convertirse en uno de los problemas a resolver en cada etapa de la vida política. Volveremos sobre esto en el último capítulo.

Así, los cuatro polos constituyen el espectro democrático, y el Centro y las dos vertientes de Izquierda constituyen el triángulo democrático transformador al que hemos aludido, que combina adhesión a la democracia política con vocación de cambio social, con alianzas variables en su interior.[11] La configuración de un esquema como éste favorecería adecuadamente la combinación de estabilidad y pluralismo al superar el esquema tripolar de los 60. En torno a estos cuatro ejes, pueden girar partidos menores, pero la tendencia debiera ser a su absorción. La consolidación de este sistema partidario puede ser favorecida por leyes electorales. Además, la posibilidad de evitar permanentes divisiones partidarias está vinculada a la existencia de normas que garanticen una democracia interna que exprese la diversidad sociocultural en el interior de cada partido.

En síntesis, sistema político inclusivo y con canales diversificados de participación social, democratización de las organizaciones sociales y políticas y autonomía de las primeras respecto de las segundas, equilibrio entre consenso y competencia interpartidaria, carácter más programático de los partidos, impulso y canalización de las tendencias democráticas de transformación social, espectro político flexible donde puedan confluir mayorías sólidas y donde pueda constituirse un bloque de Centro e Izquierda que asegure el carácter progresista de la democracia, parecen los rasgos básicos de un sistema partidario para la futura democracia en Chile.

Scanned with CamScanner

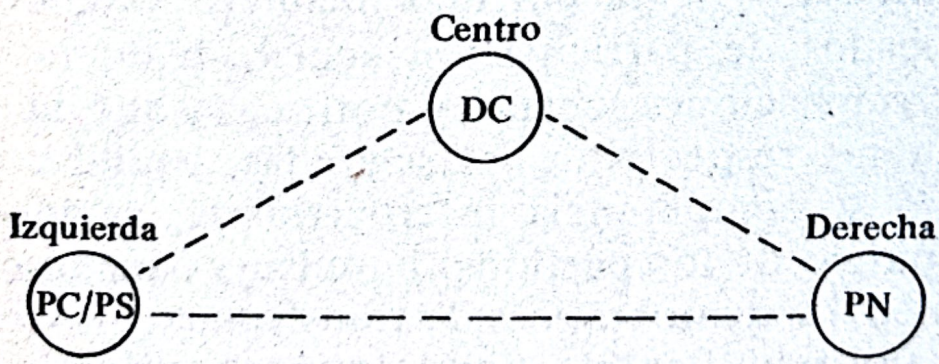
NOTAS

1.- Versiones parciales de este capítulo han sido presentadas en diversos encuentros del Grupo de Trabajo sobre "Partidos políticos en regímenes autoritarios", organizado por el Social Science Council y coordinado por Marcelo Cavarozzi y el autor, y una de ellas al XIII Congreso mundial de Ciencia Política, en París, 1985. Parte del material utilizado en este capítulo ha sido tomado de mis planteamientos en el volumen colectivo de FLACSO, "Partidos y Democracia" (Santiago, 1985). En la recolección de material conté con la colaboración de Paulo Hidalgo. Las versiones parciales de este capítulo se realizaron en el marco de una beca de la Fundación Guggenheim.

2.- Este esquema del sistema partidario puede representarse gráficamente así:



3.- El esquema partidario de la década del 60 y comienzos de los 70 puede representarse gráficamente así:



4.- Sobre los partidos políticos bajo el régimen militar, entre otros, ver A. y S. Valenzuela "Partidos de oposición bajo el régimen militar chileno" (En "Chile 1973-198?" FLACSO-Santiago, 1983); A. Valenzuela "The chilean party sistem: origins, characteristics and future prospects" (Wilson Center, Washington DC, mimeo 1984); C. Huneeus, "Los partidos políticos y la transición a la democracia en Chile hoy" (Centro de Estudios Públicos, Documento de Trabajo Nº 18, 1984); T. Moulian, "Mecánicas de transición y partidos" (mimeo, Santiago 1984); M.A. Garretón "Dictaduras y democratización", capítulo 4

Scanned with CamScanner

(FLACSO, Chile 1984); FLACSO, "Partidos y Democracia" (Santiago, 1985).

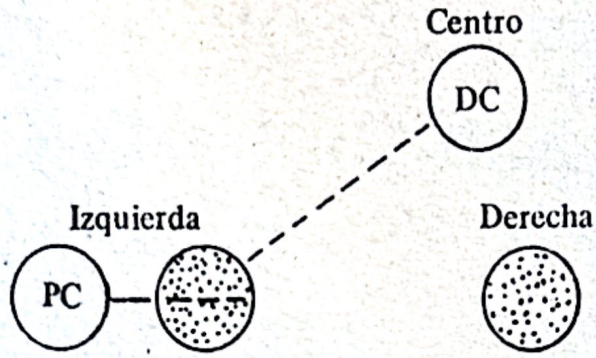
5.- Por ejemplo, el artículo 24 transitorio de la Constitución.

6.- Artículo 8 de la Constitución.

7.- Artículo 19 Nº 15 y 19 y Artículo 23 de la Constitución.

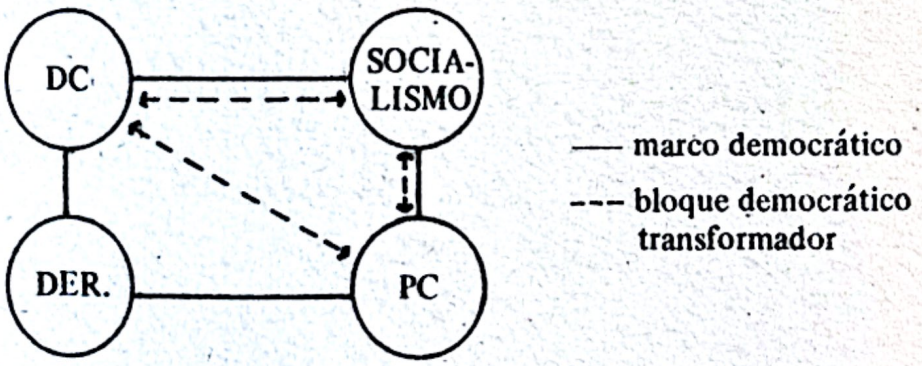
8.- Ver "El Proceso Político Chileno", op.cit.

9.- El esquema partidario bajo el régimen militar puede representarse así:



10.- Ver Nota 19, capítulo cuarto.

11.- El esquema futuro de cuatro polos puede representarse así:



Scanned with CamScanner

VI

Socialismo renovado y democracia

Scanned with CamScanner

EN ESTE CAPITULO analizaremos los rasgos o dimensiones fundamentales de un proyecto socialista renovado y sus relaciones con el tema democrático y con los problemas de democratización a los que nos hemos referido a lo largo de este libro.[1] Ello en un cierto nivel de abstracción, sin incurrir en cuestiones programáticas, tácticas o coyunturales y, como en el capítulo anterior, combinando un enfoque analítico con elementos de tipo normativo.

El socialismo chileno ha vivido dos procesos diferentes bajo el régimen militar. El primero de ellos, que se ha llamado la "renovación socialista", consistió en un fenómeno inacabado, teórico y práctico, de crítica al socialismo de corte clásico vivido por la Izquierda hasta 1973 y de reformulación y actualización de su bagaje intelectual y político. El segundo, un conjunto de dispersiones y fragmentaciones organizacionales que luego dieron origen a convergencias o reunificaciones que tampoco se han completado. La simultaneidad de ambos procesos, pero también su diferencia, tuvieron como resultado actores políticos desgarrados entre su memoria histórica y su nueva inserción, o búsqueda de inserción,

Scanned with CamScanner

en una realidad social profundamente transformada. Y ello atraviesa prácticamente todas las vertientes o fuerzas del socialismo. Nos concentraremos aquí en la problemática de un proyecto socialista renovado.

La renovación socialista no corresponde a una línea específica ni a una estrategia política, sino a un cambio ideológico y, más precisamente, cultural, en cuyo interior pueden darse muy diversas líneas o estrategias políticas incluso contradictorias entre sí. Y la fragmentación actual del campo socialista en diversos grupos o partidos expresa, en parte, el privilegio dado al problema de líneas o estrategias por sobre el del cambio cultural ideológico o de la renovación. La renovación cruza de algún modo todas las líneas o tendencias políticas, y no hay identidad entre sus ideas o tesis y una de las fuerzas socialistas individualmente considerada.

Nos concentraremos en el tema de un socialismo renovado, refiriéndonos sólo marginalmente al problema de la unificación del campo socialista, pues esto último corresponde más a opciones políticas concretas y particulares que nos apartan de la perspectiva de este libro.

Cuando hablamos de un socialismo renovado y de distanciamiento o crítica respecto de un modelo clásico o tradicional de la Izquierda, se enfatiza la renovación en relación a un modelo predominante de pensamiento y acción política que cristalizó en la década del sesenta, pero que no daba cuenta de todos los sectores socialistas y que tampoco era una línea política determinada. Respecto de ese modelo se rescatan muchos elementos que corresponden a valores y principios que estuvieron en el origen y desarrollo del socialismo chileno y que muchos sectores mantuvieron siempre vigentes. Conviene tener en mente que un socialismo renovado reconoce este aspecto histórico de diversidad del socialismo chileno y de continuidad con muchos de sus elementos por cuanto no volveremos sobre ello en las páginas que siguen.

Scanned with CamScanner

Una crítica al modelo tradicional de la izquierda.

Una de las dimensiones que distinguen un proyecto renovado de socialismo es su crítica al modelo político clásico de la Izquierda chilena en algunos planos, rescatando todos aquellos elementos que, como señalamos, enriquecieron la tradición socialista en Chile.

En primer lugar, hay una ruptura con el marxismo-leninismo. Si bien hay elementos de esa cultura que se valoran y si bien las fuerzas políticas que expresen un proyecto de socialismo renovado deberían incorporar sectores que se autodefinen como marxistas leninistas, hay un abandono de esta vertiente en cuanto ortodoxia, en cuanto la única matriz teórico-ideológica que define al socialismo. La identidad socialista deja de encontrarse en el marxismo-leninismo, aún cuando se acepten ciertos instrumentos analíticos propios de esa visión. Este alejamiento de una matriz básica o única de reflexión y acción va acompañada de una crítica a elementos específicos de esa tradición. Por un lado, la concepción marxista-leninista está constituida para pensar un modelo particular de cambio social cual es la revolución y ésta consiste en el colapso de un orden social, la toma de poder por un actor determinante, el inicio de un proceso de destrucción del orden antiguo, fundamentalmente en el régimen político, y la construcción de un nuevo orden social que es visto como un largo momento de liberación, como el alba de los tiempos en que "cantan los ruiseñores" al decir de un autor. El marxismo-leninismo sirve para pensar y actuar la revolución como método político y no otro tipo de procesos. Y, más allá de otro alcance que quiera darse al concepto revolución, lo cierto es que, a diferencia de lo que se percibió en la década del 60, en estos tiempos y contextos, no existe el problema de la revolución percibida como inminente, por lo que para pensar y actuar otro tipo de procesos so-

Scanned with CamScanner

ciopolíticos, el marxismo-leninismo no sirve como matriz básica. Por otro lado, la concepción marxista-leninista implica pensar y actuar la historia con pretención científica, en términos de leyes generales de evolución histórica de las cuales las sociedades particulares son ilustraciones. Y aquí también este enfoque científico iluminista dificulta el reconocimiento completo y complejo de las sociedades concretas. Finalmente, un tercer elemento del marxismo-leninismo con el que se establece una distancia es la idea que el actor que encarna estas leyes de la historia que permiten realizar la revolución es una clase social determinada que se expresa o identifica con una vanguardia o partido.

En segundo lugar, hay un distanciamiento del modelo clásico de la Izquierda chilena respecto del tema mismo del socialismo. En el modelo tradicional de la Izquierda primaba una cierta concepción del socialismo que se deduce fundamentalmente de las leyes históricas y que consiste en la postulación de un modelo (en el sentido fuerte) o sistema de sociedad que se contrapone y supera al de la sociedad capitalista. Hacer el socialismo, entonces, es en la matriz clásica de la Izquierda, hacer la experiencia socialista histórica, transitar a un modelo de sociedad, a un tipo de sociedad definida en sus rasgos fundamentales, realizando ciertas cosas que están de algún modo codificadas.

La crítica a este modelo de socialismo apunta a que su definición básica se daba a nivel de lo que, buena o malamente, se pueda llamar Modo de Producción. Porque el socialismo clásico consistía fundamentalmente en la eliminación del nivel económico de las características básicas del capitalismo. De ahí la importancia que en los modelos socialistas clásicos tienen las nacionalizaciones o estatizaciones y expropiaciones, las planificaciones centrales, etc. La definición del socialismo partía de las transformaciones económicas, cambios en la propiedad privada

Scanned with CamScanner

y en las relaciones de producción, para permitir el posterior desarrollo de las fuerzas productivas. Un proyecto de socialismo renovado se distancia de este modelo clásico, al menos en su pureza original, al redefinir el concepto mismo de socialismo, como enunciaremos más adelante.

Pero no se trata sólo de una crítica al economicismo del concepto o modelo socialista histórico, sino también de su crítica en cuanto modelo único universal aplicable a todas las experiencias históricas –se rescata así el carácter nacional de un socialismo para cada país– y en cuanto portador de un tipo de régimen político que en vez de superar las limitaciones del sistema democrático ha eliminado sus grandes conquistas. El reconocimiento de los avances democráticos en términos de igualdad y justicia sociales que ha logrado el socialismo histórico, no impide una crítica radical, en lo que se refiere a su aplicación a nuestro contexto, a su modelo político de identificación entre Estado y partido y de subordinación de las libertades públicas. Al mismo tiempo, hay también una crítica a este sistema político en cuanto su adscripción irrestricta a uno de los bloques mundiales ha limitado la autonomía de cada país.

En tercer lugar, hay una crítica a lo que en el modelo clásico de la izquierda puede llamarse visión instrumental de la democracia. Ello puede expresarse así: en el entendido que el socialismo es portador básicamente de un cambio económico, el régimen político y el Estado se constituyen como emanación o reflejo de esa transformación económica; el socialismo tendría así un modelo de régimen político, o sea, de mediación entre Estado y Sociedad, distinto, original (como la dictadura del proletariado). Por lo tanto en esta visión la democracia política por razones históricas puede ser aceptada, pero no es un componente esencial del ideal socialista. Una buena ilustración de esta visión es la dis-

Scanned with CamScanner

tinción entre tareas democráticas y tareas socialistas; ello quiere decir que las tareas democráticas son valiosas, positivas e importantes, pero que no son propiamente socialistas. Esta distinción está ligada a esa concepción relativamente instrumental de la democracia, puesto que el fin que se postula puede hacerse con democracia política o con otro instrumento y eso dependerá de las circunstancias históricas, sin que la democracia política tenga una valoración por sí misma. El distanciamiento de esta visión abre paso a un nuevo campo de desarrollo teórico, ideológico y práctico del socialismo, como veremos más adelante.

En cuarto lugar, hay un distanciamiento crítico respecto de una tendencia reduccionista en el modelo tradicional de la Izquierda, sobre todo al nivel práctico, del concepto de nación, país o sociedad, a un concepto de clase o movimiento popular, mediado éste, y por lo tanto también reducido en cierto modo, ya sea por el concepto de partido o el concepto de Izquierda. Esta reducción llevaba a que la política de la Izquierda tuviera como eje la unidad de las organizaciones que la componían, transformando esta unidad en una finalidad esencial a la que se subordinan otros requerimientos de política nacional. En efecto, había aquí una desviación hacia la razón de partido (cuando decimos partido no nos referimos sólo a uno, sino también a la Izquierda concebida como unidad): lo que es bueno para la Izquierda es, por definición, bueno para la nación. Y, por lo tanto, el éxito de esta concepción del modelo socialista, de la revolución finalmente, descansa fundamentalmente en la unidad del actor que lo implementa, es decir, en la unidad de la Izquierda, de modo que el grueso de la política de Izquierda se dirige hacia ella misma y se define en términos de sus relaciones internas.

Respecto de estos cuatro elementos (la tradición marxista-leninista; el modelo socialista clásico de socie-

Scanned with CamScanner

dad y la experiencia de los socialismos históricos; la visión instrumental de la democracia, y la reducción nación – clase – partido que se expresa en un determinado tipo de acción política), un proyecto socialista renovado se plantea en términos de distancia crítica, manteniendo continuidad con otros componentes de la tradición socialista que no hemos mencionado aquí. Porque la ruptura o distanciamiento de un modelo y matriz teórico-políticos tradicionales no significa abandono de la Izquierda ni de su cultura, sino un giro, manteniendo la identidad y afiliación a ella. No hay aquí un desplazamiento hacia el Centro o hacia una concepción social demócrata, lo que no significa un juicio negativo hacia éstos. Se trata, simplemente, de un fenómeno distinto. Ya hemos dicho que la renovación socialista apunta a un cambio cultural dentro de la Izquierda manteniendo la vocación popular y de transformación y sustitución de la sociedad capitalista y no se refiere al problema de las estrategias y líneas políticas, aunque puede tener diversos efectos, no necesariamente inequívocos, sobre ellas. Este cambio cultural puede dar origen a políticas más moderadas o más radicalizadas según las cirscunstancias históricas y los actores políticos específicos de que se trate. Porque, cabe insistir, que la renovación socialista no se identifica con ninguna línea política coyuntural específica. Por otro lado, este distanciamiento de un determinado modelo teórico-ideológico hace posible la confluencia de diversas matrices de reflexión o acción política, sin que un nuevo proyecto socialista se identifique con ninguna de ellas en una globalidad. Así, por ejemplo, hay un aporte ético del pensamiento cristiano, una sintonía con ciertas corrientes del marxismo, una absorción de teorías y métodos del pensamiento científico social, etc. Todo ello le da al socialismo renovado una gran riqueza y diversidad teórico ideológica que se aparta de cualquier ortodoxia, y cuyos elementos éticos corresponden a concepciones

Scanned with CamScanner

metacientíficas de diversas vertientes culturales. Dicho de otro modo, no hay un horizonte teórico e ideológico limitado y unilateral sino un campo cuyo núcleo se diversifica y enriquece permanentemente con nuevos aportes a partir de grandes inspiraciones y tradiciones abiertas.

Pareciera que esta dimensión de distanciamiento de elementos del modelo político tradicional de la Izquierda enfatizara el aspecto crítico-negativo más que la proposición alternativa, por un lado, y los contenidos intelectuales más que los aspectos referidos al estilo y acción o prácticas políticas, por el otro. Si se han marcado hasta aquí los puntos de ruptura es evidente, sin embargo, como se verá al analizar las otras dimensiones de la renovación socialista, que cada uno de estos elementos críticos negativos involucra, aunque más no sea germinalmente, una propuesta alternativa que define un contorno positivo del socialismo. Así, por ejemplo, en la crítica a la noción clásica de revolución como toma del poder y ruptura, existe la propuesta de un proceso de constitución de mayorías y una redefinición de la noción de poder, extensible a todas las esferas de la sociedad y no exclusivamente a la del Estado. En la crítica a la visión cientificista de leyes generales válidas para todas las sociedades, hay el rescate de un método de análisis que privilegia las contradicciones histórico específicas de cada sociedad. En la crítica a la visión instrumental de la democracia política hay una opción por ese régimen como parte del proyecto socialista. En la crítica a los modelos socialistas históricos, existe, en estado de germen, un concepto de socialismo que rescata el predominio de la sociedad civil y de movimientos sociales autónomos, las formas de autogobierno y autogestión colectiva, la afirmación de la vigencia universal de los derechos humanos, las libertades públicas, el pluralismo de proyectos sociales, la irreductibilidad entre Estado, régimen político y sociedad civil. En la crítica a los reduccionismos clasistas, aparece la postu-

Scanned with CamScanner

lación de un proyecto nacional no reductible a ningún mesianismo de clase. En el distanciamiento del modelo partidario clásico, se constata la propuesta de un sistema de representación multipartidaria donde no se identifica a priori una clase o una categoría con un partido y donde se enfatiza una relación no vanguardista entre partido y masas, lo que lleva a una afirmación de la democracia interna del partido. Y así podría seguirse.

Lo mismo puede decirse respecto al estilo y prácticas políticas. La renovación socialista privilegiará todas aquellas prácticas y formas de organización que signifiquen autonomía de los sujetos sociales y expresión de autogobierno y libre determinación, constitución de mayorías sociopolíticas para la realización de transformaciones sociales en los ámbitos global y sectoriales, ejercicio del poder local, democratización del Estado y de las organizaciones sociales y políticas, etc. Es obvio que a estas alturas no pueda haber un modelo cristalizado de la práctica y estilos políticos de la renovación socialista, máxime si ella no se identifica exclusivamente con ninguna organización política que pueda ser considerada en cuanto tal como su referente. Hay, entonces, embriones y jirones de práctica y estilos que pueden detectarse empíricamente en múltiples experiencias de base y de formas de liderazgo, pero no un modelo constituido. De ahí su relativa precariedad como convocatoria política frente a modelos de acción y reflexión ya elaborados y codificados.

Scanned with CamScanner

Un proceso de renovación socialista que busque insertarse en la historia política chilena y, en especial, en los procesos de democratización que configuran el contexto histórico en el actual horizonte generacional, no puede dejar de dar cuenta de la experiencia de la Unidad Popular y de la dictadura militar. La asimilación de esos dos fenómenos es otra de las dimensiones constitutivas de un socialismo renovado. Se trata aquí no ya del pensamiento socialista, de sus diversas vertientes teóricas e ideológicas; sino de lo que ha sido la práctica histórica de la Izquierda en Chile, principalmente en torno a estos dos grandes hitos señalados.

Respecto del período de la Unidad Popular, más allá de la valoración positiva de una enorme cantidad de aspectos y elementos de esa experiencia, lo que distingue el análisis autocrítico de la renovación socialista de otras autocríticas, es que supera la obvia y simple versión de una pura derrota. Hubo un proyecto popular de inmensas proyecciones y también una derrota, lo que es un puro dato objetivo sin componente autocrítico excepto la debilidad frente al adversario, pero también hubo un fracaso. La aceptación e intento de explicación de un fracaso más allá de una derrota frente a un adversario superior en fuerza, obliga a una crítica muy profunda. Así, no es en el rescate de los elementos positivos que se comparte con muchos otros sectores, ni en el diagnóstico elemental que hubo derrota, donde reside la especificidad del análisis del período de la Unidad Popular por parte de la renovación socialista, sino en la conceptualización y comprensión de un fracaso, lo que complementa los dos aspectos anteriores.

En esta reevaluación del proyecto de la UP hay diversos elementos. Uno de ellos refiere al contenido mismo,

Scanned with CamScanner

más allá de las medidas democratizadoras y de participación popular, del proyecto y utopía socialista que se perseguía. ¿De qué socialismo se trataba? ¿Era tan distinto en nuestras mentes y en nuestras prácticas al socialismo histórico real? y si lo era ¿por qué el desconcierto generalizado de la Izquierda frente a los discursos de Allende en que hablaba de un segundo camino al socialismo, en democracia y sin dictadura del proletariado? Otro de estos puntos críticos es el problema de las vías al socialismo. Aquí la pregunta básica es ¿por qué las dudas y ambigüedades de algunos en la Izquierda cuando se preguntaba por las elecciones en el año 1976? Es decir, una de las características que definen la renovación socialista respecto del proyecto de la UP es que no limita su reflexión crítica a la implementación del proyecto, ni al grado de radicalidad o moderación de su aplicación, sino que apunta a algunos de sus rasgos constitutivos, al proyecto mismo. En ese sentido, el golpe militar de 1973 enfrentó al socialismo y a la Izquierda chilena con una realidad que no podía sino incidir en la reformulación de su proyecto teórico ideológico y político. En efecto, la naturaleza del golpe militar y de la dictadura mostró que en estos países, con clases medias diversificadas y ejércitos modernos, la alternativa real no era socialismo o fascismo, sino dictadura militar o democracia política, en la que una mayoría sociopolítica fuera realizando transformaciones con sentido socialista. Lo que reveló el golpe militar fue que el fracaso de la Unidad Popular consitió en su incapacidad de constituir una mayoría social y política que resistiera la reacción de las fuerzas conservadoras en contra del proyecto transformador. Se mostraba así que sólo se puede realizar un profundo proyecto transformador si se cuenta con mayoría para ello y que esa mayoría sólo puede constituirse en un marco político e institucional de tipo democrático. Dicho de otra manera, la alternativa real a la democracia

Scanned with CamScanner

política ("formal o burguesa") no era el socialismo sino la dictadura o régimen militar. Por lo tanto, si hay socialismo en estos países, tendrá que ser en democracia política.

Siempre de modo esquemático, en esta evaluación del pasado hay un elemento muy delicado por cuanto pertenece al nivel más profundo de los símbolos de identidad, cual es el de la herencia de Allende. En toda evaluación del pasado y su proyección actual está presente este elemento con una carga muy honda de desgarro y significación polivalente. Por supuesto que la herencia de Allende y el símbolo de Allende no pertenecen a ningún sector particular de la Izquierda, sino al conjunto de ella. Pero también es cierto que cada sector o grupo, de las versiones más ortodoxas hasta las más renovadas, construye su propio Allende, hace su propia lectura de él, lo que es propio de los grandes mitos de una nación o de un sector de ella. Para un proyecto socialista renovado, Allende, más que un pensamiento teórico, representa una trayectoria histórica, personal y política, que expresa las mejores virtudes de la Izquierda. El contenido de este legado puede sintetizarse en tres elementos, que exigen diferentes tipos de adecuaciones a las nuevas circunstancias históricas.

En primer lugar, la combinación de la vocación popular con la presencia y el manejo de lo institucional. Lo popular significaba en Allende el reconocimiento de la diversidad popular, la identificación con los sectores más desvalidos, la presencia inevitable del conflicto social y la lucha contra los privilegios, la solidaridad y lealtad con las organizaciones populares, la exaltación simbólica de ese mundo como sujeto en la vida y destino del país. Lo institucional, unido indisolublemente a lo anterior, significaba en Allende el reconocimiento de la realidad chilena y del papel del Estado no sólo como ins-

Scanned with CamScanner

trumento de dominación sino como instancia de resolución de los problemas de los sectores dominados, la aceptación de las reglas y símbolos de esa institucionalidad, el pragmatismo, la negociación, la valoración de lo electoral y la lucha dentro de esos marcos, y la plena aceptación de la política como enfrentamiento que requiere un campo consensual entre adversarios y no entre enemigos. En este aspecto debe reconocerse sí que Allende compartía con el resto de la clase política una visión inadecuada del carácter de las Fuerzas Armadas, como se revela con el golpe y el régimen militar. En todo caso, su muerte expresa simbólicamente esa irrenunciable lealtad a los dos principios señalados.

En segundo lugar, la combinación de democracia política y socialismo. Se trata en Allende de una percepción histórica, para la cual no podía contar con un desarrollo teórico previo. Hay en esto una gran intuición que se adelanta a un debate intelectual y político y a una formulación sistemática. Quizás la versión más acabada de esta visión práctica e intuitiva sea la llamada Vía Chilena al Socialismo, cuyo drama estribó en la definición justa de un problema ("El combate sostenido para abrir el camino de la democracia económica y conquistar las libertades sociales es nuestra contribución mayor al desarrollo del régimen democrático. Llevarlo a cabo simultáneamente con la defensa de las libertades públicas e individuales es el desafío histórico que todos los chilenos estamos enfrentando"), pero en la ausencia de instrumentos de elaboración, debido al peso de la tradición doctrinaria e ideológica de la Izquierda y el leninismo para pensar la política en términos de revolución clásica, lo que tenía al frente sólo la tradición social demócrata de reforma e integración en el capitalismo. La democracia es vista por Allende como método y como modelo político ("segundo camino al socialismo) y el socialismo como transformación de la base material

Scanned with CamScanner

de la sociedad, lo que se plantea como una posibilidad, como un conjunto de valores más que como un modelo predeterminado de sociedad. Ello sin duda parece ser el legado más transcendente y vigente.

En tercer lugar, la combinación de un proyecto nacional con un instrumento político específico, cual era la unidad de la Izquierda. Allende es, en este plano, expresión y resultante de un determinado contexto histórico en el que la viabilidad de un proyecto de transformación nacional aparece estrecha y exclusivamente ligada a un sólo actor político, la Izquierda, lo que pone como eje el problema de la unidad entre los componentes de ese actor que eran, principalmente, los partidos comunista y socialista, además de otros grupos de menor envergadura. El riesgo permanente es subordinar este proyecto nacional a los requerimientos de la unidad del instrumento . En Allende hubo siempre la percepción de la necesaria diversidad de la Izquierda y el empeño constante en la ampliación de ese instrumento. Este aspecto de la herencia política de Allende puede, así, ser recogido de dos maneras contradictorias. Una es poniendo el énfasis y la prioridad en el aspecto orgánico de la unidad de los componentes de la Izquierda, la otra es poniendo como eje un proyecto nacional al que se subordinan los problemas de la unidad entre partidos de Izquierda. Volveremos sobre esto.

No es extraño, entonces, que tanto la renovación como la unificación del campo socialista quieran hacerse bajo la figura de Allende, reclamando su legado. Por otro lado, en la medida que un socialismo renovado apunta a reivindicar un proyecto de nación y a convocar más allá de la Izquierda misma, no puede hacerse abstracción del hecho que Allende y la Unidad Popular son también símbolo de contradicción en la sociedad chilena, expresión de una época que marcó una profunda división entre los chilenos y cuyas heridas no está claro que hayan

Scanned with CamScanner

cicatrizado. Así, la Izquierda, y la renovación socialista dentro de ella, no pueden dejar de referir su identidad a Allende y la Unidad Popular. Pero, para no quitarle a la convocatoria socialista su proyección nacional, es necesario tener presente que es una identidad conflictiva, en que operan tanto la afirmación y el despliegue positivo del símbolo, como también la contradicción señalada.

Respecto de la experiencia de la dictadura militar para la Izquierda, aquélla puso en el tapete el tema de la condición humana universal e histórica más allá de sus dimensiones clasistas. El tema de los derechos humanos como variaciones históricas yculturales del derecho a la vida, replantea la naturaleza de un proyecto de clase en términos de una vocación nacional. El lenguaje y la práctica de los derechos humanos lleva a reconocerlos como algo que trasciende la naturaleza de clase y es válido para todos, lo que cambia la connotación de enemigo y obliga a promover una institucionalidad en que ellos se respeten y desarrollen. Pero la experiencia dictatorial no sólo muestra la importancia y el carácter irrenunciable de las libertades públicas y de un tipo de institucionalidad que las garantice y promueva, sino que también lleva a la valorización de formas autónomas de lucha y de afirmación como sujetos por parte de los diversos sectores sociales. La acción colectiva simbólica, expresiva, defensiva, reivindicativa, participativa, de enfrentamiento y auto afirmación, la creación de espacios de dignidad y la búsqueda de autogobierno, son todas dimensiones de un proyecto que no descansa en la pura dependencia del sistema político y que redefine el sentido mismo de la acción política

Scanned with CamScanner

Radicalidad socialista y radicalidad democrática

En los párrafos anteriores, sobre el distanciamiento respecto de elementos del modelo teórico político clásico de la Izquierda y sobre la reevaluación crítica del pasado, ha quedado claro que una de las dimensiones básicas de un proyecto socialista es la opción por la democracia política, la que se incorpora como un elemento constitutivo de un proyecto de transformación social.

Es posible que todavía las expresiones teóricas y prácticas del socialismo no se hayan repuesto de lo que significa esta opción, lo que a veces impide una verdadera coherencia al respecto y la asunción de todas sus consecuencias.

Vale la pena ubicar este tema dentro de una cierta evolución, por cuanto su tratamiento ha estado muy ligado a experiencias históricas de la Izquierda chilena. En el discurso de ésta a lo largo de los años se ha ido expresando la historicidad de esta problemática. La integración entre los dos elementos, democracia y socialismo, ha sido dificultosa y normalmente el resultado ha sido una cierta tensión, ya sea entre el discurso y la práctica histórica democrática de la Izquierda, ya entre diversos aspectos de un discurso que no encontraba en ninguna tradición teórica un referente para pensar el proyecto político desde la democracia. En la década del sesenta, el énfasis fue puesto en el socialismo, como algo posible, "a la mano", y necesario. Ello era producto de un cierto determinismo estructural, "inviabilidad" del capitalismo dependiente, y de ciertos cambios ideológicos como el impacto de la revolución cubana, la evolución del Partido Socialista hacia posiciones insurreccionales, la transformación del lenguaje del Partido Comunista desde la revolución anti oligárquica, anti imperialista y anti feudal a la aceptación de la inevitabilidad del socialismo. El dilema "socialismo o fascismo", tan en boga y

Scanned with CamScanner

tan fácilmente aceptado por la sensibilidad de Izquierda en esa época, da buena cuenta de ese clima: en el que democracia existe como un dato que es, a la vez, un cierto obstáculo para las transformaciones profundas que la sociedad requiere, pero también en Chile un medio, una herramienta que puede ser útil, aunque no se saquen todas las consecuencias. Hay así una cierta esquizofrenia entre un discurso que enfatiza los aspectos críticos de la democracia, oponiéndolos al socialismo, y una práctica histórica de adhesión y participación en el régimen democrático, ampliando y profundizando su legitimidad en los sectores medios y populares.

En el período 1970-1973 se profundizó la tendencia a ver la democracia como un obstáculo en nombre del cual se impedía el avance del socialismo. Se desarrollaron así dos tendencias contradictorias. Una, que trataba de conciliar ambos términos, democracia y socialismo, pero con una elaboración incompleta que destacaba los aspectos defensivos frente a los ataques de una oposición que denunciaba un proyecto totalitario por parte de la Unidad Popular, o los aspectos que permitían distinguirse de los socialismos históricos, sin que apareciera la democracia como un proyecto político propio. Ello, que tenía como excepción las formulaciones de Allende y de sectores cercanos a él favoreció la percepción de que la apelación a la democracia era principalmente táctica y no por tener un valor en sí misma. La otra, enfatizando el carácter socialista del proceso y el aspecto obstáculo de la "democracia burguesa", llevó a reproducir en este contexto el debate sobre el poder dual y el asalto al poder y a oponer una cierta democracia directa de masas al sistema político institucional constituido. Las discusiones sobre las fases de la revolución, tareas democráticas y tareas socialistas, gradualismo vs. toma del poder, dictadura del proletariado, distantes del hecho irrefutable de la adhesión de masas a los principios y mecanismos de la democracia política, ilustran esta tenden-

Scanned with CamScanner

cia. En ella la conciencia ideológica de la Izquierda no encuentra la coherencia entre los temas del socialismo y la democracia, quizás porque no logra reconciliar la tarea histórica que tiene al frente con su tradición teórica y su matriz de pensamiento.

En los tiempos siguientes al golpe militar, es el tema de la democracia el que llenará el discurso de la Izquierda. Desde una perspectiva, para demostrar la profecía cumplida respecto de la democracia como obstáculo para un proyecto transformador. Desde otra, para apelar a su valor histórico y a su recuperación inmediata; pero sin la posibilidad de ajustar cuentas con una tradición que permanecía invariable, debido a la situación de clandestinidad y a la rigidización que ella produce. El tema del socialismo desapareció de la escena, dejándosele para un futuro lejano, cuando las condiciones lo permitieran. La autocrítica, como hemos dicho, enfatizó en un primer momento sobre todo los errores de procedimiento, pero no tocó los elementos contitutivos del proyecto político. Con el tiempo,ello fue variando y tanto la dificultad de la recuperación democrática, como las relaciones con el centro político, el debate sobre la especificidad del proyecto de Izquierda, la crítica a los socialismos históricos, la gran discusión en torno al eurocomunismo, las experiencias de término de dictaduras y de procesos de democratización en Europa y luego en América Latina, la creación de espacios de reflexión y la práctica de lucha contra la dictadura militar, han permitido revisar y reformular esta problemática democracia–socialismo.

Parece conveniente plantear este problema en términos de la conciliación conflictiva entre dos radicalidades que en la reflexión teórica y en la experiencia histórica se han presentado como contradictorias: la radicalidad democrática y la radicalidad socialista. Vale la pena recordar que estamos usando el concepto democracia en el sentido preciso de régimen político, que es con el cual

Scanned with CamScanner

se presentan las tensiones. Es decir, no hablamos aquí del ideal democrático en sentido genérico, ni de la democracia como atributo de toda la sociedad, con los cuales es muy fácil mostrar que hay identidad abstracta con el ideal socialista, sino de la democracia como un tipo particular de régimen político, caracterizado por la elección de gobernantes por voto universal, la vigencia de derechos humanos y estado de derecho, libertades públicas garantizadas, separación de los poderes del Estado, alternancia en el poder político, sistema de representación en que gobiernan las mayorías y se respetan las minorías, pluralismo ideológico político, etc. Es decir, se trata de una forma específica de mediación entre Estado y Sociedad que puede ser válida para algunos contextos históricos y no para otros. Ninguna sociedad puede escapar al problema de cómo se gobierna y qué condiciones definen esa forma de gobierno y al problema de la definición de la relación entre la gente y el Estado, es decir, el tema de la ciudadanía. Y la democracia política es una respuesta histórica, particular, a estas dos cuestiones, así como hay otras respuestas posibles.

La radicalidad democrática fija un marco preciso a la acción colectiva caracterizado por los elementos señalados más arriba, lo que significa que las decisiones trascendentes de la sociedad sólo pueden adoptarse cuando existen los consensos mayoritarios de acuerdo a normas que sólo pueden ser cambiadas también por consensos mayoritarios y que ellas en ningún caso pueden afectar los derechos básicos de los miembros de la sociedad.

Por su parte, la radicalidad socialista, en sus términos clásicos, apunta al fin de la explotación, es decir, se propone erradicar la apropiación del sobre-trabajo por parte de una determinada clase. En consecuencia busca liquidar la institución que hace posible este fenómeno, que es la propiedad privada de los medios de producción, o, cuando menos, procura ejercer coerción sobre los sec-

Scanned with CamScanner

tores que los poseen. De este modo, la radicalidad socialista postula socializar las condiciones de producción y reproducción material. Se configura así un elemento antagónico vis a vis la sociedad capitalista imperante: la eliminación de aspectos básicos de esta última, que tienen que ver, además, con ciertos sectores sociales específicos. Esta radicalidad plantea sin duda un problema de amigo-enemigo que tiende a expresarse en el quehacer político cotidiano.

La fácil afirmación que no existiría tensión entre socialismo y democracia por cuanto "no hay orden social más democrático que el socialismo", se complica cuando nos referimos específicamente a la democracia política, tal como la hemos definido. Porque la democracia política en cuanto régimen político particular se da en condiciones de separación entre personas concretas ("productores directos" en la terminología clásica) y ciudadanos, donde la arena política crea la apariencia de identidad e igualdad entre ellos. En estas condiciones, la transformación de la sociedad tendría como límite la mantención de esa separación, y por lo tanto, sin romper ese orden político "burgués" no habría transformación social relevante.

Para un socialista, reconocer la radicalidad de la "democracia política" equivaldría a aceptar que la explotación y la dominación persistirán mientras no se configure una mayoría suficiente para cambiar las condiciones estructurales que las originan. Es decir, el orden social, el statu quo, permanecerían mientras no sea posible modificarlo de acuerdo a normas consensuales. ¿En qué queda entonces el concepto de "revolución socialista" si se le despoja de su contenido de "toma del poder" y destrucción del "aparato político de dominación", el Estado? Parece entonces que esta opción por la radicalidad democrática en lo político, por sobre la opción actual y urgente de término de la explotación, no puede ser sino la opción de una elite. Es "comprensible",

Scanned with CamScanner

así, que el socialismo de nuevo cuño, "renovado", sea imputable a quienes no tienen hambre ni sufren la explotación. Es "razonable" que ellos prefieran postergar la superación de esta última, con tal de preservar la esencia del régimen de democracia política, cuyo elemento básico es la libertad individual.

Por otro lado, no hay experiencia histórica de socialismo con democracia política así definida. Las sociedades socialistas conocidas poseen otro tipo de régimen político y en las sociedades con regímenes democráticos el paso hacia estructuras sociales definidamente socialistas ha encontrado obstáculos enormes que terminan por permitir reformas, pero no la superación del capitalismo.

Este es el meollo del problema y a esta contradicción o tensión hay que responder sin retóricas ni evasivas. Todo proyecto político o histórico global tiene que hacer una opción explícita por el régimen político o sistema de gobierno y ciudadanía, opción que pasa a formar parte constitutiva y definitoria de tal proyecto. Ello implica reconocer la autonomía del régimen político en relación al sistema económico social: son dos opciones diferentes, irreductibles que no se derivan la una de la otra. Si todo proyecto histórico o social global (y ya clarificaremos más adelante algo de esto) tiene que tener un proyecto de régimen político, entonces, el régimen político que un socialismo renovado postula para un país como Chile (pues no en todas partes la opción socialista a este respecto será la misma, en tanto ésta se define históricamente), es el régimen democrático. Pero ello tiene ciertas consecuencias que provienen de lo que llamamos lo radical democrático, y que enfrentan lo radical socialista. ¿Cómo se concilian ambas radicalidades?

No hay manera de resolver esta contradicción sin un cambio o redefinición en el concepto clásico de socialismo, que tome en cuenta la experiencia histórica. Para

Scanned with CamScanner

ello vale la pena partir de la visión, ya esbozada en otras partes de este libro, que una sociedad es, a la vez, **Estado** que representa su unidad (y, por lo tanto, también sintetiza relaciones de dominación), **sociedad civil** que es el reino de la pluralidad y diversidad (y que no se reduce a la economía, abarcando también la cultura), y **régimen político**, donde reina el principio de la **representación** o articulación institucional entre Estado y sociedad civil. Habría, entonces, que indicar por ahora, y sin perjuicio de retomar estos temas, que el socialismo puede tener un modelo (y más adelante criticaremos la idea de modelo), una propuesta de organización de la economía y, también, una propuesta de organización de la sociedad civil y del Estado. Pero no tiene un modelo per se de régimen político, sino que éste varía de acuerdo a los contextos nacionales. Entonces, para ciertos países, pues esto no es necesariamente universal, el socialismo no podría sino aceptar que el régimen político válido y bueno es el régimen democrático. Ello significa reconocer que el socialismo busca la superación de la sociedad capitalista en lo que se refiere a las formas de organización de la economía y de la sociedad civil así como al nivel del Estado, pero no al nivel del régimen político porque el capitalismo no es un régimen político sino una forma de organización de la sociedad y del Estado. Significa también responder con la afirmación de la democracia política, para ciertos contextos, a la famosa pregunta de Bobbio a los marxistas sobre qué régimen político o qué sistema de elección de gobernantes ellos postulan: dictadura del proletariado, corporativismo, fascismo, régimen militar, democracia directa, democracia representativa; son todos tipos de régimen político que no se corresponden necesariamente con un modo de producción determinado y sobre los que hay que hacer una opción explícita.[3]

Pero desde ese momento, la democracia política (tal

como la hemos definido y que algunos llaman democracia burguesa, formal, representativa, liberal, constitucional, etc.) pasa a ser un elemento constitutivo del proyecto socialista, forma parte de su identidad irrenunciable tanto como las propuestas económicas y sociales de superación capitalista, es decir, es tan "socialista", aunque se comparta con sectores no socialistas, como las tareas económicas básicas que se denominan socialistas (expropiaciones, nacionalizaciones, gestión y apropiación colectiva, etc.). Se supera así la distinción falsa entre "tareas socialistas" y "tareas democráticas". La constitución de la democracia política es una de las tantas tareas socialistas, y en algún momento puede ser la tarea principal, aun cuando nunca un proyecto socialista se agotará en la propuesta de democracia política, como ninguna sociedad se agota o define sólo al nivel del régimen político o del puro modelo económico, o del puro modelo cultural o del puro Estado. Pero en ese plano, el del régimen político, la democracia política, su construcción y ampliación, es un valor y principio histórico irrenunciable para ciertas sociedades. Si el proyecto de régimen político, en este caso la democracia política, es parte del proyecto socialista, y tan importante como el proyecto de sociedad civil y de Estado, y si cada esfera guarda cierta autonomía, es normal que entre ellas haya tensiones, exigencias de la democracia política al socialismo: tanto socialismo cuanto la democracia política lo permita. Y a su vez, habrá una exigencia del socialismo a la democracia política: si no se crean ciertas condiciones sociales, la democracia política se hará inestable y llegará a su colapso. Pero se trata de contradicciones y exigencias mutuas que se dan no desde fuera sino en el interior de un mismo proyecto socialista y que el socialismo debe ir resolviendo históricamente. enfatizando a veces el tema del régimen político, otras veces el de la transformación económico-social o cultural, otras veces el de la

Scanned with CamScanner

independencia nacional, pero nunca abandonando ninguno. Ello permite afirmar que en un momento determinado la identidad socialista sea, por ejemplo, la lucha por los Derechos Humanos elementales, en otro momento sea la lucha por elecciones libres, y en otro la expropiación de los monopolios, etc. No renunciar a ninguno de los componentes propios del proyecto, significa adaptar sus exigencias y requerimientos mutuos a la situación histórica objetiva y subjetiva de la sociedad, resolviendo en cada caso cuál es la problemática principal que se enfrenta.

Pero esta redefinición de la relación entre democracia política y socialismo en términos de dos radicalidades lleva necesariamente a una reformulación del socialismo clásico, por cuanto tiende a desparecer la idea de la "toma del poder" del Estado en un momento determinado a la que sucede el desencadenamiento de la transformación del orden social. La existencia de un régimen político democrático, que supone sin duda poder y dominación, es contradictoria con esta idea de "toma de poder", pues el concepto de incertidumbre y reversibilidad es esencial a tal régimen: nadie se toma el poder polífico de una vez para siempre. Si ello ocurriera, no estaríamos en un régimen de democracia política.

Cabe, entonces, referirse a esta redefinición del socialismo, que se inserta, sin embargo, en su tradición.

La reformulación socialista

Recordemos que el modelo clásico de socialismo, hoy en crisis y , en algunos casos, en descomposición, se caracterizaba por la afirmación de una clase con intereses

Scanned with CamScanner

unívocos que encarna los intereses generales de la sociedad: la clase obrera, y que se hace representar por una organización de vanguardia, el partido, cuya misión es tomar el poder del Estado para iniciar desde ahí la transformación de la sociedad. Esta transformación de la sociedad pasaba por una fase de destrucción del orden antiguo y de colectivización de los medios de producción o, en la vertiente más social demócrata, por la referencia del movimiento social a un Estado que se constituye en el agente reformador del capitalismo. Elementos fundamentales del modelo clásico más ortodoxo eran también la visión economicista y cientificista de la sociedad. La primera suponía que de las transformaciones económicas emana el conjunto de otras transformaciones sociales, es decir, que eliminando la dimensión de explotación se eliminan todas las otras formas de alienación y opresión. Subyacente a esta visión estaba también la percepción optimista del progreso ilimitado: si se desarrollan las fuerzas productivas, y está el espacio abierto para ello indefinidamente, es posible la solución del conjunto de contradicciones de la sociedad. La segunda, concebía una teoría única y científica de la sociedad y del tránsito al socialismo , un sistema de leyes generales que hay que aplicar a cada caso particular y cuyo núcleo inmutable es el marxismo-leninismo.

El modelo clásico del socialismo se componía, entonces, de este conjunto de elementos: clase, partido, toma de poder del Estado, economicismo colectivizador o estatizante, progresismo de las fuerzas productivas y teoría cientificista de la historia.[4]

Se trata de una visión que se deshace progresivamente.

En primer lugar, porque sus propios elementos han estallado y perdido consistencia interna y entre sí, producto de las tranformaciones materiales, sociales y culturales de la sociedad contemporánea. Así, los fenómenos de terciarización de la economía, cambio tecnológi-

co, pérdida relativa de importancia de la clase obrera en la fuerza de trabajo, explosión de demandas y proliferación de actores sociales que desbordan el mundo del trabajo, complexificación y heterogeneización de la sociedad (contra el viejo supuesto de su creciente homogeneización), por citar sólo algunos, hacen que la idea socialista no pueda reposar ya únicamente en una clase particular, como sería la clase obrera, o incluso la clase trabajadora, que ya es un concepto distinto más amplio. El socialismo no puede descansar en un solo actor social, aunque privilegie siempre el mundo de los trabajadores, sino que apela a muchos actores al mismo tiempo, pasando así a convertirse en un principio con el cual diversos sectores se identifican sin que haya nunca identidad exclusiva con uno de ellos en particular. El concepto del partido vanguardia, representante único de los intereses de una clase, pierde desde ese mismo momento su consistencia, porque los partidos han dejado de ser los únicos canales de representación y porque aunque hubiere un sólo sujeto del socialismo, éste presenta intereses diversificados y hasta contradictorios. Por su parte, la apelación al Estado, ya para apropiarse del mismo, ya para hacerlo intervenir en contra del poder privado, identificando los intereses de la clase obrera con los del Estado, se hace más compleja en la medida que tiende a predominar la irreductibilidad mencionada entre sociedad civil, régimen político y Estado, donde ninguno de estos elementos debe subsumir al otro. Finalmente, la visión iluminista del progreso y la ilusión cientificista de la política han cedido paso a concepciones más tentativas y relativas sobre la realidad social y su evolución, producto de las grandes tragedias colectivas de este siglo; pero también de la influencia de nuevas corrientes de pensamiento.

En segundo lugar, porque la utopía socialista ha dejado de ser la pura utopía de la igualdad y de sus condicio-

nes materiales, para asumir también la utopía democrática que se refiere a las libertades y la utopía de tradición cristiana, aunque no es exclusiva de ella, que puede resumirse en el concepto de emancipación o liberación y que apunta a los temas de la solidaridad y fraternidad.

En tercer lugar, porque las sociedades de nuestro continente, caracterizadas por la coexistencia, en un mismo ámbito geográfico e histórico, de mundos civilizatorios muy diferentes, viven una crisis que no puede ser enfrentada por el modelo clásico de socialismo a que hemos aludido. Esta crisis podría ser caracterizada -en terminos muy gruesos y esquemáticos- en una doble dimensión. Por un lado, una crisis del modelo de desarrollo, donde lo que aparece como crucial, en estos países, es un proceso de marginalización creciente, una situación en la que millones de seres humanos no van a alcanzar las condiciones elementales de sobrevivencia, realización personal y el nivel básico de la ciudadanía. El mundo sumergido, creciente y sin esperanzas, es el primer elemento de la gran crisis de la sociedad que enfrentamos. La segunda dimensión se ubica en un plano sociocultural y se refiere a la tensión, no resuelta hasta ahora, entre los fenómenos de socialización, es decir,de expresiones colectivas donde las clases, los grupos, las categorías se manifiestan y se autoafirman como tales, y las tendencias cada vez más presentes de individuación en las que la gente quiere ser cada vez más sí misma y cada vez más distinta.

Esta sociedad marcada por esta doble crisis de marginalización masiva creciente y de contradicción entre los fenómenos de socialización necesaria y las tendencias y aspiraciones a la individualización, plantea un enorme desafío para un proyecto socialista. En efecto, la tradición socialista está acostumbrada a pensar los problemas en términos del mundo del trabajo, de la clase obrera y de tendencias estatizantes o colectivistas. Los temas de una

Scanned with CamScanner

sociedad sin marginales o integrada y del autogobierno en los distintos niveles de la sociedad aparecen como centrales para las sociedades contemporáneas. Ya no pueden resolverse los problemas de estas sociedades con la sola utopía del término de las explotaciones, la eliminación del trabajo asalariado, etc., en un mundo en que grandes masas claman por ser incorporadas al menos a ese trabajo.

¿Qué consecuencias tiene este replanteamiento del modelo clásico de socialismo?

La primera de ellas es que el conjunto de problemas de las sociedades contemporáneas y de nuestro continente ubica el tema clásico de la explotación económica como uno de los problemas a enfrentar y no como el único cuya resolución implicaría el término de todas las contradicciones. El socialismo no sólo ataca el tema de la explotación económica, sino que es incompatible con toda forma de concentración o acumulación monopólica, no únicamente con la de capital. Ello reviste especial trascendencia en las sociedades modernas donde la concentración no se da sólo en el nivel económico, sino en el terreno del conocimiento y la información, por ejemplo. Dicho de otra manera, el socialismo no es sólo lucha contra la explotación, sino a la vez contra la opresión y las alienaciones. La lucha por la igualdad, reivindicación clásica del socialismo, es también lucha por la libertad, por las condiciones de autorrealización personal y por el desarrollo de capacidades de autogestión colectiva. Esto significa que el socialismo en cuanto contenido se define históricamente en cada sociedad, pues se trata de determinar en cada sociedad cuál es la explotación, la opresión o la alienación principal para definir las prioridades de lucha y el programa socialista concreto. Se trata de un lento y largo proceso que se hace al interior de la democracia política y donde el interés socialista asume el interés de la nación y la sociedad concreta, desde la

Scanned with CamScanner

perspectiva de quienes nacieron perdedores en la vida y en la historia, llámense éstos obreros, marginales, cesantes, mujeres, hambrientos, pobres, oprimidos, alienados o dominados. Desde la perspectiva de los vencidos pero asumiendo, con otra lógica, la herencia civilizatoria que haya dejado el mundo de los vencedores.

¿En qué queda, entonces, el tema de la propiedad, núcleo de la relación y la sociedad capitalistas para el socialismo clásico, y, por lo tanto, el carácter anti-capitalista o de superación del capitalismo, sin lo cual el socialismo pareciera perder todo sentido?

En primer lugar, sin desconocer el sello de explotación que define a la relación capitalista en cuanto tal y que subsistirá mientras subsista ésta, ni ella es la única relación de explotación que existe en las sociedades contemporáneas ni todas las dominaciones, opresiones o alienaciones se derivan exclusivamente de esta relación de propiedad. Ello significa que el socialismo, más que eliminar toda forma de propiedad capitalista, lo que busca es superar y eliminar los efectos sociales que la explotación crea a través de la regulación, el control y las compensaciones y redistribuciones estatales y sociales, la extensión de formas de propiedad no capitalistas, la combinación de formas de propiedad con formas de gestión , etc. En segundo lugar, el socialismo define históricamente para cada sociedad concreta cuáles son las formas de apropiación que están impidiendo el desarrollo de la sociedad y acrecentando las desigualdades sociales (por ejemplo, ciertos monopolios nacionales o extranjeros) y busca su superación, respetando y desarrollando todas aquellas otras formas de propiedad que se inscriben dentro de una dinámica de desarrollo nacional y no impiden niveles crecientes de igualdad y justicia sociales. Se define así una relación programática e histórica con el problema de la propiedad y no una oposición esencialista a ésta, lo que en el plano concreto signi-

Scanned with CamScanner

fica su aceptación y la de ciertos principios que la acompañan históricamente como el papel del mercado.[5] En tercer lugar, la subordinación de la lógica privada a la lógica de desarrollo nacional y al incremento de las igualdades sociales, el reconocimiento del espacio y requerimientos de las diversas formas de propiedad, la eliminación o superación de aquéllas formas particulares de propiedad que atentan contra el desarrollo nacional o aumentan la desigualdad social, se hacen dentro del marco democrático. En otras palabras, el principio de superación de la sociedad capitalista sigue vigente, pero no se le reduce al problema de la propiedad, se le combina con el principio de superación de otras formas de dominación que no provienen del carácter propiamente capitalista de una sociedad concreta, priorizando en términos históricos uno u otro y definiéndolos en el interior del régimen democrático.

Vale la pena precisar el concepto de superación de la sociedad capitalista en sociedades como las nuestras. Porque si bien es cierto que la política socialista no puede dejar de ser anticapitalista, hay que preguntarse de qué capitalismos se trata y cuán capitalistas son nuestras sociedades. Es evidente que se trata de capitalismos débiles muy distantes del sueño clásico de homogeneización industrial de las sociedades y donde, por lo tanto, el proyecto socialista es muy diferente del que puede plantearse para las sociedades de capitalismo clásico. Los temas de la dependencia, de la heterogeneidad estructural o coexistencia de modos de producción diferentes, de modernidad retrasada, exógena e incompleta, obligan a pensar un proyecto socialista que no es pura superación de un capitalismo débil y localizado sólo en ciertos núcleos de la sociedad, sino también realización nacional de la modernización y democratización atrasadas e incompletas, sin las cuales no hay integración de millones de seres que viven al margen incluso

de la problemática capitalista. Es decir, un socialismo no puede definirse en estas latitudes como simplemente anticapitalista sino que se identifica con un proceso de construcción de la nación. Por eso, cabe insistir en el socialismo como un proceso de transformaciones que va enfrentando históricamente las contradicciones principales que la sociedad capitalista ofrece y que apunta siempre a esa superación. Pero puede ser que la superación de la contradicción principal de una sociedad capitalista como la nuestra no sea, a esta altura, la relación capital-trabajo, por ejemplo, y entonces, en ese sentido el socialismo se reviste de un contenido muy distinto al de otro proyecto socialista, e incorpora necesariamente elementos propiamente capitalistas.

Una segunda consecuencia es el replanteamiento del problema de la revolución, tema tan abundante en la retórica socialista como escaso en la realidad de nuestras sociedades. Porque el concepto revolución apunta a dos cosas diferentes. Por un lado se refiere a un método político, que implica "toma del poder" por la fuerza revolucionaria, destrucción del orden social antiguo y creación de un nuevo orden, a lo que se le asigna un carácter de irreversibilidad. Si bien un régimen democrático puede surgir como resultado de un proceso revolucionario, hay en este concepto de revolución una identidad entre Estado, régimen (o partidos) y sociedad civil que es contradictoria con la visión que hemos señalado de socialismo, aún cuando las revoluciones son fenómenos que pueden imponerse más allá de los diseños y previsiones de los actores sociales. Pero, sin entrar al análisis de coyunturas históricas donde las opciones pueden ser inevitables, hay que reconocer que los conceptos de toma del poder y de irreversibilidad, intrínsecos a la idea de revolución como método o proceso político que se desarrolla en un momento y foco determinado (el Estado), son contradictorios con el concepto de régimen democrático. Pero

Scanned with CamScanner

la idea de revolución apunta también a "contenido". Se puede decir que la superación del Estado capitalista y de la sociedad civil capitalista son objetivos y contenidos revolucionarios y que quien está intentando eso está haciendo una revolución. Y ello puede hacerse teóricamente dentro de los marcos de un régimen democrático, es decir sin revolución en el sentido de método político. En otras palabras, como el socialismo se postula con una propuesta propia a nivel de la economía, la sociedad civil y el Estado, pero no a nivel del régimen político donde su propuesta es la democracia política como ha sido aquí definida, la revolución como método no está presente en un proyecto socialista renovado, aunque sí lo esté el concepto de revolución en cuanto idea transformadora de un tipo de sociedad.

Ello significa aceptar definitivamente la idea de reversibilidad y alternancia en el poder; lo que no implica que no se luche porque a distintos niveles las transformaciones obtenidas se hagan irreversibles, pero reconociendo que en cualquier momento por métodos democráticos se pueden perder conquistas obtenidas, a excepción de los valores y derechos irrenunciables. Así, los principios de reversibilidad y de alternancia son un test clave y, en la medida que se aceptan, los proyectos sociales no pueden ser totales ni derivaciones científicas y necesarias de la utopía, porque la acción política pasa ineludiblemente por la convicción, la transacción, la incorporación de intereses y visiones contradictorios.

Puesto que no hay asalto o toma del poder, puesto que hay un proceso permanente de lucha dentro del marco democrático en todas las esferas donde hay poder o dominación, una tercera consecuencia de lo dicho hasta ahora es que el proyecto socialista se define mucho más como **proceso** que como **sociedad**. Es decir, no puede definirse el socialismo como un modelo de sociedad caracterizado o establecido de una vez para siempre,

Scanned with CamScanner

identificado con un orden social o con instrumentos sacralizados. No hay en esta visión sociedad socialista, propiamente tal, porque el socialismo es un principio de transformación social, de superación de alienaciones, opresiones y explotaciones que se basa en la idea de la emancipación social y autogobierno de la gente, con un rol protagónico de trabajadores y dominados, pero no es un esquema de mecanismos concretos, un sistema social predeterminado. En este sentido el concepto de "transición al socialismo", propio de la visión clásica y tradicional de la revolución y donde se hace referencia a un período y momento precisos, pierde su sentido. No hay transición de una sociedad a otra, hay transformación permanente. No hay modelo socialista, hay proceso socialista, que es siempre reversible y transformable, a diferencia de los modelos de sociedad. La idea de un modelo de sociedad es, en cierto modo, contradictoria con el principio de régimen democrático, que supone disputas, competencias, transacciones entre propuestas que corresponden a diversos modelos encarnadas por diversos actores en interacción. La definición de socialismo no puede dejar de tener un aspecto incierto, por cuanto éste consiste en la definición histórica, a juicio de la gente de los diversos componentes de las clases populares, de trabajadores manuales e intelectuales, de cuáles son las contradicciones principales más urgentes de la sociedad capitalista y cómo superarlas en un determinado momento histórico, en el entendido que no habrá paraíso terrenal ni "nueva" sociedad sin contradicciones pues toda sociedad genera sus propias contradicciones y alienaciones. En sentido estricto, no hay proyecto de sociedad socialista ni modelo global concreto definido para siempre, no hay "toma del poder" ni un momento en que se "empieza" a construir el socialismo, pero hay siempre política socialista posible, tarea socialista frente a todo. No hay "Sociedad Socialista" instalada, hay transformación socialista

Scanned with CamScanner

y gobierno socialista posible en un régimen de democracia política. El principio de superación de la sociedad capitalista hace que no se pueda confundir la renovación socialista con ninguna variante laica o cristiana de la Social Democracia. El principio de afirmación del régimen político democrático aleja a la renovación socialista de las variantes clásicas del marxismo-leninismo. Aunque puedan encontrarse en forma individual elementos de una u otra corriente.

Una cuarta consecuencia de esta reformulación del proyecto socialista tiene que ver con la inserción en el contexto mundial. Si se afirma como proyecto básico un proceso nunca terminado de eliminación y superación de las contradicciones de las sociedad capitalista (alienaciones, opresiones, explotaciones), se está afirmando una no alineación en términos de bloques que representan modelos establecidos de sociedad y, en cambio, una alineación en función de políticas histórico-concretas. El socialismo no es así una tendencia inevitable e irreversible científicamente probada a nivel mundial de superación del capitalismo, sino una idea o proyecto de construcción de nación. No es un modelo universal de sociedad ya codificado en algunos casos históricos sino una oportunidad, una posibilidad para la nación. Y en el caso de América Latina y de Chile, la nación tiene un doble componente histórico cultural que la aleja de una identificación absoluta con alguno de los bloques. Nuestras sociedades son, parcial o malamente, occidentales, quizás como copia retardada, pero lo son. Pero son también dependientes, tercer mundo. La combinación de ambos componentes define su especificidad. Son , a la vez, Macondo y postmodernismo, adobe y computadora. Ambos elementos son cruciales. Porque el socialismo afirma una nación atravesada por esta contradicción. Pertenencia al mundo occidental, con lo que ello significa de tradición cristiana, nacionalismo, individualismo

Scanned with CamScanner

e individuación, y, a la vez, al Tercer Mundo, donde importan las categorías, las clases, la afirmación de sujetos colectivos.No se identifican estas sociedades con el bloque capitalista occidental, ni con el bloque socialista en cuanto tales, aunque las políticas concretas las acerquen más a uno que a otro, o al bloque tercermundista. Un proyecto socialista renovado aquí es, entonces, hijo del socialismo occidental y de las luchas de los países subdesarrollados, cerca de la experiencia de Berlinguer y del Partido Comunista Italiano, pero también de ciertos valores que aportaron la Revolución Cubana y Nicaraguense sin perjuicio de la distancia con sus respectivos modelos políticos. Y todo ello ubicará ál socialismo en una posición autónoma de los bloques que se disputan la hegemonía mundial.

Quizás la consecuencia más importante de lo indicado sobre el contenido de un socialismo renovado es que , si sólo puede avanzarse en la transformación social bajo el principio de mayorías sociales y políticas, el eje fundamental de la acción histórica y social pasa a ser la política y la cultura, la transformación cultural, la construcción de consensos, la promoción de la creatividad individual y colectiva, la convicción, la enseñanza y aprendizaje, lo que supone, a su vez, las grandes acciones masivas de movilización, lucha, presión y confrontación política. Y esto tiene que ver con la visión que se tenga de la autonomía de la sociedad civil y con una nueva concepción de los partidos políticos.

Scanned with CamScanner

Movimientos sociales y partidos.

Una de las dimensiones más importantes que definen un socialismo como el esbozado en estas páginas y que ha marcado con diferente fortuna los procesos de renovación socialista, es un replanteamiento de las relaciones entre sociedad civil, en lo que se refiere a actores y movimientos sociales, y partidos políticos. Retomaremos en lo que sigue, entonces, diversos puntos que hemos desarrollado a lo largo de varios capítulos de este libro.

En relación a la visión de la sociedad civil, la renovación socialista se plantea una problemática que muchas veces ha quedado reducida a consignas ideológicas o al pragmatismo cotidiano, y también ha dado origen a grandes confusiones. Se trata del tema de la autonomía de los movimientos sociales o del reforzamiento de la sociedad civil. Lo que se afirma básicamente, frente a la alta dependencia tradicional del movimiento social respecto del sistema político partidario, como hemos insistido reiteradamente, es el reconocimiento de la irreductibilidad de tres elementos: el Estado, como expresión de dominación, pero también como el lugar de la unidad de la Nación; el régimen político, como representación de la pluralidad donde actúan principalmente los partidos; y la sociedad civil, como el campo de participación de los sujetos y actores colectivos no reductibles al sistema de representación partidaria. Implícita a esta problemática hay una doble percepción de lo que ocurre bajo el régimen militar: la de la reducción progresiva del Estado en su aparato y poder redistributivo, mientras se acrecienta su poder coercitivo y desaparece el régimen de representación, y por otro lado, la percepción que surgían en la base social formas de organización, demandas y dinámicas que rompían radicalmente el modelo de imbricación entre liderazgo político y social que caracterizó la acción colectiva o de masas en Chile. Se apunta

Scanned with CamScanner

así a la idea de una sociedad civil emancipada, autónoma y crítica del sistema partidario. Pero la evolución de estos aspectos se ha demostrado más compleja. Por un lado, se mantiene una amplia legitimidad y demanda social del estatismo, de un rol activo del Estado en todos los problemas de la vida nacional como lo muestran, entre otras cosas, todas las encuestas de opinión pública. Por otro lado, ni el régimen militar pudo eliminar o reemplazar la "columna vertebral" de la sociedad a la que nos hemos referido tantas veces, aunque la desarticuló, ni el mundo renovado de la oposición–por razones ya analizadas en este libro– pudo cambiar esta forma de constitución de actores sociales. Basta con examinar las elecciones en medios estudiantiles, profesionales, sindicales, para concluir que no se creó una nueva matriz de constitución de actores sociales. Y sin embargo, tampoco se reproduce mecánicamente la relación del pasado entre partido y movimiento social: algo ocurrió con esa relación que se ha hecho más compleja e incierta. La Asamblea de la Civilidad, por ejemplo, que algunos saludaron como la máxima demostración de madurez del movimiento social frente a las incapacidades de las estructuras político partidarias, no habría sido posible sin una explícita concertación de éstas; pero ellas a su vez confrontadas consigo mismas no podían resolver sus contradicciones sino fuera de ellas mismas; en ciertos campos del movimiento social. Se revelaba así la complejidad del problema. Por un lado, no era realista la apuesta a una especie de basismo o de refundación de la sociedad civil, pues en el caso chileno el momento partidario parece insustituible en la construcción de actores sociales, habiendo momentos más societales y momentos más patidarios. Por otro lado, hay una verdad insoslayable en la crítica al tipo de relación entre movimiento social y partido y también una enorme masa, juvenil entre otros sectores, cuya sensibilidad no se expresa partida-

Scanned with CamScanner

riamente, lo que se ve en encuestas y en movilizaciones.[6] Ello refuerza la afirmación de la irreductibilidad de la sociedad civil al sistema partidario o al Estado: hay una demanda social por autonomía, por distancia entre ellos.

Así, se plantea la búsqueda necesaria de nuevas formas de articulación entre partidos y movimientos sociales que privilegien la autonomía de éstos. Lo que hemos denominado el paso de un modelo de relación del tipo "imbricación" a uno de "tensión" entre ambos elementos, así como la expresión de las sensibilidades colectivas que no se canalizarán nunca por el sistema partidiario, implican un esfuerzo enorme de la clase política en sentido amplio. Se trata de romper una tendencia histórica y ello es particularmente relevante en el caso de un proyecto socialista si aspira a representar la variedad y novedad del mundo popular que se ha ido conformando estos años.

Esto implica, entre otras cosas, replantear la concepción clásica del partido, alejándose, como hemos dicho, tanto del modelo "vanguardia" como del modelo "populista".

Cabe aquí retomar, por un lado, el tema de la tensión entre proyecto, o ideal socialista en este caso, y partido. Este último no es la única encarnación de los principios o proyecto socialistas. Tal proyecto se encarna en muchas instancias y atraviesa también muchos partidos, aunque preferentemente un partido socialista. Repitamos que un partido es una mediación y, por lo tanto, puede llegar a ser un obstáculo. No habiendo identidad entre el socialismo como proyecto y un partido particular, tampoco hay identidad entre el partido como organización y el mundo social y cultural al que ese partido convoca, entre "mundo popular" y "partido socialista": capacidad de convocatoria no implica identificación o confusión entre uno y otro. Esta distancia entre el mundo de referencia del socialismo y el partido como organización debe ser

Scanned with CamScanner

defendida y esto implica una lucha permanente del partido contra la tentación de la totalidad. Tampoco puede identificarse la problemática de un partido socialista con la problemática de la Izquierda. Un partido socialista es en Chile sin duda un partido de Izquierda, forma parte de ésta, pero su proyecto nacional la trasciende y no puede subordinarse a los cálculos y equilibrios en el interior de esa Izquierda. Volveremos sobre ésto.

Por otro lado, un partido, para un proyecto socialista que se mueve en las coordenadas indicadas, no puede definir su identidad en términos de una doctrina única y monolítica ni de un conjunto de verdades teóricas que se postulan a sí mismas como científicas. En otras palabras, no parece tener sentido definir un partido a partir de un cuerpo ideológico cerrado y excluyente que obliga siempre a plantearse en términos de ortodoxias que se condenan unas a otras. Definir un partido como marxista o como marxista-leninista o como cristiano, parece un error de perspectiva histórica. Otra cosa es que un partido incorpore componentes de una u otra visión, que utilice los instrumentos, percepciones y sensibilidades respectivas, que transmita un cierto bagage cultural en que estén presentes los elementos de un cuerpo doctrinario o de varios. Un partido debiera apelar a la mayor diversidad de vertientes culturales, de sensibilidades teóricas e ideológicas y buscar su homogeneidad en el nivel más programático.

Lo mismo podría decirse respecto de la identidad social de un partido para un proyecto socialista como el indicado. Si la referencia al mundo de trabajadores, más aún, al mundo popular, es constitutiva de un partido socialista, ello no significa que haya que definir su identidad en la homogeneidad de una base social clasista, sino, nuevamente, en la capacidad de convocatoria que tenga en el plano programático. Dicho de otro modo, tanto a nivel teórico cultural como a nivel de su base social, se

Scanned with CamScanner

trata de un partido abierto, expresando toda la diversidad de aquello que aspira a convocar y representar.

En términos de un proyecto socialista renovado el problema de la creatividad sociocultural y política aparece como crucial. Esto replantea el tema de la inserción de los intelectuales en la actividad política y el de las relaciones entre partido e intelectuales. Hay aquí que evitar un modelo de relación que existió en el pasado. En ese modelo los intelectuales eran quienes simplemente sistematizaban el discurso político vigente, donde la imbricación entre intelectuales y partidos subordinaba los primeros a los segundos y reducía la legitimidad de la actividad intelectual a su rol partidario y no a su aporte crítico. Se trata que el trabajo intelectual tenga incidencia en el mundo político partidario, sin enajenarse pero también sin subordinarse. Al respecto, cabe una importante crítica al trabajo de los intelectuales en los finales de los sesenta y comienzos de los setenta. Igualmente cabe aquí el concepto de tensión necesaria entre intelectuales y partido.

En síntesis, un proyecto socialista con los rasgos reseñados obliga a un partido que quiera asumirlo a manejar un conjunto de tensiones: con el proyecto mismo, con el movimiento social, con la Izquierda en conjunto, con su patrimonio doctrinario, con su base social y con el mundo intelectual. Ello implica cambios significativos en la cultura y tradición socialistas chilenas.

Finalmente, un planteamiento como el realizado acá obliga a revisar algunas cuestiones relativas a la organización de un partido socialista, las que solamente enunciaremos.

Por un lado, hemos dicho, uno de los principales problemas de la política chilena radica en su clase política, cuyas virtudes, entre otros factores, hicieron posible la estabilidad democrática, pero, cuya naturaleza y forma

Scanned with CamScanner

de constitución genera también enormes dificultades de concertación. Desde la perspectiva de una organización partidaria, y dada la tradición del socialismo chileno, parece fundamental la diversificación del mundo de oportunidades para esta clase política de modo que los antagonismos de carrera política o de proyectos personales o grupales legítimos no se revistan de legitimidad ideológica porque no existen los canales para expresarse. Se trata de enfrentar aquí la tradición caudillista o fraccionista característica del socialismo en Chile.

Por otro lado, se trata de tomar en serio el problema de la democracia interna de un partido de proyecto socialista. Como indicamos en el capítulo anterior, en un régimen de democracia política debiera existir un estatuto de los partidos que establezca normas generales de democracia interna, como rotación periódica de cargos, elecciones primarias, cuotas obligatorias de cargos en las directivas para mujeres, etc. A su vez, cabe plantearse el problema del nucleamiento y participación en la base en un país con una tradición muy centralista y con sobre énfasis en la política estatalista, donde la democracia a nivel local fue siempre muy débil.

Todos estos aspectos requieren de cambios institucionales, pero, sobre todo, de cambios en la cultura política e implican, en un primer momento, un acto de voluntad de la clase política. Pareciera que es en esta dimensión que ha habido las mayores renuencias a la renovación, manteniéndose formas tradicionales de organización y comportamiento políticos.

Scanned with CamScanner

El socialismo y las fuerzas políticas chilenas.

Un último componente o dimensión de un socialismo renovado, que corre el riesgo de confundirse con un problema de línea política y que debe mantenerse separado, pues no pertenece a ese nivel, es la inserción del socialismo chileno en la Izquierda y en el conjunto de fuerzas políticas.

Respecto del primer punto, el de la inserción del socialismo en la Izquierda chilena, de la que forma parte, parece necesario reconocer que tanto a nivel sociológico o de bases sociales, como en el plano cultural, ideológico y de espacios políticos, se ha ido produciendo una bifurcación de la matriz dominante de la Izquierda chilena en la década del sesenta, hacia dos posibilidades organizacionales: una que recoja el componente clásico marxista-leninista de la Izquierda y la otra que recoja el componente de la renovación socialista. Se trata de desarrollar al máximo ambas posibilidades y la autonomía de una respecto de la otra. Ello permite plantear el viejo problema de la unidad de la Izquierda en forma más madura. Por un lado, como hemos indicado, éste pasa a ser **uno** de los problemas a enfrentar en una política de Izquierda y no **el** problema único al que se subordina todo el resto. Por otro lado, la posible unidad de la Izquierda exije el pleno desarrollo de ambas opciones en términos organizacionales, materiales y de presencia social y popular. Sólo así la unidad asumiría la diversidad y no sería mera abstracción o absorción de un polo por otro. Hay que reconocer a la vez la existencia de concepciones y proyectos sociales distintos dentro de lo que se llama el campo de la izquierda y que ambos dos se constituyen y expresan desde ese campo y desde esa tradición, aunque sea en un caso para renovarla. Replantear la constitución de la Izquierda en términos de los grandes proyectos que la diferencian y, por lo tanto, reformular el clásico pro-

Scanned with CamScanner

blema de su unidad como el de la interacción entre dos componentes distintos, parece un avance desde el punto de vista de la política nacional y, en ningún caso, distanciamiento de lo que define el ser de la Izquierda en este país. Una de las defensas de las posiciones más clásicas u ortodoxas frente a la renovación socialista es el clasificarla de centro o social demócrata, sin recordar que precisamente en Chile la matriz clásica marxista-leninista dio históricamente tanto para una línea moderada y gradualista (PC) como para líneas más radicales (MIR, PS). De nuevo se confunde aquí una matriz teórico-práctica de la política con un problema de líneas históricas.

Esta visión de los dos universos de izquierda necesarios de desarrollar , pues cuentan con sus propios espacios sociales, culturales y políticos, se acompaña de una manera de pensar el sistema político partidario y su futuro dentro de un régimen democrático. En efecto, no se trata de pensar sólo la Izquierda, sino el país. Es posible así, como lo hemos hecho en otros capítulos, imaginar un esquema partidario de tipo cuadrangular o de cuatro polos. Por un lado una Derecha capaz de expresar y representar una cierta fuerza social en el juego democrático, comprometiéndose con sus reglas y resultados. Por otro lado, un polo de Centro, que está representado principalmente por esa versión cristiana de tipo social demócrata que es la Democracia Cristiana, con algunos otros sectores complementarios. En tercer lugar, el polo Socialista, y, finalmente, en polo Comunista, uno y otro, con agregados que giran en torno a ellos y en cuyos detalles no cabe entrar. En la construcción de este esquema de sistema partidario se enfrentan dos problemas: el de una Derecha democrática, que aún no cristaliza orgánicamente, y el del campo socialista, que permanece fragmentado y descompuesto.

Este problema de la fragmentación y unidad del cam-

Scanned with CamScanner

po socialista puede formularse en los siguientes términos. Hay una indispensabilidad sociológica, cultural y de espacio político para el mundo socialista. El "hueco" está ahí, y todo el problema consiste en si ese hueco se va a llenar fragmentadamente o con una fuerza organizacional única. Ambas posibilidades son válidas y legítimas. Porque puede postularse que en este país hay demasiada densidad social, orgnizacional e ideológica como para que se produzca unificación de las fuerzas socialistas y que es mejor que permanezca la densidad de ellas expresada en diversas organizaciones o partidos políticos. El único problema que la opción de fragmentación o no unificación del campo socialista presenta, es que lo hace muy dependiente del polo de Centro o del polo de la Izquierda Comunista, y pierde capacidad de desarrollarse y de ser articulador de un bloque sociopolítico que combine adhesión democrática y voluntad de transformación social. Pareciera ser que en un proceso de construcción y consolidación democrática, un socialismo fragmentado debilita el proceso general y rigidiza las alianzas y acuerdos necesarios. Ello pudo apreciarse concretamente en la conformación de los bloques ideológicos políticos, Alianza Democrática y Movimiento Democrático Popular, donde, en ambos casos, las expresiones socialistas fueron subsumidas por los componentes fuertes de cada bloque, es decir, por los dos partidos más estructurados a nivel nacional (DC y PC). El PS en la Alianza no tuvo la fuerza suficiente para terminar con la política demócrata cristiana de exclusión del Partido Comunista, y el PS en el MDP no la tuvo para llevar al PC a posiciones más conducentes a una transición democrática. Ambos quedaron a merced ya del polo de Centro ya de la Izquierda Comunista. A su vez, los sectores socialistas que han intentado mantener su identidad organizacional propia para postularse como puentes de la unificación socialista (MAPU, Izquierda Cristiana) han mostrado su inca-

Scanned with CamScanner

pacidad para ello y su tendencia a la marginalización. Las elecciones estudiantiles son una prueba de esta incapacidad del campo socialista fragmentado para disputar la hegemonía DC o PC.

Así, lo que cabe rescatar al discutir el problema de la unificación del campo socialista es la idea de una izquierda socialista desarrollada y autónoma respecto de la izquierda comunista y que replantea el problema de la unidad con ésta a partir de su propio proyecto. La posibilidad de unificación socialista se da en torno a un proyecto teórico ideológico e histórico social distinto al de la izquierda comunista aún cuando puedan haber amplios campos de acuerdo. No cabe entramparse en la discusión retórica sobre las dos izquierdas, ni confundirse con la cuestión de las líneas concretas. La renovación socialista, eje teórico práctico en torno al que cabe construir el campo socialista, no está ni más a la izquierda ni más a la derecha que la matriz marxista-leninista. Es sencillamente algo distinto, en otro nivel, que puede dar origen a políticas más moderadas o más radicales sin ninguna definición esencialista a priori en estas materias.

Pensar una izquierda socialista unificada, obliga a asumir y readecuar la sensibilidad de un sector social cuyo discurso ideológico ha estado tradicionalmente desfasado de su práctica y su vida reales. El problema principal parece residir hoy en la segmentación orgánica de los dos polos constitutivos de un proyecto socialista: el polo modernizador, instrumental, racionalizador, institucional, relativamente cupular, y el polo expresivo-simbólico, épico, popular, radicalizado. Los componentes organizacionales actuales del campo socialista aparecen bifurcados en, o identificados con, uno u otro polo y la tarea fundamental de un partido socialista es, insistimos, la combinación de ambos. Ello, por dos razones: primero, porque el mundo político chileno es un mundo sobreideologizado, integrista casi, en que la secularización

Scanned with CamScanner

de la política aparece como condición de la reconstrucción democrática y ello requiere principios modernizadores, racionalidad instrumental, lógica institucional; segundo, porque grandes masas juveniles y de las nuevas generaciones experimentan un rechazo visceral, intuitivo, a esta forma de política secularizada y requieren más bien de espacios de participación e identidad simbólico expresivas. No habrá Izquierda Socialista unificada sin la incorporación de ambas dimensiones de la política.

Digamos, por otro lado, que esta unidad orgánica de las distintas vertientes o troncos de la izquierda socialista puede hacerse antes o después del advenimiento de un régimen democrático. El riesgo en el primer caso es que sea abortiva y, al no expandir la capacidad de convocatoria, reproduzca la fragmentación actual. El riesgo en el segundo caso es que su carácter sea exclusivamente electoralista. Más allá de la Izquierda, en relación al conjunto de las fuerzas políticas, el aporte de un socialismo renovado es el planteamiento de la idea de "bloque por los cambios" o lo que hemos denominado "bloque democrático transformador". A ello nos hemos referido en otros capítulos en forma relativamente extensa, así que sólo agregaremos algunos comentarios adicionales.

La idea principal aquí, pensando en el país y su futuro, es la construcción de una mayoría sociopolítica que combine la adhesión democrática con un horizonte de profundas transformaciones sociales. Y eso, en términos políticos, significa un bloque histórico que incluye al Centro progresista, expresado parcialmente por la DC y por tendencias social demócratas y al conjunto de la Izquierda, sin exclusiones, es decir, Izquierda Socialista e Izquierda Comunista. Esta es la gran responsabilidad histórica. Si para ello fuera una condición la unidad de la Izquierda, y puede serlo en la medida que así pueda evitarse el aislamiento del PC y otros sectores buscado por la DC, entonces, ella sería un imperativo, pero como un

Scanned with CamScanner

instrumento para algo de más amplio alcance y a lo cual se subordina. La meta es la construcción de un bloque cultural y socio político que asegure democracia política y cambio social y en términos de esta meta hay que juzgar los instrumentos que se utilicen. Es un hecho que esto dio origen en el campo socialista a visiones mecánicas o inmediatistas que se expresaron en alianzas con el centro político apresuradas y sin ejercer todo el poder de presión para ampliarlas al resto de la Izquierda, o en la insistencia en recrear urgentemente un "Frente de Izquierda", lo que era una manera de reproducir acríticamente las fórmulas del pasado y resolver el problema de espacio de algunos grupos. Así, no prevaleció la tesis fuerte y de largo plazo del "bloque por los cambios" sino consideraciones orgánico estratégicas de corto plazo. Vale la pena aclarar que esta idea de "bloque por los cambios" no significa renunciar en el futuro a la posibilidad de un gobierno de Izquierda, sino reconocer que ello deberá darse en el seno de un acuerdo histórico de más largo alcance que permite diferentes coaliciones gubernamentales, entre ellas, una de Izquierda que puede ser la más adecuada en un determinado momento. Lo que sí implica esta propuesta es que se abandona la pretensión que la construcción democrática y la transformación social serán responsabilidad y tarea exclusiva y excluyente del actor de Izquierda unida.

Dificultades y perspectivas

Si la democracia le aporta al socialismo nada menos que su modelo de régimen político, ¿qué le aporta un proyecto socialista a la democracia y al proceso general

Scanned with CamScanner

de democratización? Por un lado, el perfeccionamiento de la democracia política y la extensión de sus principios a otros ámbitos de la sociedad en que ellos son aplicables. Por otro lado, la creación de las condiciones materiales y sociales, las mismas que el capitalismo de nuestros países niega en la práctica, en que pueda desarrollarse esa democracia política. En tercer lugar, aunque no en forma exclusiva ni excluyente, le aporta un sujeto social: el mundo popular y del trabajo. En cuarto lugar, en la medida que la democracia es sólo un régimen político, una forma de mediación entre Estado y sociedad, el socialismo aporta un elemento utópico y práctico a la vez, una especie de "tábano" permanente, cual es apuntar siempre a la reducción y supresión de las dominaciones en todos los ámbitos sociales. Constituye, entonces, una apelación ética de enorme fuerza simbólica que impulsa la transformación constante de la sociedad. Finalmente, tanto su experiencia histórica como su debate intelectual, teórico y práctico, el socialismo aporta instrumentos y políticas concretos para esa transformación, aunque, como hemos dicho, nunca podrá reducirse su identidad a tales instrumentos y políticas.

En términos del proceso de construcción democrática en Chile estos aportes adquieren ciertas connotaciones particulares. Así, el socialismo aporta a este proceso la memoria histórica, en continuidad y renovación, sin la cual no hay reconstitución de la unidad nacional de un vasto sector popular y de capas medias, profesionales e intelectuales. Además, aporta la posibilidad histórica de consolidación de un nuevo compromiso entre el Centro y la Izquierda, sectores medios y populares, impensable sin el rol activo del polo socialista. Por último, el principio de transformación de las condiciones materiales y sociales es el aporte básico del socialismo a la consolidación y estabilización de una futura democracia política.

No puede negarse, sin embargo, que un proyecto so-

Scanned with CamScanner

cialista renovado está lejos aún de haberse transformado en un cambio cultural de la trascendencia a que apunta y de haberse encarnado en uno o varios actores políticos con la suficiente influencia y presencia nacional. Ello se debe en gran parte a las condiciones políticas creadas por la dictadura. Pero hay también otros aspectos, en parte mencionados, que vale la pena reiterar.

Una de las características históricas de la Izquierda y el socialismo chilenos fue la captación conjunta de los dos componentes de la política: el elemento institucional, cupular instrumental, como quiera llamarse, y el elemento simbólico expresivo, popular, épico. Uno de los dramas de la política chilena actual y de la Izquierda, en especial, es la bifurcación orgánica de ambos componentes, donde unos sectores aparecen identificados con la política como instrumentación, concertación entre cúpulas, etc. y otros con la política como acción heroica, épica. En el caso de la Izquierda y el mundo que se identifica como socialista, este fenómeno significó que la dimensión "movimiento" de la política se desprendió de la dimensión "partido", es decir, quedaron movimientos y partidos a medias: movimientos refugiados en una dimensión comunitario-defensiva, con dificultades de hacerse representar y de globalizar, y partidos con problemas de convocatoria y reducidos a su cuerpo militante. Hay una gran dificultad de los actores sociales de juntar ambos aspectos, y cada cual tiende a identificarse exclusivamente con uno u otro. La separación de ambas dimensiones en términos organizacionales reproduce la fragmentación. La renovación del socialismo queda desgarrada y a medio camino.

Paradojalmente, el predominio del debate y de los problemas de línea política, más que en propuestas coherentes de línea o estrategia política, se transformó en discrepancias y disputas por estilos, en distancia entre el componete instrumental y componen-

Scanned with CamScanner

te simbólico expresivo de la acción política. Y esto se expresa en el modo cómo todos los sectores socialistas y de la Izquierda tienden a tratar los temas de la transición y el cambio político. Se mezclan ahí los problemas del pasado, del presente y del futuro, lo que impide secularizar la política, es decir, plantearse específicamente en este caso el fin de la dictadura y su sustitución por un régimen democrático, en vez de mezclar en ello la resolución de todos los problemas de la vida individual y colectiva. El término de la dictadura de Pinochet no aparece entonces como un fenómeno político concreto acotado por ciertas estrategias específicas y factibles, sino el resumen de todas las utopías posibles. Y cuando se trata de ponerse de acuerdo sobre resúmenes de utopías es imposible discutir fórmulas precisas que den cuenta de la realidad y rompan el inmovilismo. En síntesis, las dificultades planteadas tienden a expresarse ya sea en un tacticismo pragmatista, ya sea en una visión mítica de la transición política, sin las referencias históricas que harían posible una discusión adecuada sobre las líneas o estrategias políticas a seguir. Pero la emergencia de un proyecto socialista renovado no puede ser juzgado con un criterio de corto plazo o en función exclusiva de los problemas de unificación del campo socialista. Todo proceso ideológico y cultural necesita más de algunos años, a veces décadas, para madurar y extenderse. El horizonte de tal proyecto, que implica un nuevo lenguaje y nuevas relaciones políticas en Chile, no es la coyuntura, aún cuando ella pudiera iluminarse con su reflexión y su práctica, sino la construcción progresiva de nuevas formas de organización y convivencia social. Si hay un futuro para el socialismo chileno, más allá de las cuestiones organizacionales o tácticas del presente, es en torno a los grandes ejes de su renovación.

Scanned with CamScanner

NOTAS

1.- Una versión preliminar y parcial de este capítulo se presentó al Seminario del Centro Valentín Letelier (CEVAL) sobre la renovación socialista,en Mendoza en 1986. He tomado también elementos de trabajos que he publicado en la Revista Opciones Nº 7,1985, y en "Orden Económico y Democracia" (CED, Santiago, 1985).

2.- Primer Mensaje Presidencial ante el Congreso de Salvador Allende (Mayo de 1971). Sobre la Vía Chilena al Socialismo, ver el Anexo incluido en "La Unidad Popular y el conflicto político en Chile", op.cit.

3.- Ver este debate en "El Marxismo y el Estado" de Norberto Bobbio y otros. (Editorial Avance, Barcelona, 1977).

4.- A. Touraine , "L'Apres Socialisme" (Grasset, 1980. París).

5.- En su último libro el líder socialista Clodomiro Almeyda hace defensa irrestricta de una posición abierta frente a los problemas de propiedad privada y el mercado, y en otras páginas del mismo libro, sin embargo, critica duramente al proceso de renovación socialista que en estos como en otros puntos no tiene ninguna diferencia con su planteamiento. Ver su libro, "Reencuentro con mi vida" (Ediciones del Ornitorrinco, Santiago, 1987).

6.- Ver Nota 19, capítulo cuarto. Esta sensibilidad corresponde a lo que llamábamos en otro capítulo, el "Chile profundo".

Scanned with CamScanner

INDICE

Agradecimientos 11
Introducción 13

CAPITULO I

Democracia, transición y consolidación,
un esquema general 25

CAPITULO II

La democracia en Chile, desarrollo, crisis
y perspectiva 61

CAPITULO III

Frustraciones y esperanzas de la transición
retardada 103

CAPITULO IV

Movilizaciones populares en el régimen militar
y las complejidades de la transición invisible 157

CAPITULO V

Crisis y resurrección de los partidos políticos 193

CAPITULO VI

Socialismo renovado y democracia 243

Scanned with CamScanner



EDITORIAL ANDANTE

LIBROS PARA LA DEMOCRACIA

Reconstruir un país avasallado como Chile implica pasar de una dictadura a un régimen democrático. Pero significa también mucho más: en el mediano plazo habrá que recomponer la economía, la cultura, la organización social. Nada de ello podrá hacerse sin repensar y rescatar la política y restablecer sus relaciones con el resto de la sociedad. La política ha sido arrasada por el régimen militar, pero también ha sido deteriorada por diversas concepciones y comportamientos de los actores políticos en las últimas décadas.

Repensar la política chilena es el objeto de este libro a través del análisis de procesos concretos y del modo cómo ellos afectan el conjunto de la sociedad y aprovechando lecciones del pasado y del presente.

Los temas abordados son los conceptos de democracia, transición y consolidación, las características de la democracia en Chile, las dificultades y perspectivas de una transición democrática en Chile, el significado de las movilizaciones populares durante la dictadura, el desarrollo y futuro del sistema de partidos y el papel del socialismo en la reconstrucción política de Chile.

En "Reconstruir la política", Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor-investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Santiago, activo participante en el debate político intelectual chileno, sintetiza su trabajo de análisis y reflexión políticas de los últimos años.

Scanned with CamScanner